

**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**



**SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE
COMPETENCIA**

NÚMERO: 205/2019

JUNIO/21/2019

17:37 (HORAS)

SOLICITANTE: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, SOCIEDAD ANÓNIMA, POR CONDUCTO DE SU APODERADO JOÁO HENRIQUE ARAUJO HORST Y OTRAS, SOLICITA A ESTE ALTO TRIBUNAL REASUMA SU COMPETENCIA ORIGINARIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN 200/2019 (NO FALLADO), DEL ÍNDICE DEL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 28 DE MARZO DE 2019, DICTADA EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO 526/2018-III, 569/2018-I Y 571/2018-III (CUADERNO AUXILIAR 82/2019) (SOBRESEE), POR EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON APOYO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, ESPECIALIZADO EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, CON JURISDICCIÓN EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA SOLICITADA POR PARTE NO LEGITIMADA

MINISTRO PONENTE: _____ PUERTA _____ EXT. _____

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: _____

EXPEDIENTE QUE CONSTA DE: UN CUADERNO Y UN CUADERNO AUXILIAR

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf
Secuencia: 2690049

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	CARLOS DELGADILLO VILLEGAS	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	DEVC680313HDFLLR08			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e000000000000000000000000000015c2	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	25/06/2019T18:33:24Z / 25/06/2019T13:33:24-05:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	70 b7 03 f2 2d 25 53 57 c7 7e 24 e7 a2 40 23 a8 35 97 74 c0 6d 69 5f 1f b0 3b 42 b5 4e bb 6f 9c 08 a0 91 ef 96 53 21 7b e4 0d 63 2f 56 f8 63 50 71 99 84 d4 d9 50 dd 19 6a 8c af 72 99 87 2f 49 83 64 2e 6f d9 17 9f a0 21 92 a8 1f 14 de 41 99 ba 6b d0 b4 6a 8b 9d e6 1f f0 05 39 b9 9c a1 11 b7 3b 4f 2b d2 94 c5 8e 8d 45 4b e2 99 da 5d 23 36 79 a8 2e 7f a5 50 7f 3e 65 fe 91 ee 22 a0 a8 fb 54 6b 4b 7e a1 21 3f a3 2f fa bc 08 52 f1 73 8c ae 9d b8 f0 29 58 8d 23 0f 6f 8f a0 c0 46 65 65 e8 d8 79 e8 c6 79 bc 38 04 02 3a f1 5b 98 0c da 65 2b 03 30 75 ad 74 62 3a 4c 76 a9 ac 68 3e bb 6f 0d af 15 19 08 24 c5 c2 3e 30 7b 03 d2 8f 3c 9b ff 0d 47 61 6d db cd 40 a7 96 01 20 b3 e4 24 b4 31 5d d1 9c 65 a7 59 9e 00 d6 40 8e 0a 99 a9 d4 cb e8 95 2c 6b 12 4d 0b ba 90 98 c2 c3 80			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	25/06/2019T18:33:25Z / 25/06/2019T13:33:25-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e000000000000000000000000000015c2			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	25/06/2019T18:33:24Z / 25/06/2019T13:33:24-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2693258			
	Datos estampillados:	7BE3CD14D3696AB4201AB4C4D929F63EF945F409			

OFICINA DE CERTIFICACIÓN JUDICIAL Y DE CORRESPONDENCIA
BOLETA DE CONTROL PARA LA FORMACIÓN DE EXPEDIENTES

TIPO EXPEDIENTE (PROVISIONAL) REAS. Comp.
FECHA 21-06-2019 FOLIO 023767

FIRMA DEL SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA RESPECTIVA MESA DE FORMACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EFECTOS DE LA CLASIFICACIÓN PROVISIONAL DE ESTE EXPEDIENTE (LIC. JOSÉ OSCAR VILLEGAS TABARES, LIC. G. ROCÍO PÉREZ MAQUEDA, LIC. ROMÁN MARÍN ENRÍQUEZ, LIC. MARIO ENRIQUE CAMACHO MARTINEZ, LIC. AGUSTIN DOTOR BECERRIL O LIC. AZHUR TEJADA FLORES)

FIRMA DEL TITULAR DE LA OFICINA – LIC. RODRIGO ROBLES ENRÍQUEZ

TURNO AL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE FORMAR EL EXPEDIENTE

ERNESTO ALTAMIRANO
PARA SER LLENADA POR EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE FORMAR EL EXPEDIENTE: (MIRIAM ÁVILA SALCEDO, ISIDRO ZUÑIGA SOLORZANO, GUADALUPE A. GARZA GUILLÉN, ERNESTO ALTAMIRANO LAGUNAS, CYNTHIA ROMÁN ARRIAGA Y VICTOR HUGO ESPINOSA PIÑA)

NÚMERO ASIGNADO AL EXPEDIENTE 205/2019
ANTECEDENTES SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS RELATIVOS AL EXPEDIENTE QUE SE INTEGRA

NINGUNO
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE FORMAR EL EXPEDIENTE

TIPO DE EXPEDIENTE (CLASIFICACIÓN DEFINITIVA)

REAS COMP.
FIRMA DEFINITIVA DEL SUPERVISOR DE LA MESA RESPECTIVA DE FORMACIÓN DE EXPEDIENTES

FIRMA DEFINITIVA DEL TITULAR DE LA OFICINA

INSTRUCCIONES

1. La presente boleta se utilizará y se agregará como primer foja a todo expediente que se forme en la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia (OCJC).
2. En la boleta deberá indicarse la fecha de ingreso y el número de folio, así como el tipo de expediente que corresponda provisionalmente.
3. El supervisor de la mesa respectiva de formación de expedientes y el titular de la OCJC deberán suscribirla indicando la clasificación provisional. Posteriormente el referido supervisor turnará el material relativo al servidor público que formará el expediente respectivo y revisará los antecedentes.
4. El servidor público que forme el expediente deberá estudiar las constancias y en caso de duda sobre el tipo de expediente asignado lo hará del conocimiento del supervisor de la mesa respectiva de formación de expedientes, el cual de inmediato confirmará la clasificación asignada o, en caso de duda, lo consultará con el titular de la OCJC, este último deberá confirmar dicha categoría o, en su caso, consultar al titular de la Secretaría General de Acuerdos.
5. El servidor público responsable de formar el expediente respectivo asignará el número que corresponda, atendiendo a la categoría en que se ubica, revisará los ANTECEDENTES sobre asuntos relacionados con el asunto relativo al expediente que se forma, los indicará en esta boleta y la suscribirá.
6. El servidor público que forme el expediente lo entregará al supervisor de su mesa de formación de expedientes, el cual lo revisará e informará al titular de la OCJC cualquier situación que dé lugar a estimar incorrecta la clasificación de aquél, incluso la relevancia del asunto que justifique informe especial al Secretario General de Acuerdos.
7. Con base en lo anterior el titular de la OCJC suscribirá la presente boleta junto con el supervisor de la respectiva mesa de formación de expedientes y previa asignación del secretario auxiliar al que corresponda su estudio, remitirá el expediente a la Subsecretaría General de Acuerdos por conducto de la mesa de informes de la OCJC.

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf
Secuencia: 2690051

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	CARLOS DELGADILLO VILLEGAS	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	DEVC680313HDFLLR08			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e00000000000000000000000015c2	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	25/06/2019T18:33:54Z / 25/06/2019T13:33:54-05:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	37 7e dc 21 fa d3 eb 6e 63 a8 15 62 56 13 74 75 ba 57 fc df 40 4e 36 48 3a 43 34 c0 19 01 4f 87 cf 41 04 dc 0c 2a c8 57 4e 82 59 8f a1 dd 75 9b f9 b6 94 f2 34 e6 62 7d 97 40 b0 42 00 24 75 af 21 13 b3 a1 ae cc 36 5a e2 6f a5 f1 9e be 5b e9 52 3c 6e 2a ec 8b 3f d9 46 c0 ae 54 c6 92 54 18 69 a0 95 41 43 ff f8 84 28 49 d9 40 53 dc a1 25 00 95 48 c2 49 29 51 b1 3a 53 c3 d3 08 f9 4c 89 36 a1 12 1e 5e 40 bf 37 a8 9b 1b 1a 02 4d 10 ad c8 31 7c b2 e9 96 3d 55 23 dd 0f 97 f1 d1 4a 27 98 9c d4 81 76 92 8a 75 dc 08 41 49 97 54 1b ad 46 ca d1 67 57 f5 63 c4 b4 3a 4c a4 d9 20 fe 31 85 33 a1 55 b4 6a 90 fe c2 e9 e8 7d f0 68 4c 55 41 ca 21 99 61 15 75 6d 06 58 a3 bd 93 56 80 b8 68 2f 30 87 a6 ab 18 c4 fb f5 fb b7 d7 93 9d 35 83 59 69 72 e2 7a 40 2f df d5 d8 f9 b2 b6 27 68			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	25/06/2019T18:33:55Z / 25/06/2019T13:33:55-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e000000000000000000000000015c2			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	25/06/2019T18:33:54Z / 25/06/2019T13:33:54-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2693260			
	Datos estampillados:	111D887718BA9C353F250E1D9D9B93AEF9E8C2D3			

17:37

ASUNTO: SE SOLICITA A ESA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN REASUMIR COMPETENCIA ORIGINARIA.

CC. MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

JOÃO HENRIQUE ANDRADE ARAUJO HORST, promoviendo en mi carácter de apoderado de **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.** (en adelante "CNO"), y **ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.** (en adelante "**OICIMEX**") personalidad que acredito mediante la escritura pública número 124,265 de fecha 25 de mayo de 2018, pasada ante la fe del titular de la Notaría Pública número 74 de la Ciudad de México y la escritura pública número 126,638 de fecha 15 de mayo de 2019, pasada ante la fe del titular de la Notaría Pública número 74 de la Ciudad de México; mismas que acompaño en copia certificada al presente escrito como **ANEXO 1**, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en

[REDACTED] y autorizando en los más amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los señores licenciados en derecho licenciados en derecho **Carlos Malpica Hernández** (con cédula profesional número 2258052), **Juan José Iturbe López** (con cédula profesional número 2108825), **Rodrigo Buj García** (con cédula profesional número 4494360), **Horacio Paredes Vázquez** (con cédula profesional número 5192613), **Álvaro Huerta González** (con cédula profesional número 3677770), **Rolando Zárate Guzmán** (con cédula profesional número 5712956), **José Luis Vergara Estrada** (con cédula profesional número 6557205), **Alejandro Agredano Zermeño** (con cédula profesional número 8006477), **Rodrigo Antonio González Alpuche Herreras** (cédula profesional 9681103) **Andrés Hernández Carlsen** (cédula profesional 11232223), **Miguel Ángel García Gutiérrez** (cédula profesional 10239892) y **Sebastián Humberto Zavala González** (con cédula profesional número 10111252); asimismo, autorizando para el efecto de oír y recibir toda clase de notificaciones, recoger documentos y/o valores, solicitar copias, tomar fotografías y apuntes, imponerse de los autos, así como para reproducir las constancias del expediente a través de medios electrónicos, a los pasantes en derecho: **Fernando Salinas Valdespino**, **Vanessa Alejandra Peña Mondragón**, **Alejandro Zúñiga Pastrana**, **Gonzalo Robles Gil Candás**, **Bertha Marisol Vélez Quintero**, **Roberta Mier y Terán Lagos** y **Daniela Martínez Alarcón**, ante Ustedes, **CC. MINISTROS** integrantes DE ESTA H. SUPREMA

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, con el debido respeto se expone lo siguiente:

Por medio del presente escrito, se solicita a sus Señorías **REASUMIR SU COMPETENCIA ORIGINARIA** sobre el **recurso de revisión número 200 / 2019** del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, toda vez que **LA MATERIA DE DICHO RECURSO RESULTA DE ESPECIAL INTERÉS Y TRASCENDENCIA**, tal como se describe y argumenta a continuación:

ANTECEDENTES

1. **Contrato de Obra Pública**. El día 12 de noviembre de 2015, Constructora Norberto Odebrecht, S.A. (anteriormente definido como "**CNO**") y Pemex Transformación Industrial, celebraron un Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción, con número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15 en la modalidad de obra a precio unitario, cuyo objeto sería la Construcción de Accesos y Obras Externas para el Proyecto de Aprovechamiento de Residuales para la Refinería Miguel Hidalgo (en adelante el "**Contrato de Obra Pública**").
2. **Solicitud de Cesión**. Con fecha 04 de febrero de 2016, CNO solicitó a Pemex Transformación Industrial, la autorización para formalizar la cesión total de derechos y obligaciones derivadas del Contrato de Obra Pública a Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México S.A. de C.V. (anteriormente definido como "**OICIMEX**").
3. **Autorización**. Mediante oficio DGTRI-181-2016, de fecha 17 de junio de 2016, el Director General de Pemex Transformación Industrial, autorizó la cesión de derechos y obligaciones del Contrato de Obra Pública, por parte de CNO a OICIMEX, en términos de lo establecido en la cláusula 13 del Contrato de Obra Pública y lo dispuesto por el artículo 37 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.
4. **Dictamen**. El día 21 de junio de 2016, Pemex Transformación Industrial, emitió en forma favorable el Dictamen para la Autorización de la Cesión de los Derechos y Obligaciones del Contrato de Obra Pública No. DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, de conformidad con lo establecido por la cláusula 13 del Contrato de Obra

Pública y con lo dispuesto por el artículo 37 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

5. **Acuerdo Privado.** Con fecha 20 de octubre de 2016, con la comparecencia de Pemex Transformación Industrial, CNO y OICIMEX celebraron el Acuerdo de Voluntades Privado de Cesión de Derechos y Obligaciones, en virtud del cual CNO cedió a OICIMEX el Contrato de Obra Pública.

6. **Garantía Corporativa.** En esa misma fecha, 20 de octubre de 2016, CNO y OICIMEX, entregaron a Pemex Transformación Industrial la garantía corporativa (*parent company guarantee*) suscrita por Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A., de conformidad con lo establecido por la cláusula 13 y el "anexo W" del Contrato de Obra Pública y con lo dispuesto por el artículo 37 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias (DAGS) (en adelante "**Garantía Corporativa**").

7. **Convenio Modificatorio.** El día 05 de diciembre de 2016, CNO en su carácter de cedente, OICIMEX en su carácter de cesionaria, y Pemex Transformación Industrial, respectivamente, celebraron el Primer Convenio Modificatorio de Formalización de la Cesión de Derechos y Obligaciones del Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción, número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15 (en adelante "**Convenio Modificatorio**").

8. **Oficio de Investigación.** Por oficio número UR-DPTI-AQDI-753-2017, de fecha 09 de junio de 2017, el Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial hizo del conocimiento del Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial (en adelante "**Titular del Área de Responsabilidades**"), que en términos de la investigación realizada en el expediente administrativo 2017/PTI/DE109, se desprendía una presunta irregularidad cometida por Gleiber José de Faria, OICIMEX y CNO, al advertir elementos que hacían presumir la actualización de la conducta prevista en la fracción IV del artículo 8º, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, consistente en haber realizado actos con el objeto de evadir y simular el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula 13 del Contrato de Obra Pública.

9. **Acuerdo de Inicio.** El día 14 de junio de 2017, le fue notificado a las recurrentes los Oficios números UR-DPTI-AR-081/2017, UR-DPTI-AR-082/2017 y UR-DPTI-AR-083/2017, de fechas 12 de junio de 2017, a través de los cuales el Titular del Área de Responsabilidades, entre otras cuestiones, dictó el acuerdo de inicio de los procedimientos administrativos sancionadores PTRI-S-001/2017, PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017 instaurados en contra de OICIMEX, Gleiber José de Faria y CNO, respectivamente, otorgándoles un plazo de 15 días para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y aportaran las pruebas que estimaren convenientes.

10. **Acuerdo de Acumulación.** Por resolución de fecha 12 de septiembre de 2017, contenida en el Oficio número UR-DPTI-AR-0227-2017, de esa misma fecha, el Titular del Área de Responsabilidades ordenó la acumulación de los expedientes PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017, al expediente PTRI-S-001/2017.

Con motivo de dicha acumulación, la autoridad responsable decidió glosar los autos de los expedientes PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017, para su acumulación al más antiguo, el número PTRI-S-001/2017, a fin de que se decidieran en una sola resolución todos los asuntos seguidos por una misma causa (en adelante los **"Procedimientos Administrativos Sancionadores"**).

11. **Cierre de Instrucción.** Por acuerdo de fecha 05 de octubre de 2017, contenido en el Oficio número UR-DPTI-AR-0282-2017, de esa misma fecha, el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial tuvo por formulados los alegatos de OICIMEX, Gleiber Jose de Faria y CNO, y declaró cerrada la instrucción del procedimiento y turnó los autos a fin de que se emitiera la resolución definitiva en los Procedimientos Administrativos Sancionadores.

12. **Resolución Definitiva.** Con fecha 17 de abril de 2018, se notificó a las recurrentes la resolución definitiva de fecha 16 de abril de 2018, que resuelve los Procedimientos Administrativos Sancionadores en donde se declara que OICIMEX, Gleiber José de Faria y CNO se ubicaron en el supuesto establecido en el artículo 8º, fracción IV de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y, en consecuencia, se les impone como sanción administrativa, respectivamente, a CNO y OICIMEX la inhabilitación temporal por el plazo de 2 años, seis meses para participar en contrataciones públicas de carácter federal y una multa de

[REDACTED]
[REDACTED] (en adelante la "Resolución Administrativa").

En cuanto a Gleiber José de Faria, el Titular del Área de Responsabilidades impuso como sanción administrativa, la inhabilitación temporal por el plazo de 2 años, 3 meses y 12 días para participar en contrataciones públicas de carácter federal y una multa de [REDACTED]
[REDACTED]

13. Juicio de Amparo Indirecto GJF. Mediante escrito de fecha 27 de abril de 2018, Gleiber José de Faria promovió demanda de amparo indirecto en contra de los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, el artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Artículo Primero del "*ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican*", en su carácter de normas de naturaleza heteroaplicativas, aplicadas por primera vez en su perjuicio en la Resolución Definitiva. De igual manera, se señaló como acto reclamado los vicios propios de la Resolución Definitiva.

Dicha demanda de amparo, por razón de turno, fue enviada al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien la registró bajo el número de expediente número 526/2018.

Por escrito de fecha 8 de mayo de 2018, Gleiber José de Faria amplió la demanda de amparo respecto a los conceptos de violación.

14. Juicio de Amparo Indirecto OICIMEX. Mediante escrito de 8 de mayo de 2018, OCIMEX promovió demanda de amparo indirecto en contra de los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, el artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Artículo Primero del "*ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican*", en su carácter de normas de naturaleza heteroaplicativas, aplicadas por primera vez en su perjuicio en la Resolución Definitiva. De igual manera, se señaló como acto reclamado los vicios propios de la Resolución Definitiva.

Dicha demanda de amparo, por razón de turno, fue enviada al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México quien la registró bajo el número de expediente número 569/2018.

15. Juicio de Amparo Indirecto CNO. Mediante escrito de 8 de mayo de 2018, CNO promovió demanda de amparo indirecto en contra de los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, el artículo 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Artículo Primero del *“ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican”*, en su carácter de normas de naturaleza heteroaplicativas, aplicadas por primera vez en su perjuicio en la Resolución Definitiva. De igual manera, se señaló como acto reclamado los vicios propios de la Resolución Definitiva.

Dicha demanda de amparo, por razón de turno, fue enviada al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México quien la registró bajo el número de expediente número 571/2018.

16.- Acumulación de los Juicios de Amparo. Mediante acuerdo de fecha 30 de mayo de 2018, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó de oficio la acumulación de los juicios de amparo 569/2018 y 571/2018 al diverso juicio de amparo 526/2018.

17. Juzgado Auxiliar. En cumplimiento a lo ordenado en el oficio STCCMP/77/2019, de fecha 28 de enero de 2019, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México remitió el juicio de amparo 526/2018 y sus acumulados al diverso Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, para el dictado de la sentencia correspondiente.

Dicho Juzgado Auxiliar registró el asunto bajo el cuaderno auxiliar número 82/2019.

18. Sentencia Definitiva. Mediante sentencia definitiva, de fecha 28 de marzo de 2019, el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República

Mexicana y residencia en la Ciudad de México, **resolvió sobreseer** el juicio de amparo 526/2018 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018.

Al efecto, desde este momento es preciso mencionar que el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito se resolvió **EN ABIERTA CONTRADICCIÓN A LO SUSTENTADO POR ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN** en las tesis de jurisprudencia P. /J. 95/97 sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal.

19. **Recurso de Revisión:** Con fecha 24 de abril de 2019, Gleiber José de Faria, CNO y OICIMEX interpusieron conjuntamente, recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio de amparo indirecto 526/2018 y acumulados del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Dicho recurso fue admitido a trámite el pasado 10 de mayo de 2019 por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que actualmente se encuentra en trámite.

20. **Queja ante la CNDH.** Con fecha 3 de diciembre de 2018, CNO y OICIMEX interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como resultado de las diversas y graves violaciones e irregularidades perpetradas en su contra por órganos públicos del Estado mexicano.

En relación a lo anterior, se acompaña a la presente petición, el acuse de dicha queja como parte integrante del **Anexo 2**.

21. **Ampliación de Queja ante la CNDH.** Con fecha 28 de marzo de 2019, CNO y OICIMEX presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos un escrito de ampliación a la queja originalmente presentada ("**Primera Ampliación**").

En relación con lo anterior, se acompaña a la presente solicitud el acuse de dicha queja como parte integrante del **Anexo 2**.

22. **Segunda Ampliación de Queja ante la CNDH.** Con fecha 23 de mayo de 2019, CNO y OICIMEX presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un segundo escrito de ampliación a la queja previamente presentada ("**Segundo Escrito de Ampliación**").

En relación con lo anterior, se acompaña al presente escrito el acuse de dicha queja y sus respectivas ampliaciones como parte integrante del **Anexo 2**.

En relación a este Segundo Escrito de Ampliación debe señalarse que, a efecto de colaborar y de coadyuvar en las investigaciones que está llevando a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, se acompañó el dictamen y opinión jurídica elaborada por el reconocido Despacho de abogados ARTEAGA, GARCÍA & OLVERA, especializados en Derecho Constitucional, quienes después de analizar la información, datos, documentos y elementos allegados por mis representadas, entre otros materia de los procedimientos administrativos antes referidos, CONCLUYERON en forma argumentativa y debidamente expositiva la EXISTENCIA DE DIVERSAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN AGRAVIO DE MIS REPRESENTADAS.

En relación con lo anterior, se acompaña al presente escrito el importante dictamen y opinión jurídica como **Anexo 3**.

Lo anterior es sumamente relevante en apoyo a la presente solicitud para sustentar LA MATERIA DEL RECURSO COMO DE ESPECIAL INTERÉS Y TRASCENDENCIA PARA LOS EFECTOS DE QUE ESTA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN REASUMA COMPETENCIA ORIGINARIA, puesto que en dicho dictamen y opinión jurídica se argumenta, expone y concluye que han existido graves violaciones de autoridades del Poder Judicial de la Federación, en algunos casos similares en los que se sobreseyeron juicios de amparo que evidentemente resultaban procedentes, con el propósito aparente de negar el acceso a la justicia a la aquí peticionaria CNO.

A continuación, se transcriben algunas cuestiones relevantes del dictamen y opinión jurídica de mérito:

«Si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene competencia para el caso de las violaciones cometidas por las autoridades jurisdiccionales, la narración de lo anterior demuestra una clara actitud de las autoridades mexicanas para cerrar las posibilidades de defensa a Odebrecht, y que a raíz de ese acceso pueda esclarecer y coadyuvar en los temas declarados el 21 de diciembre de 2016 ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

La denegación de justicia se ve en los casos de las resoluciones del juicio de amparo que Constructora Norberto Odebrecht, S. A.,

presentó en contra de la resolución del 7 de febrero de 2018 en el Procedimiento Administrativo Sancionador, contenida en el oficio No. UR-DPTI-AR-049/2018. El juicio de amparo se sobreseyó por resolución del el Juez Tercero en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el 28 de septiembre de 2018, en el expediente 250/2018; y se confirmó por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el recurso de revisión 381/2018.

Al parecer existe una actuación negligente y desapegada a derecho por parte de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio de amparo y su recurso de revisión antes citados, porque hay una tendencia ilegal de sostener que en el juicio de amparo se actualizó la causal de improcedencia relativa al consentimiento tácito de la norma reclamada, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque, a consideración de los juzgadores, el quejoso no combatió el primer acto de aplicación del artículo 59, fracción IV de la Ley de Petróleos Mexicanos abrogada.

Los juzgadores de amparo adoptaron la postura relativa de que el primer acto de aplicación de la norma heteroaplicativa reclamada como inconstitucional se generó en el acuerdo de inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, y no en la resolución definitiva mediante en la que la autoridad responsable determinó que se había actualizado la conducta sancionada, como es lo correcto.

Los integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión 381/2018, sostuvieron que “se debe atender al primer acto que concrete la hipótesis jurídica controvertida en perjuicio del peticionario, siendo evidente que desde el acuerdo de inicio de procedimiento se actualizó el supuesto normativo contemplado en cada uno de los preceptos mencionados”. Esos argumentos son tendientes a sostener que en ese asunto se actualizaba la causal de improcedencia relativa al consentimiento tácito de la norma reclamada prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa combatió un ulterior acto de aplicación del artículo 59, fracción IV de la Ley de Petróleos Mexicanos Abrogada

El anterior razonamiento lo sustentaron los magistrados con fundamento en la jurisprudencia de rubro: AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO PRESUPUESTO QUE SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY, la cual, en su parte conducente establece: “cuando la resolución dictada dentro del procedimiento, aun sin ser la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del promovente y se reclama también ésta, surge una excepción al principio de definitividad, en virtud de la indivisibilidad que opera en el juicio de garantías, que impide el examen de la ley, desvinculándola del acto de aplicación que actualiza el perjuicio.” Este criterio no era aplicable al caso porque es un criterio superado por las siguientes jurisprudencias del Pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación:

Época: Novena Época

Registro: 170866

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXVI, Diciembre de 2007

Materia(s): Común

Tesis: P./J. 78/2007

Página: 5

AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad.

Contradicción de tesis 8/2006-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, y los Tribunales Colegiados Décimo Primero, Octavo y Noveno, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de abril de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria. Mariana Mureddu Gilabert.

Época: Novena Época

Registro: 165618

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXXI, Enero de 2010

Materia(s): Administrativa

Tesis: 2a./J. 215/2009

Página: 267

AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA CUANDO SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

De los artículos 16, fracción XXVIII, 79, fracción X, 110, 121 a 123, 125, 127, 134 y 136 a 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en relación con los diversos 73, fracciones XII, párrafo tercero, y XV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se impugne la inconstitucionalidad de una ley dentro de un procedimiento administrativo disciplinario seguido con fundamento en el referido artículo 136 y el Consejo de la Judicatura Estatal aplique como sanción al servidor público la suspensión, destitución o inhabilitación, solamente procederá el juicio de amparo indirecto, como excepción al principio de definitividad, sin necesidad de esperar a que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia dicte la resolución definitiva al resolver el recurso de revisión oficioso, cuando se acredite que es el primer acto de aplicación de la ley reclamada, y además de imposible reparación. Lo anterior es así, porque razonar en sentido contrario llevaría a paralizar todos los procedimientos administrativos con el solo hecho de impugnar la inconstitucionalidad de la ley, lo que es contrario al fin perseguido por el juicio de amparo. Además, en el caso, es aplicable por analogía, lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo.

Contradicción de tesis 398/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 18 de noviembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas."

Se concluye que el criterio en el que se fundamentó la resolución del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión 381/2018, es un criterio que no debió ser aplicado; además de que no se razonó la inaplicación (ni se citaron) de las jurisprudencias que debieron de haberse aplicado para superar el sobreseimiento. Otro argumento que señalaron los magistrados fue que el quejoso debió haber agotado el principio de definitividad, lo cual es erróneo, porque conforme al artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, se puede optar por promover el juicio de amparo o por interponer los recursos o medios ordinarios.

Contrario al criterio sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito considera que el acuerdo de inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionador no puede considerarse como el acto de aplicación de una norma, ni es un acto de ejecución irreparable.

Además, la empresa, en su calidad de quejosa, tenía imposibilidad de reclamar el acuerdo de inicio del Procedimiento Administrativo porque este no constituye un acto de imposible reparación además de ser

intraprocesal, por lo tanto, no era susceptible de combatirse a través del juicio de amparo (artículo 107, fracción III de la Ley de Amparo).

Al haber decretado un sobreseimiento que jurídicamente no tiene sustento, implica una denegación de justicia. Esto es violatorio del artículo 17 constitucional que establece: “Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.”. En el caso en estudio la violación es aún más grave por cuanto a que no existen jurídicamente esos formalismos procedimentales, sino que por negligencia se aplicaron estos. Además, para decretar un sobreseimiento no debe existir duda de su actualización (artículo 65 de la Ley de Amparo).

Derivado de esa actuación irregular del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Constructora Norberto Odebrecht, S. A., presentó, en contra de los integrantes de dicho tribunal, una queja administrativa ante la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación,

El sobreseimiento anteriormente narrado tiene relación con el que se resolvió en el juicio de amparo indirecto 1642/2017, en el cual, la Juez Decimoquinta de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México determinó decretar el sobreseimiento con fundamento en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto del artículo 9, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo al considerar que el primer acto de aplicación de la norma impugnada, en perjuicio de la quejosa respecto, se materializó a través de la emisión de la resolución de ocho de diciembre de 2017, dictada en el procedimiento administrativo de sanción PTRI-S-005-2017. Esa determinación fue confirmada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 381/2018. Contra esa determinación se promovió el recurso de queja, al que se le asignó el expediente 1619/2018-II, y que fue desechado el quince de noviembre de 2018. Ese desechamiento es contrario al acceso a la justicia y representa un obstáculo para que se revise la actuación de los juzgadores en el caso.»

COMPETENCIA

Esa Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver **la presente solicitud de reasunción de competencia**, de conformidad con el Punto Décimo Cuarto del Acuerdo Plenario 5/2013, del trece de mayo del 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; así como de conformidad con el contenido, alcances y efectos del artículo 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

CONSIDERACIONES PREVIAS.

Es de explorado derecho que, "por competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación" se entiende aquella fijada por la Constitución o en la ley, en su literalidad, como regla general. En este sentido, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Federal, y 83 de la Ley de Amparo, a este Alto Tribunal (SCJN) le compete originariamente - entre otros supuestos- el formal conocimiento de los recursos de revisión contra sentencias emitidas por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional cuando, habiéndose impugnado normas generales por estimarlas constitucionales, **subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.**

En efecto, por autorización de la propia Constitución de la República en el artículo 94, párrafo séptimo, dicha competencia originaria se ha delegado, respecto de ciertos asuntos. El Acuerdo General 5/2013 emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, otorga facultades a estos últimos para resolver asuntos que versen sobre la competencia originaria del Alto Tribunal (SCJN), en términos de lo establecido en el Punto Cuatro, en el que se determina lo siguiente:

*«**Punto Cuatro.** De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los Puntos Segundo y Tercero de este Acuerdo General, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito:*

I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando:

A) No obstante haberse impugnado una ley federal o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se hubiere planteado la interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia.

Lo anterior se concretará sólo cuando el sobreseimiento decretado o los agravios planteados se refieran a la totalidad de los quejosos o de los preceptos impugnados, y en todos aquellos asuntos en los que la materia de la revisión no dé lugar a que, con independencia de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, deba conocer necesariamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

B) En la demanda se hubiere impugnado una ley local, un reglamento federal o local, o cualquier disposición de observancia general, salvo aquéllos en los que el análisis de constitucionalidad respectivo implique fijar el alcance de un derecho humano previsto en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, respecto del cual no exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de este Alto Tribunal, sin menoscabo de que la Sala en la que se radique el recurso respectivo determine que su resolución corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito;

C) Habiéndose planteado la inconstitucionalidad de leyes federales, subsista la materia de constitucionalidad de éstas, y exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y

D) Los amparos en revisión en los que, sobre el tema debatido, se integre, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas; o cuando existan tres precedentes emitidos indistintamente por el Pleno o las Salas, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, y no se hubiere alcanzado votación idónea para integrar jurisprudencia;

II. Los conflictos de competencia, con excepción de los que se susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito;

III. Los reconocimientos de inocencia, y

IV. Los incidentes de inejecución derivados del incumplimiento de una sentencia de amparo, del incidente de repetición del acto reclamado y del incidente de inejecución derivado de la falta de acatamiento de lo resuelto en un incidente para la determinación de la forma y cuantía de la restitución correspondiente al cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General Plenario respectivo».

Como se justifica, una de las hipótesis previstas es precisamente la delegación relativa a los recursos de revisión interpuestos contra sentencias pronunciadas por Juzgados de Distrito habiéndose impugnado una ley federal **-como sucede exactamente en el presente caso relacionado con ODEBRECHT en México-**. Sin embargo, con fundamento en lo señalado en el Punto Décimo Cuarto del mencionado Acuerdo General, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en Pleno o Salas, **puede reasumir su competencia originaria** para conocer de un asunto o caso en concreto, cuando se cumpla un criterio de relevancia que así lo amerite:

«Décimo Cuarto. Tratándose de los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo conocimiento se ha delegado a los Tribunales Colegiados de Circuito, para que este Alto Tribunal reasuma su competencia, cuando un Ministro lo solicite, se integrará el cuaderno respectivo y se tomará al

Ministro que corresponda, tomando en cuenta si la materia en la que incide es de la competencia originaria del Pleno o de las Salas.

Si un Tribunal Colegiado de Circuito estima motivadamente, de oficio o por alegato de parte, que un asunto no se encuentra previsto en los casos precisados en el presente Acuerdo General, o que existen razones relevantes para que el Pleno o alguna de las Salas de este Alto Tribunal asuma su competencia originaria, previa resolución colegiada, enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los autos del juicio de amparo exponiendo tales razones.

Las resoluciones que emitan el Pleno o las Salas de este Alto Tribunal en donde se determine reasumir competencia originaria atendiendo a las solicitudes precisadas en los párrafos que anteceden, así como la remisión de autos que realicen los Tribunales Colegiados de Circuito en cualquiera de los supuestos anteriores, deberán notificarse por medio de oficio a las autoridades responsables, así como al Tribunal Unitario de Circuito o Juzgado de Distrito del conocimiento, y personalmente al quejoso y al tercero interesado, en su caso».

Luego entonces, si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia originaria para conocer de los recursos de revisión referidos (como ocurrió en el presente caso relacionado con ODEBRECHT en México) para que, como Alto Tribunal Mexicano (SCJN) se encuentre en legítima aptitud para reasumir su competencia, debe colmarse alguno de los siguientes supuestos:

- Que un Ministro de la SCJN lo solicite o;
- Que un Tribunal Colegiado de Circuito solicite motivadamente **o a petición de parte** que un asunto no se encuentra previsto en los casos precisados en el Acuerdo General 5/2013, o;
- **Que existen razones relevantes y excepcionales para que el Pleno o alguna de las Salas de este Alto Tribunal (SCJN) asuma su competencia.**

En consecuencia, en este acto y por medio del presente escrito, se solicita respetuosamente a esta SCJN "la reasunción de competencia", siendo criterio y consideración de este Alto Tribunal Mexicano que debe de ser precisamente esta figura jurídica, y no la diversa de la facultad de atracción, la que se utilice justificadamente para conocer de asuntos de su competencia originaria; para lo cual deben cumplirse, de igual forma, los requisitos de **INTERÉS** y **TRASCENDENCIA**, los cuales también se consideran actualizados en el presente caso por tratarse de una petición que la CNO y OICIMEX realizan a este Alto Tribunal, por hechos y circunstancias relacionados con ODEBRECHT en México, entre otras muchas cuestiones, que por sí mismo se explican.

Apoya la consideración anterior la **jurisprudencia 33/2012** de la Segunda Sala del este Alto Tribunal (SCJN), de rubro y texto siguientes:

«Época: Décima Época

Registro: 2000579

Instancia: **Segunda Sala**

Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2

Materia(s): Común

Tesis: 2a./J. 33/2012 (10a.)

Página: 1033

FACULTAD DE ATRACCIÓN. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO DEBE EJERCERLA PARA CONOCER DE ASUNTOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA SINO, EN SU CASO, REASUMIR ÉSTA.

La indicada facultad constituye el medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero revisten interés y trascendencia. Así, este Alto Tribunal puede ejercer la facultad de atracción en asuntos cuya competencia originaria corresponda a los Tribunales Colegiados de Circuito, en la inteligencia de que por "originaria" se entiende la fijada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la ley en su literalidad como regla general. En tal virtud, si en la demanda de amparo indirecto se plantea la inconstitucionalidad de una ley federal, tratado internacional o reglamento expedido por el presidente de la República en uso de la facultad reglamentaria otorgada por el artículo 89, fracción I, constitucional, y en la revisión subsiste el problema de constitucionalidad, el asunto no es competencia originaria de los indicados Tribunales Colegiados sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por tanto, ésta no debe ejercer la facultad de atracción para conocer del asunto, sino reasumir su competencia originaria.

Facultad de atracción 159/2011. Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. y otra. 26 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Juan Pablo Rivera Juárez.

Facultad de atracción 263/2011. Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 11 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Roberto Rodríguez Maldonado.

Facultad de atracción 279/2011. Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 25 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Diana Minerva Puente Zamora.

Facultad de atracción 2/2012. Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 25 de enero de 2012. Cinco votos.

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Diana Minerva Puente Zamora.

Facultad de atracción 1/2012. Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 25 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.»

Para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentre en posibilidad de **reasumir su competencia originaria** es necesario, además, que la solicitud provenga de “parte legítima”, que se satisfagan los requisitos de interés y trascendencia, los cuales han sido definidos mayoritariamente en el ejercicio de su facultad de atracción, los cuales resultan orientadores.

Así, de conformidad con los artículos 107, fracción VIII, inciso b), de la Constitución Federal; 85 de la Ley de Amparo y 21, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el ejercicio de la facultad de atracción otorgada a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación requiere que el asunto que se solicita atraer (y en el caso reasumir competencia) revista características especiales que **resulten de interés y trascendencia**, a fin de justificar que por esta vía judicial se excepcione el reparto ordinario de atribuciones y competencias entre este Alto Tribunal (SCJN) y los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación.

Por regla general, **se está en presencia de un asunto de interés y trascendencia cuando el problema jurídico que debe dilucidarse es excepcional**; es decir, que por su relevancia, novedad y/o complejidad se distingue de la generalidad de los juicios de amparo directo o de amparo en revisión que ordinariamente son del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito; supuesto en que la propia naturaleza del problema jurídico evidencia que el criterio que se sustente puede repercutir en la solución de casos futuros o impactar de manera importante y trascendente en lo social en México.

No obstante lo anterior, de una lectura literal de las disposiciones constitucionales y legales antes referidas, no es posible advertir elementos indubitables para determinar cuándo se está **en presencia de asuntos que revistan interés y relevancia** o, en su caso, advertir características especiales que justifiquen el ejercicio de la facultad de atracción y, menos aún, disposición alguna que delimite los alcances del ejercicio de una reasunción judicial, que en última instancia radica

en resolver un asunto de competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en México.

En este sentido, lo más importante al determinar el ejercicio de una facultad que finalmente es discrecional, es tener en cuenta la necesidad de dar razones o motivos justificativos en favor de la decisión de reasumir (o en su caso atraer) el asunto o razones y motivos para no hacerlo. Nótese que el Constituyente Permanente y el legislador ordinario consideraron que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser la que, a través de los asuntos concretos que ante ella se ventilan y por medio de la interpretación que realice, establezca los criterios que integren el marco jurídico para su ejercicio.

En la construcción de este marco jurídico, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios respecto de la facultad de atracción que, se reitera, resultan orientadores en la diversa facultad de reasunción de competencia, entre los que destacan la jurisprudencia 123/2006 de rubro: ***“ATRACCIÓN. PARA EJERCER ESTA FACULTAD EN AMPARO EN REVISIÓN, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE TOMAR EN CUENTA LAS PECULIARIDADES EXCEPCIONALES Y TRASCENDENTES DEL CASO PARTICULAR Y NO SOLAMENTE SU MATERIA”***¹, y la jurisprudencia 143/2006 de rubro: ***“FACULTAD DE ATRACCIÓN. EL INTERÉS Y TRASCENDENCIA QUE JUSTIFICAN SU EJERCICIO SON DE ÍNDOLE JURÍDICA”***², de las que se desprende que dicha facultad se rige por los criterios jurídicos siguientes:

- **Órgano competente.** La pueden ejercer tanto el Pleno como las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando un asunto en que se plantea la facultad de atracción sea competencia del Tribunal Pleno, pero de su análisis se advierta preliminarmente que debe rechazarse y tal decisión puede asumirla alguna de las Salas.
- **Parámetro de ejercicio.** Es discrecional, pero no debe ejercerse en forma arbitraria ni caprichosa. Es decir, debe hacerse en forma restrictiva.

¹ Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en noviembre de 2006, Novena Época, Tomo XXIV, página 195.

² Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en octubre de 2006, Novena Época, Tomo XXIV, página 335.

- **Razones de atracción.** Debe basarse en razones que no podrían darse en la mayoría o en la totalidad de los asuntos. Por tanto, no puede depender de situaciones temporales o contingentes, sino que debe derivar de la naturaleza misma del asunto.

En suma, debe ser el criterio razonado de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación el que señale, a través de sus determinaciones judiciales, el marco en el que deben ejercerse las facultades de atracción y, en el presente caso relevante y trascendente para México, "de reasunción de competencia", buscando siempre ante todo, dar coherencia y consistencia en aras de no adoptar arbitrariamente la determinación que permita resolver o no los asuntos por este más Alto Tribunal Mexicano.

PROCEDENCIA DE LA REASUNCIÓN DE COMPETENCIA.

Existen elementos, información, hechos, datos, pruebas, argumentos, explicaciones, razones y motivos suficientes, para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estime procedente ejercer la reasunción de competencia, concretamente del juicio de amparo en revisión, con la finalidad de que sea remitido a este más Alto Tribunal en México el Recurso de Revisión 200/2019 del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Ciertamente toda vez que, en principio, son de competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación los asuntos o casos en los que en la demanda de amparo se realice planteamiento de la inconstitucionalidad de una ley federal o tratado internacional y, en el recurso de revisión correspondiente, subsista dicho problema de constitucionalidad; hecho, hipótesis o supuesto jurídico que, en el presente asunto que aquí se plantea acontece, pues en los procedimientos legales antes referidos relacionados con CNO y OICIMEX, se combaten normas generales de orden federal.

Asimismo, de conformidad con el referido artículo 107, fracción VIII, penúltimo párrafo, del texto Constitucional Federal, para que el Pleno de esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación o, en su caso, la Salas de este Alto Tribunal puedan ejercer la facultad que tal disposición le confiere y, en consecuencia, atraer un asunto como el que por medio del presente ocurso se hace de su formal

conocimiento, el asunto que en su caso se pretenda atraer deberá revestir las características de "interés y trascendencia".

Se insiste respetuosamente, con base en la indeterminación de tales conceptos, que debemos atender a la conceptualización jurisprudencial que esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado al respecto:

"Época: Novena Época

Registro: 174097

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXIV, Octubre de 2006

Materia(s): Común

Tesis: 2a./J. 143/2006

Página: 335

FACULTAD DE ATRACCIÓN. EL INTERÉS Y TRASCENDENCIA QUE JUSTIFICAN SU EJERCICIO SON DE ÍNDOLE JURÍDICA.

Los conceptos "interés y trascendencia" incorporados a la fracción V del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como requisitos que justifican el ejercicio de la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de los juicios de amparo directo, son de índole jurídica en cuanto se orientan a calificar un asunto que por los problemas jurídicos planteados, dada su relevancia, novedad o complejidad, requieren de un pronunciamiento del Máximo Tribunal del país, de tal suerte que el criterio que llegara a sustentarse en el asunto atraído repercutirá de manera excepcionalmente importante en la solución de casos futuros.

Varios (facultad de atracción) 11/95. Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100 y otros. 8 de diciembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Irma Rodríguez Franco.

Facultad de atracción 2/2003-SS. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 23 de mayo de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Avalos Díaz.

Facultad de atracción 5/2006-PL. Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 19 de abril de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.

Facultad de atracción 7/2006-PL. Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 28 de abril de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre

Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez.

Facultad de atracción 14/2006-PL. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4 de agosto de 2006. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jonathan Bass Herrera."

(Énfasis añadido)

Más aún, como lo ha determinado la H. Primera Sala de la SCJN, las razones para la determinación del ejercicio de la facultad de atracción, no derivan de la naturaleza procesal de la resolución recurrida (sentencia o auto), ni de las causas que conduzcan a la instancia de revisión, **sino de la naturaleza e importancia intrínseca de la materia del amparo en cuestión, lo cual debe ser el factor determinante para, en su caso, ejercer o no dicha facultad**. Lo anterior, tal y como se sostiene en el siguiente criterio judicial:

"Época: Novena Época

Registro: 193002

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo X, Noviembre de 1999

Materia(s): Común, Constitucional

Tesis: 1a. XXXIV/99

Página: 421

ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO NO DEPENDE DE LA NATURALEZA PROCESAL DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, SINO DEL INTERÉS Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO.

*De la interpretación armónica de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción III del artículo 84 de la Ley de Amparo y la fracción II inciso b) del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desprende que la facultad de atracción que a las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación les otorgan los mencionados dispositivos podrá ejercerse respecto de los amparos en revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Ahora bien, el ejercicio de esta facultad, respecto de los "amparos en revisión", no depende de un simple matiz técnico que lleve a distinguir entre amparos en revisión contra sentencias definitivas dictadas por los Jueces de Distrito, o bien, amparos en revisión contra algún otro tipo de resoluciones dictadas en relación con un juicio de garantías, en virtud de que las características especiales a que hace referencia el precepto constitucional citado, **no derivan de la naturaleza procesal de la resolución recurrida (sentencia o auto), o de las causas que conduzcan a la instancia de revisión, sino de la naturaleza e importancia intrínseca de la materia del amparo en cuestión, lo***

cual debe ser el factor determinante para, en su caso, ejercer o no dicha facultad.

Amparo en revisión (facultad de atracción) 311/99. Everardo Arturo Páez Martínez. 21 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Guillermo Campos Osorio.”

(Énfasis añadido)

A mayor abundamiento, tal y como además se desprende de la ejecutoria correspondiente a la facultad de atracción 302/2012, emitida por la H. Segunda Sala de este Alto Tribunal, mediante la cual se integró la **jurisprudencia por reiteración 2a.IJ. 174/2013** de rubro **“FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PROCEDE SU EJERCICIO PARA CONOCER DE LOS RECURSOS DE QUEJA.”**, en la que dicha Segunda Sala estableció que el ejercicio de la facultad de atracción se encuentra sujeto a lo siguiente:

“39. En estas condiciones, para abandonar el reparto de competencias determinado por las leyes y atraer un asunto para su análisis y resolución, esta Suprema Corte debe considerar que el caso es excepcional. Este interés excepcional del asunto no debe estar vinculado a factores subjetivos, es decir, en la gravedad de efectos que podrían derivarse para las partes en conflicto, en la cualidad o categoría de la persona, en el monto económico de lo controvertido o en la afectación al orden público y al interés general, sino que el asunto sea de interés y trascendencia por los razonamientos jurídicos implicados, distinguiéndolo de la totalidad o mayoría de asuntos, por las consecuencias jurídicas que para el orden jurídico nacional traería resolverlo.”

(Énfasis añadido)

En tal virtud, habiendo establecido cuáles son las características que un recurso de revisión debe reunir a fin de poder ser atraído por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación o sus Salas, sus Señorías podrán corroborar que el recurso de revisión que aquí que se hace del formal conocimiento de la H. Primera Sala de la SCJN, resulta efectivamente de interés y trascendencia para México, en atención a las consideraciones siguientes, narradas en forma enunciativa, más no limitativa:

MARCO GENERAL. A reserva de que en párrafos subsecuentes se desarrolle con mayor detalle, las peticionarias consideran que el recurso de revisión

cuya reasunción de competencia se le solicita respetuosamente a este Alto Tribunal, surte los supuestos de **interés y trascendencia**, puesto que:

Su resolución en definitiva dará lugar al examen y determinación de la vigencia y alcances actuales DE LAS JURISPRUDENCIAS, todas ellas inexplicablemente inaplicadas en la Resolución Recurrida:

Tesis	Órgano	Rubro	Época
Tesis: P. /J. 95/97	Pleno	CONSENTIMIENTO EXPRESO DE UNA LEY. NO SE ACTUALIZA COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SU HIPÓTESIS FUE ACEPTADA POR EL QUEJOSO EN UN CONTRATO.	Novena Época
Tesis: 1a. /J. 64/99	Primera Sala	TELECOMUNICACIONES. ARTÍCULOS 91 Y 92 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. PARA QUE PROCEDA SU IMPUGNACIÓN EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU ESFERA JURÍDICA.	Novena Época
Tesis: P. /J. 78/2007	Pleno	AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.	Novena Época
Tesis: 1a./J. 29/98	Primera Sala	AMPARO INDIRECTO. PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA EN UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO SI EL QUEJOSO RECLAMA ÚNICAMENTE LA AFECTACIÓN DE DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS.	Novena Época
Tesis: P./J. 24/92	Pleno	EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.	Octava Época
Tesis: P./J. 11/2018 (10a.)	Pleno	DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.	Décima Época
Tesis: 1a./J. 29/98	Primera Sala	AMPARO INDIRECTO. PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA EN UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO SI EL QUEJOSO RECLAMA	Novena Época

		ÚNICAMENTE LA AFECTACIÓN DE DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS.	
Tesis: 2a./J. 215/2009	Segunda Sala	AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA CUANDO SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.	Novena Época
Tesis: 1a./J. 18/2012 (9a.)	Primera Sala	LEYES. SU SOLA CITA NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN.	Décima Época
Tesis: 2a./J. 43/2006	Segunda Sala	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE.	Novena Época
Tesis: 2a./J. 37/2010	Segunda Sala	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA RELATIVA A LA DECLARACIÓN SOBRE LOS HECHOS U OMISIONES IMPUTADOS, PARA VERIFICARSE EN UN LUGAR DISTINTO AL EN QUE SUCEDIERON Y LA CITACIÓN PARA ESA DILIGENCIA, NO SON ACTOS DE EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	Novena Época

En forma concomitante a lo anterior, **el presente asunto reviste las características de interés y trascendencia que justifican su atracción por parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,** ya que su resolución dará lugar a la definición de las siguientes importantes interrogantes:

Primeramente, si el injusto sobreseimiento impuesto por el Juzgador es acorde a las recientes reformas constitucionales en materia de justicia cotidiana, en específico, **al mandato de privilegio del fondo del asunto** que dispone el artículo 17, párrafo tercero de la Constitución Federal. Y, más aún, si dicho sobreseimiento fue maquinado como “trampa procesal” con el único ánimo de DENEGAR JUSTICIA a las ahora peticionarias, tal como se determinó en el dictamen y opinión jurídica acompañado a la Tercera Ampliación de la Queja presentada ante la Comisión

Nacional de Derechos Humanos, y que se adjunta, asimismo, a la presente solicitud.

De igual forma, las cuestiones sustantivas desde el punto de vista estrictamente jurídico son de gran relevancia, interés y trascendencia, ya que se deberá definir lo siguiente:

¿Dentro del marco del procedimiento administrativo sancionador, puede el auto de inicio considerarse como un acto de ejecución irreparable y, en consecuencia, justificar la procedencia del juicio constitucional en su contra?

Evidentemente también deberá de definirse ante esta SCJN:

¿Si dicho auto inicial puede considerarse formalmente como el primer acto de aplicación de los tipos administrativos, por virtud de los cuales se le pretende sancionar al presunto infractor?

Como se desprende de los antecedentes narrados en EL RECURSO DE REVISIÓN CUYA ATRACCIÓN SE SOLICITA, la materia de la casación radica en el combate “al sobreseimiento decretado” en primera instancia por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México.

El contenido total del fallo judicial recurrido, y materia de agravio de las ahora solicitantes radicó en el hecho de que el Juez de Distrito determinó imponer “el sobreseimiento del juicio de amparo” con motivo de que el supuesto ‘primer acto de aplicación’ de los artículos 8, fracción IV, 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y el artículo Primero del Acuerdo Delegatorio, se generó con los proveídos que dieron inicio a los “PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES”.³

Consecuentemente, que “el juicio de amparo fue sobreseído” sobre la base del supuesto consentimiento de las normas reclamadas, pues según ‘lo alegó el Juez’,

³ Recordemos que la autoridad responsable decidió glosar los autos de los expedientes PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017, para su acumulación al más antiguo, el número PTRI-S-001/2017, a fin de que se decidieran en una sola resolución todos los asuntos seguidos por una misma causa (los “Procedimientos Administrativos Sancionadores”).

estas fueron aplicadas a las ahora recurrentes mediante el “acuerdo de inicio” del procedimiento administrativo sancionador.

En esta injusta actuación del Juez de Distrito, el punto medular del fallo judicial combatido mediante el recurso de revisión cuya atracción aquí se solicita, se centra en *las dos interrogantes antes referidas*, es decir, si dicho 'auto de inicio' se trataba de un acto de ejecución irreparable y, si siendo así, es formalmente el primer acto de aplicación de las normas en perjuicio de la presunta infractora.

Las cuestiones anteriores son de importancia fundamental y darán lugar a un precedente extremadamente relevante, de gran interés y trascendencia, puesto que la lógica y los razonamientos que motiven la resolución que emita esta Suprema Corte de Justicia de la Nación trascenderá, como precedente aplicable, a la mayoría de los procedimientos administrativos sancionadores en México.

En efecto, es de suma relevancia para el ordenamiento jurídico y de gran trascendencia para garantizar LA SEGURIDAD JURÍDICA y el DEBIDO ACCESO A LA JUSTICIA DE CIUDADANOS Y PERSONAS MORALES INDEBIDAMENTE SANCIONADOS en México, **puesto que la indefinición y disparidad de criterios en cuanto al momento indicado para la promoción del juicio constitucional, se relaciona directa e íntimamente con la posibilidad de obtener “una resolución efectiva y de fondo” respecto de las controversias de las que sean objeto.**

En ese contexto, conforme al artículo 65 de la Ley de Amparo, con motivo de la sentencia dictada por el C. Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en los autos del juicio de amparo 526/2018 y acumulados, no fue abordado el fondo del asunto, es decir, al día de hoy no existe un pronunciamiento respecto a la violación a los derechos fundamentales de mis mandantes.

Para mayor referencia, se transcribe a continuación la parte de la injusta resolución judicial, en la parte que consideramos interesa a esta SCJN y a la sociedad mexicana:

“Ahora, por lo que hace al artículo primero del “Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican”, así como respecto de los diversos 8°, fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal

Anticorrupción en Contrataciones Públicas, es también fundada la causa de improcedencia propuesta.

En efecto, en el caso se estima actualizada la causa de improcedencia contenida en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo dado que esas normas **no son impugnadas en este juicio con motivo del primer acto de aplicación, sino de uno ulterior y, por tanto, deben estimarse consentidas tácitamente, como a continuación se expone.**

(...)

Ahora, como se narró en el considerando de antecedentes de esta resolución, el doce de junio de dos mil diecisiete, la autoridad responsable dio inicio a los procedimientos administrativos sancionadores PTRI-S-001-2017, PTRI-S-003-2017 y PTRI-S-004-2017, con base en las siguientes consideraciones:

(...)

De la transcripción que antecede, se advierte que en los tres procedimientos abiertos en contra de cada uno de los aquí quejosos, el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial se declaró legalmente competente para tramitar, instruir y resolver los procedimientos de sanción, con fundamento, entre otros, en los artículos 1, 2, fracción II, 3, fracciones I, III, VI y VIII, 4, fracción I, 5, **8, fracción IV**, 10 y el Capítulo Cuarto, todos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, **así como en el "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican".**

Del mismo modo, en los referidos acuerdos ordenó hacer del conocimiento de los quejosos las imputaciones de las conductas que, en consideración de la autoridad, actualizaban la infracción administrativa establecida en la fracción IV, del artículo 8, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, así como las pruebas con las que se sustentaba esa acusación; por lo que, le informó que, **en caso de no desvirtuar tales imputaciones, se harían acreedores a las sanciones previstas en el diverso 27, fracción II, incisos a) y b) del mismo ordenamiento, con lo que se actualizaron e individualizaron los supuestos normativos.**

(...)

Como se advierte, faculten a Titular del Área de Responsabilidades de la **en este juicio de amparo esencialmente la quejosa se duele de la inseguridad jurídica que a su consideración le genera que los artículos reclamados** Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial para iniciar, tramitar y resolver un procedimiento administrativo de sanción y que éste los haya sujetado a un procedimiento por una conducta típica que contiene elementos descriptivos ambiguos y genéricos, cuya consecuencia será indefectiblemente la aplicación de las sanciones previstas (inhabilitación y multa), sin ninguna otra posibilidad.

Entonces, si por una parte, como se dijo, la autoridad responsable en los acuerdos de inicio de procedimiento se declaró legalmente competente para tramitar, instruir y resolver los procedimientos de sanción, con fundamento, entre otros, en los artículos 8, fracción IV, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, así como

en el “Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican”; y formuló las imputaciones de las conductas que, en su consideración, actualizaban la infracción administrativa establecida en la fracción IV, del artículo 8, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, así como las pruebas con las que se sustentaba esa acusación y les informó que, **en caso de no desvirtuar tales imputaciones**, se haría acreedores a las sanciones previstas en el diverso 27, fracción II, incisos a) y b) del mismo ordenamiento, **es claro que esas actuaciones constituyen el primer acto de aplicación de las referidas normas y no la resolución definitiva que ahora se combate.**

Cierto es que en la resolución de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, que resolvió en definitiva el procedimiento administrativo sancionador con número de expediente PTRI-S-001/2017 y sus acumulados PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017, también se aplicaron las referidas normas; sin embargo, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo reserva la procedencia del juicio constitucional al primer acto de aplicación; por lo que, en caso de ser el segundo o ulterior acto de aplicación, el juicio de amparo indirecto será improcedente en términos de la fracción XIV, del artículo 61, del mismo ordenamiento legal.

(...)

Sobre esa base, **si en los acuerdos de inicio la autoridad estimó procedente sujetar a los quejosos a un procedimiento de sanción por haberse ubicado en la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 8, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, con base en los elementos que les dieron a conocer**, es claro que el primer acto que concretó la individualización de las hipótesis jurídicas controvertidas en este juicio, se verificó a través de los referidos acuerdos que dieron inicio a los procedimientos.

(...)

Sin que sea óbice a lo anterior, que la recurrente no solo reclame la hipótesis sancionadora prevista (sic) la fracción IV, del artículo 8, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, sino también en el diverso 27, fracción II, incisos a) y b) del mismo ordenamiento, la cual considera inconstitucional, al ser contraria –según aduce– al principio de proporcionalidad de las penas, pues lo cierto es que la quejosa no puede negar que desde el acuerdo de inicio de procedimiento sabía:

1. Cuál era la conducta que se le atribuía.
2. El precepto normativo que la regula y por ende, la sanción que indefectiblemente habría de aplicar la autoridad.
3. Así como la facultad con que contaba la autoridad responsable para seguir en su contra el procedimiento respectivo hasta el dictado de la resolución definitiva.

(...)

De este modo, los quejosos **no tenían que esperar hasta que se resolviera el procedimiento administrativo sancionatorio incoado en su contra, para saber que ésta tenía como finalidad sancionarlo conforme a los preceptos legales que ahora impugna**; máxime que, como se apuntó con anterioridad, sus argumentos están dirigidos a evidenciar la inconstitucionalidad de las porciones normativas impugnadas, al considerar que no contienen una

definición clara y precisa de las infracciones administrativas que propician el ejercicio de la potestad sancionadora de la autoridad y que no existe alternatividad en la aplicación de las penas; lo que, evidentemente, estuvo en aptitud de cuestionar desde el acuerdo de inicio, en el que se le informó la hipótesis normativa en la que se encuadró su conducta y las consecuencias jurídicas que ello ocasionaba.

(...)

Entonces, si los referidos acuerdos de inicio de procedimiento de doce de junio de dos mil diecisiete (en que se aplicaron por primera vez las normas reclamadas (sic) a la quejosa, se notificaron a los quejosos el catorce de junio de ese mismo año a la fecha en que se promovieron los juicios que se resuelven (veintisiete de abril y nueve de mayo de dos mil dieciocho), ha transcurrido en exceso el plazo de quince días que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo y, por consiguiente, **se estiman consentidas tácitamente las normas impugnadas.**

No debe pasar inadvertido el hecho de que el **acuerdo de inicio de procedimiento sea un acto de naturaleza intraprocesal;** sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando la resolución dictada dentro del procedimiento, aun sin ser la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del promovente (como en el caso acontecido), y se reclama también ésta, surge una excepción al principio de definitividad.

(...)

Además, si bien el máximo tribunal también sostuvo que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley, con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento, siempre que cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, sin que para ello exista obligación de agotar los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes; lo cierto es, que cuando el acto de aplicación de la ley reclamada **no sea de los considerados como de imposible reparación, deberá operar la regla contenida en el artículo 170, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo.**

Conforme a ese precepto: "Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva", por tanto, para que se actualice su procedencia, resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad, **sin que en la especie se hubiera hecho.**

Por todo lo expuesto, si el juicio constitucional es procedente únicamente cuando se controviertan normas generales con motivo del primer acto concreto de aplicación en perjuicio del gobernado, lo que en la especie **no aconteció con motivo de la resolución definitiva de dieciséis de abril de dos mil dieciocho**, que resuelve el procedimiento administrativo sancionador número de expediente PTRI-S-001/2017 y sus acumulados PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017, es evidente que no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo, a través de un ulterior acto.

(...)

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio respecto de los artículos 8º, fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y Primero del “Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican”, respecto de las quejas Gleiber José de Faria, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, sociedad anónima de capital variable y Constructora Norberto Odebrecht, sociedad anónima. (...)

(Énfasis añadido)

Con base en la anterior transcripción se deduce que los puntos en los cuales se resume la resolución del JUEZ DE DISTRITO, a través de la cual invoca la supuesta causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, respecto de los artículos 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y el artículo Primero del Acuerdo Delegatorio, son los siguientes:

- Las quejas impugnaron las normas reclamadas, no con motivo de su ‘primer acto de aplicación’, sino uno ulterior. En consecuencia, consintieron tácitamente las normas impugnadas.
- Desde los acuerdos de inicio de los “Procedimientos Administrativos Sancionadores”, fueron citados los preceptos legales cuya constitucionalidad pretenden controvertir las quejas en el juicio de amparo bi-instancial.
- Los acuerdos de inicio de los “Procedimientos Administrativos Sancionadores”, son el primer acto de aplicación de las normas reclamadas, puesto que las quejas conocieron las imputaciones en su contra, las pruebas que sustentaban la acusación y se les informó que en caso de no desvirtuar la acusación se harían acreedores a las sanciones contempladas en el artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
- A decir de las quejas, la inconstitucionalidad de las normas combatidas recae en que la conducta típica que se les atribuía contiene elementos descriptivos ambiguos y genéricos; además, la sanción prevista en la Ley Federal Anticorrupción no prevé una alternativa respecto del tipo de medida privativa que pueda aplicarse. Por lo tanto, desde los acuerdos de inicio de los Procedimientos Administrativos Sancionadores tomaron

conocimiento de tales cuestiones ya que la autoridad invocó los preceptos legales aplicables.

- Si bien los acuerdos de inicio son actos intraprocesales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el amparo indirecto procede en contra del primer acto de aplicación, siempre que cause perjuicio al quejoso.

Con base en estas alusiones judiciales, la resolución materia de la presente solicitud adquiere indudablemente las características de **relevancia y trascendencia** que justifican la legítima **REASUNCIÓN DE COMPETENCIA DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**, toda vez que el fallo correspondiente que se emita deberá de razonar, motivar y fundar, entre otras importantes cuestiones, lo siguiente:

1. Con base en la actual conformación legal y jurisprudencial en relación con la procedencia del juicio de amparo: ¿Son los 'acuerdos de inicio' de un procedimiento administrativo sancionador, actos de autoridad en los cuales existe una aplicación material de las normas punitivas?

Esta objetiva interrogante dará lugar a que sus Señorías, es su calidad de máximo Tribunal en México, reexaminen a la luz de las normas de procedencia del juicio constitucional, la relación sustancial entre el acto de aplicación de las normas y el concepto de perjuicio.

Para tal efecto, y siendo respetuosos de la SCJN, dicho ejercicio de razonabilidad, ponderación y argumentación jurídica requerirá que ustedes, como Ministros del Poder Judicial de la Federación, interpreten el contenido, alcances y los efectos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción I de la Ley de Amparo, frente al contenido, alcances y efectos del diverso artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo.

2. A la par de lo anterior, el examen judicial acucioso de *la litis* del recurso de revisión en cuestión **deberá de conllevar al análisis razonado, sustentado y objetivo de la VIGENCIA DE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 95/97 SUSTENTADA POR EL PLENO DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, así como la vigente tesis 1a. /J. 64/99 propuesta por la Primera Sala de la SCJN; siendo fundamental reconocer que ambas resoluciones se refieren al grado de afectación o perjuicio requerido, para determinar con toda claridad el primer acto de**

aplicación, en perjuicio del gobernado, de la norma general combatida en el juicio de amparo indirecto.

En efecto, el análisis de *la litis* del presente asunto requerirá de razonamientos puntuales y posicionamientos claros en cuanto al contenido y efectos del concepto "perjuicio" y su incidencia, y alcances dentro de la procedencia o improcedencia del juicio constitucional.

Lo anterior, ya que tal como se desprende de la lectura del recurso de Revisión número 200/2019 del índice del Décimo Primer Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y de las propias consideraciones del fallo que dio lugar al mismo, el Juez consideró que los efectos y consecuencias perniciosos de las normas reclamadas se agotaron y ejecutaron en la esfera jurídica de las aquí peticionarias, mediante el 'acuerdo de inicio', y no con la resolución definitiva.

3. Asimismo, se deberá razonar, motivar y fundar en relación con la resolución del presente asunto, la cual permitirá **una reevaluación de la vigencia de la jurisprudencia P. /J. 78/2007 sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación**, cuyo rubro y texto son los siguientes:

"Época: Novena Época

Registro: 170866

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXVI, Diciembre de 2007

Materia(s): Común

Tesis: P. /J. 78/2007

Página: 5

AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

*De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento **CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN AL QUEJOSO**, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo*

contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad.

En este sentido, respetuosamente se insiste en el gran interés, importancia y trascendencia de que Ustedes Ministros, integrantes de esta SCJN, al adentrarse en *la litis* del presente asunto y determinar si en contra del 'acuerdo de inicio' de un procedimiento administrativo sancionador "procede el juicio de amparo", deberán de razonar y examinar el contenido, alcances y efectos del concepto jurídico: '*ejecución irreparable*', y determinar también si la construcción y vigencia jurisprudencial realizada en la novena época, -injustamente- **desestimada en el fallo objeto del Recurso de Revisión número 200/2019 del índice del Décimo Primer Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, resulta igualmente aplicable al día y contexto de hoy o, por el contrario, si la **irreparabilidad** de los actos de autoridad tiene nuevos y diversos alcances interpretativos.

En relación a lo anterior, debe señalarse que las características condicionantes y definitorias de la **ejecución irreparable** han sido objeto de una construcción jurisprudencial casi ininterrumpida por parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en México desde la Octava Época (específicamente a través de la tesis de jurisprudencia *P./J. 24/92* sustentada por el Tribunal Pleno de esta SCJN) hasta la actualidad (por medio de la vigente tesis de jurisprudencia *P./J. 11/2018 (10a.)*).

Por lo tanto, es de suma y enorme relevancia que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emita un criterio, debidamente razonado, motivado y fundado, en donde se reitere o, en su caso, modifique la interpretación judicial de referencia. Reiteramos que esta situación es de gran interés, importancia y trascendencia para las condiciones y relaciones jurídicas en México.

4. De igual forma, la resolución que dicte esta SCJN en el presente asunto conllevará también a la emisión de un pronunciamiento judicial en relación a los "criterios materiales aplicables" a fin de definir si un acto determinado tiene el carácter de *irreparable* o no. Este aspecto es de suma relevancia puesto que, en el caso que dio origen al Recurso de Revisión número 200/2019, el sobreseimiento alegado por el Juez de Distrito, se construyó sobre una premisa de *irreparabilidad*

basada en la (supuesta) causa de pedir del quejoso, pero no sobre la naturaleza y consecuencias del acto en sí mismo.

En consecuencia, lo que determine y resuelva esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dará lugar a la emisión de un importantísimo precedente judicial de muy amplio interés y especial relevancia para el juicio de amparo en México; determinación y resolución que deberá responder a las cuestiones siguientes:

¿La ejecución irreparable se define a la luz de la *causa petendi* de la quejosa? O, por el contrario, ¿a partir de la naturaleza intrínseca del acto reclamado?

De manera fundamental debe mencionarse que dicha problemática fue tratada por la Segunda Sala de la SCJN al resolver la **Contradicción de Tesis 220/2005**, en donde precisó:

(...)
*En primer término, esta Segunda Sala considera pertinente advertir que la definición de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, debe atenderse a la naturaleza propia del acto y a las consecuencias que éste produce, **mas no así a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues lo contrario implicaría dejar en manos de los gobernados la actualización de la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, lo que es inadmisibile.***

Luego entonces, será labor de este más Alto Tribunal del Poder Judicial de la Federación determinar si hace suyo dicho criterio judicial, ***manteniéndolo actual y vigente*** o si, por el contrario, determina que la doctrina interpretativa aplicable ha sido modificada o resulta viable modificar. Cuestiones adicionales para sustentar la especial relevancia, interés y trascendencia de la actuación de esta SCJN, toda vez que se deberá definir, necesariamente, si el análisis por cuanto a si un acto es, o no, de imposible reparación **puede efectuarse a la luz de la causa de pedir expuesta por el quejoso en el escrito de demanda.**

Adicionalmente, será labor de este más Alto Tribunal del Poder Judicial de la Federación determinar, a través de la conclusión a la que arribe en forma razonada, motivada y fundada, si en términos de la legislación actual, es posible definir la *irreparabilidad del acto* y, en consecuencia, la procedencia del juicio de amparo, con base en los agravios alegados por el quejoso en sus conceptos de violación.

Aunado a lo anterior, en el presente caso se surten los supuestos de interés y trascendencia que justifican la reasunción de competencia del tema que aquí se invoca y analiza, ya que su análisis implica una reevaluación del sistema de improcedencias de la Ley de Amparo con base en las reformas constitucionales en materia de justicia cotidiana.

En efecto, como es del conocimiento de sus Señorías, el párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una directriz y orientación, esto es, una norma de mandato que ordena la consecución de un fin valioso y fundamental, a saber: **LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA**, siendo esta la garantía de dar solución cabal al conflicto, lo que siempre significa que “las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales”.

La obligación de alcanzar el estado de cosas consistente en privilegiar la solución del conflicto se cimenta en que la tutela judicial efectiva es un fin valioso en sí y por sí.

En ese orden de principios fundamentales, la indefinición por cuanto hace al momento oportuno para combatir la inconstitucionalidad de normas, ocasionada por la divergencia de criterios judiciales y la indefinición formal de los criterios de procedencia, coloca al justiciable *-en este caso en procedimientos legales relacionados con ODEBRECHT en México-* en un estado de indefensión e inseguridad jurídica, convirtiéndose en una terrible “**trampa procesal**”.

Tal como se está exponiendo en el Recurso de Revisión número 200/2019 del índice del Décimo Primer Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y haciendo aquí notorio, dicha “trampa procesal” actualmente subsiste en el sistema jurídico mexicano y genera también estados, condiciones y supuestos de incertidumbre y agravio a los quejosos, situaciones que atentan flagrantemente contra el objeto, misión y espíritu de la reforma constitucional.

Todas las anteriores cuestiones que se han venido exponiendo, aplicadas al caso concreto y conforme a lo narrado y argumentado, constituyen razonamientos claramente excepcionales que ameritan que esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación reasuma su competencia originaria para conocer del recurso de Revisión correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, **A USTEDES CC. MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**, atentamente solicito se sirvan:

PRIMERO.- Reconocer la personalidad con la que me ostento en nombre de mi representada, teniendo por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; y por autorizados en los términos especificados a las personas designadas en el proemio de este escrito de solicitud de reasunción de competencia.

SEGUNDO.- Tener por presentada la presente solicitud a fin de que ese Alto Tribunal reasuma su competencia originaria para el conocimiento, estudio y resolución del recurso de revisión 200/2019 del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, requerir al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitir a ese Alto Tribunal el recurso de revisión 200/2019.

CUARTO. Solicitar al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que suspenda el procedimiento del recurso de revisión 200/2019 para que el mismo no se resuelva hasta en tanto esa Suprema Corte de Justicia de la Nación determine lo que conforme a derecho proceda.

Ciudad de México a la fecha de su presentación



JOÃO HENRIQUE ANDRADE ARAUJO HORST
Apoderado

023767

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

205/2019

2019 JUN 21 PM 5 37

OFICINA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

Recibido de un enviado, en (36) fojas con:

- Dos testimonios notariales, en (11) fojas y (13) páginas según sus certificaciones.
- (3) escritos en copias simples, en (38), (13) y (11) páginas según sus últimos folios.
- Escrito de consulta con firmas autógrafas, en un total de (133) fojas.



*** SEGUNDO TESTIMONIO * DE LA ESCRITURA QUE CONTIENE:
EL OTORGAMIENTO DE PODER DE LA SOCIEDAD "ODEBRECHT INGENIERÍA
Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE.-----**

**ESC. 126,638
WVT***

FECHA 15 DE MAYO DE 2019.



F. JAVIER ARCE GARGOLLO

Notario

74

----- 126,638 -----WVT/lcc ---
--- NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO -
--- LIBRO NÚMERO TRES MIL TRECE -----
--- En la Ciudad de México, a quince de mayo de dos mil
diecinueve; -----

--- Yo, FRANCISCO JAVIER ARCE GARGOLLO, Notario Setenta y
Cuatro de la Ciudad de México, hago constar el OTORGAMIENTO DE
PODER de la sociedad "ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
INTERNACIONAL DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, representada en este acto por los señores João
Henrique Andrade Araujo Horst y Cleber Berbert Louzada, en su
carácter de Secretario y Miembro, y Miembro del Consejo de
Administración, respectivamente, en términos de las
siguientes: -----

----- C L Á U S U L A S -----

--- PRIMERA.- La sociedad "ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
INTERNACIONAL DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, representada en este acto por los señores João
Henrique Andrade Araujo Horst y Cleber Berbert Louzada, en su
carácter de Secretario y Miembro, y Miembro del Consejo de
Administración, respectivamente, OTORGA en favor de señor
JOÃO HENRIQUE ANDRADE ARAUJO HORST, un PODER GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS, para ser ejercido de manera conjunta o
separada, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo
del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del
Código Civil para el Distrito Federal (actualmente Ciudad de
México), y del Código Civil Federal, y sus correlativos en
todos y cada uno de los códigos civiles de las demás entidades
federativas de los Estados Unidos Mexicanos, con todas las
facultades generales y especiales, incluyendo aquéllas que
requieran cláusula especial conforme a la ley, pudiendo, de
manera enunciativa mas no limitativa, ejercer toda clase de
derechos y acciones ante cualesquiera autoridades de la
Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los
Municipios de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea en
jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de
autoridades civiles, judiciales, administrativas, fiscales o
del trabajo, sean éstas juntas de conciliación o tribunales de
arbitraje, locales o federales; contestar demandas, oponer
excepciones y reconvenciones; someterse a cualquier
jurisdicción; articular y absolver posiciones; recusar
magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas
recusables en derecho; desistirse de lo principal, de sus



2

incidentes, incluso de juicio de amparo en términos del artículo 24 (veinticuatro) de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 (ciento tres) y 107 (ciento siete) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que podrán promover cuantas veces lo estimen conveniente; rendir toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos, objetarlos redargüirlos de falsos; asistir a juntas, diligencias y almonedas; hacer posturas, pujas y mejoras y obtener para la Sociedad poderdante adjudicación de toda clase de bienes; y, por cualquier título, hacer cesión de derechos; formular acusaciones, denuncias y querellas; otorgar el perdón y constituirse en parte en causas penales o coadyuvante del ministerio público, dar finiquitos y emitir recibos, firmar pedidos de compras, firmar libros, formularios, croquis, planos, cuentas y balances, teniendo incluso la representación laboral de la misma, pudiendo ejercer toda clase de derechos y acciones ante cualesquiera autoridades del trabajo, de seguridad social o de cualquier otro tipo que pudiera haber, sean éstas juntas de conciliación o tribunales de arbitraje, locales o federales; teniendo la representación patronal de la misma en los términos de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo sin limitar, los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis), 47 (cuarenta y siete), 134 (ciento treinta y cuatro) fracción III, 523 (quinientos veintitrés), 692 (seiscientos noventa y dos) fracciones I, II y III, 686 (seiscientos ochenta y seis), 687 (seiscientos ochenta y siete), 873 (ochocientos setenta y tres), 874 (ochocientos setenta y cuatro), 875 (ochocientos setenta y cinco), 878 (ochocientos setenta y ocho), 879 (ochocientos setenta y nueve), 880 (ochocientos ochenta), 883 (ochocientos ochenta y tres), 884 (ochocientos ochenta y cuatro) y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. Los apoderados podrán, de manera enunciativa y no limitativa, actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y para todos los efectos de conflictos colectivos; podrán actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales; en general para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo; la representación legal de la empresa para los



F. JAVIER ARCE GARGOLLO

o t a r i o

7 4

3

efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos, en los términos del artículo 692 (seiscientos noventa y dos) fracciones II y III de dicha Ley; podrá comparecer al deshago de la prueba confesional, en los términos de los artículos 787 (setecientos ochenta y siete) y 788 (setecientos ochenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes; podrán señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones, proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrán actuar como representante de la empresa en su calidad de administradores respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. -----

--- SEGUNDA.- El apoderado no podrá sustituir, ni otorgar o delegar el presente poder, en todo o en parte. -----

--- TERCERA.- El poder otorgado en la cláusula anterior tendrá una vigencia de UN AÑO, contado a partir de la fecha de firma de la presente escritura. -----

----- P E R S O N A L I D A D -----

--- La acreditan los señores João Henrique Andrade Araujo Horst y Cleber Berbert Louzada, en su carácter de Secretario y Miembro, y Miembro del Consejo de Administración, respectivamente, de la sociedad "ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como sigue: -----

--- I.- CONSTITUCIÓN.- Con la escritura número ciento dieciocho mil ochocientos veintisiete, de fecha tres de diciembre de dos mil quince, ante mí, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil electrónico número quinientos cincuenta y tres mil ochocientos setenta y cinco, se hizo constar la constitución de la sociedad, con domicilio en la Ciudad de México, duración indefinida, cláusula de admisión de extranjeros, capital social mínimo fijo de [REDACTED] -----

--- De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que sigue: -

--- "...E S T A T U T O S -- "ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE...--...CAPITULO II...--...Y OBJETO...--... 7

QUINTA.- Objeto. La Sociedad tendrá por objeto: -- a) La

planeación y ejecución de proyectos en todos los ramos de la ingeniería y construcción, bajo cualquier régimen de contratación con clientes tanto privados como públicos. -- b) La prestación de servicios de ingeniería, procura, supervisión, gerenciamiento, montaje industrial, mantenimiento de plantas industriales, conservación, reparación y operación, inclusive de embarcaciones, plataformas, gasoductos, oleoductos, ductos submarinos y otros medios de navegación marina; -- c) La planeación y ejecución de instalaciones técnicas de ingeniería y la prestación de servicios de consultoría, planeación, asesoría y estudios técnicos; -- d) La prestación de servicios administrativos y técnicos y demás relacionados al ramo de la ingeniería y construcción; -- e) La práctica de otras actividades conexas o derivadas de las actividades referidas en las líneas anteriores, inclusive las de arrendamiento y compraventa de equipos, transporte, importación y exportación, incluyendo, pero son limitarse, a la importación y exportación de medicamentos, semillas y plántulas; -- f) La fabricación, compra, venta y arrendamiento de maquinaria, sistemas y equipos para la construcción y la industria en general. La construcción y ejecución de obras públicas y privadas, la perforación de pozos petroleros, gas natural, geotérmicos y otros hidrocarburos, tanto en terreno firme como en zonas marinas de la plataforma continental en los términos en que lo permitan las leyes aplicables; -- g) La participación en toda clase de concursos, licitaciones de obras públicas y privadas en México y en el extranjero, ya sea en forma individual o asociada con otras sociedades mexicanas o extranjeras bajo cualquier modalidad, relacionadas con su objeto social. El comercio y la industria en general por cuenta propia o ajena, incluyendo en forma enunciativa más no limitativa, la compra, venta, exportación, importación, manufactura, ensamble y distribución de todo tipo de productos y la prestación de servicios de toda clase; -- h) Adquirir interés o participación en otras sociedades mercantiles o civiles, formando parte en su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o disponer de tales acciones o participaciones; -- i) El registro de marcas y nombre comerciales, y la adquisición o enajenación de todo tipo de derechos de propiedad industrial y derechos de autor; así como la obtención y otorgamiento de licencias o autorizaciones para el uso y explotación de todo



F. JAVIER ARCE GARGOLLO

n o t a r i o

7 4

5

tipo de derechos de propiedad industrial y derechos de autor; -- j) La obtención y otorgamiento de préstamos, con o sin garantía, endoso y en general, la celebración de todo tipo de operaciones de crédito, el otorgamiento de todo tipo de garantías, la transmisión de todo tipo de títulos de crédito conforme a la ley, así como la garantía, por cualquier medio, de obligaciones de terceros; -- k) Otorgar, girar, emitir, aceptar, endosar, certificar o por cualquier otro medio suscribir, inclusive por aval, toda clase de títulos de crédito que estén permitidos por las leyes aplicables; -- m) La venta y adquisición de la propiedad o arrendamiento y posesión o uso, bajo cualquier título, de todo tipo de bienes muebles o inmuebles que puedan ser necesarios para desempeñar los fines sociales; -- n) Representar como intermediario, corredor o agente, comisionista, representante o cualquier otro carácter en México o en cualquier otro país, a cualquier persona física o moral, mexicana o extranjera; -- l) Celebrar y/o llevar a cabo, toda clase de actos y/o contratos civiles, mercantiles y de cualquier otra clase, necesarios para cumplir con el objeto social de la Sociedad; y, -- o) En general, la celebración dentro o fuera de la República Mexicana, por su propia cuenta y nombre o por cuenta y nombre de terceros, de todo tipo de actos, contratos, convenios, ya sean civiles o mercantiles, principales o accesorios, o de cualquier otra naturaleza conforme a derecho...--...CAPITULO IX -- ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD -- VIGÉSIMA.- Administración de la Sociedad. La Administración y representación de la Sociedad estará a cargo de un Administrador Único o de un Consejo de Administración...--...VIGÉSIMA PRIMERA. Facultades del Administrador Único o del Consejo de Administración. El Administrador Único o en su caso el Consejo de Administración tendrán la representación de la Sociedad y cuentan con las más amplias facultades que les otorga la Ley y podrán tratar los asuntos de la Sociedad, celebrar contratos a nombre de ella y disponer de sus bienes, con absoluta amplitud y sólo sujetos a la responsabilidad que conforme a la Ley les corresponda. Para mayor claridad, el Administrador Único o el Consejo de Administración disfrutarán de todas las facultades correspondientes a un apoderado dotado de poder general y por tanto podrán intervenir en toda clase de operaciones con la representación de la Sociedad, sin limitación y con la amplitud que establece el Artículo 2554 (dos mil quinientos



7

cincuenta y cuatro) del Federal y sus correlativos para los Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal. -- El Administrador Único o el Consejo de Administración, según sea el caso, cuentan con las facultades que en una forma enunciativa pero no limitativa se expresan a continuación en la forma siguiente: -- a) Poder General para Pleitos y Cobranzas. Para que lo ejerciten y comparezcan ante toda clase de personas y autoridades judiciales y administrativas, civiles, penales y del trabajo, federales y locales, con todas las facultades generales y las especiales, aun las que requieran cláusula o mención especial, sin limitación alguna, en los términos del primer párrafo del citado artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos para los Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal, con las facultades específicas que señala el artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete), del Código Civil Federal y sus correlativos para los Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal. Tendrán facultades también para iniciar y proseguir el juicio de amparo y la de desistirse de él, asimismo, se le confieren facultades expresas para promover querellas, presentar denuncias, constituirse en parte civil o coadyuvante con el Ministerio Público y cuantas facultades se requieran en toda clase de asuntos. -- b) Poder General para Actos de Administración. Quedando facultados por lo que a esto respecta para administrar los bienes y negocios de la Sociedad, con todas las facultades generales y las especiales, aun las que conforme a la Ley, requieran mención o cláusula especial, sin limitación alguna, en los términos del segundo párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos para los Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal. -- c) Poder General para Actos de Dominio. Quedando facultados para ejecutar actos de dominio respecto de los bienes y derechos de la Sociedad, igualmente con todas las facultades generales y las especiales, aun las que conforme a la Ley requieran mención o cláusula especial, sin limitación alguna, en los términos del tercer párrafo del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos para los Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal. -- d) Poder General para Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administración Laboral. - Para que lo



F. JAVIER ARCE GARGOLLO

n o t a r i o

7 4

7

ejerciten de conformidad con lo establecido por el primer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos para los Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal en donde se ejercite dicho poder, con todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, según lo establece el artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus correlativos para los Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal en donde se ejercite este poder, gozando de una manera enunciativa y no limitativa de las siguientes facultades: comparecer ante toda clase de personas y autoridades judiciales, administrativas, civiles y del trabajo, sean éstas federales, estatales, municipales o del Distrito Federal; articular y absolver posiciones, en juicio o fuera de él, en la mayor amplitud; presentar quejas, querellas y denuncias, así como para ratificarlas, constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público y otorgar el perdón del ofendido; en general, para iniciar, proseguir y desistirse de todo tipo de acciones, juicios, recursos, arbitrajes y procedimientos en general, de cualquier orden, inclusive del juicio de amparo; recusar Jueces, integrantes de Juntas de Conciliación y Arbitraje y autoridades en general; celebrar transacciones judiciales en toda clase de juicios o procedimientos extrajudiciales; comprometer en árbitros, hacer o recibir pagos; teniendo todas estas facultades para ser ejercitadas aún en materia laboral, ante Juntas de Conciliación y Arbitraje o fuera de ellas, sean locales o federales; actuar en materia del trabajo y representar a la Sociedad poderdante ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje citadas, en todas las etapas procesales en procedimientos ordinarios, especiales, tanto en conflictos individuales, como colectivos, de naturaleza económica y de huelga. Comparecer a remates o subastas públicas, hacer posturas legales y pujas mejorar la de los contrarios, así como en general todo lo conducente en la defensa y presentación de los intereses de la Sociedad poderdante. -- Asimismo, tendrán las facultades de representación patronal conforme y para los efectos de los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis), 47 (cuarenta y siete), 134 (ciento treinta y cuatro) fracción III, 523 (quinientos veintitrés), 692 (seiscientos noventa y dos) fracciones I, II y III, 786



g

(setecientos ochenta y seis), 787 (setecientos ochenta y siete), 878 (ochocientos setenta y ocho), 880 (ochocientos ochenta), 883 (ochocientos ochenta y tres) y 884 (ochocientos ochenta y cuatro) de la Ley Federal del Trabajo; el poder que se otorga y la representación patronal que se confiere, se ejercitará conforme las siguientes facultades que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa, pudiendo actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo; ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y en general para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a que se refiere el artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo; podrán asimismo, comparecer ante las Juntas de Conciliación y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o Federales, en consecuencia, llevaran la representación patronal para los efectos de los artículos 11 (once), 46 (cuarenta y seis) y 47 (cuarenta y siete) de la Ley Federal del Trabajo y también la representación legal de la Sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos en los términos de los artículos 692 (seiscientos noventa y dos) fracciones II y III; podrán comparecer al desahogo de pruebas confesionales en los términos de los artículos 787 (setecientos ochenta y siete) y 788 (setecientos ochenta y ocho) de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para arbitrar y absolver posiciones y desahogar las pruebas en todas sus partes; podrán señalar domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, en los términos del artículo 876 (ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo; podrán comparecer con el carácter de patrón, con toda la responsabilidad legal, bastante y suficiente a las audiencias a que se refiere el artículo 873 (ochocientos setenta y tres) de la Ley Federal del Trabajo en sus tres fases: de conciliación, de demanda y excepciones; de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos 875 (ochocientos setenta y cinco), 876 (ochocientos setenta y seis) fracciones I y IV, 877 (ochocientos setenta y siete), 878 (ochocientos setenta y ocho), 879 (ochocientos setenta y nueve) y 880 (ochocientos ochenta) de la Ley Federal del Trabajo; también podrán acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los términos de los artículos 883 (ochocientos



F. JAVIER ARCE GARGOLLO

n o t a r i o

7 4

9

ochenta y tres) y 884 (ochocientos ochenta y cuatro) de la Ley Federal del Trabajo; podrán hacer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales; y podrán asimismo, celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo con los trabajadores y darlos por terminados o rescindirlos, asimismo podrán presentar escritos de apelación y promover el juicio de amparo, ofrecer, presentar y desahogar toda clase de pruebas en favor del otorgante o de la Sociedad, desistirse y celebrar toda clase de convenios que tengan por objeto dar por terminada cualquier tipo de controversia laboral. -- Asimismo el Consejo de Administración o Administrador Único, quedarán facultados para: -- d) Títulos de Crédito. Emitir, suscribir, otorgar, endosar, librar y avalar y en cualquier otra forma, negociar títulos de crédito u obligar cambiariamente a la Sociedad en los términos del Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -- e) Nombrar y remover al gerente general o gerentes de la Sociedad y señalarles sus facultades, obligaciones y remuneraciones.-- f) Actuar en el desahogo de sus atribuciones por medio de delegados nombrados de entre sus miembros y, en su defecto, por medio de su Presidente en caso de que la administración se confíe a un Consejo.-- g) Ejecutar los acuerdos de la asamblea, interpretarlos y promover a su mejor aplicación y cumplimiento. -- h) Conferir y otorgar poderes o mandatos con las facultades que en cada caso estimen pertinentes, de las que les son propias al mismo Consejo o Administrador Único, así como revocar dichos mandatos o poderes que en su caso otorguen, en la inteligencia de que en los poderes que otorguen no los podrán otorgar con facultades de sustitución, es decir, que los apoderados no podrán a su vez sustituir u otorgar poderes, con excepción del otorgamiento de poderes para Pleitos y Cobranzas otorgados a abogados para fines administrativos o judiciales, en cuyo caso dichos poderes podrán contar con facultades de sustitución. -- TITULO X -- FUNCIONARIOS Y COMITÉS -- VIGÉSIMA SEGUNDA.- Designación y Establecimiento de Funcionarios y Comités. La asamblea de accionistas o el Consejo de Administración designará uno o más funcionarios, directores o gerentes generales o especiales, quienes podrán ser o no accionistas o consejeros que gozarán de las facultades que expresamente se les confieran. -- La asamblea de accionistas, a su discreción, podrá remover a



8

cualquier persona designada conforme a esta cláusula. Asimismo, el Consejo de Administración podrá remover a cualquiera de dichas personas que éste haya designado. -- Una asamblea de accionistas o el Consejo de Administración podrá establecer comités permanentes, tales como un Comité Ejecutivo, un Comité de Operaciones o un Comité de Finanzas, pudiendo designar a los individuos que realizarán funciones en dichos comités, así como establecer las facultades y obligaciones de dichos comités...". -----

--- II.- DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTIVOS.- Con la escritura número ciento veintiséis mil seiscientos dos, de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, ante mí, pendiente de inscripción por lo reciente de su otorgamiento, se hizo constar la protocolización de las resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea por los accionistas de la sociedad "ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en las que se acordó la designación de los miembros que integran el Consejo de Administración y Funcionarios. -----

--- De dicha escritura copio, en lo conducente, lo que sigue:

--- "...ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.-- RESOLUCIONES UNÁNIMES DE ACCIONISTAS -

- 16 DE ABRIL DE 2019-- De conformidad con lo dispuesto por la Cláusula Décima Novena fracción (x) de los Estatutos Sociales de Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A. de C.V. (la "Sociedad") y en el segundo párrafo del artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los suscritos, en representación de la totalidad de los Accionistas de la Sociedad, en forma unánime y fuera de asamblea adoptamos las siguientes resoluciones: -- R E S O L U C I O N E S...--.. TERCERA. Se resuelve nombrar al señor João Henrique Andrade Araujo Horst como Secretario y Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad...--..SÉPTIMA.

En virtud de las resoluciones anteriores, la administración de la sociedad queda encomendada al Consejo de Administración de la Sociedad, integrado de la siguiente manera: -----

----- Nombre-----Cargo... -----

----- ...Cleber Berbert Louzada-----Miembro -----

----- João Henrique Andrade Araujo Horst-Secretario - Miembro-

OCTAVA. Se resuelve que todos los miembros del Consejo de Administración y Directores de la Sociedad, contarán con todos los poderes y facultades que se señalan en la cláusula



F. JAVIER ARCE GARGOLLO

o t a r i o

7 4

11

vigésima primera de los estatutos sociales de la Sociedad, los cuales deberán ejercer siempre de manera conjunta con cualquier miembro del Consejo de Administración o Director de la Sociedad...". -----

----- AVISO DE PRIVACIDAD -----

--- Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos ocho y diecisiete de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se informó a los comparecientes que el Aviso de Privacidad que ordena dicha ley se encuentra exhibido en distintas áreas públicas de la Notaría a mi cargo y su texto puede ser consultado en la página electrónica "www.notaria74.com.mx". Al efecto, los comparecientes manifiestan su conformidad con lo dispuesto en el Aviso de Privacidad y, con la firma de este instrumento, expresan su consentimiento con el tratamiento de los datos personales proporcionados. -----

--- YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: -----

I.- Que me identifiqué como notario ante los comparecientes;-
II.- Que me cercioré de la identidad de los comparecientes, con el documento oficial con fotografía, que en copias fotostáticas que certifico concuerdan con sus originales que tuve a la vista y que agrego al apéndice de este instrumento marcada con la letra "A", y que a mi juicio tienen capacidad para este acto; -----

III.- Que los comparecientes manifiestan, bajo protesta de decir verdad y advertidos de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante notario, que su representada es capaz y que la representación que ostentan y por la que actúan está vigente en sus términos; -----

IV.- Que por sus GENERALES, los comparecientes declararon ser: JOÃO HENRIQUE ANDRADE ARAUJO HORST, [REDACTED] nacido en [REDACTED]

[REDACTED] con domicilio en [REDACTED]

[REDACTED] y me acredita su legal estancia en el país con la forma migratoria expedida por la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, misma que en copia fotostática que certifico concuerda con su original que tuve a la vista y que agrego al apéndice de este instrumento marcada con la letra "B"; y -----

CLEBER BERBERT LOUZADA, [REDACTED]



con domicilio en

y me acredita su legal estancia en el país con el documento migratorio número "11120697", expedido por la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, en la que consta su condición de residente permanente con permiso para trabajar; -----

V.- Que los documentos presentados para la formación de este instrumento concuerdan con sus originales que tuve a la vista, y que no tengo indicio alguno de falsedad sobre los mismos; -----

VI.- Que les hice saber a los comparecientes del derecho que tienen de leer personalmente esta escritura y de que su contenido les sea explicado por el notario; -----

VII.- Que me cercioré que los comparecientes hablan y entienden el idioma español; -----

VIII.- Que la escritura les fue leída en su integridad; y ---

IX.- Que explicado el valor, las consecuencias y alcance legales del contenido del instrumento y una vez que lo comprendieron plenamente, manifestaron su conformidad y la otorgaron firmando el día de su fecha, ACTO en el que la AUTORIZO DEFINITIVAMENTE. -----

--- Firma personal de los señores João Henrique Andrade Araujo Horst y Cleber Berbert Louzada.- (Firmado).- JAVIER ARCE.- (El sello de autorizar). -----

--- "ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL". -----

--- "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. -----

--- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. -----

--- En los poderes generales para ejercer actos de dominio bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. -----



F. JAVIER ARCE GARGOLLO

n o t a r i o

7 4

13

--- Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. -----

--- Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". -----

ES SEGUNDO * TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN, QUE EXPIDO PARA EL SEÑOR JOÃO HENRIQUE ANDRADE ARAUJO HORST, EN SU CARÁCTER DE APODERADO, EN TRECE PÁGINAS.- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. -----

WVT*srt.



2



Assinatura do titular / Signature du titulaire
Bearer's signature / Firma del titular

Este passaporte deve ser assinado pelo titular,
salvo em caso de incapacidade.

Ce passeport doit être signé par le titulaire,
sauf en cas d'incapacité.

The passport must be signed
except where the bearer is unable to do so.

Este passaporte debe ser firmado por el titular,
salvo en caso de incapacidad.

PASSAPORTE
PASSPORT

Tipo / Type País Emissor / Issuing Country Passaporte Nº / Passport No.
P BRA [REDACTED]

Nome / Given Names

JOÃO HENRIQUE

Nacionalidade / Nationality

Data de Nascimento / Date of Birth

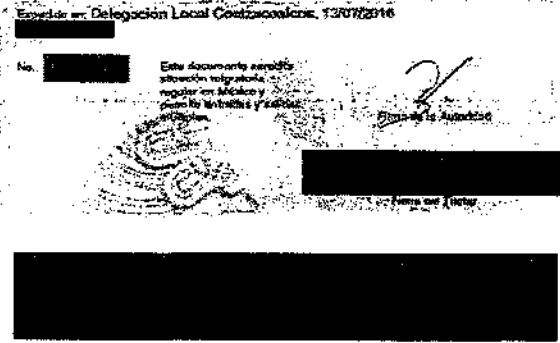
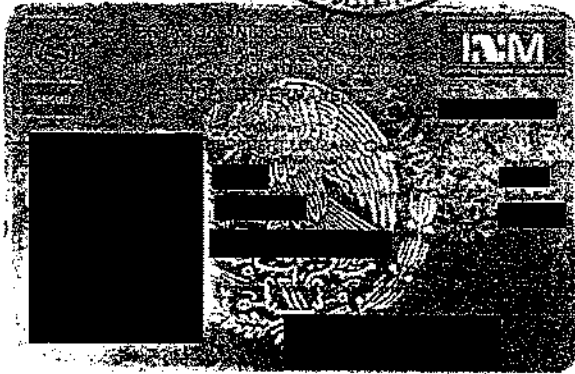
Identidade Nº / Personal No.

Sexo / Sex Natural / Date / Place of Birth

Data de Emissão / Date of Issue Autoridade / Authority

Válido até / Date of Expiry

2



7

42791
F. JAVIER ARCE GARGOLLO
n o t a r i o 4



*** PRIMER * TESTIMONIO* * DE LA ESCRITURA QUE CONTIENE:**
LA PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO, Y EN
CONSECUENCIA, LA FORMALIZACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE PODER DE LA
SOCIEDAD "CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.".-----

ESCRITURA NO. 124,265 FECHA: 25 DE MAYO DE 2018.

WVT*srt.

8



F. JAVIER ARCE GARGOLLO
Notario



----- 124,265 -----WVT/lcc -----
-- NÚMERO CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO -
--- LIBRO NÚMERO DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE -----
--- En la Ciudad de México, a veinticinco de mayo de dos mil dieciocho; -----

--- Yo, FRANCISCO JAVIER ARCE GARGOLLO, Notario Setenta y Cuatro de la Ciudad de México, hago constar la PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO Y, EN CONSECUENCIA, LA FORMALIZACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE PODER de la sociedad "CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.", que realizo a solicitud de la Licenciada Montserrat Serafín Negrín, de acuerdo a los siguientes antecedentes y cláusulas: -----

-----A N T E C E D E N T E S -----

--- UNO.- ESTABLECIMIENTO DE SUCURSAL.- Declara la compareciente que por escritura número cincuenta mil ciento sesenta y siete, de fecha diez de agosto de dos mil siete, ante el Licenciado Emmanuel Cardoso Pérez Grovas, notario cuarenta y tres de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil trescientos setenta mil novecientos treinta y cuatro, se hizo constar la protocolización de documentos otorgados en el extranjero y del oficio número trescientos quince punto cero siete punto "D" punto "G" punto "I" punto "E" siete mil ciento quince, de fecha tres de julio de dos mil quince, que contiene la autorización expedida por la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera, Dirección de Asuntos Jurídicos y de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, en favor de la sociedad "CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT", SOCIEDAD ANÓNIMA, para establecer una sucursal en la República Mexicana, e inscribir sus estatutos en el registro Público correspondiente. -----

--- DOS.- DOCUMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO.- La compareciente me exhibe un documento en idioma portugués, con su correspondiente certificación en idioma portugués, apostilla y traducción al idioma español, que consta de seis hojas útiles, las dos primeras hojas con texto por ambos lados y el resto con texto solo por el anverso, que contiene los poderes que otorgó la sociedad "CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.", representada por los señores José Fabio Januário y Adriano Sá de Seixas Maia, en su carácter de directivos, en favor del señor JOÃO HENRIQUE ANDRADE ARAUJO HORST, en términos y con la suma de facultades que se mencionan en el



7

8

mismo. -----

--- El documento fue otorgado ante Davi de Sousa Camboim, Notario Sustituto del Licenciado André Medeiros Toledo, Notario número diecinueve en São Paulo, República Federativa de Brasil, el diez de mayo de dos mil dieciocho, cuya firma y sello fueron certificados por Olavo Falleiros Junior, en São Paulo, República Federativa de Brasil, el diez de mayo de dos mil dieciocho, en términos de la Convención de la Haya de fecha cinco de octubre de mil novecientos sesenta y uno, y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por la cual se suprime el requisito de la legalización de los documentos públicos extranjeros ante cónsul mexicano. -----

--- La traducción del citado documento y de la certificación al idioma español fue realizada por La Licenciada María Enriqueta Pavia López, Perito Traductor autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. -----

--- Agrego al apéndice de este instrumento marcado con la letra "A", el original del citado documento con su correspondiente certificación, apostilla y traducción, y de los cuales copio, en lo conducente, lo que sigue: -----

--- "PAPEL MEMBRETADO QUE DICE: 19° ESCRIBANO DE NOTAS -- André Medeiros Toledo -- Escribano Titular -----

--- Sigue sello que dice: ESCRIBANIA TOLEDO -- 19° ESCRIBANIA DE NOTAS -- firma ilegible -----

--- Libro 4282, Fojas 135/137 - Minuta: 2630 -----

--- CNO-MEX 61/2018 -----

--- PODER BASTANTE QUE OTORGA: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., EN LA FORMA A CONTINUACIÓN: -----

--- S E P A N cuantos este instrumento público bastante vieren que el día diez (10) del mes de mayo del año de 2018 (dos mil dieciocho) en esta Ciudad y Capital del Estado de São Paulo, en diligencia en la [REDACTED]

[REDACTED] ante mí escribiente autorizado para la elaboración de ésta al final nombrado, compareció como Otorgante: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., con sede en la [REDACTED]

[REDACTED] inscrita en el CNPJ N° 15.102.288/0001-82, NIRE N° 33300160981, con su Estatuto Social consolidado por el Acta de Asamblea General Extraordinaria fechado el 27 de abril de 2017, archivado en la Junta Comercial de Río de Janeiro, bajo el N° de protocolo



F. JAVIER ARCE GARGALLO
n o t a r i o



3

0020171437772, el 28/04/2017, Acta de Asamblea General Extraordinaria de aprobación de la separación realizada el 29 de marzo de 2018, archivado en la Junta Comercial de Río de Janeiro, bajo el N° de protocolo 00-2018/086675-3, el 02/05/2018, en este acto representada, conforme al artículo 14 y párrafos siguientes de su Estatuto Social vigente y Acta de Asamblea General Ordinaria realizada el 13 de julio de 2017, registrada ante la Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro bajo el N° de protocolo 00-2017/233359-8 el 28 de julio de 2017, cuyas copias se encuentran archivadas en estas notas en el expediente de contratos N° 14 bajo el archivo N° 621, por sus Directores JOSÉ FABIO JANUÁRIO, [REDACTED]

[REDACTED] portador de la tarjeta de identidad [REDACTED] inscrito en el CPF/MH N° [REDACTED] y ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA, [REDACTED] inscrito en el CPF/MH bajo el N° [REDACTED] portador de la tarjeta de identidad [REDACTED] ambos residentes y domiciliados en [REDACTED]

[REDACTED] La Otorgante y sus directores identificados por mí, a través de los documentos presentados de lo que doy fe. Y, por la Otorgante, en la forma representada me fue dicho que, nombra y constituye su apoderado bastantes a: JOÃO HENRIQUE ANDRADE ARAUJO HORST, [REDACTED] inscrito en el CPF/MH bajo el N° [REDACTED] inscrito en la OAB/PE bajo el [REDACTED] portador del pasaporte brasileño N° [REDACTED] residente y domiciliado en [REDACTED]

[REDACTED] ("Otorgado") PODERES: poderes generales de administración, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil Federal de México y en los Códigos Civiles correspondientes de los demás Estados federados para que actúe en los Estados de la República Mexicana; a los cuales confiere poderes de la cláusula "ad judicium et extra", amplios y generales, para el fuero en general, inclusive para el fuero arbitral, pudiendo representar a la Otorgante y a su sucursal en los Estados Unidos Mexicanos ("Sucursal México") en juicio o fuera de este, promover la defensa de sus derechos e intereses en lo contencioso administrativo y judicial en cualquier instancia o tribunal, en Brasil o en el Exterior, representándola ante



N

2

2

órganos, dependencias, entidades e instituciones públicas o privadas, de la administración directa o indirecta de la Unión, Estados y municipios y aún participar de cualquier tipo de licitación, en sus diversas modalidades, esenciales o accidentales, en todas sus fases, pudiendo por lo tanto, firmar y presentar propuestas y sus documentos integrantes, impugnar documentos edictos de licitación de cualquier especie, participar de sesiones, firmar actas o cualesquier documentos por más especiales que sean, requerir la inscripción y registro de la Otorgante en entidades y/o instituciones públicas o privadas para todos los fines de derecho, pudiendo también proponer y/o variar de acciones de cualquier naturaleza, requerir la quiebra de sus deudores, representar o dar queja-crimen, criminalmente por la Otorgante, contratar abogados y estipular honorarios, obtener todo y cualquier tipo de información y datos protegidos por el secreto fiscal, así como los poderes especiales para acordar, concordar, confesar, desistir, recibir citaciones, intimaciones y notificaciones, actuar como institor de la Empresa, transigir, firmar trámites de compromiso, subestablecer con reservas y siempre con finalidad específica y/o evento determinado, los poderes del presente poder, pudiendo además recibir y dar recibo, nombrar institores, inclusive para la representación de la Otorgante en el Poder Judicial, efectuar y levantar depósitos judiciales, en fin, practicar todos los actos necesarios para el fiel cumplimiento del presente mandato que tendrá validez por tiempo indeterminado, por lo que dará por bueno, firme y válidos, quedándoles prohibida, con todo, la concesión de aval, fianza o cualquier otra garantía a favor de terceros. II) poderes que conceden las facultades con cláusula especial contenidos en el artículo 2587 del Código Civil Federal de México y en los correspondientes Códigos Civiles de los demás Estados federados, pudiendo desistir en juicio, mismo en el juicio amparo, comprometer, participar en árbitros, para absolver y articular posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos. Debiendo siempre ser observados los límites, restricciones y actos permitidos por el Estatuto Social de la Otorgante en vigor, por la legislación y el Código Civil Brasileño. CIERRE: Y por la Otorgante, en la forma representada, declara, que no hubo hasta la presente fecha, alteración alguna contractual de la empresa arriba mencionada.

F. JAVIER ARCE GARCIA
n o t a r i o



5

Todos los elementos relativos a la calificación e identificación de los apoderados, así como de los datos referentes a los objetivos de este poder, fueron suministrados y conferidos por ésta, sin la presentación de prueba documental, la cual deberá ser comprobada en ocasión de la utilización de este poder, quedando el mismo debidamente orientado de que el presente acto no permite rectificación o adición de naturaleza formal. Así lo dijo, de lo que doy fe. A petición de la Otorgante elaboré este instrumento, el cual después de hecho y leído por la Otorgante, por estar todo conforme, acepta, otorga y firma. Nada más. Emolumentos: AL OFICIAL [REDACTED] ESTADO [REDACTED] - IPESP [REDACTED] - MUNICIPIO - I.S.S. [REDACTED] - REG. CIVIL [REDACTED] - TRIB. de JUSTICIA [REDACTED] - SANTA CASA [REDACTED] - MP. [REDACTED] - TOTAL [REDACTED] Yo, Luiz Guilherme Theodoro dos Santos Ortiz, escribiente, la elaboré. Yo. (Rodrigo Tomazini). Escribiente, la conferí. Yo, DAVI DE SOUSA CAMBOIM, Escribano Sustituto, suscribo y doy fe. (a.a.) //CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.// - (SELLADA LEGALMENTE). - NADA MAS. - TRASLADADA EN SEGUIDA. - Yo, DAVI DE SOUSA CAMBOIM, Escribano Sustituto, la hice extraer, conferí y porto por fe ser este primer traslado copia fiel del original que firmo en público y en presencia de testigos. -----
--- EN TESTIMONIO (firma ilegible) DE LA VERDAD. -----
--- Sello que dice Escribanía Toledo -----
--- (Firma ilegible) -- DAVI DE SOUSA CAMBOIM -- Escribano Sustituto -----
--- Sello que dice ESCRIBANÍA TOLEDO -- 19ª Escribanía de Notas -- DAVI DE SOUSA CAMBOIM -- ESCRIBANO SUSTITUTO -- AV. [REDACTED] Tel. [REDACTED] -----
--- Etiqueta adherida que dice: 19ª ESCRIBANÍA DE NOTAS -- ESCRIBANÍA TOLEDO -- [REDACTED] -----
--- Reconozco, por Semejanza, la firma de (1) DAVI DE SOUSA CAMBOIM, sin valor económico. -----
--- São Paulo, a 10 de mayo de 2018. En testimonio (firma ilegible) de la verdad. -----
--- Por Firma [REDACTED] Total [REDACTED] -----
--- Sello(s): 1 Acto: AA-0639819 -----
--- JONAS DA SILVA LEITE - ESCRIBIENTE -----
--- Sigue sello que dice: ESCRIBANÍA TOLEDO -- 19ª ESCRIBANÍA DE NOTAS -- -----
--- Sigue timbre que dice: Colegio Notarial de Brasil..." -----

--- Expuesto lo anterior, la compareciente otorga las siguientes: -----

----- C L Á U S U L A S -----

--- PRIMERA.- Queda protocolizado, en términos del artículo ciento cuarenta de la Ley del Notariado vigente para la Ciudad de México, el documento relacionado en el antecedente DOS de este instrumento. -----

--- SEGUNDA.- Queda formalizado el otorgamiento de poder por parte de la sociedad "CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.", en favor del señor JOÃO HENRIQUE ANDRADE ARAUJO HORST, en términos y con la suma de facultades señaladas en el documento que ha quedado agregado al apéndice de este instrumento marcado con la letra "A". -----

----- AVISO DE PRIVACIDAD -----

--- Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos ocho y diecisiete de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se informó a la compareciente que el Aviso de Privacidad que ordena dicha ley se encuentra exhibido en distintas áreas públicas de la Notaría a mi cargo y su texto puede ser consultado en la página electrónica "www.notaria74.com.mx". Al efecto, la compareciente manifiesta su conformidad con lo dispuesto en el Aviso de Privacidad y, con la firma de este instrumento, expresa su consentimiento con el tratamiento de sus datos personales. -----

--- YO, EL NOTARIO CERTIFICO: -----

I.- Que me identifiqué como notario ante la compareciente; ---
 II.- Que conozco personalmente a la compareciente, y que a mi juicio y que a mi juicio tiene capacidad para este acto; -----
 III.- Que la misma manifiesta que su representada es capaz y que la representación que ostenta y por la que actúa está vigente en sus términos; -----
 IV.- Que por sus GENERALES, la compareciente declaró ser: MONTSERRAT SERAFÍN NEGRÍN, [REDACTED] nacida en [REDACTED]

[REDACTED] con domicilio en [REDACTED]

[REDACTED] con Clave Única de Registro de Población [REDACTED]

V.- Que los documentos presentados para la formación de este instrumento concuerdan con sus originales que tuve a la vista, y que no tengo indicio alguno de falsedad sobre los mismos; --



F. JAVIER ARCE GARGALLO
Notario



7

VI.- Que le hice saber a la compareciente del derecho que tiene de leer personalmente esta escritura y de que su contenido le sea explicado por el notario; -----

VII.- Que la escritura le fue leída en su integridad; y -----

VIII.- Que explicado el valor, las consecuencias y alcance legales del contenido del instrumento y una vez que lo comprendió plenamente, manifestó su conformidad y lo otorgó firmando el día de su fecha, ACTO en el que AUTORIZO DEFINITIVAMENTE. -----

--- Firma personal de la Licenciada MONTSERRAT SERAFÍN NEGRÍN.- (Firmado).- JAVIER ARCE.- (El sello de autorizar). --

--- "ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CIVIL. -----

--- "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. -----

--- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. -----

--- En los poderes generales para ejercer actos de dominio bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. -----

--- Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. -----

--- Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". -----

ES PRIMER * TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN, QUE EXPIDO PARA EL SEÑOR JOÃO HENRIQUE ANDRADE ARAUJO HORST, EN SU CARÁCTER DE APODERADO, EN SIETE PÁGINAS.- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. -----

WVT*srt.



19º TABELIAO DE NOTAS

André Medeiros Toledo
Tabelião Titular.

Livro 4282
CNO-MEX 6120

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., NA FORMA ABAIXO:

S A I B A M quantos este público instrumento bastante vem que aos dez (10) dias do mês de maio do ano de 2018 (dois mil e dezoito) nesta

perante mim escrevente autorizado para a lavratura desta ao final nomeado, compareceu como Outorgante: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., com sede na

com seu Estatuto Social consolidado pela Ata de Assembleia Geral Extraordinária datado de 27 de abril de 2017, arquivado na Junta Comercial do Rio de Janeiro, sob o nº de protocolo 0020171437772, em 28/04/2017, ata de assembleia geral extraordinária de aprovação da cisão realizada em 29 de março de 2018, arquivado na Junta Comercial do Rio de Janeiro, sob o nº de protocolo 00-2018/086675-3, em 02/05/2018, neste ato representada, conforme artigo 14 e parágrafos seguintes de seu Estatuto Social vigente e Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de julho de 2017, registrada perante a Junta Comercial do Estado de Rio de Janeiro sob o nº de protocolo 00-2017/233359-8, em 28 de julho de 2017, cujas cópias encontram-se arquivadas nestas notas na pasta de contratos nº 14 sob o arquivo nº 621, por seus Diretores, JOSÉ FÁBIO JANUÁRIO,

e ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA,

ambos residentes e domiciliados na

com endereço comercial na

Outorgante e seus diretores identificados por mim, através dos documentos apresentados do que dou fé. E, por ela Outorgante, na forma representada foi me dito que, nomeia e constitui seu bastante procurador: JOÃO HENRIQUE ANDRADE ARAUJO HORST,

portador do passaporte brasileiro

residente e domiciliado na ("Outorgado"); PODERES: 1)-



10242602102068.000098691-9

P.09227 R.004691

Avenida Rebouças, 3839 - Jd Paulistano - São Paulo - SP
Fone: (11) 3815-9853 - CEP 05401-450

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALOR EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER AUTENTICAÇÃO, NASCIDA DO CANCELAMENTO, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

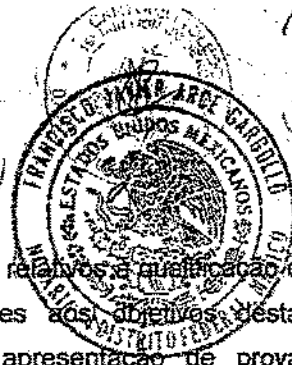
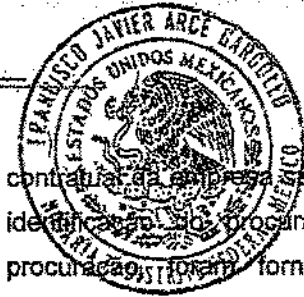
Notário Público
do Estado do Rio de Janeiro
(Falecido em 1948)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

poderes gerais de administração, nos termos dos dois primeiros parágrafos do artigo 2554 do Código Civil Federal do México e nos correspondentes Códigos Civis dos demais Estados federados, para que atue nos Estados da República Mexicana; aos quais confere poderes da cláusula "*ad judicia et extra*", amplos e gerais, para o foro em geral, inclusive para o foro arbitral, podendo representar a Outorgante e a sua sucursal nos Estados Unidos Mexicanos ("**Sucursal México**") em juízo ou fora dele, promover a defesa de seus direitos e interesses no contencioso administrativo e judicial em qualquer instância ou tribunal, no Brasil ou no Exterior, representando-a perante órgãos, repartições, entidades e instituições públicas ou privadas, da administração direta ou indireta da União, Estados e Municípios e, ainda participar de qualquer tipo de licitação, em suas diversas modalidades, essenciais ou acidentais, em todas as suas fases, podendo para tanto, assinar e apresentar propostas e seus documentos integrantes, impugnar documentos, editais de licitação de qualquer espécie, participar de sessões, assinar atas ou quaisquer documentos por mais especiais que sejam, requerer a inscrição e cadastramento da Outorgante em entidades e/ou instituições públicas ou privadas para todos os fins de direito, podendo ainda propor e/ou variar de ações de qualquer natureza, requerer a falência de seus devedores, representar ou dar queixa-crime, criminalmente pela Outorgante, contratar advogados e estipular honorários, obter todo e qualquer tipo de informações e dados protegidos por sigilo fiscal, bem como os poderes especiais para acordar, concordar, confessar, desistir, receber citações, intimações e notificações, atuar como preposto da Empresa, transigir, firmar termos de compromisso, substabelecer com reservas e sempre com finalidade específica e/ou evento determinado, os poderes da presente procuração, podendo ainda receber e dar quitação, nomear prepostos, inclusive para representação da Outorgante no Poder Judiciário, efetuar e levantar depósitos judiciais, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato que terá validade por tempo indeterminado, pelo que dará por bom, firme e válidos, sendo-lhes vedada, contudo, a concessão de aval, fiança ou qualquer outra garantia em favor de terceiros. II) poderes que concedem as faculdades com cláusula especial contidas no artigo 2587 do Código Civil Federal do México e nos correspondentes Códigos Civis dos demais Estados federados, podendo desistir em juízo, mesmo no julgamento amparo, comprometer, participar em árbitros, para absolver e articular posições, fazer cessão de bens, recusar e receber pagamentos. Devendo sempre ser observado os limites, restrições e atos permitidos pelo Estatuto Social da Outorgante em vigor, pela legislação e ao Código Civil Brasileiro. **ENCERRAMENTO:** E, pela Outorgante, na forma representada, declara, que não houve até a presente data nenhuma alteração

André Medeiros Toledo
Tabelião Titular



contratada a empresa supra mencionadas. Todos os elementos relativos a qualificação e identificação do procurador, bem como os dados referentes aos objetivos desta procuração, foram fornecidos e conferidos por ela, sem apresentação de prova documental, a qual deverá ser comprovado por ocasião da utilização desta procuração, ficando a mesma devidamente orientada de que o presente ato não comporta retificação ou aditamento de natureza formal. Assim os disse, do que dou fé. A pedido da outorgante eu, lavrei este instrumento, a qual depois de feito e lido pela Outorgante, por estar tudo conforme, aceita, outorga e assina. Nada mais. Emolumentos: Ao OFICIAL ESTADO [REDACTED] - IPESP [REDACTED] - MUNICIPIO-I.S.S. [REDACTED] - REG. CIVIL [REDACTED] TRIB. de JUSTIÇA [REDACTED] - SANTA CASA [REDACTED] - MP. [REDACTED] - TOTAL [REDACTED] Eu Luiz Guilherme Theodoro dos Santos Ortiz, escrevente, a lavrei. Eu (Rodrigo Tomazini). Escrevente, a conferi. Eu, DAVI DE SOUSA CAMBOIM, Tabelião Substituto, subscrevo e dou fé. (a.a) // CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.// - (SELADA LEGALMENTE) - NADA MAIS - TRASLADADA EM SEGUIDA - Eu, DAVI DE SOUSA CAMBOIM, Tabelião Substituto, o fiz extrair, conferi e porto por fé ser este primeiro traslado cópia fiel do original que assino em público e raso.

EM TEST* ([REDACTED]) DA VERDADE

Cartório Toledo

DAVI DE SOUSA CAMBOIM

Tabelião Substituto

CARTÓRIO TOLEDO
15ª Tabelionato de Notas
DAVI DE SOUSA CAMBOIM
TABELIAO SUBSTITUTO
Av. Rebouças, 3839 - Jd. Paulistano - São Paulo
São Paulo

15ª TABELIONATO DE NOTAS - CARTÓRIO TOLEDO
Avenida Rebouças, 3839, Jardim Paulistano - São Paulo - SP
CEP: 05401-450 - Telefone: (11) 3815-9853

Reconheço, por Semelhança, a firma de: (1) DAVI DE SOUSA CAMBOIM, sem valor econômico.
São Paulo, 18 de maio de 2018. Em testemunho da verdade.
Por Firma RS 8,00 | Total RS 8,00
Boleto: 1 Ato: 6A - 0838619
JONAS DA SILVA LEITE - ESCRIVENTE



Avenida Rebouças, 3839 - Jd Paulistano - São Paulo - SP
Fone: (11) 3815-9853 - CEP 05401-450



10242602102068.000098692-7

P:99227 R:004692

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU FALSIFICAÇÃO, ANULA ESTE DOCUMENTO

União Internacional
de Notariado Latino
(fundada em 1970)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo



CONSELHO
NACIONAL
DE JUSTIÇA

BRASIL
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: (Country / Pays):	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
Este documento público (This public document / Le présent acte public)			
2. Foi assinado por: (Has been signed by / A été signé par)	DAVI DE SOUSA CAMBOIM		
3. Na qualidade de: (Acting in the capacity of / Agissant en qualité de)			
4. Tem o selo / carimbo de: (Bears the seal / stamp of / Est revêtu du sceau / timbre de)			
Certificado (Certified / Attesté)			
5. Em: (At / À)		6. No dia: (The / Le)	10/05/2018
7. Por: (By / Par)	OLAVO FALLEIROS JUNIOR		
8. Nº: (Nº / Sous n°)			
9. Selo / Carimbo: (Seal / Stamp / Sceau / Timbre)	10. Firma: (Signature) Assinatura Eletrônica Electronic Signature Signature Electronique		



Tipo de documento:
(Type of document / Type d'acte) **RECONHECIMENTO DE FIRMA EM PROCURAÇÃO PÚBLICA**
 Nome do titular:
(Name of holder of document / Nom du titulaire) **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A**

Esta Apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade do signatário, quando apropriada, e o selo ou carimbo em uma única e só declaração. Ela não certifica a validade do documento para o qual foi emitida.

This Apostille certifies only the signature, the capacity of the person signing it and where appropriate, the seal or stamp in a single and sole declaration. It does not certify the validity of the document for which it was issued.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité de la personne signataire et, le cas échéant, le sceau ou le timbre dans une seule et unique déclaration. Elle ne certifie pas la validité du document pour lequel elle a été émise.

A validade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica, bem como o documento público subjacente, podem ser verificadas em:

The authenticity of this Apostille and its electronic signature, along with the underlying public document, may be verified at:

L'authenticité de cette Apostille, de la signature électronique, ainsi que du document public sous-jacent, peut être vérifiée sur:

A presente Apostila foi Remetida em: Assinatura eletrônica, conforme a Lei nº 11.416/2006.

This Apostille was electronically signed in accordance with Law nº 11.416/2006.

Cette Apostille a été signée par une signature électronique, d'après la loi nº 11.416/2006.

Décision à l'aposte de cette Apostille pour son utilisation avec la Convention de La Haye.

Any questions about this Apostille may be directed to the CNJ.

Veuillez contacter l'Administration de la CNJ pour toute question relative à cette Apostille.

Para obter, utilize o CNJ e o site para obter a autenticidade desta Apostila e de seu subdocumento eletrônico. Uma cópia do documento público subjacente também está disponível na mesma página.

Please use the CNJ Code to check the authenticity of this Apostille and its electronic signature. A copy of the underlying public document is also available from the same page.

Veuillez utiliser le Code CNJ pour vérifier l'authenticité de cette Apostille et de sa signature électronique. Une copie du document public sous-jacent est également disponible sur la même page.



Código CNJ

CNC



CARTÓRIO TOLEDO
1º Tabelião do Notar
MATHIUS AUGUSTO BELMONT NOBRE
ESCRITÓRIO AUTORIZADO

www.cnj.jus.br/apostila/conferencia

55-61 2326-4607

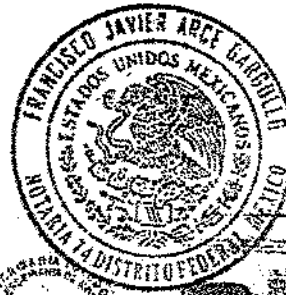
contato@cnj.jus.br

18.0.00577941-8

A1773260



ESCRIBANO DE NOTAS

Andrés Medeiros Toledo
Escribano Titular

Libro 4282, Folios 135/137 - Minuta: 2630

CNO-MEX 61/2018

PODER BASTANTE QUE OTORGA: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., EN LA FORMA A CONTINUACION:

S E P A N cuantos este instrumento público bastante vieren que el día diez (10) del mes de mayo del año de 2018 (dos mil dieciocho) en esta Ciudad y Capital del Estado de São Paulo, en diligencia en la Calle [REDACTED]

ante mí escribiente autorizado para la elaboración de ésta al final nombrado, compareció como Otorgante: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., con sede en la [REDACTED]

[REDACTED] con su Estatuto Social consolidado por el Acta de Asamblea General Extraordinaria fechado el 27 de abril de 2017, archivado en la Junta Comercial de Río de Janeiro, bajo el N° de protocolo 0020171437772, el 28/04/2017, Acta de Asamblea General Extraordinaria de aprobación de la separación realizada el 29 de marzo de 2018, archivado en la Junta Comercial de Río de Janeiro, bajo el N° de protocolo 00-2018/086675-3, el 02/05/2018, en este acto representada, conforme al artículo 14 y párrafos siguientes de su Estatuto Social vigente y Acta de Asamblea General Ordinaria realizada el 13 de julio de 2017, registrada ante la Junta Comercial del Estado de Río de Janeiro bajo el N° de protocolo 00-2017/233359-8, el 28 de julio de 2017, cuyas copias se encuentran archivadas en estas notas en el expediente de contratos N° 14 bajo el archivo N° 621, por sus Directores JOSÉ FABIO JANUÁRIO, [REDACTED]

[REDACTED] y ADRIANO SÁ DE SEIXAS MAIA, [REDACTED] portador de la tarjeta de identidad [REDACTED]

[REDACTED] con dirección comercial en la [REDACTED] La Otorgante y sus directores identificados por mí, a través de los documentos presentados de lo que doy fe. Y, por la Otorgante, en la forma representada me fue dicho que, nombra y constituye su apoderado bastantes a: JOÃO HENRIQUE ANDRADE ARAUJO HORST, [REDACTED]

inscrito en la OAB/PE bajo el [REDACTED] portador del pasaporte brasileño N° [REDACTED] residente y domiciliado en la [REDACTED] ("Otorgado");



Avenida Rebouças, 3839 - Jd Paulistano - São Paulo - SP
Teléfono: (11) 3815-9853 - CP 05401-450

	Traducción de original en PORTUGUES.
	Responsable de la traducción: PET, CONSULTORIA, COMUNICACION Y DESARROLLO, S.C., R.F.C. [REDACTED] Lic. María Enriqueta Pavía López, Perito-Intérprete-Traductor, RFC [REDACTED] registrada ante el H. Tribunal Superior de Justicia del D.F. publicada en el Boletín Judicial del 16 de febrero de 1988, del 12 y 13 de febrero de 1991, 10 de febrero de 1992 del 1° de febrero de 1993 y en el del 31 de marzo de 1995 para ESPAÑOL, FRANCÉS, ITALIANO, INGLÉS, PORTUGUES Y ALEMÁN. Bol. 7 feb. 1997, Bol. 15 feb. 1999, Bol. 15 jul. 2003, ING. Bol. 9 de junio 2009, PORTUGUES, ITALIANO, INGLÉS Ed. 13 de julio, 2011 y del 7 de agosto, 2013.
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	

NUESTRO CAPITAL INTELECTUAL A SU SERVICIO Peritos-Expertos-Traductores
PET, CONSULTORIA, COMUNICACION Y DESARROLLO, S. C. Polylot-Expert-Translaters



REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL
Estado de São Paulo

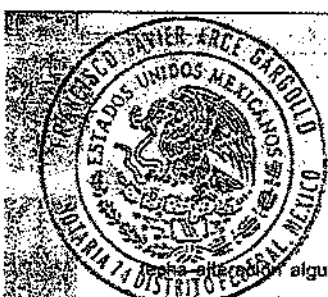


... generales de administración, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil Federal de México y en los Códigos Civiles correspondientes de los demás Estados federados, para que actúe en los Estados de la República Mexicana; a los cuales confiere poderes de la cláusula "ad iudicia et extra", amplios y generales, para el fuero en general, inclusive para el fuero arbitral, pudiendo representar a la Otorgante y a su sucursal en los Estados Unidos Mexicanos ("Sucursal México") en juicio o fuera de éste, promover la defensa de sus derechos e intereses en lo contencioso administrativo y judicial en cualquier instancia o tribunal, en Brasil o en el Exterior, representándola ante órganos, dependencias, entidades e instituciones públicas o privadas, de la administración directa o indirecta de la Unión, Estados y municipios y aún participar de cualquier tipo de licitación, en sus diversas modalidades, esenciales o accidentales, en todas sus fases, pudiendo por lo tanto, firmar y presentar propuestas y sus documentos integrantes, impugnar documentos, edictos de licitación de cualquier especie, participar de sesiones, firmar actas o cualesquier documentos por más especiales que sean, requerir la inscripción y registro de la Otorgante en entidades y/o instituciones públicas o privadas para todos los fines de derecho, pudiendo también proponer y/o variar de acciones de cualquier naturaleza, requerir la quiebra de sus deudores, representar o dar queja-crímen, criminalmente por la Otorgante, contratar abogados y estipular honorarios, obtener todo y cualquier tipo de información y datos protegidos por el secreto fiscal, así como los poderes especiales para acordar, concordar, confesar, desistir, recibir citaciones, intimaciones y notificaciones, actuar como institor de la Empresa, transigir, firmar trámites de compromiso, subestablecer con reservas y siempre con finalidad específica v/o evento determinado, los poderes del presente poder, pudiendo además recibir y dar recibo, nombrar instidores, inclusive para la representación de la Otorgante en el Poder Judicial, efectuar y levantar depósitos judiciales, en fin, practicar todos los actos necesarios para el fiel cumplimiento del presente mandato que tendrá validez por tiempo indeterminado, por lo que dará por bueno, firme y válidos, quedándoles prohibida, con todo, la concesión de aval, fianza o cualquier otra garantía a favor de terceros. II) poderes que conceden las facultades con cláusula especial contenidos en el artículo 2587 del Código Civil Federal de México y en los correspondientes Códigos Civiles de los demás Estados federados, pudiendo desistir en juicio, mismo en el juicio amparo, comprometer, participar en árbitros, para absolver y articular posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos. Debiendo siempre ser observados los límites, restricciones y actos permitidos por el Estatuto Social de la Otorgante en vigor, por la legislación y el Código Civil Brasileño. **CIERRE:** Y, por la Otorgante, en la forma representada, declara, que no hubo hasta la presente

Traducción de original en PORTUGUES.
Responsable de la traducción: PET, CONSULTORIA, COMUNICACION Y DESARROLLO, S. C. R.F.C. [Redacted] Lic. María Enriqueta Pavía López, Perito-Intérprete-Traductor, RFC [Redacted] registrada ante el H. Tribunal Superior de Justicia del D.F. publicada en el Boletín Judicial del 15 de febrero de 1988, del 12 y 13 de febrero de 1991, 10 de febrero de 1992 del 1º de febrero de 1993 y en el del 31 de marzo de 1995 para ESPAÑOL, FRANCÉS, ITALIANO, INGLÉS, PORTUGUÉS Y ALEMÁN. Bol. 7 feb. 1997, Bol. 15 feb. 1999, Bol. 15 jul. 2003, ING. Bol. 9 de junio 2009, PORTUGUÉS, ITALIANO, INGLÉS Bol. 13 de julio, 2011 y del 7 de agosto, 2013.

[Redacted] Firma [Redacted]

NUESTRO CAPITAL INTELECTUAL A SU SERVICIO Peritos-Expertos-Traductores
PET, CONSULTORIA, COMUNICACION Y DESARROLLO, S. C. Polyglot-Expert-Translators



19º ESCRIBANO DE NOTAS

André Medeiros Toledo
Escribano Titular



REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

... altera... alguna contractual de la empresa arriba mencionada. Todos los elementos relativos a la calificación e identificación de los apoderados, así como de los datos referentes a los objetivos de este poder, fueron suministrados y conferidos por ésta, sin la presentación de prueba documental, la cual deberá ser comprobada en ocasión de la utilización de este poder, quedando el mismo debidamente orientado de que el presente acto no permite rectificación o adición de naturaleza formal. Así lo dijo, de lo que doy fe. A petición de la Otorgante elaboré este instrumento, el cual después de hecho y leído por la Otorgante, por estar todo conforme, acepta, otorga y firma. Nada más. Emolumentos: Al OFICIAL [REDACTED] ESTADO [REDACTED] - IPESP [REDACTED] - MUNICIPIO-I.S.S. [REDACTED] REG. CIVIL [REDACTED] - TRIB. de JUSTICIA [REDACTED] - SANTA CASA [REDACTED] - MP. [REDACTED] - TOTAL [REDACTED] Yo, Luiz Guilherme Theodoro dos Santos Ortiz, escribiente, la elaboré. Yo, (Rodrigo Tomazini), Escribiente, la conferí. Yo, DAVI DE SOUSA CAMBOIM, Escribano Sustituto, suscribo y doy fe. (a.a.) // CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A./I. - (SELLADA LEGALMENTE).- NADA MAS.- TRASLADADA EN SEGUIDA.- Yo, DAVI DE SOUSA CAMBOIM, Escribano Sustituto, la hice extraer, conferí y porto por fe ser este primer traslado copia fiel del original que firmo en público y en presencia de testigos.-

EN TESTIMONIO (*Forma Negible*) DE LA VERDAD

Escribano Toledo
(*Forma Negible*)

DAVI DE SOUSA CAMBOIM
Escribano Sustituto

ESCRIBANO TOLEDO
19º Escribano de Notas
DAVI DE SOUSA CAMBOIM
ESCRIBANO SUSTITUTO
Av. Rebouças, 3839 - Jd. Paulistano - São Paulo - SP

19º ESCRIBANO DE NOTAS - ESCRIBANO TOLEDO
Assinado Publicamente, em 10 de maio de 2013, em São Paulo - SP.
CP 05401-450 - Telefone: (11) 3815-9853
Reconhecido, por Semelhança, a firma de: (1) DAVI DE SOUSA CAMBOIM, em valor econômico.
São Paulo, a 10 de maio de 2013. Em testemunha da Verdade.
Por Firma R\$ 8,00 | Total R\$ 8,00
Selo(s): (Apostila) 0639816
JONAS DA SILVA LETTE - ESCRIBENTE



Avenida Rebouças, 3839 - Jd Paulistano - São Paulo - SP
Teléfono: (11) 3815-9853 - CP 05401-450

Traducción de original en PORTUGUES.
Responsable de la traducción: PET, CONSULTORIA, COMUNICACION Y DESARROLLO, S. C., R.F.C. [REDACTED] Lic. María Enriqueta Pavía López, Perito-Intérprete-Traductor, RFC [REDACTED] registrada ante el H. Tribunal Superior de Justicia del D.F. publicada en el Boletín Judicial del 16 de febrero de 1988, del 12 y 13 de febrero de 1991, 10 de febrero de 1992 del 1º de febrero de 1993 y en el del 31 de marzo de 1995 para ESPAÑOL, FRANCÉS, ITALIANO, INGLÉS, PORTUGUES Y ALEMÁN. Bol. 7 feb. 1997, Bol. 15 feb. 1999, Bol. 15 jul. 2003. ING. Bol. 9 de junio, 2009. PORTUGUES, ITALIANO, INGLÉS Bol. 13 de julio, 2011 y del 7 de agosto, 2013.

NUESTRO CAPITAL INTELECTUAL A SU SERVICIO Peritos-Expertos-Traductores
PET, CONSULTORIA, COMUNICACION Y DESARROLLO, S. C. Polyglot-Expert-Translators

42791



REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL
Estado de São Paulo

CONSEJO NACIONAL DE JUSTICIA		BRASIL APOSTILLA (Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961)	
1. País: (País)			
REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL			
Este documento público (Este documento público / El presente documento público)			
2. Ha sido firmado por: (Se debe llenar por / Se debe llenar por)		DAVI DE SOUSA CAMBORM	
3. Entidad de: (Quien suscriba en calidad de / Quien suscriba en calidad de)			
4. Peca el sello / timbre del: (Peca el sello / timbre del / El sello/timbre del sello / timbre del)			
Certificado (Certificado/Certificado)			
5. En: (En / En)		6. El día: (Día / Día)	10/05/2018
7. Por: (Por / Por)	OLAVO FALLEROS JUNIOR		
8. N°: (N° / N°)			
9. Sello / Timbre: (Sello / Timbre / Sello / Timbre)	10. Firma: (Firma)		
		Firma: [Firma]	
		Firma: [Firma]	
		Firma: [Firma]	

Tipo de documento:
(Tipo de documento / Tipo de documento)

RECONOCIMIENTO DE FIRMA EN PODER
PUBLICO

Nombre del titular:

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

(Nombre del titular del documento / Nombre del titular)

Este Apostilla sólo verifica la firma y no garantiza la autenticidad y validez de la misma. El uso de esta Apostilla en el extranjero es responsabilidad del interesado. Este documento no es válido para el comercio exterior.

La presente Apostilla se otorga con la firma del titular, quien se compromete a la veracidad de los datos proporcionados. La Apostilla no garantiza la autenticidad de la firma.

Por tanto, sólo con el sello de esta Apostilla y la firma del titular, podrá ser utilizada en el extranjero. Este documento no es válido para el comercio exterior.

Este Apostilla sólo verifica la firma y no garantiza la autenticidad y validez de la misma. El uso de esta Apostilla en el extranjero es responsabilidad del interesado. Este documento no es válido para el comercio exterior.

La presente Apostilla se otorga con la firma del titular, quien se compromete a la veracidad de los datos proporcionados. La Apostilla no garantiza la autenticidad de la firma.

Por tanto, sólo con el sello de esta Apostilla y la firma del titular, podrá ser utilizada en el extranjero. Este documento no es válido para el comercio exterior.

La autenticidad de esta Apostilla y de los datos proporcionados, son responsabilidad del interesado. Este documento no es válido para el comercio exterior.

La autenticidad de esta Apostilla y de los datos proporcionados, son responsabilidad del interesado. Este documento no es válido para el comercio exterior.

La autenticidad de esta Apostilla y de los datos proporcionados, son responsabilidad del interesado. Este documento no es válido para el comercio exterior.

La autenticidad de esta Apostilla y de los datos proporcionados, son responsabilidad del interesado. Este documento no es válido para el comercio exterior.

La autenticidad de esta Apostilla y de los datos proporcionados, son responsabilidad del interesado. Este documento no es válido para el comercio exterior.

La autenticidad de esta Apostilla y de los datos proporcionados, son responsabilidad del interesado. Este documento no es válido para el comercio exterior.

La autenticidad de esta Apostilla y de los datos proporcionados, son responsabilidad del interesado. Este documento no es válido para el comercio exterior.

La autenticidad de esta Apostilla y de los datos proporcionados, son responsabilidad del interesado. Este documento no es válido para el comercio exterior.

La autenticidad de esta Apostilla y de los datos proporcionados, son responsabilidad del interesado. Este documento no es válido para el comercio exterior.

*1773260

Traducción de original en PORTUGUES.
Responsable de la traducción: PET, CONSULTORIA, COMUNICACION Y DESARROLLO, S. C.,
R.F.C. [Firma] Lic. María Enriqueta Pavía López, Perito-Intérprete-Traductor, RFC
registrada ante el H. Tribunal Superior de Justicia del D.F. publicada en el Boletín Judicial del 16 de
febrero de 1988, del 12 y 13 de febrero de 1991, 10 de febrero de 1992 del 1° de febrero de 1993 y en el 31 de marzo
de 1995 para ESPAÑOL, FRANCÉS, ITALIANO, INGLÉS, PORTUGUES Y ALEMÁN, Bol. 7 feb. 1997, Bol. 15 feb. 1999,
Bol. 15 jul. 2003, ING. Bol. 9 de junio 2004, PORTUGUES, ITALIANO, INGLÉS Bol. 13 de julio, 2011 y del 7 de agosto, 2013.

Firma [Firma]

NUESTRO CAPITAL INTELECTUAL A SU SERVICIO

Peritos-Expertos-Traductores

PET, CONSULTORIA, COMUNICACION Y DESARROLLO, S. C. Polyglot-Expert-Translators

1978

YO, FRANCISCO JAVIER ARCE GARGOLLO, NOTARIO SETENTA Y CUATRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C E R T I F I C O: -----

--- Que la presente copia fotostática que consta de O N C E hojas, concuerda fielmente con su original, que tuve a la vista y con el que la cotejé. -----

--- Este cotejo se anotó en el Libro de Registro de Cotejos con el número CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO, de esta fecha. Ciudad de México, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve.-----



[Handwritten signature]



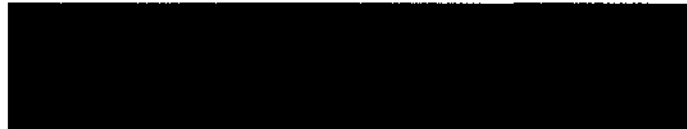
ARTEAGA, GARCÍA & OLVERA

Abogados

CONSULTA:

**ANÁLISIS DE ALGUNAS DE LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
COMETIDAS POR EL ESTADO MEXICANO EN CONTRA DE CONSTRUCTORA
NORBERTO ODEBRECHT S. A. Y ODEBRECHT INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S. A. DE C. V.**

Ciudad de México, mayo de 2019



ÍNDICE

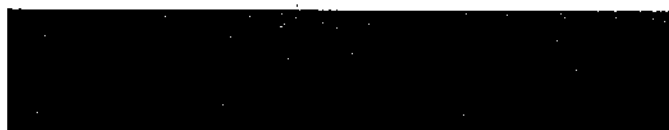
INTRODUCCIÓN DEL CONTEXTO DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE ODEBRECHT	1
1. LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MORALES Y LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA CONOCER DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE ÉSTAS	4
1.1. LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MORALES	4
1.1.1. El concepto de personas morales, el reconocimiento de su personalidad jurídica y titularidad de derechos	4
1.1.2. El reconocimiento de las personas morales como titulares de derechos humanos	7
1.1.3. Los derechos humanos de las personas morales	12
1.1.4. Conclusiones	16
1.2. LA IDONEIDAD DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA CONOCER DEL CASO ODEBRECHT	17
1.2.1. La función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como garantía de protección de los derechos humanos	17
1.2.2. La competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer e las violaciones de los derechos humanos de las personas morales	22
1.2.3. Conclusiones	23
2. LOS DERECHOS HUMANOS DERIVADOS DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE MÉXICO EN EL CASO ODEBRECHT	25
2.1. LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE MÉXICO EN EL CASO ODEBRECHT	25
2.1.1. Comunicado de la Fiscalía General de la República sobre la situación actual del caso Odebrecht	25
2.1.2. Compromisos internacionales del Estado mexicano en el caso Odebrecht	30
2.1.3. Obligatoriedad y efectividad de los acuerdos	32
2.1.4. La participación de la Procuraduría General de la República en la celebración del Tratado de coordinación sobre asistencia jurídica mutua en materia penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa de Brasil	41
2.1.5. Termo de Acuerdo de Leniência (Trámite de Acuerdo de Indulgencia) del 1º de diciembre de 2015	44



2.2. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE DERIVAN DE LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA.....	44
2.2.1. Las confesiones rendidas por Odebrecht bajo el amparo de los Acuerdos de Cooperación con el Ministerio Público Federal de Brasil (<i>Acordo de Leniência</i>) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (<i>Plea Agreement</i>)	46
2.2.2. El efecto corruptor que generaría la utilización de las declaraciones de Odebrecht	51
2.2.3. La voluntad de colaborar en el esclarecimiento de los hechos ilícitos confesados, y el derecho de obtener los beneficios que generan esas confesiones	53
2.2.4. El derecho de reinserción social de Odebrecht.....	57
2.3. CONCLUSIONES	58
3. DENEGACIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA Y ACUSACIONES DEL ESTADO MEXICANO EN CONTRA DE ODEBRECHT.....	61
3.1. NEGACIÓN DE LAS AUTORIDADES MEXICANAS PARA ACEPTAR LA COLABORACIÓN DE ODEBRECHT.....	61
3.2. ACUSACIONES DE LAS AUTORIDADES MEXICANAS EN CONTRA DE ODEBRECHT	66
3.2.1. El efecto corruptor de la prueba ilícita utilizada por las autoridades administrativas para iniciar los Procedimientos Administrativos Sancionadores.....	75
3.2.2. Denegación a Odebrecht del acceso a la justicia.....	80
3.3. CONCLUSIONES	88
4. VIOLACIÓN DEL DERECHO DE SEGURIDAD JURÍDICA.....	92
4.1. EL DERECHO DE SEGURIDAD JURÍDICA EN EL CASO ODEBRECHT.....	95
4.2. VIOLACIÓN GENÉRICA AL DERECHO DE SEGURIDAD JURÍDICA EN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A ODEBRECHT	98
4.3. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA Y SU AFECTACIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD DE ODEBRECHT	105
4.4. CONCLUSIONES	108
5. VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE ODEBRECHT Y DE LA SOCIEDAD MEXICANA RESPECTO A LOS CUALES LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS ES COMPETENTE PARA CONOCER	111
5.1 VIOLACIÓN AL DERECHO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA	111
5.1.1. El derecho de presunción de inocencia.....	111
5.1.2. La violación del derecho de presunción de inocencia en el caso Odebrecht	116
5.1.3. Conclusiones	123
5.2. VIOLACIÓN DEL DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA PRONTA DE ODEBRECHT Y DE LA SOCIEDAD MEXICANA	124



5.2.1. Derecho de acceso a la justicia pronta en el caso Odebrecht.....	124
5.2.1. Violación al derecho de acceso a la justicia con relación a la sociedad mexicana en el caso Odebrecht.....	127
5.2.2. Conclusiones	128



INTRODUCCIÓN DEL CONTEXTO DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE ODEBRECHT

El estudio y comprensión del tema que a continuación se desarrolla requiere, como cuestión previa, entender y comprender el contexto del caso planteado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En marzo de 2016 la empresa brasileña Odebrecht S.A., formuló una declaración pública, en ella, entre otras cosas, reconoció la necesidad de corregir sus prácticas; también asumió el compromiso de colaborar con las Autoridades en la realización de las investigaciones relacionadas con el financiamiento electoral ilícito y el pago de sobornos.

Lo anterior lo realizó con fundamento en los Acuerdos de Cooperación con el Ministerio Público Federal de Brasil (*Acordo de Leniência*) y con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (*Plea Agreement*) y en aplicación del mismo.

Mediante los Acuerdos de Colaboración anunciados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América el 21 de diciembre de 2016, Odebrecht, aceptó y se comprometió a lo siguiente:

1. Confesar hechos delictivos relacionados con un esquema internacional de sobornos, que involucran a autoridades, partidos políticos y candidatos políticos de 12 Estados Soberanos, entre los que se encuentra México;



2. Brindar su plena cooperación y colaboración con autoridades de los gobiernos de los Estados Unidos de América, Brasil, Suiza y de cualquier otra jurisdicción, para la investigación y el esclarecimiento de los hechos ilícitos;
3. Adoptar e implementar estrictos mecanismos corporativos para fortalecer su Sistema de Integridad (*compliance*), a fin de actuar en estricto apego a las mejores prácticas internacionales en materia de integridad corporativa, transparencia, ética y gobernanza;
4. Someter todas sus unidades de negocios a un programa de monitoreo de *compliance* independiente, a la supervisión de un equipo de profesionales asignados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y por el Ministerio Público Federal de Brasil; y
5. Pagar una penalización histórica por la cantidad de [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] a favor de los Estados Unidos de América, Brasil y Suiza.

Por razón de lo anterior, Odebrecht, S. A., a través de las subsidiarias y filiales, ratificó públicamente los compromisos asumidos, especialmente el de plena cooperación y colaboración, e implementó una estrategia global tendiente a coadyuvar ante las autoridades competentes de cada país de dicha región, incluido México, para el esclarecimiento, investigación y solución de los hechos relacionados con la revelación realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

Debido a los acuerdos asumidos, Odebrecht, S. A., y sus compañías controladoras se comprometieron con autoridades de diversos países en donde tienen operaciones y actividades comerciales, a modificar y mejorar sus prácticas corporativas y fortalecer su Sistema de Integridad (*compliance*), comprometiéndose a actuar en estricto apego a las mejores prácticas internacionales en materia de integridad corporativa, transparencia, ética y gobernanza.

A pesar de lo anterior y como se explica a lo largo del presente estudio, ante los compromisos asumidos por la empresa Odebrecht, S. A., como el de cooperar y colaborar en las investigaciones de los hechos relacionados con financiamiento electoral ilícito y el pago de sobornos a diversas autoridades, y como se analiza a lo largo del presente estudio, el Estado mexicano ha adoptado una postura de persecución e intimidación fuera de la legalidad en contra de sus subsidiarias denominadas Constructora Norberto Odebrecht, S.A. y Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, junto Odebrecht, S.A. como "Odebrecht"), lo que constituye e implica violaciones graves a sus derechos humanos y mismas que le genera responsabilidad al Estado.



1. LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MORALES Y LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA CONOCER DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE ÉSTAS

1.1. LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MORALES

1.1.1. El concepto de personas morales, el reconocimiento de su personalidad jurídica y titularidad de derechos

Las personas morales son construcciones jurídicas creadas para realizar los objetivos de una o varias personas físicas; generan relaciones de todo tipo y, por lo tanto, les corresponden la titularidad de derechos y obligaciones. Son realidades sociales (compuestas por grupos humanos), para llevar a cabo fines lícitos o alcanzar determinados objetivos.¹ En el sistema jurídico mexicano el artículo 25 del Código Civil Federal proporciona un listado de personas jurídicas:

Artículo 25.- Son personas morales.

I. La Nación, los Estados y los Municipios;

II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;

III. Las sociedades civiles o mercantiles;

IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;

VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley.

¹ Cfr. Dupré De Boulois, Xavier. "Les droits fondamentaux des personnes morales - 1ère partie:

VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736.

Dentro del listado destacan las sociedades mercantiles, como es el caso de la empresa Odebrecht.

El trasfondo de las personas jurídicas siempre será algo de humanidad (por las personas humanas que las conforman) y esto se puede constatar en la realización de su objeto.²

Los derechos humanos, como se entienden en Occidente, han tenido una evolución en cuanto a su amplitud como concepto y en cuanto a los sujetos que son titulares de ellos; actualmente ya no está referido y es exclusivo del género humano como tal; por razones obvias y naturales, se ha extendido su titularidad a construcciones humanas a las que la ley o la costumbre atribuye o reconoce personalidad jurídica, como lo son las comunidades, empresas, corporaciones, grupos sociales, entre otros.

Por virtud de la evolución observada en la materia se reconoce a las personas morales un primer derecho: el de gozar de personalidad jurídica o el de que se les reconozca como sujetos de derechos y obligaciones. La personalidad jurídica de las personas jurídicas es la calidad o implica esa titularidad.

Conforme a la concepción tradicional de los derechos humanos, estos no son atributos ligados a la calidad del sujeto, sino derechos reconocidos a las

² Badin, Jacques, *Les droits de l'homme et les personnes morales*. Bruselas, Bruylant, 1970, p. 146.

personas humanas.³ De acuerdo con esa concepción, las personas morales al tener necesariamente un trasfondo humano, pueden ser titulares de derechos humanos. Una construcción jurídica, como lo son las personas morales, sin un trasfondo de personas físicas no podría ser titular de derechos humanos.

Detrás de la construcción jurídica denominada "persona jurídica o moral", siempre habrá un grupo humano o, incluso, una sola persona física (como en el caso de las sociedades unimembres o simplificadas), ejerciendo derechos.

Las construcciones jurídicas denominadas personas jurídicas son proyecciones humanas; éstas, al tener personalidad jurídica propia, para poder operar plenamente, requieren de una protección, ésta se da a través del reconocimiento de determinados derechos humanos.⁴

Las personas morales o jurídicas son titulares de derechos humanos en la medida en que, por su naturaleza, les resulten aplicables.⁵ Son titulares de derechos humanos que están intrínsecamente relacionados a los fines de su existencia.⁶

Las personas morales son diferentes entre sí; por virtud de lo dispuesto por la Ley, tienen características particulares. Por lo mismo, en lo relativo a los derechos humanos de que gozan es preciso distinguir. No es lo mismo las categorías de derechos humanos que les asisten a las personas morales privadas, que los que se reconocen a las personas morales de derecho público. La

³ Dupré De Boulois, Xavier. *Op. cit.*, p. 3.

⁴ El reconocimiento de la personalidad de las personas jurídicas en un Estado tiene efectos a nivel internacional.

⁵ Artículo 19.3 de la ley de Bonn. STC, 137/85.

⁶ Koki, Hubert Kouamé. *Les droits fondamentaux des personnes morales dans la Convention européenne des droits de l'homme: de l'impensable à l'indispensable*, Paris. L'Harmattan, 2014, tome I, p. 65.

titularidad de derechos para cada una de ellas depende de su naturaleza, pública o privada y de su objeto social; no todas tienen los mismos derechos humanos.

La realización de los fines de una persona jurídica necesita de la presencia y participación individual o colectiva de los miembros que la integran; no es una construcción independiente y autónoma de las personas que lo integran.

1.1.2. El reconocimiento de las personas morales como titulares de derechos humanos

La titularidad y protección de los derechos humanos de las personas morales se ha previsto en distintos ordenamientos jurídicos, tanto nacionales como internacionales.

En el sistema jurídico mexicano los antecedentes, la doctrina y la jurisprudencia, coinciden en aceptar que el término personas que aparece en el artículo primero de la Constitución Política, comprende o alude: a las personas físicas, sin importar su edad, raza, condición económica, sexo, filiación política y otras calidades; y a las personas morales, como lo son las sociedades anónimas, las civiles e, incluso, las de naturaleza pública como lo son la federación, los estados, la Ciudad de México, los municipios y los entes públicos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 1º de la Constitución, ha reconocido a las personas morales como titulares de derechos humanos; la jurisprudencia que emitió al respecto es la siguiente:

Época: Décima Época

Registro: 2008584



Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 1/2015 (10a.)

Página: 117

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.
ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS
DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS
PERSONAS MORALES.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, no prevé distinción alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto a las personas físicas, como a las morales, las que gozarán de aquellos derechos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines. En consecuencia, el principio de interpretación más favorable a la persona, que como imperativo establece el párrafo segundo del citado precepto, es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que gocen las personas morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado por las personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto.

Contradicción de tesis 360/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 21 de abril de 2014. Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco.

En el ámbito internacional, en términos generales, se prevé una protección amplia a todas las personas, sin que se especifique su naturaleza o se distinga entre ellas. Por ejemplo, en el numeral 2 del artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se prevé expresamente que las personas morales sean titulares de derechos humanos, sin embargo, dada su naturaleza garantista, el precepto se debe interpretar de tal manera que, al no distinguirse la calidad de persona física o moral, se comprende a estas como titulares de derechos humanos, de manera que no se les imposibilite su acceso al sistema interamericano de derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un inicio, no protegió directamente los derechos de las personas jurídicas debido al *impase ratione personae* que genera la literalidad del artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso partió de una interpretación estricta de la Convención Americana, al considerar "que el Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las disposiciones del Artículo 1 (2) proveen que para los propósitos de esta Convención, 'persona' significa todo ser humano y, por consiguiente, el sistema de protección de los derechos humanos en este

hemisferio se limita a la protección de personas naturales y no incluye personas jurídicas".⁷

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha matizado la titularidad de los derechos humanos de las personas jurídicas, derivado la doctrina creada por la Comisión Interamericana y conforme a la doctrina de la Corte Internacional de Justicia en el caso *Barcelona Traction*. Esta, expresamente, "ha diferenciado los derechos de los accionistas de una empresa de los de la empresa misma"⁸, lo cual representa una distinción necesaria, en razón a que las personas morales son titulares de derechos propios e independientes de las personas físicas que las integran.⁹

El criterio anterior ha sido reiterado por la Corte Interamericana en el caso *Perozo y otros vs. Venezuela*, en el que diferenció los derechos de los accionistas de una empresa de los de la empresa misma y analizó la posible responsabilidad internacional de Venezuela por los daños sufridos en los bienes propiedad de Globovisión.

⁷ Corte Interamericana de Derechos Humanos: *Caso Banco de Lima vs. Perú*, Informe de inadmisibilidad No. 10/91, 22 de febrero de 1991, considerando 1.

Véanse también las siguientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: *Caso Tabacalera Boquerón vs. Paraguay*, Informe de inadmisibilidad 47/97, 16 de octubre de 1997, pp. 25 y 35; *Caso Mevopal S.A. vs. Argentina*, Informe de inadmisibilidad No. 39/99, 11 de marzo de 1999, pp. 18 y 20; *Caso Bernard Merens y familia vs. Argentina*, Informe de inadmisibilidad 103/99, 20 de septiembre de 1999, pp. 14 – 20; y *Caso Bendeck – Cohdinsa vs. Honduras*, Informe de inadmisibilidad 106/99, 27 de septiembre de 1999, pp. 16, 17 y 20.

⁸ Comisión Interamericana de Derechos Humanos. *Caso Ivcher Bronstein vs. Perú*, Sentencia de reparaciones y costas, Serie C n° 74, 6 de febrero de 2001, párr. 127.

⁹ Murillo Cruz, David Andrés, "La protección de los derechos humanos de las personas jurídicas en los sistemas regionales europeo e interamericano", en: Alfonso Jaime Martínez Lozano (director científico) y Hugo Carrasco Soulé (Coord.) en "Temas selectos: sistema interamericano de protección de derechos humanos" *Revista Jurídica Primera Instancia*, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, p. 101.

En el sistema regional interamericano de derechos humanos no ha existido un reconocimiento directo de los derechos humanos de las personas jurídicas, pero sí reconocimientos de la protección indirecta de los mismos, vía protección de los derechos humanos de las personas físicas que la componen.¹⁰

En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para la admisibilidad de casos en los que los peticionarios son personas jurídicas, se ha llegado a la conclusión de que puede admitirse un caso si los derechos violados se relacionan directamente con los seres humanos que integran a la persona moral.¹¹

En Europa, debido a la importancia de reconocer derechos humanos a las personas jurídicas, en 1952, se expidió el Protocolo No. 1 adicional a la Convención Europea de Derechos Humanos, en el que se reconoce expresamente la titularidad del derecho humano de propiedad a las personas jurídicas. El texto del precepto es el siguiente: "Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del Derecho Internacional".

Con base en el anterior fundamento, la Corte Europea de Derechos Humanos emitió la sentencia *Case Sporrong et Lönnroth sv. Sweden*, aplicación No. 7151/75; 7152/75, 23 de septiembre 1982, en el que se reconoció a las personas morales como titulares de derechos humanos. Inicialmente la protección de los derechos de las personas jurídicas se basó en la dimensión económica de éstas.

¹⁰ Murillo Cruz, David Andrés, *Opinión escrita sobre la consulta presentada por el Estado de Panamá sobre la interpretación y el alcance del artículo 1.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*. Presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, p. 9.

¹¹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos. *Caso Tomas Enrique Carvallo Quintana vs. Argentina*, Informe de admisibilidad 67/01, 14 de junio de 2001, párr. 54.

1.1.3. Los derechos humanos de las personas morales

Conforme a los criterios ya analizados, se considera que las personas morales son titulares de los derechos humanos que resulten conformes y aplicables con su naturaleza, fines y objeto social; por ejemplo, no pueden ser titulares del derecho a la integridad física y psíquica o al estado civil.

Los fines comerciales de las personas jurídicas ha generado la necesidad de reconocerles el derecho a tener un patrimonio. La Corte Europea de Derechos Humanos ha reconocido el derecho de patrimonio de las personas jurídicas, en específico el de goce y uso de los bienes a organizaciones religiosas en el caso *Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero vs. Italy*, aplicación No. 62876/00, 17 de noviembre de 2005, párrs. 8 y 9; y el mismo derecho lo reconoció para los partidos políticos, en el caso *Refah Partisi (the welfare party) and Others vs. Turkey*, aplicación Nos. 41340/98; 41342/98; 41343/98; 41344/98, 31 de julio de 2001, párr. 86.

En el sistema jurídico mexicano, incluso, se les ha reconocido como titulares de derechos de la personalidad como, por ejemplo, al honor, y de derechos de libertad, como la libertad de expresión;¹² en el Amparo Directo 28/2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que el reconocimiento de la titularidad del derecho al honor de las personas morales no es virtud de la dignidad humana sino en virtud de que gozan consideración social y reputación frente a la sociedad.¹³

¹² Amparo Directo 28/2010.

¹³ *Ibidem*, párrs. 1 y 2 de la foja VIII.

En el citado precedente, la Suprema Corte afirma¹⁴ que las personas jurídicas deben ser titulares de aquellos derechos fundamentales que sean acordes con la finalidad que persiguen, por estar encaminados a la protección de su objeto social, así como de aquéllos que aparezcan como medio o instrumento necesario para la consecución de la referida finalidad. En el caso del derecho al honor, "... el desmerecimiento en la consideración ajena sufrida por determinada persona jurídica conllevará, sin duda, la imposibilidad de que esta pueda desarrollar libremente sus actividades encaminadas a la realización de su objeto social o, al menos, una afectación legítima a su posibilidad de hacerlo..."¹⁵

Algunos precedentes jurisprudenciales en la materia son:

PERSONAS MORALES O JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS PREVISTOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, EN LA MEDIDA QUE RESULTEN CONFORMES A SU NATURALEZA Y FINES.

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES.

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LAS PERSONAS MORALES DE CARÁCTER PRIVADO CUANDO OSTENTAN LA CALIDAD DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO.

ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. POR EXCEPCIÓN, SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL PLANTEAMIENTO RELATIVO INCIDA EN LA EVENTUAL AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE INVIOLEABILIDAD E INTIMIDAD DEL DOMICILIO Y DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LAS PERSONAS MORALES, AL TRATARSE DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

¹⁴ Ibidem, párr. 4.

¹⁵ Ibidem, párr. 5.

Las personas morales se hallan dentro del tráfico jurídico, al ser construcciones a las que se les dota de la titularidad de derechos y obligaciones, por lo que están expuestas a generar conflictos, en los que pueden figurar como parte activa o pasiva de una *litis*. Por tal razón se les ha reconocido los derechos de debido proceso, las garantías judiciales y la protección judicial. Lo anterior, en aras de que tengan acceso a la justicia para la protección de los derechos que les asisten. En este sentido la Corte Europea de Derechos Humanos les ha reconocido los siguientes derechos:

1. El derecho de acceso a la justicia. Caso *Karahalios vs. Greece*, aplicación No. 62503/00, 11 de diciembre de 2003, párr. 29; y caso *SC Ruxandra Trading SRL vs. Romania*, aplicación No. 28333/02, 12 de julio de 2007, párr. 52.
2. El derecho a un recurso efectivo. Caso *Klass and Others vs. Germany*, aplicación No. 5029/71, 6 de septiembre de 1978, párrs. 34 - 38.
3. El derecho a un debido proceso. Caso *Strategies & Communication and Dumoulin vs. Belgium*, aplicación No. 37379/97, 15 de julio de 2002, párr. 42 - 47.

Otra categoría de derechos que les ha reconocido la Corte Europea de Derechos Humanos es la que surgen de la necesidad de identificación de la persona jurídica para celebrar relaciones jurídicas o estar en el tráfico jurídico, se trata de los siguientes derechos:¹⁶

¹⁶ Los derechos que se mencionan se consideraban propios de las personas físicas, pero por diversas interpretaciones jurisprudenciales a instrumentos internacionales se han extendido a las personas jurídicas. Cfr. Koki, Hubert Kouamé. *Les droits fondamentaux des personnes morales*

1. Derecho a la identidad de la persona jurídica.
2. El derecho al domicilio. Caso *Niemietz vs. Germany*, aplicación No. 13710/88, 16 de diciembre de 1992, párrs. 30 - 31; y caso *Stes Colas and Others vs. France*, aplicación 37971/97, 16 de abril de 2002, párr. 40 - 42.
3. El derecho a la intimidad. Caso *Wieser and Bicos Beteiligungen GMBH vs. Austria*, aplicación 74336/01, 16 de diciembre de 2007, párr. 44 - 45.
4. El derecho al buen nombre y reputación. Caso *Comingersoll S.A. vs. Portugal*, aplicación No. 35382/97, 6 de abril de 2000, párr. 35.
5. El derecho a la igualdad y no discriminación. Caso *Religionsgemeinschaft Der Zeugen Jehovas and Others vs. Austria*, aplicación No. 40825/98, 31 de julio de 2008, párrs. 87 - 99; y caso *Members of the Gldani Congregation of Jehovah's Witnesses and Others vs. Georgia*, aplicación No. 71156/01, 3 de mayo de 2007, párr. 139. En estas sentencias se reconoció el derecho de materializar el derecho de realizar el objeto social en igualdad de condiciones.

Otros derechos que se les han reconocido son el de libertad de reunión, libertad de asociación, de residencia, acceso a la información, de petición, a la verdad, entre otros. El ejercicio de este tipo de derechos dependerá del objeto social de la persona moral; por ejemplo, las asociaciones religiosas tienen restringida su libertad de asociación para fines políticos.

dans la Convention européenne des droits de l'homme: de l'impensable à l'indispensable, Paris, L'Harmattan, 2014, tome I, pp. 117 - 119.

1.1.4. Conclusiones

La tendencia de los sistemas jurídicos garantistas es lograr una protección más amplia en materia de derechos humanos para todas las personas, incluyendo, dentro de esta categoría a las personas jurídicas. La finalidad de un Estado garantista es regular la realidad dinámica y progresiva de la sociedad, la cual genera innumerables relaciones jurídicas de distintos sujetos que requieren el reconocimiento de la titularidad de sus derechos. México es un Estado en donde se reconoce la titularidad de derechos de las personas morales.

Además del reconocimiento de las personas morales como titulares de derechos humanos, el principio de interpretación más favorable también le es aplicable a los derechos humanos de las personas morales. Esa protección más amplia es respecto de aquellos derechos humanos cuyo contenido sustancial sea compatible con la naturaleza de las personas morales.

La existencia de construcciones con la categoría de persona morales, en el ámbito privado, representan garantías para la protección de determinados derechos de las personas humanas que lo integran. Las personas morales también son medios a través de los cuales las personas físicas ejercen derechos.

Las personas morales son una realidad incuestionable, lo es también la responsabilidad internacional en que pueden incurrir los Estados cuando transgreden los derechos humanos de los que ellas son titulares. La afectación a los derechos de las personas morales implica una afectación a los derechos humanos de las personas físicas que la integran, bien como accionistas o como funcionarios o empleados de ellas.

Permitir que las personas jurídicas sean titulares de derechos humanos es permitir, a su vez, que las personas físicas que la conforman logren que sus derechos sean garantizados, gracias a la protección y realización del objeto social de la persona moral de la que forman parte.

El reconocimiento de derechos humanos a las personas morales es un avance que no puede disminuirse o restringirse.

La empresa Odebrecht, S. A., y sus filiales en México, Constructora Norberto Odebrecht, S. A. y de Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A. de C. V., son personas morales titulares de derechos humanos en el sistema jurídico mexicano, los cuales deben ser protegidos y respetados por todas las autoridades del país.

1.2. LA IDONEIDAD DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA CONOCER DEL CASO ODEBRECHT

1.2.1. La función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como garantía de protección de los derechos humanos

La Constitución General obliga al Estado mexicano a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos y, como consecuencia de ello, lo conmina a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

La de proteger "Es una obligación positiva a cargo de los agentes estatales para crear el marco jurídico y las instituciones necesarias para prevenir las violaciones de los derechos humanos, cometidas por particulares y por agentes

estatales, así como para volver exigibles los derechos frente a posibles violaciones.”¹⁷

La protección a los derechos humanos se puede dar por vías jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Lo anterior es, a su vez, el derecho de acceso a la justicia, el cual puede ejercerse por ambas vías. Esas vías se configuran a través de garantías de protección de los derechos humanos.

La protección de los derechos fundamentales prevista en la Constitución General se da a través de garantías, las cuales pueden ser primarias o secundarias.

Las garantías son las técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad, posibilitando la eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional.¹⁸

Ferrajoli considera que las garantías primarias son obligaciones y prohibiciones para la protección de los derechos humanos.¹⁹

Aparicio y Pisarello señalan que las *garantías secundarias* se justifican en razón de que los poderes políticos no están inmunes a la burocratización y a la presión de los poderes privados, razón por la cual se crean e implementan una serie de *garantías jurisdiccionales*; éstas se activan cuando las *políticas o primarias* fallan, se incumplen o resultan insuficientes.²⁰ Las *garantías secundarias*

¹⁷ Serrano, Sandra y Daniel Vázquez. *Los derechos en acción. Obligaciones y principios de derechos humanos*. México, FLACSO-México, 2013. p. 64.

¹⁸ Ferrajoli, Luigi. *Derechos y garantías. La ley del más débil*, Trotta, Madrid, 2006. p. 25.

¹⁹ Ibidem, p. 43.

²⁰ Aparicio Wilhelmi, Marco y Pisarello, Gerardo. *Los derechos humanos y sus garantías*. Disponible en <https://roxanarodriguezortiz.files.wordpress.com/2014/12/1-conceptos-bc3a1sicos->

para Ferrajoli son "las obligaciones de reparar o sancionar judicialmente las lesiones de los derechos, es decir, las violaciones de sus garantías primarias."²¹ Las garantías secundarias son estructuras normativas e institucionales para la protección de los derechos humanos o las garantías violadas; en otras palabras, lo que se protege con estas garantías es la transgresión de los derechos humanos o de las garantías creadas para la efectividad de estos.

En el sistema jurídico mexicano, la vía jurisdiccional es una garantía secundaria que comprende, principalmente, el juicio de amparo (arts. 103 y 107, de la Constitución General), la controversia constitucional (art. 105 fracción I, de la Constitución General), el juicio para la protección de los derechos políticos electorales (art. 99 fracción V, de la Constitución General), el juicio de revisión constitucional electoral (art. 99 fracción IV, de la Constitución General), y el juicio político (art. 110, de la Constitución General).

Las garantías no jurisdiccionales, como lo son las que proporciona la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones de derechos humanos locales, entre otras, son garantías secundarias que no pueden recurrir a la fuerza pública para hacer valer sus decisiones; las estructuras de éstas están destinadas a revivir denuncias sobre violaciones a derechos humanos, emitir dictámenes y recomendaciones a las autoridades por esos acontecimientos; su control depende de su *autoritas*.²²

derechos-aparicio-y-pisarello.pdf consultado el 2 de mayo de 2019, p. 12. De forma concreta, los autores señalan: "La existencia de garantías jurisdiccionales de los derechos supone la posibilidad de que la vulneración, por acción u omisión, de las garantías primarias, pueda ser impugnada ante un órgano de tipo jurisdiccional, esto es, ante un tribunal más o menos independiente e imparcial". *Ibidem*, p. 13.

²¹ Ferrajoli, Luigi. *Op. cit.*, p. 43.

²² Martínez de la Peña, Mónica. *Programa de capacitación y formación profesional en derechos humanos. Curso: la protección y defensa de los derechos humanos en la CDHDF*, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 2012, p. 14.

En México, al sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos (art. 102 apartado B, de la Constitución General), lo conforman, principalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas.

La vía no jurisdiccional implementada por las comisiones de los derechos humanos es un mecanismo de exigibilidad de los derechos, que investigan las violaciones a los derechos; su actuación no siempre depende del impulso procesal de las víctimas; por ello, es común que se proceda de oficio.

Las comisiones de los derechos humanos son instituciones proactivas que buscan prevenir los problemas derivados de las violaciones a los derechos humanos y ofrecer soluciones. El conocimiento de la violación a los derechos humanos que realizan debe ser integral; analizar las violaciones sistemáticas y estructurales del Estado; los resultados deben incidir en el ánimo político para que se generen las soluciones adecuadas.

Los mecanismos que operan a través de las comisiones de los derechos humanos sirven de base para asegurar la progresividad y no regresividad de los derechos humanos, a fin de que se superen las causas estructurales y se eliminen las barreras que vulneran la dignidad de las personas; obligan a explicar y justificar los actos de la autoridad que afecten a los derechos humanos; y son parte de un sistema que contribuye a fincar responsabilidades a las autoridades, por haberse apartado de los principios y de las bases que existen para la efectividad de los derechos.

Las comisiones de los derechos humanos son mecanismos para mejorar la actuación del gobierno en su dimensión de protección no jurisdiccional de los derechos.²³

Las funciones generales de las comisiones de los derechos humanos consisten en lo siguiente:²⁴

1. El control de la administración pública (que es propia de un modelo clásico de *ombudsman*).
2. La facultad de promoción y protección de los derechos humanos de los habitantes, como mecanismos que fortalecen la protección de estos (que son propias de las comisiones o procuradurías de los derechos humanos).

Las funciones de investigación de las comisiones de los derechos son las que permiten trascender las situaciones particulares, para identificar las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos. La investigación debe ser independiente y con una carga argumentativa sobre la valoración de las pruebas, que no implique una parcialidad hacia cualquiera de las partes (autoridad y víctima).

En un sentido amplio, las recomendaciones de las comisiones de los derechos humanos son un mecanismo para fincar responsabilidad política por violaciones a derechos humanos.²⁵

²³ *Ibidem*, p. 11.

²⁴ *Ibidem*, p. 10.

²⁵ Martínez de la Peña, Mónica. *Op. cit.*, p. 12.

Las recomendaciones emitidas por las comisiones de los derechos humanos, implica exposiciones públicas de la actuación de la autoridad responsable de la violación de derechos humanos, que tiene el propósito de hacerla visible y comprometer a las autoridades involucradas a cesar la violación o enmendar su exceso. Por ello, el conocimiento del caso aquí analizado debe tener una visión integral del problema.

1.2.2. La competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer e las violaciones de los derechos humanos de las personas morales

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es competente para conocer de las violaciones a los derechos humanos de las personas morales, esto debido a que en el artículo 102, apartado B, de la Constitución General, no se limita la procedencia de la protección de los derechos humanos de las personas físicas. De conformidad con el precepto, la competencia de la Comisión se extiende a todas las violaciones a los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano y respecto de todo tipo de sujetos: personas físicas o morales; esto implica que su función protectora es con independencia de la naturaleza del titular del derecho humanos violado.

Lo anterior es así, como se ha dicho, por cuanto a que tienen un nombre, un patrimonio, crédito y una universalidad de derechos y obligaciones.

Como bien se apunta en el escrito inicial de la Queja, el artículo 4º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos prevé como uno de los principios rectores de su función el de universalidad, por lo que su competencia debe identificarse con todos los casos inherentes a violaciones a los derechos

humanos del sistema jurídico mexicano, incluyendo los que afecten o se cometan en contra de los derechos de las personas morales.

1.2.3. Conclusiones

Habiendo acreditado y fundado que Odebrecht es sujeto de derechos humanos, pasamos a formular consideraciones en relación con la necesidad de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos asuma el conocimiento de las diferentes violaciones a ellos de parte de las autoridades mexicanas.

En México no existe un organismo encargado de la protección de los derechos humanos de las empresas o personas morales. Ante la ausencia de un texto expreso, debe entenderse que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la autoridad encargada para la protección no jurisdiccional de todas las violaciones a los derechos humanos, incluidas las de las personas morales como Odebrecht.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es idónea para conocer las violaciones en contra de Odebrecht, por cuanto a que hay indicios que apuntan a que existe una actuación concertada para afectar sus derechos humanos.

La anterior circunstancia indica que se requiere un esclarecimiento de los hechos en el que se tomen en consideración y valoren todos los elementos aportados y de dominio público, a fin de que se den a conocer las violaciones e irregularidades en que ha incurrido el Estado mexicano en el caso Odebrecht.

En el sistema jurídico mexicano no existe una instancia tan especializada como la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que investigue las

violaciones a derechos humanos que aquí se destacan y que se pueden resumir como las omisiones en que han incurrido algunas autoridades administrativas, como lo son la Secretaría de la Función Pública, el anterior Ministerio Público Federal y la hoy Fiscalía General de la República, en la investigación y esclarecimiento de los actos de corrupción en que incurrieron servidores públicos, de acuerdo a los hechos declarados por Odebrecht y que actualmente son de dominio público; violando, de esa manera, los derechos humanos de acceso pronta a la justicia, a la verdad, reinserción a la sociedad, beneficios por cooperación sustancial, seguridad jurídica y presunción de inocencia.

2. LOS DERECHOS HUMANOS DERIVADOS DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE MÉXICO EN EL CASO ODEBRECHT

2.1. LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE MÉXICO EN EL CASO ODEBRECHT

2.1.1. Comunicado de la Fiscalía General de la República sobre la situación actual del caso Odebrecht

La Fiscalía General de la República emitió el comunicado FGR 46/19: Situación actual del caso Odebrecht, en el cual da a conocer lo siguiente:

El 25 DE ENERO DE 2017, se recibió escrito de la apoderada legal de PEMEX, señalando que, en diciembre de 2016, las empresas brasileñas ODEBRECHT y BRASKEM, se declararon culpables ante la Corte Federal del Distrito de Nueva York por pagar sobornos a servidores públicos de diversos países, destacándose la manifestación de haber pagado [REDACTED] a "oficiales de alto nivel" en una empresa propiedad del Estado Mexicano, para verse favorecidos en la asignación de un proyecto (contratos).

Sobre este caso, es pública la información en el sentido de que los funcionarios brasileños MARCELO BAHIA ODEBRECHT, Director Presidente de Odebrecht, LUIS ALBERTO DE MENESES WEYLL, Director superintendente de Odebrecht, sucursal México e HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, Director de la oficina de operaciones estructuradas de Odebrecht, refirieron ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, estar directamente involucrados en pagos de sobornos, mientras Ricardo Emilio Lozoya

Austin se desempeñaba como Director General de PEMEX; todo, con la finalidad de que la empresa Odebrecht se viera favorecida en la adjudicación de contratos de obra pública utilizando empresas OFFSHORE y bancos privados en paraísos fiscales

En fecha 16 DE FEBRERO DE 2017, el entonces Procurador General de la República, Doctor Raúl Cervantes Andrade, acudió a reunión con la Procuraduría General de Brasil junto con diversos Procuradores de Latinoamérica, misma en la que se suscribió convenio por el cual las autoridades de Brasil se comprometieron a proporcionar la información referente a la investigación, y las autoridades de México se comprometieron a no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht, estos convenios fueron ratificados por México en 3 ocasiones, uno en fecha 16 DE FEBRERO y dos el 14 DE JUNIO DE 2017.

Posteriormente la Procuraduría General de la República, tomo declaración a 3 ex funcionarios de la empresa Odebrecht, relacionados con los hechos denunciados. (MARCELO BAHIA ODEBRECHT, LUIS ALBERTO DE MENESES WEYLL, HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO), quienes realizaron diversos señalamientos que se encuentran bajo la protección de la reserva del debido proceso.²⁶

²⁶ Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la

En fecha 04 DE MAYO DE 2017, se recabaron entrevistas de tres funcionarios de Odebrecht en México (HELDER ANTONIO CAMPOMIZZI, actualmente Coordinador de licitaciones en la empresa Odebrecht México, JOSE VITO FACCIOLLA JUNIOR, Director de Proyectos en la empresa Odebrecht México y GUILLERMO ANTONIO SUAREZ SOLÍS, Representante Legal de Odebrecht México.), quienes aportaron diversos datos de prueba en relación a la investigación PEMEX-Odebrecht, mismos que también se encuentran bajo protección del debido proceso.²⁷

También se encuentran bajo la misma protección que señala el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las siguientes diligencias:

- En fecha 08 DE FEBRERO DE 2017, se solicitó al Titular de la Unidad de Responsabilidades Administrativas de PEMEX, antecedentes respecto a la intervención en la revisión de la suscripción y ejecución de los contratos de obra, así como, declaraciones patrimoniales de diversos servidores públicos de PEMEX".
- En fecha 05 DE ABRIL DE 2017, se iniciaron las entrevistas de 19 servidores públicos de PEMEX que participaron en la suscripción de los contratos relacionados con la Empresa Odebrecht, así como el desarrollo de las obras derivadas de los mismos.

información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

²⁷ *Idem*.



- En fecha 17 DE AGOSTO DE 2017, se recabó la entrevista en calidad de imputado de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex Director General de PEMEX, quien se reservó su derecho a declarar.
- A partir del 05 DE OCTUBRE DE 2017, se han solicitado diversos dictámenes en Materia de Traducción del idioma portugués al español, respecto de indicios recibidos de la Fiscalía General de la República de Brasil, entre los que se destacan las entrevistas de los tres ex funcionarios relacionados con los hechos investigados.
- En fecha 18 DE ABRIL 2018, se solicitó al Instituto Nacional de Migración (el registro migratorio de entradas y salidas de los funcionarios de la empresa Odebrecht).
- En fechas 07 DE MAYO DE 2018, 20 DE AGOSTO DE 2018 y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, se recibieron 3 CD 's que advierten información financiera procedente de la República Federativa de Suiza consistente en 3,239 fojas, la cual se encuentra en idiomas Alemán, Inglés, Francés e Italiano, pendiente de recabar la traducción del idioma Alemán, (faltan dos semanas y media para terminarlos).
- El 03 DE ENERO DE 2019, se solicitó Dictamen en materia de contabilidad en espera de la emisión del mismo, una vez que se cuente con todas las traducciones de referencia.
- En fecha 07 DE ENERO DE 2019, en virtud de haberse recibido más información financiera procedente de Suiza, se solicitó a CENAPI red de vínculos respecto de transferencias, depósitos y personas involucradas en los hechos investigados, con los cuales se contará la próxima semana.

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INAI- AMPAROS.



A partir del 08 DE OCTUBRE DE 2018, el Ministerio Público Federal ha recibido 11 solicitudes de acceso a la información, de las cuales, en 10 se reservó la información por versar sobre datos de la investigación, protegidos en razón del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en 1 se proporcionó la información solicitada por tratarse de datos estadísticos.

De las 10 reservadas, en 3 hubo resoluciones del INAI a los recursos de revisión que interpuso el solicitante de información, que no es posible obsequiar por las reservas legales señaladas, razón por la cual, el Agente del Ministerio Público de la Federación promovió Juicio de Amparo, a lo que está obligado como consecuencia del texto legal ya señalado.

Mediante resolución de 29 DE ENERO DE 2019, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA para que no se dé la información solicitada en los autos del Juicio de Amparo 1386/2018-V, promovido por la Agente del Ministerio Público de la Federación encargado del asunto y para que los Comisionados del INAI se abstengan de exigir el cumplimiento de la resolución del 02 DE OCTUBRE DE 2018.

Del anterior comunicado se destaca lo siguiente:

1. El 16 de febrero de 2017, el entonces Procurador General de la República, acudió a una reunión con la Procuraduría General de Brasil junto con diversos Procuradores de Latinoamérica, en la que se suscribió un convenio por el cual las autoridades de Brasil se comprometieron a proporcionar la información referente a la investigación, y las autoridades de México se comprometieron a no ejercer **ninguna acción civil**,

administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht; convenios que fueron ratificados por México en 3 ocasiones, uno en fecha 16 de febrero y dos el 14 de junio de 2017.

2. El registro de declaraciones emitidas el 16 de febrero y 14 de junio de 2017 por tres ex funcionarios de Odebrecht, directamente relacionados con los ilícitos confesados. ellos fueron los señores Marcelo Bahía Odebrecht, Luis Alberto De Meneses Weyll y Mascarenhas Alves Da Silva Filho; y la información presentada por estos. Información y declaración que se encuentran bajo protección del debido proceso.
3. Las entrevistas recabadas el 4 de mayo de 2017 a tres funcionarios de Odebrecht en México (Helder Antonio Campomizzi, actualmente Coordinador de licitaciones en la empresa Odebrecht México; José Vito Facciolla Junior, Director de Proyectos en la empresa Odebrecht México; y Guillermo Antonio Suarez Solís, Representante Legal de Odebrecht México), quienes aportaron diversos datos de prueba con relación a la investigación PEMEX-Odebrecht; los cuales se encuentran bajo protección del debido proceso.

2.1.2. Compromisos internacionales del Estado mexicano en el caso Odebrecht

El Estado mexicano tiene celebrados tratados internacionales que lo vinculan para cooperar en las investigaciones de casos como el de Odebrecht; para este, ha firmado acuerdos para cooperar en el esclarecimiento de los hechos ilícitos declarados por dicha empresa.

El Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, suscrito con fecha 6 de agosto de 2007 y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de octubre de 2009, forma parte del derecho mexicano con jerarquía suprema con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 constitucional relacionado con el artículo 1º del mismo ordenamiento. De conformidad con dicho tratado las Partes deben concederse asistencia jurídica mutua en materia penal, con la obligación de cumplir toda condición acordada con relación a los documentos u objetos que se entreguen; prohíbe, incluso, utilizar cualquier información o prueba obtenida en virtud del citado tratado para fines distintos a los declarados en la solicitud de asistencia.²⁸

El 16 de febrero de 2017 el entonces Procurador General de la República, Doctor Raúl Cervantes Andrade, suscribió con la Procuraduría General de Brasil un convenio por el cual las autoridades de Brasil se comprometieron a proporcionar la información referente a la investigación, y las autoridades de México se comprometieron a no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht.

También con fechas de 14 de junio de 2017 y 29 de agosto de 2017, representantes de la PGR México firmaron en Brasil (con base en el Tratado de Cooperación México-Brasil) con la Procuraduría General de Brasil, los siguientes Acuerdos de Compromiso de Especialidad y de Limitación de Uso de Pruebas:

1. *"Termo de Compromisso de Especialidade e de Limitacao de Uso de Provas"*, Solicitud No. 1.00.000.003287/2017-21-PGR, por la cual la

²⁸ Artículos 1.1, 10.2 y 15.5 del Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil de 6 de agosto de 2007.

Procuraduría de México, en representación del Estado mexicano, en calidad de Autoridad Central, se comprometió a conceder inmunidad (penal, civil y administrativa) a todas las empresas del Grupo Económico Odebrecht y sus colaboradores (personas físicas), con relación a los hechos delictivos objeto del *Plea Agreement* relacionados con México.

2. Nuevo "*Termo de Compromisso de Especialidade e de Limitacao de Uso de Provas*", Solicitud de Cooperación Jurídica en Materia Penal México/Brasil No. 1.00.000.003287/2017-21-PGR, por la cual la Procuraduría General de la República de México, en representación del Estado Mexicano, en calidad de Autoridad Central, se comprometió a conceder inmunidad (penal, civil y administrativa) a todas las empresas del Grupo Económico Odebrecht y sus colaboradores (personas físicas), con relación a los hechos delictivos objeto del *Plea Agreement* relacionados con México.

De conformidad con los citados Acuerdos de Compromiso de Especialidad y de Limitación de Uso de Pruebas, celebrados en Brasil, en el ámbito de la referida cooperación jurídica internacional en materia penal, la PGR México, como Autoridad Central, en representación del Estado Mexicano, ha otorgado *inmunidad* penal, civil y administrativa a las empresas del Grupo Económico Odebrecht y a sus colaboradores (personas físicas) en relación a los hechos objeto de la cooperación internacional en cuestión.

2.1.3. Obligatoriedad y efectividad de los acuerdos

Tanto en el ámbito nacional como en el internacional, el Estado Mexicano está obligado a respetar, con el carácter de supremos, los tratados internacionales de los que sea parte. En el ámbito nacional, es la Constitución Política la que en su

artículo 133 sujeta a México a cumplir con dichos compromisos con el carácter de Ley suprema; en lo que respecta al ámbito internacional, el Estado Mexicano suscribió la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de fecha 21 de marzo de 1986, de conformidad con ella todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, incluso a pesar de las disposiciones en contrario previstas en el derecho interno,²⁹ so pena de responsabilidad internacional.

La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión aprobó la citada Convención el 11 de diciembre de 1987, conforme al decreto publicado el 11 de enero de 1988 en el Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de los Estados Unidos Mexicanos ha reconocido en distintos precedentes jurisprudenciales³⁰ que los tratados internacionales de los que es parte México deben interpretarse de

²⁹ Artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales.

³⁰ En forma de ejemplo se señalan algunos de los precedentes en la materia:

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. REGLAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS DISPOSICIONES CONFORME A LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL ORIGEN DEL BIEN. Localización: [J]; 10ª. Época; Plenos de Circuito; Gaceta S.J.F.; Libro 40, Marzo de 2017; Tomo III; Pág. 2018. PC.I.A J/102 A (10ª.).

DERECHOS HUMANOS. LOS TRATADOS INTERNACIONALES VINCULADOS CON ÉSTOS SON DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS AUTORIDADES DEL PAÍS, PREVIAMENTE A LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 10 DE JUNIO DE 2011. Localización: [TA]; 10; 10ª. Época; 1ª. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013; Tomo 1; Pág. 602. 1ª. CXCVI/2013 (10ª.).

TRATADOS INTERNACIONALES. SN PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. Localización: [TA]; 9ª. Época. S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Abril de 2007; Pág 6. P.IX/2007.

TRATADOS INTERNACIONALES. ADMITEN DIVERSAS DENOMINACIONES. INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONTENIDO. Localización: [J]; 9ª. Época; 2ª. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Febrero de 2007; Pág. 738. 2ª./J. 10/2007.

acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, reiterando las reglas generales de interpretación de dicha convención:

... como regla general debe, en principio, acudirse al sentido literal de las palabras utilizadas por las partes contratantes al redactar el respectivo documento final debiendo, en todo caso, adoptar la conclusión que sea lógica con el contexto propio del tratado y acorde con el objeto o fin que se tuvo con su celebración; es decir, debe acudirse a los métodos de interpretación literal, sistemática y teleológica. A su vez, en cuanto al contexto que debe tomarse en cuenta para realizar la interpretación sistemática, la Convención señala que aquél se integra por: a) el texto del instrumento respectivo, así como su preámbulo y anexos; y, b) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre las partes con motivo de su celebración o todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado; y, como otros elementos hermenéuticos que deben considerarse al aplicar los referidos métodos destaca: a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones; b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de su interpretación; y, c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes; siendo conveniente precisar que en términos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para realizar la interpretación teleológica y conocer los fines que se tuvieron con la celebración de un instrumento internacional no debe acudirse, en principio, a los trabajos preparatorios de éste ni a las circunstancias que rodearon su celebración, pues de éstos el intérprete únicamente puede valerse para confirmar el resultado al que se haya arribado con base a los elementos antes narrados o bien cuando la

conclusión derivada de la aplicación de éstos sea ambigua, oscura o manifiestamente absurda ...³¹

Con la adopción de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Estado mexicano se comprometió a cumplir todo tratado en vigor bajo el principio de *pacta sunt servanda*: "...Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe...";³² lo anterior, incluso a pesar de disposición contraria en el derecho interno.³³

Hans Kelsen advirtió que el derecho es un sistema normativo dinámico, compuesto de actos por los que se crea y aplica el derecho. En el sistema jurídico mexicano existen normas que habilitan a determinados sujetos, mediante ciertos procedimientos a crear normas jurídicas; este es el carácter dinámico del sistema jurídico.³⁴ El mismo autor conceptualiza a la validez de las normas como la

³¹ Tesis: 2ª. CLXXI/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala. TRATADOS INTERNACIONALES. SU INTERPRETACIÓN POR ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 14 DE FEBRERO DE 1975).

³² Artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales.

³³ Artículo 27.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales:

"...Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado..."

³⁴ Para el caso de la validez de las normas secundarias, Hans Kelsen, afirmó: "La relación entre una grada superior y una grada inferior del orden jurídico, por ejemplo, entre la constitución y la ley, o entre la ley y la sentencia judicial, es una relación de determinación o vinculación... En la relación entre la constitución y la ley predomina la regulación del procedimiento; sin embargo, hay también la determinación del contenido de algunas leyes futuras; la regulación constitucional de los derechos fundamentales y de libertad es un intento por determinar, al menos negativamente, el contenido de algunas leyes, prohibiéndoles ciertos contenidos (ataques a la libertad y a la propiedad). En la relación entre la ley y la sentencia judicial o el acto administrativo, háyanse equilibradas la regulación del procedimiento y la del contenido de la norma inferior, la norma inferior está determinada tanto por lo que afecta al procedimiento en el cual es creada, como respecto de su contenido (derecho material civil, penal y administrativo)"

Kelsen, Hans, *El método y los conceptos fundamentales de la teoría pura del derecho*, "Revista de Derecho Privado", Madrid, 1933, pp. 57-58.

cualidad de pertenencia de la norma con el sistema jurídico, lo que determina su fuerza obligatoria.³⁵ La validez se identifica con la relación entre la norma inferior con la superior, en la que hay ausencia de vicios en el procedimiento de su creación.

Las normas que dan fundamento a la celebración de tratados internacionales por el Estado Mexicano con entidades internacionales son los artículos 76, fracción I; 89, fracción X; y 133 de la Constitución Política, con base en estos preceptos se firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual fue ratificada por México el 20 de julio de 2004 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2005. El artículo 46 de esta convención, regula lo relativo a la asistencia recíproca.³⁶

³⁵ "Derogation", *Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe Pound*, New York, Ralph A. Mewman, Bob Merrill Company, 1962, p. 339.

³⁶ Artículo 46. Asistencia judicial recíproca

1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convención.

2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos de los que una persona jurídica pueda ser considerada responsable de conformidad con el artículo 26 de la presente Convención en el Estado Parte requirente.

3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:

- a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;
- b) Presentar documentos judiciales;
- c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;
- d) Examinar objetos y lugares;
- e) Proporcionar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos; f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles;
- g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;
- h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte requirente;
- i) Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado Parte requerido;
- j) Identificar, embargar con carácter preventivo y localizar el producto del delito, de conformidad con las disposiciones del capítulo V de la presente

El Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil de 6 de agosto de 2007,³⁷ se suscribió con base en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ese tratado forma parte del orden jurídico mexicano, con jerarquía suprema por cumplir con los requisitos constitucionales del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces

Convención;

k) Recuperar activos de conformidad con las disposiciones del capítulo V de la presente Convención.

13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlos a las autoridades competentes para su ejecución. Cuando alguna región o algún territorio especial de un Estado Parte disponga de un régimen distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado Parte podrá designar a otra autoridad central que desempeñará la misma función para dicha región o dicho territorio. Las autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente serán transmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados Parte. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de los Estados Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados Parte convengan en ello, por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser posible.

³⁷ Aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión con fecha 28 de abril de 2008, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 13 de junio del mismo año. Las notificaciones a que se refiere el artículo 34, numeral 1 del Tratado, se efectuaron en la ciudad de Brasilia el 17 de junio de 2008 y en la Ciudad de México el 11 de septiembre de 2009. La publicación del Tratado en el Diario Oficial de la Federación se realizó el 15 de octubre de 2009. Disponible en:

<http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=7qzIfDcOZa2y0gCnflUKIMzxGrtAVNPSCq5tM4DEypi0jMAxXHzRvAcUfHK2BeR0>

de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

En una interpretación conforme del artículo 133 de la Constitución General, bajo la fórmula: "tratados internacionales de la materia", se entienden comprendidos:

1. Todos los tratados suscritos por el Estado Mexicano; y
2. Todas las convenciones y acuerdos suscritos por el Estado Mexicano, independientemente de quién los haya negociado, firmado y aprobado.

Cuando los tratados y convenciones reconocen derechos humanos, las cláusulas que los contienen son de jerarquía idéntica a la que se reconoce a la Constitución Política, ello implica que en lo interno todo el orden normativo, sea federal o local, es de naturaleza inferior y toda autoridad debe estarse a lo que ellos disponen.

El Tratado de referencia cumplió con los requisitos que el citado artículo 133 establece debido a que:

1. Con fecha 6 de agosto de 2007, en la Ciudad de México, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó *ad referéndum* el Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal con la República Federativa del Brasil;
2. Con fecha 28 de abril de 2008, el Tratado de referencia fue aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, según consta en el

decreto publicado el 13 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación;

3. Las notificaciones que requiere el Tratado para entrar en vigor fueron efectuadas en la ciudad de Brasilia con fecha 17 de junio de 2008 y en la Ciudad de México con fecha 11 de septiembre de 2009;
4. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha 15 de octubre de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil.

Al cumplir los requisitos para configurarse con tratado en términos constitucionales, le es aplicable para su interpretación y cumplimiento la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al igual que todo acuerdo o compromiso celebrado en virtud del su cumplimiento o ejecución.

Lo anterior teniendo en consideración el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citado anteriormente, que establece que el término tratado es puramente formal siempre que su contenido sea acorde con su objeto y finalidad, pues, desde el punto de vista de su carácter obligatorio, los compromisos internacionales pueden denominarse tratados, convenciones, declaraciones, acuerdos, protocolos o cambios de notas; reconociendo, incluso, que no hay consenso para fijar las reglas generales a que deben sujetarse las diferentes



formas que revisten dichos compromisos internacionales por lo que, los mismos, pueden consignarse en diversas modalidades.³⁸

Conforme al análisis del tratado y de las características del sistema jurídico mexicano se llegan a las siguientes conclusiones:

1. El Tratado de coordinación fue firmado por el Estado Mexicano por conducto de la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República).
2. El Tratado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo mismo se presume que es del conocimiento de particulares y autoridades;
3. Las autoridades del Estado Mexicano conocen los términos del Tratado y, por conducto de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) ejercen su responsabilidad de investigar delitos y de perseguir a sus autores; y
4. Han obtenido diversas pruebas con base en el referido Tratado de coordinación.

De conformidad con el Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, la partes se comprometieron a concederse asistencia jurídica mutua en materia penal, con la obligación de cumplir toda condición acordada con relación a los documentos y objetos que se entreguen, prohibiendo,

³⁸ TRATADOS INTERNACIONALES. ADMITEN DIVERSAS DENOMINACIONES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONTENIDO. Localización: [J]; 9ª. Época; 2ª. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Febrero de 2007; Pág. 738. 2ª /J. 10/2007.

incluso, utilizar cualquier información o prueba obtenida en virtud del citado tratado para fines distintos a los declarados en la solicitud de asistencia.³⁹

Por lo anterior, el uso de la información obtenida por virtud del Tratado de Cooperación México-Brasil en contravención a lo pactado en los Acuerdos Compromiso, sería contrario a derecho y las pruebas utilizadas en dicho escenario serían nulas; su uso en procedimientos nacionales generaría responsabilidad para el Estado mexicano, daría lugar a sanciones nacionales e internacionales, por violación de los principios de: *pacta sunt servanda*, presunción de inocencia, no autoincriminación y de especialidad de la prueba.

2.1.4. La participación de la Procuraduría General de la República en la celebración del Tratado de coordinación sobre asistencia jurídica mutua en materia penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa de Brasil

El Estado Mexicano y la República Federativa de Brasil, con fecha 6 de agosto de 2007, celebraron un Tratado de coordinación sobre asistencia jurídica mutua en materia penal, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2008.

Para los efectos del artículo 46, párrafo 13 de la Convención, el gobierno de México designó como Autoridad Central a la Procuraduría General de la República

³⁹ Artículos 1.1, 10.2 y 15.5 del Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa de Brasil, de 6 de agosto de 2007.

(hoy Fiscalía General de la República) a través Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica.⁴⁰

En el ámbito internacional, se prevén las facultades de los fiscales de los estados respecto a las investigaciones, para temas de cooperación internacional; esto se prevé en el artículo 54 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.⁴¹

La entonces Procuraduría General de la República, en su carácter de autoridad central, con fundamento en el artículo 46, párrafo 13, de la citada convención, para tener asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente con Brasil, celebró con este país el Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil. En el ámbito interno del sistema jurídico

⁴⁰ Información oficial disponible en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=601&depositario=0 consultado el 2 de mayo de 2019.

⁴¹ En vigor el 1º de julio de 2002. Aprobado por México el 21 de junio de 2005 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del mismo año.

El artículo 54 de dicho tratado prevé lo siguiente:

Artículo 54. Atribuciones y funciones del Fiscal con respecto a las investigaciones

1 El Fiscal podrá:

(..)

c) Solicitar la cooperación de un Estado u organización o acuerdo intergubernamental de conformidad con su respectiva competencia o mandato;

d) Concertar las disposiciones o los acuerdos compatibles con el presente Estatuto que sean necesarios para facilitar la cooperación de un Estado, una organización intergubernamental o una persona;

e) Convenir en que no divulgará en ninguna etapa del procedimiento los documentos o la información que obtenga a condición de preservar su carácter confidencial y únicamente a los efectos de obtener nuevas pruebas, salvo con el acuerdo de quien haya facilitado la información; y

f) Adoptar o pedir que se adopten las medidas necesarias para asegurar el carácter confidencial de la información, la protección de una persona o la preservación de las pruebas.

mexicano, este tipo de tratado internacional se le denomina acuerdo interinstitucional.⁴²

A través del análisis de la secuencia de fundamentos que dieron origen al Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, se concluye que este cumple con todos los elementos de validez normativa. Incluso, el tema de que sea extendido al ámbito civil y administrativo, ya que, al momento de su celebración, el ministerio público contaba con amplias facultades para representar a la Federación.

En acatamiento del principio *pacta sunt servanda*, que regula la celebración y ejecución de los tratados y convenciones internacionales, la actuación de las autoridades mexicanas debe estar encaminada a observar, en sus términos, todo compromiso internacional, sin que en el caso pueda alegarse ignorancia o falta de facultades o atribuciones de parte de quienes comprometan al Estado Mexicano.

⁴² El artículo 2, fracción II de la Ley sobre Celebración de Tratados define al Acuerdo Interinstitucional, como "el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado. El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben."

Es importante señalar que en el decreto de publicación del Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal de fecha 15 de octubre de 2009, se reconoce que la firma *ad referendum* del mismo se realizó por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto. Lo anterior demuestra que el Procurador General fue debidamente autorizado por el Ejecutivo para la firma del tratado de referencia.

2.1.5. Termo de Acordo de Leniência (Trámite de Acuerdo de Indulgencia) del 1º de diciembre de 2016

Es un acuerdo de indulgencia suscrito, por una parte, por el Ministerio Público Federal de Brasil, a través de representantes que contaban con atribuciones para la investigación y procesamiento de infracciones penales y civiles derivados de los hechos revelados en la denominada *Operacao Lava Jato* (Operación Autolavado), y por otra, la empresa Odebrecht, S. A. La indulgencia es respecto de los hechos investigados en dicha operación, así como los que llegasen a ser revelados debido a las investigaciones.

En este acuerdo Odebrecht y la Fiscalía Brasileña establecieron condiciones para que la Fiscalía Brasileña pudiera colaborar con autoridades extranjeras, con relación a la divulgación de “los hechos en el ámbito internacional”, que han sido revelados por Odebrecht con fundamento en dicho acuerdo (cláusulas 19 y 21).

2.2. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE DERIVAN DE LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA

Conforme al *Acuerdo de compromiso de especialidad y de limitación del uso de la prueba*, México debe conceder inmunidad o beneficios a los colaboradores, en materia penal, civil y administrativa.

Respecto de las pruebas que Brasil proporcione a México por virtud de la cooperación internacional entre ambos países en materia penal, éste solo las podrá usar siempre y cuando se respeten los límites al uso de ellas y que fueron proporcionadas voluntariamente por los colaboradores sujetos a la jurisdicción de la parte/país requerida/o.

El acuerdo está encaminado a preservar la dignidad de la persona, por cuanto a que se obtiene un beneficio en la investigación de un ilícito (que de otra forma no se podría obtener) a cambio de que la autoincriminación no represente perjuicios adicionales a los que deriven de la investigación en el cual se proporcionan.

Se vulnerarían los términos del tratado si a las pruebas se da un uso indebido; implicaría la realización de maniobras de mala fe para obtener la declaración inculpativa con el fin de utilizarlas en otras investigaciones o fines no admitidos, ya sea de carácter penal, administrativa o civil. La violación del pacto implica usar las pruebas con el propósito de perjudicar a una persona determinada; por ello, existe el peligro de vulneración a la dignidad de quien declara; el que obtiene la información la puede usar en perjuicio de la dignidad del declarante. En este caso la vulneración de la naturaleza del trato, del *pacta sunt servanda*, ello implicaría violentar derechos humanos.

El principio de la especialidad de la prueba tiene como finalidad preservar la dignidad de la persona; esto se traduce en la obligación de garantizar las medidas especiales de seguridad de los testigos o confesiones rendidas que tengan relación con algún delito.⁴³ Lo anterior implica que la obligación para las partes para de que las pruebas no se utilicen en procedimientos legales promovidos por otras instituciones contra la empresa y sus ejecutivos.

La posibilidad de pactar la adopción de medidas necesarias respecto de la protección de sus funcionarios o agentes, así como de la protección de

⁴³ Romero M. Alfredo (coord.), *Crímenes de Lesa Humanidad. Un Enfoque Venezolano*, Ed. Los Libros de El Nacional, Venezuela, 2004, p. 77.

información de carácter confidencial o restringido, tiene su principal sustento, en el ámbito internacional, en el artículo 68.6, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El incumplimiento del acuerdo de no uso de las pruebas para fines distintos de parte de alguna autoridad, generaría la violación de los principios de presunción de inocencia, no autoincriminación y seguridad jurídica.

2.2.1. Las confesiones rendidas por Odebrecht bajo el amparo de los Acuerdos de Cooperación con el Ministerio Público Federal de Brasil (*Acordo de Leniência*) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (*Plea Agreement*)

Las declaraciones que Odebrecht, S. A., realizó públicamente el 21 de diciembre de 2016, con base en los Acuerdos de Cooperación entre el Ministerio Público Federal de Brasil con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, generaron un compromiso para la empresa de cooperar en el esclarecimiento, investigación y solución de los hechos ilícitos confesados. Estas confesiones fueron divulgadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Entre esas declaraciones se encuentran los presuntos hechos delictivos relacionados con el pago indebido de [REDACTED] a un funcionario público en el contexto de una contratación pública federal entre los años de 2013 y 2014.

De conformidad con las reglas de "cooperación con autoridades extranjeras" previstas en la cláusula 21 del "*Acuerdo de Lenidad*" firmado por Odebrecht S. A., con el Ministerio Público de Brasil, las informaciones que integran los "relatos", que incluye la descripción de los hechos y datos de corroboración

divulgados por Odebrecht, S. A., y sus empleados a las autoridades de Brasil y el Departamento de Justicia norteamericano, sólo podrán ser divulgados bajo las reglas pactadas y atendiendo a los procedimientos previstos en los tratados internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. El texto de la citada cláusula, en la parte conducente es el siguiente:

b) En caso de solicitud formal de compartir la información para fin de investigación penal por la autoridad competente del estado extranjero o aún en el caso de transmisión (comunicación) espontánea de información, en los términos del artículo 18, "4", y "5" del Convenio de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y el artículo 46, "4" y "5" del Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Ministerio Público que estuviera con la custodia de pruebas producidas en este Acuerdo o de ésta derivadas, al dar cumplimiento al acto de transferencia de la información y pruebas, restringirá su uso apenas y exclusivamente en relación a las investigaciones, procedimientos y procesos penales contra terceros que no la **COLABORADORA, Adherente o Instintores** que tengan celebrado acuerdo de colaboración premiada autónoma y en vigor con el Ministerio Público, salvo los hechos o personas no fuesen objeto de protección en los términos de este Acuerdo y del respectivo acuerdo de colaboración premiada;

c) siempre que sea posible, en los casos previstos en el párrafo "b" arriba, la autoridad competente extranjera prestará compromiso previo ante el Ministerio Público que esté en la custodia de las pruebas producidas en este Acuerdo de Indulgencia de respetar las restricciones de uso de la información y pruebas.



Con base en el fundamento anterior, la autoridad que solicite la cooperación deberá respetar las restricciones de uso de la información y las pruebas correspondientes; así como el deber de mantener en reserva cualquier información o registro en atención a la legislación y procedimientos de cada país.

El 2 de febrero de 2017, Petróleos Mexicanos dirigió el oficio DJ-033-2017 al Director General de Odebrecht México, para exigirle información relacionada con el comunicado de prensa del 21 de diciembre de 2016, divulgado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. En ese oficio se menciona que derivado de los hechos revelados, se advierte una serie de violaciones graves a los contratos celebrados por parte de PEMEX con Odebrecht, principalmente en los compromisos contra la corrupción, los cuales “impiden mantener la relación entre ambas empresas”.

El 10 de febrero de 2017, Constructora Norberto Odebrecht, S. A., presentó ante el Titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la entonces Procuraduría General de la República un oficio en el que manifestó que Odebrecht S. A., reconoció la responsabilidad respecto de los hechos divulgados el 21 de diciembre de 2016, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, sobre el pago a servidores públicos en México para garantizar beneficios relacionados a contratos de obra pública. En ese escrito, Constructora Norberto Odebrecht, S. A., manifestó su plena disposición y voluntad a colaborar en el esclarecimiento de cualquier ilícito cometido dentro del territorio nacional, y declaró aceptar el pago de compensaciones económicas por los posibles daños cometidos; comprometiéndose a actuar en estricto apego a las mejores prácticas internacionales en materia de integridad corporativa, transparencia, ética y gobernanza, y así asegurar la continuidad de sus operaciones y actividades.



Las acusaciones que las autoridades del Estado mexicano han realizado en contra de Constructora Norberto Odebrecht, S. A. y de Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A. de C. V., fueron a partir de las confesiones realizadas ante la entonces Procuraduría General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública realizadas el 10 de febrero y el 15 de marzo de 2017, respectivamente; hay una coincidencia de esos momentos con el inicio de procedimientos administrativos sancionadores.

Las declaraciones que realizó Constructora Norberto Odebrecht, S. A., ante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública deben recibir, en reciprocidad, los beneficios que los colaboradores deben tener en cumplimiento de los compromisos internacionales que México tiene contraídos para la asistencia jurídica mutua, anteriormente analizados. Beneficios, que como ya se analizó se extienden a las materias penal, administrativa y civil. Esos compromisos, al ser acuerdos suscritos por el Estado mexicano, obligan a todas las autoridades nacionales.

El 16 de febrero de 2017, la Procuraduría General de la República suscribió un convenio con Brasil, por el cual las autoridades de ese país se comprometieron a proporcionar la información referente a la investigación; las autoridades de México, por su parte, se comprometieron a no ejercer **ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de Odebrecht**; los convenios, como ya se mencionó, fueron ratificados por México en tres ocasiones, uno en fecha 16 de febrero y dos el 14 de junio de 2017.

En el "*Termo de Compromisso de Especialidade e de Limitacao de Uso de Provas*", Solicitud No. 1.00.000.003287/2017-21-PGR, por el cual la Procuraduría de México, en representación del Estado mexicano, se comprometió a conceder

inmunidad (penal, civil y administrativa) a todas las empresas del Grupo Económico Odebrecht y sus colaboradores (personas físicas), con relación a los hechos delictivos objeto del *Plea Agreement* relacionados con México.

Debido a que hay una coincidencia en los tiempos en que se iniciaron los procedimientos administrativos sancionatorios, en contra de las empresas de Odebrecht en México con las declaraciones que Constructora Norberto Odebrecht, S. A. presentó ante la entonces Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública, existe la sospecha de que el Estado mexicano inició acciones administrativas en contra de la empresa y sus funcionarios en violación a los acuerdos internacionales suscritos por él para la investigación de los hechos dados a conocer por la Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, el 21 de diciembre de 2016.

A pesar de que los procedimientos sancionatorios iniciados por el Estado Mexicano son ajenos a los hechos declarados por Odebrecht ante autoridades de Brasil y el Departamento de Justicia Norteamericano, los mismos se hicieron en un contexto mediático de respuesta a la filtración de dichas declaraciones, materializando una persecución ilegal del Estado Mexicano, al aparentar la investigación y sanción de los hechos confesados por Odebrecht mediante procedimientos sancionatorios ajenos a los hechos objeto de dichas declaraciones y que carecen de sustento legal alguno, cuestión que debe ser tomada en cuenta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar su investigación.

2.2.2. El efecto corruptor que generaría la utilización de las declaraciones de Odebrecht

El efecto corruptor son las consecuencias de aquella conducta o conjunto de conductas, intencionadas o no intencionadas, por parte de las autoridades, que producen condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria.⁴⁴ Es decir, dicho efecto implica que tanto el procedimiento como sus resultados, se contaminan ante una actuación viciada de la autoridad, lo que provoca condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria o de acusación, condicionando la fiabilidad no sólo del acto originario, sino de todo el caudal probatorio sobre el que ejerce un reflejo.⁴⁵

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el efecto corruptor de los procesos se actualiza cuando, en un caso concreto, concurren las siguientes circunstancias:⁴⁶

1. Que la autoridad policial o ministerial realice alguna conducta fuera de todo cauce constitucional y legal;
2. Que la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven a la falta de fiabilidad de todo el material probatorio; y

⁴⁴ Véanse las siguientes sentencias de la de la Corte Suprema de Estados Unidos, las cuales utilizan términos similares para referirse al concepto apntado: *United States v. Wade* (1967), *Stovall v. Denno* (1967), *Foster v. California* (1969), *United States v. Ash* (1973), *Neil v. Biggers* (1972), *Moore v. Illinois* (1977), *Mason v. Brathwaite* (1977) y *Perry v. New Hampshire* (2011).

⁴⁵ PRUEBA IMPERFECTA. INAPLICACIÓN DE LA REGLA DE EXCLUSIÓN Y EFECTO CORRUPTOR DE LA PRUEBA ILÍCITA. [TA]: 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 57, Agosto de 2018; Tomo III, Pág. 3020. XVII 1o.P.A 72 P (10a.). Registro No. 2 017 768.

⁴⁶ EFECTO CORRUPTOR DEL PROCESO PENAL. CONDICIONES PARA SU ACTUALIZACIÓN Y ALCANCES. [TA]: 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013; Tomo 1; Pág. 537. 1a. CLXV/2013 (10a.). Registro No. 2 003 563.

3. Que la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que se afecte de forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión.

Si el Ministerio Público llegara a utilizar las pruebas obtenidas bajo los compromisos de cooperación internacional que adquirió México para incriminar a Odebrecht, sería una actuación ilegal que rompería con el principio de buena fe ministerial, el cual, al ser quebrantado, tendría un efecto corruptor en los procesos, situación que generaría una violación el principio de seguridad jurídica de Odebrecht, como más adelante se explicará. Además, se tendría que considerar que sería violatoria del principio constitucional previsto en el artículo 20, apartado A, fracción IX, que establece: "Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula".⁴⁷

Otro efecto corruptor sería el que se genera en las autoridades administrativas, como es la Secretaría de la Función Pública, que predispongan el inicio de procedimientos administrativos sancionadores, a partir de las confesiones que fueron formuladas bajo el amparo de compromisos internacionales. En estos casos, el efecto corruptor se genera a partir de condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conllevan la falta de fiabilidad de todo el material probatorio, viciando tanto el procedimiento en sí mismo como sus resultados.

⁴⁷ Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el siguiente criterio: PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO. [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 226. 1a. CLXII/2011. Registro No. 161 221.

2.2.3. La voluntad de colaborar en el esclarecimiento de los hechos ilícitos confesados, y el derecho de obtener los beneficios que generan esas confesiones

No obstante la actuación de las autoridades mexicanas, la voluntad de colaborar con estas se sigue manifestando por parte de la Constructora Norberto Odebrecht, S. A., ya que el pasado 27 de febrero de 2019, reiteró su disposición y petición ahora ante la Fiscalía General de la República (antes lo había hecho ante la Procuraduría General de la República), para esclarecer los ilícitos confesados por Odebrecht y divulgados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, el 21 de diciembre de 2016, a fin de mejorar la situación jurídica prevaleciente.

Constructora Norberto Odebrecht, S. A. presentó el escrito CNO-PM-001-2017, de fecha 15 de febrero de 2017, dirigido al Director Jurídico de Petróleos Mexicanos, por el cual le da respuesta al oficio DJ-033-2017, de 2 de febrero de 2017, con el fin de proporcionarle información relacionada con el comunicado de prensa del 21 de diciembre de 2017, antes mencionado.

A pesar de que en la *Plea Agreement* CR No. 16-643 (RJD), del 21 de diciembre de 2016, Odebrecht reconoció haber pagado sobornos a oficiales mexicanos por [REDACTED] a autoridades del Estado mexicano para obtener diversos contratos, no existe un correcto seguimiento de los hechos para sancionar a esas autoridades. En específico se señaló en dicho *Plea Agreement* CR No. 16-643, que se realizó el pago indebido de [REDACTED] [REDACTED] a un funcionario público en el contexto de una contratación pública federal entre los años de 2013 y 2014.

Como quedó señalado, Constructora Norberto Odebrecht, S. A., ha tratado por diversos medios de colaborar con las autoridades mexicanas para arribar a un acuerdo reparatorio de los posibles daños, con base en la ley y en la capacidad de pago de la empresa.

Es de destacar que en el sistema jurídico mexicano existe un derecho fundamental de obtener beneficios si se realiza una ayuda eficaz en la investigación y persecución de delitos, en materia de delincuencia organizada; este derecho se encuentra previsto en el artículo 20, apartado B, fracción III, segundo párrafo, constitucional: "La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada". Para el caso en estudio, ese derecho fundamental se encuentra también reconocido en los acuerdos internacionales ratificados por México el 16 de febrero y el 14 de junio de 2017, en los que se le otorga el beneficio a la empresa de que no se ejerza en contra de ella y de sus integrantes ninguna acción civil, administrativa o penal, con base en los hechos ilícitos confesados.

En el caso particular es evidente que Odebrecht, ha confesado ante autoridades nacionales y extranjeras su responsabilidad en los ilícitos de que ha sido acusada. Ha manifestado su interés en reparar los daños y perjuicios que causó. Ha manifestado su interés en que su actuación sea revisada por las autoridades competentes, en esa virtud, en respeto del derecho que tiene a que se presuma que está obrando de buena fe, merece ser creída y a que se le permita seguir trabajando con estricto apego a la Ley.

Como se mencionó, las declaraciones obtenidas con engaños, como el acuerdo de no utilizarlas en determinadas investigaciones, cuando se presentan

en un proceso, no deben ser admitidas ni tomadas en consideración por el juzgador en razón de violentar el derecho de defensa.⁴⁸ Esto es parte del derecho a la no autoincriminación que comprende "la prohibición dirigida a las autoridades de obtener evidencia auto incriminatoria producida por el propio inculpado a través de coacción o engaño."⁴⁹

El derecho a la no autoincriminación protege el derecho del individuo a no formular manifestaciones, a no decir o no hacer declaraciones verbales o escritas que lo pudieren incriminar; también implica que pueda colaborar y presentar aquellos datos que se le requieran; esto último lo puede hacer a través de un acuerdo, que impliquen una serie de restricciones para no verse afectado más allá de lo convenido.

El derecho a la no autoincriminación está reconocido en la fracción II del apartado A del artículo 20 constitucional, y en los artículos 189 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como en el artículo 8.2, inciso g), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los textos de los preceptos son los siguientes:

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

⁴⁸ Coracca Pérez, Alex, *La garantía constitucional de la defensa procesal*, p. 484.

⁴⁹ DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. CASO EN QUE DEBE DECLARARSE NULA Y EXCLUIRSE DEL MATERIAL PROBATORIO SUSCEPTIBLE DE VALORACIÓN LA PRUEBA QUE INTRODUCE AL PROCESO UNA DECLARACIÓN INCRIMINATORIA DEL IMPUTADO. Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 19, Junio de 2015; Tomo I; Pág. 579. 1a. CCXXIII/2015 (10a.).

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;

De la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Artículo 8. Garantías Judiciales

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

Para garantizar que este derecho no sea violado, "la declaración autoincriminatoria debe excluirse del material probatorio susceptible de valorarse con independencia del medio a través del cual se haya introducido formalmente al proceso"⁵⁰. La decisión de ejercer el derecho a la no autoincriminación no sólo debe ser respetada y su posibilidad garantizada, sino que no puede, por ninguna

⁵⁰ DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. CASO EN QUE DEBE DECLARARSE NULA Y EXCLUIRSE DEL MATERIAL PROBATORIO SUSCEPTIBLE DE VALORACIÓN LA PRUEBA QUE INTRODUCE AL PROCESO UNA DECLARACIÓN INCRIMINATORIA DEL IMPUTADO. Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 19, Junio de 2015; Tomo I; Pág. 579. 1a. CCXXIII/2015 (10a.).

circunstancia, ser utilizada en perjuicio de la persona o como un argumento para motivar una sentencia condenatoria.⁵¹

2.2.4. El derecho de reinserción social de Odebrecht

Existe una clara intención de Odebrecht de colaborar con las autoridades mexicanas en el esclarecimiento de los ilícitos confesados, sin embargo, como se analiza en el siguiente apartado, existe un contexto de persecución del Estado mexicano, mediante procedimientos administrativos ajenos a los hechos declarados por Odebrecht, pero con la apariencia mediática de corresponder a dichas confesiones.

Dentro de este apartado procede hacer algunas consideraciones respecto del derecho a la reinserción que tiene toda persona.

En el sistema constitucional y penal mexicano, en principio, las penas tienen como objetivo sancionar un delito; pero ellas, de acuerdo con el artículo 18 constitucional, también están encaminadas a reeducar al infractor para que, como un ente social, se reincorpore como un miembro más a la sociedad a la que ha ofendido, como un miembro más.

En el sistema de derechos mexicanos no existe la exclusión social eterna de nadie. Todos, incluyendo a quienes han violado la Ley, tienen derecho a que,

⁵¹ DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. IMPLICACIONES QUE DERIVAN DE RESPETAR SU EJERCICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL DEL 18 DE JUNIO DE 2008).

Localización: [TA], 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 26, Enero de 2016; Tomo II; Pág. 967, 1a. V/2016 (10a.).

una vez compurgada la pena que les fue impuesta, se le permita reinserirse con plenos derechos y obligaciones.

Nadie tiene facultad para excluir a alguien de la sociedad a la que pertenece. Este concepto de permanencia eterna a un grupo social se corroborado con la prohibición que tiene el legislador de no prever como pena o sanción el destierro, sin importar que sea definitivo o temporal.

Odebrecht, una vez que ha admitido su culpa (con lo que pretende compurgar sus penas y pagar la deuda que tiene con la sociedad) tiene derecho a la reinserción, lo que implica la posibilidad de ser incorporada a ella con plenitud de derechos y obligaciones.

En el derecho mexicano existen otras instituciones que procuran la reinserción: la amnistía y el indulto. Éstas van encaminadas a suavizar el rigor de la Ley cuando se observa que el infractor ha dado muestras de arrepentimiento y es considerado como digno de volver a la sociedad a que ofendió.

2.3. CONCLUSIONES

Los acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano para la cooperación de asistencia jurídica, en específico de los hechos ilícitos confesados por Odebrecht, están encaminados a preservar la dignidad de esta persona moral, por cuanto a que se obtiene un beneficio en la investigación de un ilícito (que de otra forma no se podría obtener) a cambio de que la autoincriminación no represente perjuicios (en el ámbito penal, civil y administrativo) adicionales a los que deriven de la investigación en el cual se proporcionan.

Es claro el sometimiento de la responsabilidad que le corresponde a la empresa, por eso su voluntad de colaborar en el esclarecimiento de los ilícitos para generar los acuerdos reparatorios correspondientes, pero la utilización de las declaraciones en otras investigaciones o fines no admitidos, ya sea de carácter penal, administrativa o civil, son en perjuicio de su dignidad como declarante.

Hay una coincidencia de los momentos del inicio de procedimientos administrativos sancionadores (los cuales se precisan en los siguientes apartados) con las confesiones realizadas ante la entonces Procuraduría General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública realizadas el 10 de febrero y el 15 de marzo de 2017, respectivamente, lo cual es un indicio de la utilización de esas declaraciones para iniciar acciones en violación a los compromisos internacionales que México tiene contraídos, para la asistencia jurídica mutua en el esclarecimiento de los hechos ilícitos en los que está involucrada la empresa.

Esos beneficios otorgados a Odebrecht son de rango fundamental, pues derivan de los beneficios que se puede obtener por la ayuda eficaz en la investigación y persecución de delitos (artículo 20, apartado B, fracción III, de la Constitución General), y que se especifican en los acuerdos internacionales ratificados por México el 16 de febrero y el 14 de junio de 2017. Lo cual se complementa con el derecho de no autoincriminación (artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución General) en el que está inmerso la posibilidad de colaborar y presentar aquellos datos que se le requieran a través de un acuerdo que implique una serie de restricciones para no verse afectado más allá de lo convenido.

La utilización de las confesiones obtenidas bajo los compromisos de cooperación internacional que adquirió México para perseguir a Odebrecht, sería

una actuación ilegal que tendría un efecto corruptor en los procesos, como los iniciados en la vía administrativa en contra de la empresa, situación que viola el principio de seguridad jurídica.

Finalmente, Odebrecht, una vez admitida su culpa, tiene el derecho a la reinserción social (artículo 18 de la Constitución General), a que se reincorpore como un miembro más de la sociedad, reinsertándose con plenos derechos y obligaciones.

3. DENEGACIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA Y ACUSACIONES DEL ESTADO MEXICANO EN CONTRA DE ODEBRECHT

El presente apartado muestra un contexto general sobre la situación que se genera a la empresa Odebrecht, por razón de que se le ha impedido colaborar y acceder a la justicia, para esclarecer la verdad sobre los hechos ilícitos confesados; además, se relatan las acciones que distintas autoridades han ejercido en contra de la empresa, y que coinciden con el momento de las confesiones.

Si bien, de conformidad con la Ley, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no es competente para conocer las violaciones a derechos humanos cometidas a través de actos jurisdiccionales, es necesario su conocimiento a fin de que se determine la posible persecución estatal en contra de la empresa a raíz de las citadas confesiones.

3.1. NEGACIÓN DE LAS AUTORIDADES MEXICANAS PARA ACEPTAR LA COLABORACIÓN DE ODEBRECHT

La empresa Odebrecht, como quedó analizado en los apartados anteriores y como expresado en la Queja que presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha estado dispuesta a colaborar con el Estado mexicano para el esclarecimiento de los hechos. Al respecto es conveniente destacar los siguientes actos que se han realizado ante las autoridades mexicanas:



Primero. El 10 de febrero de 2017, Constructora Norberto Odebrecht, S. A., presentó un escrito ante la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) en el que da a conocer su disposición y voluntad de colaborar para el esclarecimiento de los hechos relacionados con la divulgación realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América el 21 de diciembre de 2016, acerca del documento denominado "*Plea Agreement*", suscrito por dicho departamento con la empresa Odebrecht, S. A., En ese escrito expresó lo siguiente:

1. El compromiso de Odebrecht, S. A. y sus compañías controladoras de modificar y mejorar sus prácticas corporativas y fortalecer su Sistema de Integridad, comprometiéndose a actuar en estricto apego a las mejores prácticas internacionales en materia de integridad corporativa, transparencia, ética y gobernanza.
2. Solicitó el inicio de pláticas ante la Procuraduría General de la República, con la finalidad de buscar un acuerdo para solventar y solucionar cualquier posible controversia o procedimiento legal, con el propósito de actuar en forma benéfica para el interés del Estado. Colaboración que se ofreció fuese de manera continua y permanente con el Estado mexicano. Para lo anterior sugiere un proceso de colaboración para llegar a acuerdos legales, que contribuya al esclarecimiento de hechos y circunstancias relacionados con las investigaciones en curso en Brasil y que tengan relación o efectos en México; proceder, de común acuerdo entre las partes, para realizar pagos o reparaciones económicas por los posibles daños en forma proporcional y considerando las capacidades de Odebrecht.

Segundo. El 27 de febrero de 2017, Constructora Norberto Odebrecht, S. A. presentó ante el Fiscal General de la República un oficio en el que reiteró su disposición y petición original (realizada ante el entonces Procuraduría General de la República) para colaborar en el esclarecimiento de los ilícitos confesados por Odebrecht, S. A. y divulgados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América el 21 de diciembre de 2016, a fin de explorar soluciones a la situación jurídica actual.

A pesar los intentos por colaborar anteriormente narrados, los cuales fueron negados por dichas autoridades del Estado mexicano, se han ejercido en contra de la Constructora Norberto Odebrecht, S. A., de facto, una persecución para inhibir y evitar el esclarecimiento de conductas confesadas por Odebrecht, S. A., ante autoridades extranjeras, lo que le ha impedido a la empresa el correcto ejercicio de sus actividades comerciales.

La Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos adscrita a la Secretaría de la Función Pública, negó cualquier colaboración con la Constructora Norberto Odebrecht, S. A., para investigar los hechos admitidos por esta.

Tercero. El 15 de marzo de 2017 la Constructora Norberto Odebrecht, S. A., presentó el escrito CNO-Mex-002-2017, ante la Secretaría de la Función Pública de la Administración Pública Federal en el que solicitó la apertura de un procedimiento para confesar su responsabilidad y suministrar datos sobre la comisión de conductas sancionadas por la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. En el mismo escrito, consideró que no había sido emplazada al procedimiento administrativo sancionador que inició la citada secretaría, por lo que manifestó su voluntad de colaborar de forma plena y continua con las autoridades competentes que lleven a cabo la investigación, a fin

de esclarecer los hechos y obtener el beneficio de reducción de las sanciones previsto en el artículo 31 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. En ese escrito presentó como Anexo 6 un documento que contiene la síntesis de los Relatos Presentados también a la Fiscalía Brasileña/DOJ, colaboración Eficaz en Brasil, "Pago a Funcionario Público en México".

Mediante oficio CNO-MEX-003-2017, de 24 de abril de 2017, la Constructora Norberto Odebrecht, S. A., reiteró ante el Titular de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos adscrita a la Secretaría de la Función Pública, la voluntad en la plena colaboración de los hechos divulgados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

Lo anterior se sustanció en el expediente 2017/PEMEX/DE313 ante el Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, en el cual, el 8 de junio de 2017, se emitió el "Acuerdo de Conclusión. Archivo por Falta de Elementos", en el que se consideró lo siguiente:

...no se advierten elementos de convicción suficientes que permitan establecer, modo, tiempo y lugar para acreditar los hechos constitutivos de la confesión que pretende Constructora Norberto Odebrecht, S.A., hacer valer en su favor, ya que los hechos que narra y los elementos que aporta resultan indeterminados y no reflejan vinculación material con alguna de las infracciones legales concretas y específicas que establece el artículo 8 de la misma Ley Federal en cita.

Por lo anterior, en el citado expediente, se resolvió que "no resulta procedente realizar el trámite para el otorgamiento del beneficio del artículo 31 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas".

Cuarto. El 16 de marzo de 2017, la Constructora Norberto Odebrecht, S. A., presentó formal denuncia y/o querrela ante la misma Procuraduría General de la República, en contra de quién o quienes resulten responsables, a fin de aportar los "relatos" o declaraciones cifradas relacionadas con los sobornos confesados por sus funcionarios a las autoridades de Brasil y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América e iniciar su colaboración con la Procuraduría General de la República, para el esclarecimiento de cualquier posible hecho ilícito acontecido dentro de territorio nacional, relacionado con los hechos divulgados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

Quinto. El 16 de marzo de 2017, Constructora Norberto Odebrecht, S. A., presentó un oficio ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, en Auxilio de la titular de la Agencia Sexta Investigadora CGI de la Unidad de Investigación y Litigación en la Ciudad de México de la Procuraduría General de la República, en el cual, en virtud de comparecer en atención al citatorio girado mediante oficio ministerial CGI-VI-025/2017, y con fundamento en el Acuerdo de Lenidad firmado por Odebrecht, S. A., con el Ministerio Público de Brasil el 1º de diciembre de 2016, reitera su interés por cooperar y colaborar con las autoridades mexicanas competentes, con la finalidad de aportar los datos de corroboración necesarios para aclarar los hechos y reparar los posibles daños que hayan sido causados el Estado Mexicano en la forma y términos que resulte procedente conforme a las leyes.

Sexto. La entonces Procuraduría General de la República obstruyó las investigaciones y aclaraciones de los hechos ligados a los Acuerdos de Cooperación, a través de incumplir con lo ordenado por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión de fecha 2 de octubre de 2018, dentro del expediente RRA

4436/18. En esta resolución se le ordenó "...elaborar y presentar ante este Instituto una versión pública de las actuaciones de los agentes del Ministerio Público...", dentro de la carpeta de investigación en el "Caso Odebrecht".

La Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) no ha acatado lo ordenado por el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales e, inclusive, ha externado que no transparentará, al menos durante los próximos 5 años, la investigación por los sobornos a funcionarios mexicanos.

En octubre de 2017 el entonces Procurador General de la República declaró haber concluido con las indagatorias sobre el caso de los sobornos de Odebrecht a autoridades de PEMEX.

3.2. ACUSACIONES DE LAS AUTORIDADES MEXICANAS EN CONTRA DE ODEBRECHT

A la par de la negativa de la Secretaría de la Función Pública para que permitiera canales de comunicación para el esclarecimiento e investigación de los hechos de corrupción que involucran a Odebrecht, esta dependencia y PEMEX Transformación Industrial emprendieron las siguientes acciones en contra de la empresa:

Primero. Sin que se diera la oportunidad de colaboración, el 12 de junio de 2017 se notificó a Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A., de C. V., Gleiber José de Faria y a Constructora Norberto Odebrecht, S. A., el inicio de los procedimientos administrativos sancionadores PTRI-S-001/2017, PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017, por la supuesta comisión de la conductas

que hacían presumir la infracción administrativa establecida en la fracción IV, del artículo 8º, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas; se imputa que durante la cesión del Contrato Tula II se suscribió indebidamente la Garantía Corporativa a que refiere la Cláusula 13, apartado A del citado contrato.

Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A. de C. V., y Constructora Norberto Odebrecht, S. A., no estaban obligados a acreditar sus capacidades técnicas, financieras y demás necesidades para el cumplimiento del Contrato de Tula II, al momento de la cesión de este, pues bastaba que se emitieran la garantía corporativa a que refiere la Cláusula 13, apartado A, del Contrato de Tula II.

Pemex Transformación Industrial expresó su consentimiento para que *Odebrecht Engenharia e Construção Internacional, S.A.*, emitiera la garantía corporativa a que refiere Cláusula 13, apartado A, del Contrato de Tula II. Por esa razón no se indujo a Pemex Transformación Industrial a ningún tipo de error o engaño.

No obstante lo anterior, en el procedimiento administrativo sancionador PTRI-S-001/2017 y sus acumulados PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017 se impusieron a Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A. de C. V., y Constructora Norberto Odebrecht, S. A., como sanciones administrativas: la inhabilitación temporal por el plazo de dos años, seis meses para participar en contrataciones públicas de carácter federal y una multa de

[REDACTED] a cada una de las citadas personas jurídicas. Esto representa una doble sanción de autoridades administrativas por la misma conducta.

Segundo. El 16 de junio de 2017 Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A. de C.V., recibió el "Aviso de Rescisión de Pleno Derecho por Evento de Incumplimiento", contenido en el oficio No. DCAS-DOPA-CPARTI-GCP-070-2017, a por virtud del cual Petróleos Mexicanos y Pemex Transformación Industrial informó la rescisión de pleno derecho del Contrato Tula II, omitiendo liquidar a la empresa cantidades equivalentes a cientos de millones de pesos, daños por utilidades y saldos pendientes derivados de la obra por ejecutar y pagar.

Tercero. El 25 de agosto de 2017 se le notificó a la Constructora Norberto Odebrecht, S.A. la resolución de fecha 24 de agosto de 2017, contenida en el oficio No. UR-DPTI-AR-187-2017, emitida por el Titular del Área de Responsabilidades, a través del cual se le informó del inicio del procedimiento administrativo de sanción a licitantes, proveedores y contratistas con número de expediente PTRI-S-005/2017, supuestamente por recibir pagos en exceso por el concepto de costos indirectos durante la ejecución del Contrato de Obra Pública, sobre la Base de Precios Unitarios, identificado con el número PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, que tenía por objeto, el "Acondicionamiento del Sitio, Movimiento de Tierras y Conformación de Plataformas para el Proyecto de Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo" (en adelante el "Contrato Tula I"); acuerdo de voluntades que ya había sido finiquitado a entera satisfacción de Pemex Transformación Industrial.

Debido a que se consideró que hubo un cobro indebido de costos indirectos, se argumentó que la Constructora Norberto Odebrecht, S. A., incurrió en la infracción establecida en el artículo 59, fracción III, de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada el 28 de noviembre de 2008 en el Diario Oficial de la

Federación, durante la ejecución del Contrato Tula I, pues a su juicio, se cobró indebidamente determinados costos indirectos. Lo anterior se pretendió acreditar a través de un Dictamen Contable Financiero, de fecha 21 de agosto de 2017, elaborado por el despacho Enrique Estrella y Asociados, S. C.; este documento tiene por objeto dictaminar los costos indirectos pagados por PEMEX Refinación a Constructora Norberto Odebrecht, S. A., en la ejecución del Contrato de Obra Pública.

El Titular del Área de Responsabilidades, fundó y motivó las conclusiones acusatorias de la resolución de fecha 24 de agosto de 2017, contenida en el oficio No. UR-DPTI-AR-187-2017, con base en ese dictamen. En el Acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, en el numeral IX de la parte de "HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA PRESUNTA INFRACCIÓN", el titular del Área de Responsabilidades hizo referencia al citado dictamen.

El Titular del Área de Responsabilidades, de conformidad con el dictamen contable financiero elaborado por "Enrique Estrella y Asociados, S. C.", concluyó que la empresa recibió un pago en exceso por la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] por concepto de costos indirectos, prueba que por las consideraciones que serán expuestas más adelante constituye una prueba ilícita.

Conforme a lo anterior el Titular de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Pemex Transformación Industrial impuso como sanción administrativa la inhabilitación temporal por el plazo de cuatro años para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con Dependencias, la Procuraduría General de la República, entidades de la Administración Pública

Federal, empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias.

Es evidente que no se tomó en cuenta que, durante la ejecución del Contrato de Tula I, Pemex Transformación Industrial aprobó todos y cada uno de los pagos efectuados a favor de Constructora Norberto Odebrecht, S. A.; y que Pemex Transformación Industrial formalizó el Finiquito de Trabajos del Contrato, por virtud del cual se acordó la extinción de las obligaciones y derechos derivados del Contrato de Obra Pública y sus Convenios Modificatorios.

Conforme al artículo 134 de la Constitución General para la prestación de servicios de cualquier naturaleza a favor del Estado, se deberá realizar adjudicación o una licitación pública. Cuando el Titular de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de la Función Pública, celebró con Enrique Estrella y Asociados, S. C., el supuesto Contrato de Prestación de Servicios de fecha 16 de agosto de 2017, lo hizo en contravención a esa norma, por lo que dicho documento se encuentra viciado de origen y, por ello, carece de valor legal alguno. Además, existen otras irregularidades sobre esta prueba que más adelante se desarrollan en este documento.

Cuarto. El 25 de septiembre de 2017 le fue notificado a la Constructora Norberto Odebrecht, S. A., la resolución de fecha 18 de septiembre de 2017, contenida en el oficio No. UR-DPTI-AR-254-2017, emitida por el Titular del Área de Responsabilidades, a través del cual se informa del inicio del procedimiento administrativo de sanción a licitantes, proveedores y contratistas con número de expediente PTRI-S-006/2017, por aparentemente cobrar indebidamente ciertas "Actividades Extraordinarias" del Contrato Tula I.

Lo anterior derivó del Contrato de Obra Pública celebrado el día 20 de noviembre de 2014 entre Constructora Norberto Odebrecht, S. A. y Pemex Refinación.

En términos de la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA del citado Contrato de Obra Pública, una vez recibidos físicamente los trabajos que fueron objeto de la contratación, con fecha 03 de diciembre de 2015, las partes formalizaron el Finiquito de Trabajos del Contrato, por virtud del cual se acordó la extinción de las obligaciones y derechos derivados del Contrato de Obra Pública y sus Convenios Modificatorios.

En este caso la autoridad imputó a Constructora Norberto Odebrecht, S. A., la posible comisión del artículo 59, fracción IV, de la Ley de Petróleos Mexicanos (abogada), en lo concierne a la conducta "Actuar con dolo o mala fe" complementada por elemento objetivo del tipo "en la celebración del contrato o durante su vigencia".

El día 7 de febrero de 2018, se notificó a Constructora Norberto Odebrecht, S. A., la resolución definitiva del Procedimiento Administrativo Sancionador, de misma fecha, contenida en el oficio No. UR-DPTI-AR-049/2018, en la que el Titular del Área de Responsabilidades, consideró que la empresa se ubicó en el supuesto del artículo 59, fracción IV, del ordenamiento ya citado, por lo que le impuso como sanción administrativa, la inhabilitación temporal por el plazo de dos años para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con Dependencias, la Procuraduría General de la República, Entidades de la Administración Pública Federal, Empresas Productivas del Estado y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

En contra de esa resolución Constructora Norberto Odebrecht, S. A., presentó una demanda de amparo indirecto que conoció el Juez Tercero en Materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo el expediente 250/2018. El 28 de septiembre de 2018 se resolvió en el sentido de sobreseer el juicio. En contra de esta sentencia, la empresa interpuso recurso de revisión del que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (expediente 381/2018), el cual lo resolvió en la sesión de 6 de marzo de 2019 en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y sobreseer el juicio de amparo indirecto. Resoluciones que, como se explicará más adelante, fueron emitidas inobservando diversos criterios judiciales sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generando una denegación de justicia.

Quinto. El 1 de octubre de 2018, Pemex Transformación Industrial promovió una demanda ordinaria civil en contra de Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A. de C.V., con motivo de las consideraciones vertidas en los procedimientos administrativos sancionadores PTRI-S-005/2017 y PTRI-S-006/2017.

El juicio ordinario civil se sigue en el expediente 430/2018, del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, promovido por Pemex Transformación Industrial. Las principales prestaciones demandadas son el pago de [REDACTED] por concepto de costos indirectos realizados a favor de la empresa durante la ejecución del Contrato de Obra Pública.

Sexto. El 11 de mayo de 2018, Pemex Transformación Industrial notificó a la Constructora Norberto Odebrecht, S. A., el "Aviso de Terminación Anticipada del

Contrato de Obra Pública sobre la base de Precios Unitarios y Costos Reembolsables No. DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A.4-14, (el "Contrato Salamanca"), cuyo objeto consiste en el "DESARROLLO DE LA FASE I DEL PROYECTO DE CONVERSIÓN DE RESIDUALES DE LA REFINERÍA DE SALAMANCA", argumentando ilegalmente "no contar con recursos presupuestales", omitiendo liquidar.

Séptimo. El 16 de agosto y 31 de octubre, ambos de 2018, les fue notificado a Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A. de C. V. y Constructora Norberto Odebrecht, S. A., respectivamente, el inicio de los procedimientos administrativos sancionadores PTRI-S-001/2018 y PTRI-S-002/2018, alegando supuestos incumplimientos contractuales suscitados durante la ejecución del Contrato de Tula I y el Contrato de Tula II.

El 12 de abril de 2019, en el expediente Número PTRI-S-001/2018, el Área de Responsabilidades de la Delegación en PEMEX Transformación Industrial de la Unidad de Responsabilidades de PEMEX, resolvió que la empresa Odebrecht Ingeniería y Constructora Internacional de México, S. A. de C. V., se ubicó en el supuesto del artículo 8, fracción VII de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, por lo cual se le impuso una multa de [REDACTED]

[REDACTED] montó que debe pagar al Servicio de Administración Tributaria; y la inhabilitó por un plazo de tres años para practicar contrataciones públicas de carácter federal.

La conducta sancionada en la resolución del expediente PTRI-S-001/2018, fue la de haber presentado información presuntamente falsa durante la celebración del Primer Convenio Modificadorio de Formalización de la Cesión de

los Derechos y Obligaciones del Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, con el propósito de lograr un beneficio consistente en que se le cedieran la totalidad de los derechos y obligaciones derivadas del citado convenio. Esto porque el 5 de diciembre de 2017, fecha en que se firmó dicho convenio, la empresa Odebrecht Ingeniería y Constructora Internacional de México, S. A. de C. V., manifestó en la declaración 2.7. de dicho documento que cumplía con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarias para celebrar y cumplir el contrato, lo que implica, presuntivamente, la presentación de información falsa ya que no contaba con el registro generador de residuos peligrosos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El 12 de abril de 2019, en el expediente Número PTRI-S-002/2018, el Área de Responsabilidades de la Delegación en PEMEX Transformación Industrial de la Unidad de Responsabilidades de PEMEX, resolvió que la Constructora Norberto Odebrecht, S. A., se ubicó en el supuesto del artículo 59, fracción IV de la Ley de Petróleos Mexicanos, por lo cual se le impuso la sanción de inhabilitación temporal por tres años, para participar por sí misma en algún procedimiento de contratación o celebrar contrato alguno.

La conducta sancionada en la resolución del expediente PTRI-S-002/2018 consiste en que durante la contratación y vigencia del Contrato de Obra Pública de Precios Unitarios PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, celebrado el 15 de febrero de 2014 entre PEMEX Refinación y Constructora Norberto Odebrecht, S. A., para el "Acondicionamiento del Sitio, movimiento de tierras, y conformación de plataformas para el proyecto de Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo", incluyendo sus convenios modificatorios, presuntamente actuó con dolo, al haber realizado cobros en exceso a PEMEX Refinación, en detrimento de su patrimonio por la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3.2.1. El efecto corruptor de la prueba ilícita utilizada por las autoridades administrativas para iniciar los Procedimientos Administrativos Sancionadores.

Existe una aparente simulación gestada entre la titular de la Unidad de Responsabilidad de Petróleos Mexicanos de la Secretaría de la Función Pública y el Director Jurídico de PEMEX debido a que dicha Secretaría entregó el dictamen contable financiero de fecha 21 de agosto de 2017, elaborado por "Enrique Estrella y Asociados, S. C." a PEMEX mediante el oficio UR-DPTI79/2018. El titular de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos de la Secretaría de la Función Pública la remitió, sin mediar solicitud alguna, al Director Jurídico de Pemex el referido dictamen contable. La simulación radica en que fue PEMEX quien contrató y obtuvo el citado dictamen de "Enrique Estrella y Asociados, S. C." y no al revés. Esto implica que las autoridades orquestaron una simulación que vicia la fiabilidad del dictamen.

El despacho "Enrique Estrella y Asociados, S. C.", reconoció expresamente en el propio Dictamen Contable Financiero que fue contratado por PEMEX el 16 de agosto de 2017 para preparar el dictamen contable que se utilizó después por la Secretaría de la Función Pública como documento base de la acción de las acusaciones que esta dependencia formuló en contra de Odebrecht, en el procedimiento administrativo sancionador PTRI-S-005/2017 iniciado el 24 de agosto de 2017, y en la demanda civil promovida por PEMEX en contra de Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A. de C. V.

En el escrito inicial de demanda del juicio ordinario civil, expediente 430/2018, seguido ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, PEMEX reconoció expresamente que mediante oficio TUR-PEMEX-0220-2017 de 13 de Octubre de 2017, la titular de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos de la Secretaría de la Función Pública remitió a la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos el dictamen contable financiero donde se estableció un supuesto pago en exceso a la empresa por la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] Lo anterior, a sabiendas de que PEMEX firmó un finiquito con la empresa, y de que fue PEMEX quien contrato los servicios del despacho que realizó el dictamen contable financiero.

Lo anterior representa condiciones sugestivas que afecten la fiabilidad de toda la evidencia incriminatoria y vulneren de forma total el derecho de defensa de Odebrecht. El hecho de que las autoridades competentes admitan y valoren el dictamen contable financiero del 21 de agosto de 2017 (prueba que resulta ilícita) contamina la validez de los procesos.

Además, Constructora Norberto Odebrecht, S. A., solicitó al Comité de Transparencia en Solicitudes de Información y Datos Personales de la Secretaría de la Función Pública información sobre su procedimiento de contratación. La contestación del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública se realizó el 23 de octubre de 2018, mediante Acta de la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinara, en la cual se señaló que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos no cuenta con facultades legales para la licitación, adjudicación o contratación para celebrar el Contrato de Prestación de Servicios con el Despacho denominado "Enrique Estrella y Asociados, S. C." para la

elaboración del dictamen de fecha 21 de agosto de 2017. En la parte conducente, en la citada Acta, se sostiene lo siguiente:

...la UR-PEMEX manifestó que si bien en ejercicio de sus funciones, requirió el dictamen contable financiero, carece de competencia para atender la solicitud, en virtud que de conformidad con lo señalado en los artículos 98 y 99 del RISFP, no posee atribuciones para llevar a cabo cualquier procedimiento de licitación, adjudicación y/o contratación para adquisición, arrendamiento, obra pública y/o servicio...

La inexistencia del procedimiento de licitación también consta en la resolución CT-PTRI-126/2018, del 31 de octubre de 2018, en la cual el Comité de Transparencia de PEMEX Transformación Industrial manifestó que es inexistente documentación alguna que verse sobre el procedimiento de licitación, adjudicación y/o contratación para celebrar el Contrato de Prestación de Servicios con el Despacho denominado "Enrique Estrella y Asociados, S.C." para la elaboración del citado Dictamen Contable Financiero.

De las constancias que obran en la queja se desprende que:

1. Pemex contrató con fecha 16 de agosto de 2017 al despacho Enrique Estrella y Asociados, S.C., para elaborar el Dictamen Contable Financiero;
2. El despacho Enrique Estrella y Asociados, S.C., emite el Dictamen Contable Financiero en tres días hábiles posteriores, mismo que consta de 3,610 fojas.
3. Presumiblemente y sin fundamento legal alguno, Pemex entrega el Dictamen Contable Financiero a la Secretaría de la Función Pública quien realizó un análisis de la información e inicia un

procedimiento administrativo sancionador (PTRI-S-005/2017), el 24 de agosto de 2017, esto es, tres días hábiles después.

4. Es cuestionable y existen elementos objetivos para determinar que no es razonable que las autoridades involucradas hayan realizado el análisis y dictaminación de dicha información en los tiempos antes señalados.
5. Incongruentemente y a pesar de que Pemex contrato los servicios profesionales de Enrique Estrella y Asociados, S.C., mediante oficio TUR-PEMEX-0220-2017, de 13/10/2017, la Titular de la Unidad de Responsabilidades en Pemex, simula la entrega del Dictamen Contable Financiero al Director Jurídico de Derecho Privado de Pemex, aludiendo que dicho dictamen se obtuvo *“con motivo de las investigaciones llevadas a cabo en el expediente citado al rubro...”*; investigaciones de las que no hay registro alguno.

Con lo anterior hay indicios de que la Secretaría de la Función Pública y PEMEX han generado prácticas viciosas, cuyos frutos están siendo aprovechados por ella en los procedimientos iniciados en contra de Odebrecht, induciendo a que las autoridades jurisdiccionales participen de la conducta irregular al otorgarles eficacia a la prueba ilícita consistente en un dictamen viciado. Hay un abuso de funciones de las citadas autoridades. También, el titular de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos de la Secretaría de la Función Pública y el Director Jurídico de PEMEX simularon la entrega del dictamen contable financiero supuestamente obtenido por la Secretaría de la Función Pública durante una investigación a PEMEX, para que este lo utilizara en su beneficio como tercero afectado.

El dictamen contable financiero de fecha 21 de agosto de 2017, elaborado por "Enrique Estrella y Asociados, S. C.", es un material probatorio afectado por el efecto corruptor que provoca su falta de fiabilidad, situación que impacta los derechos de la empresa, ya que es indudable que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege el derecho que tiene toda persona a que, en caso de ser condenada, su condena no tenga como base evidencia de cuestionable fiabilidad, especialmente cuando ésta es imputable a la actuación ilegal de la autoridad.

La falta de fiabilidad del dictamen contable financiero es una consecuencia de la arbitrariedad de las autoridades, con lo cual no se tutelan efectivamente los derechos fundamentales de la empresa en la búsqueda de la verdad.

Los efectos de la ilicitud del dictamen contable financiero en cuestión, se extiende también a las pruebas o conclusiones que derivan de esa prueba ilícita; esto es, lo que se conoce como la doctrina de "los frutos del árbol envenenado".

Aunado a lo anterior, otra cuestión sugestiva que evidencia una actuación viciada por parte del Estado mexicano es que a la fecha no hay procedimientos sancionadores iniciados en contra de servidores o ex servidores públicos de Petróleos Mexicanos, a pesar de que los incumplimientos administrativos de Odebrecht fueron autorizados por ellos.

Por último, una cuestión en la que se debe poner especial atención es la designación de Arely Gómez González, ex Procuradora General de la República, como Contralora del Poder Judicial de la Federación el pasado 23 de enero de 2019, cargo en el que tiene facultades para sancionar a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.



3.2.2. Denegación a Odebrecht del acceso a la justicia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que cuando la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por ello, la Corte Interamericana considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana.⁵²

En el presente caso las autoridades administrativas adscritas a la Secretaría de la Función Pública no dieron acceso a Odebrecht para plantear las diversas irregularidades a través de acciones como las siguientes:

1. Incidente de Traslación del Tipo y Adecuación de la Pena;
2. Incidente de Litisconsorcio Pasivo Necesario y Acumulación; y,
3. Incidente de Control Difuso de Regularidad Constitucional

⁵²Corte Interamericana de Derechos Humanos *CUADERNILLO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Nº 12: DEBIDO PROCESO*, p. 12. Disponible en <http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/debidoproceso-2017.pdf>, consultada el 2 de mayo de 2019.

Lo anterior bajo el argumento de que dichos incidentes no fueron presentados dentro del término de 5 días a partir del momento en que Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A. de C. V., y Constructora Norberto Odebrecht, S. A. fueron notificados del inicio de los procedimientos administrativos sancionadores PTRI-S-001/2017 y PTRI-S-004/2017. Esto es incorrecto porque, conforme a los criterios del Poder Judicial de la Federación, pueden promoverse en cualquier etapa de los procedimientos administrativos sancionadores.

Por otra parte, se advierte que el 16 de abril de 2018, la Unidad de Responsabilidades en Pemex Transformación Industrial resolvió los procedimientos sancionadores PTRI-S-001/2017 y PTRI-S-004/2017 para el efecto de imponer a cada persona moral, la inhabilitación temporal por el plazo de 2 años, seis meses para participar en contrataciones públicas de carácter federal y una multa de [REDACTED]

Con motivo de lo anterior, las empresas promovieron demanda de amparo indirecto reclamando tanto la citada resolución, como la constitucionalidad de las disposiciones legales aplicadas en la misma resolución. Sin embargo, dichas demandas de amparo, en contra de criterios sustentados por el Poder Judicial de la Federación, fueron sobreesididas por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, por considerar que las quejasas debían promover la demanda en contra del acuerdo de inicio de los procedimientos sancionadores.

Así, la citada sentencia contraviene directamente lo garantizado en las jurisprudencias obligatorias de rubro "TELECOMUNICACIONES. ARTÍCULOS 91 Y 92 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. PARA QUE PROCEDA SU IMPUGNACIÓN EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU ESFERA JURÍDICA.", "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.", "AMPARO INDIRECTO. PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA EN UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO SI EL QUEJOSO RECLAMA ÚNICAMENTE LA AFECTACIÓN DE DERECHOS PROCESALES Y NO SUSTANTIVOS.", "EJECUCION IRREPARABLE SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS."

Si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene competencia para el caso de las violaciones cometidas por las autoridades jurisdiccionales, la narración de lo anterior demuestra una clara actitud de las autoridades mexicanas para cerrar las posibilidades de defensa a Odebrecht, y que a raíz de ese acceso pueda esclarecer y coadyuvar en los temas declarados el 21 de diciembre de 2016 ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

La denegación de justicia se ve también en los casos de las resoluciones del juicio de amparo que Constructora Norberto Odebrecht, S. A., presentó en contra de la resolución del 7 de febrero de 2018 en el procedimiento administrativo

sancionador PTRI-S-005/2017, contenida en el oficio No. UR-DPTI-AR-049/2018. El juicio de amparo se sobreseyó por resolución del el Juez Tercero en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el 28 de septiembre de 2018, en el expediente 250/2018; y se confirmó por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el recurso de revisión 381/2018.

Al parecer existe una actuación negligente y desapegada a derecho por parte de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio de amparo y su recurso de revisión antes citados, porque hay una tendencia ilegal de sostener que en el juicio de amparo se actualizó la causal de improcedencia relativa al consentimiento tácito de la norma reclamada, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque, a consideración de los juzgadores, el quejoso no combatió el primer acto de aplicación del artículo 59, fracción IV de la Ley de Petróleos Mexicanos abrogada.

Los juzgadores de amparo adoptaron la postura relativa de que el primer acto de aplicación de la norma heteroaplicativa reclamada como inconstitucional se generó en el acuerdo de inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, y no en la resolución definitiva mediante en la que la autoridad responsable determinó que se había actualizado la conducta sancionada, como es lo correcto.

Los integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión 381/2018, sostuvieron que "se debe atender al primer acto que concrete la hipótesis jurídica controvertida en perjuicio del peticionario, siendo evidente que desde el acuerdo de inicio de procedimiento se actualizó el supuesto normativo contemplado en cada uno de los preceptos mencionados". Esos argumentos son tendientes a sostener que en ese asunto se actualizaba la causal de improcedencia relativa al consentimiento tácito de la

norma reclamada prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa combatió un ulterior acto de aplicación del artículo 59, fracción IV de la Ley de Petróleos Mexicanos Abrogada

El anterior razonamiento lo sustentaron los magistrados con fundamento en la jurisprudencia de rubro: AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO PRESUPUESTO QUE SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY, la cual, en su parte conducente establece: "cuando la resolución dictada dentro del procedimiento, aun sin ser la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del promovente y se reclama también ésta, surge una excepción al principio de definitividad, en virtud de la indivisibilidad que opera en el juicio de garantías, que impide el examen de la ley, desvinculándola del acto de aplicación que actualiza el perjuicio." Este criterio no era aplicable al caso porque es un criterio superado por las siguientes jurisprudencias del Pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación:

Época: Novena Época

Registro: 170866

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXVI, Diciembre de 2007

Materia(s): Común

Tesis: P./J. 78/2007

Página: 5

AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad.

Contradicción de tesis 8/2006-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, y los Tribunales Colegiados Décimo Primero, Octavo y Noveno, todos en Materia Civil del

Primer Circuito, 9 de abril de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert.

Época: Novena Época

Registro: 165618

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXXI, Enero de 2010

Materia(s): Administrativa

Tesis: 2a./J. 215/2009

Página: 267

AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA CUANDO SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

De los artículos 16, fracción XXVIII, 79, fracción X, 110, 121 a 123, 125, 127, 134 y 136 a 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en relación con los diversos 73, fracciones XII, párrafo tercero, y XV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se impugne la inconstitucionalidad de una ley dentro de un procedimiento administrativo disciplinario seguido con fundamento en el referido artículo 136 y el Consejo de la Judicatura Estatal aplique como sanción al servidor público la suspensión, destitución o inhabilitación, solamente procederá el juicio de amparo indirecto, como excepción al principio de definitividad, sin necesidad de esperar a que el

Pleno del Tribunal Superior de Justicia dicte la resolución definitiva al resolver el recurso de revisión oficioso, cuando se acredite que es el primer acto de aplicación de la ley reclamada, y además de imposible reparación. Lo anterior es así, porque razonar en sentido contrario llevaría a paralizar todos los procedimientos administrativos con el solo hecho de impugnar la inconstitucionalidad de la ley, lo que es contrario al fin perseguido por el juicio de amparo. Además, en el caso, es aplicable por analogía, lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo.

Contradicción de tesis 398/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 18 de noviembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas.

Se concluye que las consideraciones en las que se fundamentaron las resoluciones anteriormente señaladas son criterios que tenían prohibido aplicar además de que inobservaron jurisprudencia vinculante, lo cual es erróneo, porque conforme al artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, se puede optar por promover el juicio de amparo o por interponer los recursos o medios ordinarios.

Contrario al criterio sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró correctamente que el acuerdo de inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador PTRI-S-005/2017 no puede considerarse como el acto de aplicación de una norma, ni es un acto de ejecución irreparable.

Además, la empresa, en su calidad de quejosa, tenía imposibilidad de reclamar el acuerdo de inicio del Procedimiento Administrativo porque este no constituye un acto de imposible reparación además de ser intraprocesal, por lo tanto, no era susceptible de combatirse a través del juicio de amparo (artículo 107, fracción III de la Ley de Amparo).

Al haber decretado un sobreseimiento que jurídicamente no tiene sustento, implica una denegación de justicia. Esto es violatorio del artículo 17 constitucional que establece: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.". En el caso en estudio la violación es aún más grave por cuanto a que no existen jurídicamente esos formalismos procedimentales, sino que por negligencia se aplicaron estos. Además, para decretar un sobreseimiento no debe existir duda de su actualización (artículo 65 de la Ley de Amparo).

Derivado de esa actuación irregular del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Constructora Norberto Odebrecht, S. A., presentó el 21 de mayo de 2019, en contra de los integrantes de dicho tribunal, una queja administrativa ante la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación.

3.3. CONCLUSIONES

Odebrecht ha mostrado su total voluntad a colaborar con las autoridades mexicanas en el esclarecimiento de los ilícitos en que incurrió y a que se finquen las responsabilidades que legalmente le corresponden.

Hay una clara actitud de las autoridades mexicanas para cerrar las posibilidades de defensa a Odebrecht, y que a raíz de ese acceso pueda esclarecer y coadyuvar en los temas declarados el 21 de diciembre de 2016 ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

Por virtud de la confesión de su culpa y allanamiento a las reclamaciones de que es objeto, se debe dar efectos plenos a esa entrega que hace. Al respecto es necesario que se tome en cuenta que sería faltar al imperativo de actuar de buena fe si pretendiera fundar cualquier acusación en una prueba obtenida con base en la protección a la confesión que prevén los acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Los procedimientos administrativos sancionadores instaurados por la Secretaría de la Función Pública, y las acciones legales ejercidas por Pemex Transformación Industrial, no tienen relación con hechos de corrupción confesados por Odebrecht S.A., ante autoridades extranjeras, sino únicamente con supuestos incumplimientos contractuales. En otras palabras, esas acciones del Estado en contra de la empresa, no se encuentran relacionadas con hechos de corrupción ni involucra a algún funcionario del Poder Ejecutivo.

La actuación de las autoridades mexicanas tendientes a sancionar a Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A. de C. V., y a la Constructora Norberto Odebrecht, S. A., derivaron a partir de las confesiones formuladas ante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública realizadas el 10 de febrero y 15 de marzo de 2017. Eso hace presumir la existencia de una persecución indebida del Estado mexicano a Odebrecht, con lo cual, al parecer, se pudiera buscar inhibir las investigaciones de

los ilícitos confesados por Odebrecht ante el Ministerio Público de Brasil y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

La persecución se enmarca en un contexto de acciones promovidas por diversas autoridades del Estado mexicano, que descalifican a tal grado a la empresa que la sancionan con inhabilitaciones y multas, impidiendo que esta realice su giro comercial, y se viole su presunción de inocencia ante un efecto corruptor de diversas consideraciones que las autoridades mexicanas tienen sobre la empresa.

En esos procedimientos administrativos hay un efecto corruptor por la utilización de pruebas ilícitas. En efecto, la ilicitud del Dictamen Contable utilizado como elemento base de las sanciones impuestas a Odebrecht es evidente si se considera que:

1. Pemex contrató con fecha 16 de agosto de 2017 al despacho Enrique Estrella y Asociados, S.C., para elaborar el Dictamen Contable Financiero.
2. El despacho Enrique Estrella y Asociados, S.C., emite el Dictamen Contable Financiero en tres días hábiles posteriores, mismo que consta de 3,610 fojas.
3. Presumiblemente y sin fundamento legal alguno, Pemex entrega el Dictamen Contable Financiero a la Secretaría de la Función Pública quien realizó un análisis de la información e inicia un procedimiento administrativo sancionador (PTRI-S-005/2017), el 24 de agosto de 2017, esto es, tres días hábiles después.
4. Es cuestionable y existen elementos objetivos para determinar que no es razonable que las autoridades involucradas hayan

realizado el análisis y dictaminación de dicha información en los tiempos antes señalados.

5. Incongruentemente y a pesar de que Pemex contrato los servicios profesionales de Enrique Estrella y Asociados, S.C., mediante oficio TUR-PEMEX-0220-2017, de 13/10/2017, la Titular de la Unidad de Responsabilidades en Pemex, simula la entrega del Dictamen Contable Financiero al Director Jurídico de Derecho Privado de Pemex, aludiendo que dicho dictamen se obtuvo *"con motivo de las investigaciones llevadas a cabo en el expediente citado al rubro..."*; investigaciones de las que no hay registro alguno.

También existe una clara denegación de justicia para entrar al fondo del asunto planteado, a través de fundar sobreseimientos sistemáticos de los juicios de amparo interpuestos por Odebrecht, indebidamente fundados en criterios superados e inobservando los tribunales en cuestión jurisprudencia vinculante⁵³.

⁵³ Contradicción de tesis 398/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 18 de noviembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García Villegas.

4. VIOLACIÓN DEL DERECHO DE SEGURIDAD JURÍDICA

El derecho a la seguridad jurídica implica la existencia de un orden que regule la actuación de las autoridades y otorga a los gobernados la certeza de que dichas autoridades respetarán ese orden, lo que genera en las personas la seguridad de que sus derechos no serán modificados más que por procedimientos regulares establecidos previamente.⁵⁴

En el sistema jurídico mexicano el principal fundamento del derecho a la seguridad jurídica es el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución General, del cual se desprende que la persona deben tener "certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse."⁵⁵

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido en diversos precedentes que el principio de legalidad y seguridad jurídica (reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General), es respetado cuando las

⁵⁴ Comisión Nacional de los Derechos Humanos. *Sobre el caso de violación de los derechos a la seguridad jurídica y a la libertad*, 28 de noviembre de 2017. párr. 38.

⁵⁵ SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 3, Febrero de 2014; Tomo III; Pág. 2241. IV.2o.A.50 K (10a.). Registro No. 2 005 777.

disposiciones de observancia general generan, por una parte, certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de sus conductas; y, por otra, tratándose de las normas que confieran alguna facultad a una autoridad, acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, en forma tal que se impida a dicha autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa en atención a las normas a las que debe sujetarse al ejercer dicha potestad.

El derecho a la seguridad jurídica constituye un límite a la actividad del Estado; está referida al "conjunto de requisitos que deben observarse en todas las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier (...) acto del Estado que pueda afectarlos"⁵⁶

El derecho de seguridad jurídica representa la obligación para el Estado de no actuar arbitrariamente.⁵⁷ La seguridad jurídica está relacionada con el principio de legalidad, si no existe uno es imposible concebir la existencia del otro. Conforme al principio de legalidad, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana.

En estrecha relación con la garantía de seguridad jurídica, se encuentra el principio de interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso mismo que, en palabras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en hacer mesurable la actuación pública, buscando que cada medida que se adopte en el ejercicio del poder estatal sea una medida equilibrada y razonable, libre de todo capricho o abuso.

⁵⁶ Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación 37/2016, p. 85.

⁵⁷ GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. [J]; 9a Época; 2a. Sala, S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Octubre de 2006; Pág. 351. 2a./J. 144/2006. Registro No. 174 094.

El principio de confianza legítima consiste en una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en virtud del cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada la confianza en la estabilidad de sus actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva. Al respecto es relevante la siguiente jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Época: Décima Época

Registro: 2018050

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I

Materia(s): Constitucional

Tesis: 2a./J. 103/2018 (10a.)

Página: 847

CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD.

El derecho a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela la prerrogativa del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión; su esencia versa sobre la premisa consistente en "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad. Sin embargo, no debe entenderse en

el sentido de que el orden jurídico ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el correlativo derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades. De lo anterior, puede considerarse la confianza legítima como una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en virtud de la cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva, salvo el supuesto en que así lo exija el interés público. Al respecto, cabe precisar que, atendiendo a las características de todo Estado democrático, la confianza legítima adquiere diversos matices dependiendo de si se pretende invocar frente a actos administrativos o actos legislativos.

Tesis de jurisprudencia 103/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.

4.1. EL DERECHO DE SEGURIDAD JURÍDICA EN EL CASO ODEBRECHT

En diciembre de 2016 Odebrecht, S. A., celebró Acuerdos de Cooperación con el Ministerio Público Federal de Brasil (*Acordo de Leniencia*) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (*Plea Agreement*).

En ellos, bajo el entendimiento de que cuenta con inmunidades que se le otorgaron para poder realizar declaraciones y colaborar con las investigaciones

relacionadas con hechos ilícitos, Odebrecht, S. A., el 21 de diciembre de 2016, manifestó lo siguiente:

1. Confesó hechos delictivos relacionados con un esquema internacional de sobornos, que involucran a autoridades, partidos políticos y candidatos políticos de doce Estados Soberanos, entre los que se encuentra México;
2. Se comprometió a brindar su plena cooperación y colaboración con autoridades de los gobiernos de los Estados Unidos de América, Brasil, Suiza y de cualquier otra jurisdicción, para la investigación y el esclarecimiento de los hechos ilícitos;
3. Se comprometió a adoptar e implementar estrictos mecanismos corporativos, para fortalecer su Sistema de Integridad (*compliance*), a fin de actuar en estricto apego a las mejores prácticas internacionales en materia de integridad corporativa, transparencia, ética y gobernanza;
4. Someter todas sus unidades de negocios a un programa de monitoreo de *compliance* independiente, a la supervisión de un equipo de profesionales asignados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y por el Ministerio Público Federal de Brasil; y
5. Accedió al pago de una penalización histórica por la cantidad de [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] a favor de los Estados Unidos de América, Brasil y Suiza.

Odebrecht, S. A., a través de su subsidiaria en México, Constructora Norberto Odebrecht, S.A., ratificó los compromisos anteriormente descritos para cooperar en el esclarecimiento, investigación y solución de los hechos relacionados con la revelación realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

Conforme a lo anterior, el 10 de febrero de 2017, Constructora Norberto Odebrecht, S. A., presentó ante la otrora Procuraduría General de la República un escrito en el que manifestó que Odebrecht, S. A. confesó su responsabilidad respecto del pago a servidores públicos en México para garantizar beneficios relacionados a contratos de obra pública.

Las anteriores confesiones las realizó bajo el amparo de los compromisos internacionales que adquirió México para investigar el caso, tales como el que en la que se suscribió con autoridades de Brasil, en los que se comprometieron a proporcionar la información referente a la investigación, y en los que las autoridades de México se comprometieron a no ejercer **ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht;** convenios que fueron ratificados por México en tres ocasiones, uno en fecha 16 de febrero y dos el 14 de junio de 2017.

En el "*Termo de Compromisso de Especialidade e de Limitacao de Uso de Provas*", Solicitud No. 1.00.000.003287/2017-21-PGR, por la cual la Procuraduría de México, en representación del Estado mexicano, se comprometió a conceder inmunidad (penal, civil y administrativa) a todas las empresas del Grupo Económico Odebrecht y sus colaboradores (personas físicas), con relación a los hechos delictivos objeto del *Plea Agreement* relacionados con México.

Las confesiones que realizó Odebrecht están bajo el amparo del derecho de seguridad jurídica, por cuanto a que estas se realizaron para colaborar en investigaciones a cambio de inmunidades, conforme a los compromisos internacionales que suscribió México. El incumplimiento de estos generaría un quebrantamiento del principio de confianza legítima (expectativa razonablemente creada en favor del gobernado).

4.2. VIOLACIÓN GENÉRICA AL DERECHO DE SEGURIDAD JURÍDICA EN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A ODEBRECHT

El artículo 38 de la Constitución Política, en su parte relativa, a la letra dispone: "Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: (...) VI. Por sentencia ejecutoriada que imponga como pena esa suspensión." El tercer párrafo del artículo 21 constitucional dispone: "La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial." El artículo 5º, constitucional, en su primer párrafo, dispone lo siguiente:

A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad ...

Como se refirió, la empresa y algunos de sus integrantes fueron sancionados con inhabilitación y multas por autoridades administrativas.

La inhabilitación es una forma de suspensión de los derechos. La inhabilitación tiene las siguientes características y efectos:



1. En el derecho constitucional mexicano siempre es una pena;
2. Siempre es temporal; nunca puede ser permanente;
3. Por virtud de la suspensión de derechos se impide a quien la sufre el ejercicio de alguna actividad lícita que le acomode; y
4. El artículo 21, tercer párrafo, atribuye, en forma exclusiva, a los jueces la facultad de imponer penas. La exclusividad presupone que su intervención excluye de la posibilidad de hacerlo a cualquier otra autoridad.

Las inhabilitaciones de las que fue objeto la empresa y sus integrantes, son una forma de suspensión de derechos, por una autoridad administrativa.

Las autoridades administrativas han asumido incorrectamente la función de inhabilitar a personas físicas y morales. Ellas usurpan una función que constitucionalmente es exclusiva de las autoridades judiciales.

Ciertamente, el artículo 5º constitucional prevé la posibilidad de que una autoridad gubernativa pueda emitir resoluciones, en los términos de ley, por virtud de las cuales se limite la libertad ocupacional. La norma no puede ser interpretada en forma aislada; tiene un contexto y una historia:

El primer párrafo del artículo 5º, en su texto vigente, fue introducido a la Constitución Política por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de enero de 1974. Ese texto es el que prevé la posibilidad de que una autoridad gubernativa pueda suspender la libertad ocupacional.

El texto del actual artículo 21 constitucional fue reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, es decir, treinta y cuatro años después de la reforma al artículo 5º. El artículo 21 es el que confiere, en forma exclusiva, a la autoridad judicial la potestad de imponer penas, entre ellas la suspensión de derechos. En el caso son aplicables los principios de que ley posterior deroga a la anterior y de que, cuando dos preceptos atribuyen una misma facultad a dos poderes diferentes, debe prevalecer la exclusividad sobre la generalidad.

La afirmación anterior es válida, con mayor razón, si se toma en cuenta el principio general garantista que deriva del artículo primero de la Constitución de la República.

El artículo 5º citado reitera que la libertad ocupacional puede ser limitada por una autoridad judicial.

El primer párrafo del artículo 5º debe interpretarse de forma sistemática con los artículos 1º, párrafos primero, segundo y tercero; 14, segundo párrafo; 17, párrafo segundo; 21, tercer párrafo, en relación con el 38, fracción VI; ya que si bien es cierto que en el artículo 5º se permite que el ejercicio del derecho al trabajo pueda ser vedado por resolución gubernativa, también lo es que los demás artículos citados, de forma expresa, establecen la competencia exclusiva de las autoridades jurisdiccionales para emitir resoluciones que priven a los particulares de sus derechos. Es decir, las autoridades administrativas no pueden emitir resoluciones que priven a los particulares de sus derechos; la palabra "vedarse" no puede interpretarse en el sentido de privar pues estaría en contra de texto expreso de diversos artículos constitucionales.

La inhabilitación es una forma de suspensión de los derechos. En el texto constitucional, como ya se mencionó, es una pena y es temporal. Por virtud de la suspensión de derechos, se impide a quien la sufre el ejercicio de alguna actividad lícita.

Ciertamente la figura de la inhabilitación también se presenta en otras actividades. De esa manera, las leyes civiles prevén la inhabilitación como una sanción a ciertas conductas; en estos supuestos son los jueces, tras agotar un proceso en los que se deben respetar los derechos de audiencia y defensa, quienes las imponen.

Eso mismo sucede en los juicios políticos previstos en el artículo 110 constitucional. En ese supuesto, es el Senado, actuando como Gran Jurado, con respeto de los derechos del acusado, quien impone la inhabilitación de un servidor público.

Se podría alegar que el artículo 113 constitucional sí prevé la posibilidad de que una autoridad administrativa imponga como sanción la inhabilitación.

En este caso pudiera parecer aceptable afirmar que el sistema constitucional estableció una excepción y que lo hizo por estar de por medio conductas ilícitas atribuibles a servidores públicos que han protestado respetar las leyes. Podría suponerse que, cuando un servidor público viola las leyes, lo que es una acción altamente reprobable, su conocimiento y sanción se debe someter a un procedimiento administrativo especial y sumario.

Una lectura cuidadosa del precepto lleva a concluir que, aún en esos casos, existe duda respecto de si la inhabilitación puede ser impuesta por una autoridad administrativa. Por tratarse de una pena, con vista los artículos 1º, 5º, 16, 21 y 38 constitucionales, la autoridad competente para imponerla es la judicial, en procesos que se ventilen con observancia de los principios que establecen las leyes procesales.

También se podría alegar que el artículo 109, fracción III, constitucional sí prevé la posibilidad de que una autoridad imponga como sanción la inhabilitación. El citado precepto dispone lo siguiente:

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones...

La previsión constitucional de sanciones administrativas para el caso de actos u omisiones de servidores públicos no otorga competencia a las autoridades administrativas para imponer penas. El precepto transcrito únicamente establece el régimen de responsabilidades a que están sujetos los servidores públicos en caso de actos u omisiones que afecten los principios que deben observar en el desempeño de sus cargos.

La fracción III, del artículo 109 constitucional no otorga competencia a las autoridades administrativas para imponer penas; una excepción a lo dispuesto por los artículos 14, segundo párrafo; 17, párrafo segundo; 21, tercer párrafo, en relación con el 38, fracción VI, debe ser expresa. Cabe señalar que dicha fracción, incluso, únicamente es aplicable para el caso de servidores públicos

Como podrá observarse, dado los términos del precepto, el sistema constitucional procuró establecer un sistema de excepción dado a que alude a conductas ilícitas realizadas por servidores públicos que han protestado respetar las leyes. En el caso se está frente a una conducta altamente reprochable y cuyo conocimiento y sanción se ha sometido a un procedimiento especial y sumario.

Nuevamente, bajo una lectura cuidadosa del precepto lleva a concluir que, aún en esos casos, la inhabilitación no puede ser impuesta por una autoridad administrativa. En el caso, por tratarse de una pena, con vista los artículos 1º, 5º, 16, 21 y 38 constitucionales, la autoridad competente para imponerla es la judicial. Son los jueces, no las autoridades administrativas, los competentes para hacerlo.

El que una autoridad administrativa inhabilite y multe a un particular (persona física o moral) también es violatorio del artículo 16 constitucional, por cuanto a que se trata de una autoridad incompetente, por no ser jurisdiccional.

Pareciera que el mismo Congreso de la Unión se percató de la inconstitucionalidad del artículo impugnado, ya que con fecha 18 de julio de 2016 abrogó la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de conformidad con la cual, artículo 84, la inhabilitación por faltas de particulares y por faltas administrativas graves debe ser impuesta por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El Congreso de la Unión, un poder constituido, al haber conferido a autoridades administrativas la atribución de imponer penas, lo hizo en violación de la Constitución; se excedió en el ejercicio de su facultad legislativa; ese Poder no podía atribuir a una autoridad administrativa la facultad de imponer penas y desconocer el monopolio que en esa actividad tienen los jueces.

El que el Congreso de la Unión en leyes secundarias hayan conferido a las autoridades administrativas la atribución de inhabilitar, también es contrario a dos principios fundamentales:

1. Uno, que es función exclusiva de la Constitución Política la de distribuir entre los Poderes, entes y órganos públicos las facultades y atribuciones; y
2. El otro, que los Poderes Federales únicamente pueden actuar en ejercicio de facultades expresas que derivan a su favor de la Constitución Política.

En los casos en que una autoridad administrativa investiga ilícitos y castiga, usurpa las funciones que tienen el ministerio público y los jueces; la violación es más grosera desde el momento en que se depositan en un órgano funciones que la Constitución, en busca de imparcialidad, confiere a dos entes diferentes y que las ejercen en forma separada y sucesiva.

El constituyente de 1917, con la creación del ministerio público, en funciones de fiscal, suprimió la figura de los jueces instructores; éstos carecían de imparcialidad, pues tenían conferidas las funciones de investigar ilícitos y de juzgar a sus autores.

El uso prolongado del poder por parte de una casta desvirtuó su ejercicio, distorsionó los principios fundamentales de división de poderes y funciones y confundió el ejercicio de la autoridad con la arbitrariedad.

En virtud de lo anterior, cuando el Titular del Área de Responsabilidades, ha impuesto como penas a la empresa y sus integrantes la inhabilitación viola el derecho de seguridad jurídica, por cuanto a que se trata de una autoridad administrativa y no jurisdiccional, lo que viola los artículos 1º, párrafos primero, segundo y tercero; 5º párrafo primero; 14, segundo párrafo; 16, primer párrafo, 17, párrafo segundo; 21, tercer párrafo, en relación con el 38, fracción VI; y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8.1 de la Convención Americana; y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dicha autoridad es de carácter administrativa; lo es formal y materialmente; sus atribuciones son enumeradas y limitadas.

Es tan evidente la incompetencia del Titular del Área de Responsabilidades para imponer penas, que él mismo intenta fundarla en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, que establece que sólo los tribunales pueden privar de la libertad, propiedades, posesiones o derechos. El Titular del Área de Responsabilidades no es un tribunal, su naturaleza es administrativa y por lo tanto constitucionalmente tiene prohibido imponer penas.

4.3. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA Y SU AFECTACIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD DE ODEBRECHT

El derecho humano de propiedad es la facultad que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer sus bienes de acuerdo con el ordenamiento jurídico

estatal. El derecho humano de propiedad consiste en una libertad que debe ser garantizada por el Estado.

En el sistema jurídico mexicano el derecho de propiedad es protegido por el Estado: nadie podrá ser privado, ni molestado en sus bienes sino a través de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento.

El derecho de propiedad como derecho humano está conformado por dos aspectos: es un conjunto de bienes necesarios para las personas, y la titularidad de bienes que se adquieren por el producto del trabajo o esfuerzo personal.

En el segundo aspecto citado, el derecho de propiedad se integra por la titularidad que una persona tiene sobre determinados bienes. Los "bienes" pueden ser definidos como aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporeales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor.⁵⁸

El derecho humano de propiedad está reconocido en los artículos 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los textos de los citados preceptos son los siguientes:

Artículo 17.

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

⁵⁸ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Ivcher Bronstein vs. Perú*, sentencia de reparaciones y costas del 6 de febrero de 2001, párr. 122.

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

El artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos está estructurado sobre la protección de una relación de uso y goce que tiene el sujeto que detenta la propiedad respecto de bienes.

En la sentencia de caso Ivcher Bronstein vs. Perú del 6 de febrero de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo lo siguiente:

- a) el derecho a la propiedad consagrado en la Convención garantiza el libre ejercicio de los atributos de ésta, entendidos como el derecho de disponer de bienes en cualquier forma legal, poseerlos, usarlos e impedir que cualquier otra persona interfiera en el goce de ese derecho;
- b) el derecho a la propiedad abarca todos los derechos patrimoniales de una persona, esto es, los que recaen tanto sobre bienes materiales como sobre bienes inmateriales susceptibles de valor;

En México el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución General establece el derecho humano al debido proceso, el cual se desdobra en dos vertientes: la referida a las formalidades esenciales del procedimiento; y, la relativa a la vertiente sustantiva, en la que se enlistan determinados bienes

constitucionalmente protegidos mediante dichas formalidades esenciales del procedimiento, como la propiedad.

Para que la privación de los bienes de una persona sea compatible con el derecho a la propiedad consagrado en la Constitución General y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe fundarse en razones de utilidad pública o de interés social, sujetarse al pago de una justa indemnización, limitarse a los casos y practicarse según las formas establecidas por la ley.⁵⁹

Es violatorio del derecho de propiedad de Odebrecht el que se le sancione económicamente a través de procesos en los que existan irregularidades jurídicas, en el caso concreto, a través las sanciones derivadas de los procedimientos administrativos sancionadores que tuvieron como base el dictamen contable financiero de fecha 21 de agosto de 2017, elaborado por "Enrique Estrella y Asociados, S. C." (irregularidades analizadas en el numeral 5.3. del presente).

4.4. CONCLUSIONES

El derecho a la seguridad jurídica constituye un límite a la actividad del Estado, a través del cual se da certeza de la situación jurídica de las personas. El principio de confianza legítima, que deriva del derecho de seguridad jurídica, impide a las autoridades mexicanas actuar con arbitrariedad, lo que deriva en proporcionar estabilidad en la actuación de las personas, a efecto de que su situación no pueda modificarse de forma imprevisible e intempestiva.

A través de los acuerdos internacionales suscritos por México se generó una situación jurídica particular para Odebrecht, en ellos se le otorgaron ciertas inmunidades para que realizara declaraciones y colaborara con las investigaciones

⁵⁹ Ibidem, párr. 128.

relacionadas con la investigación de distintos hechos ilícitos. En esos compromisos internacionales, Odebrecht se comprometió a proporcionar la información referente a la investigación, y las autoridades de México se comprometieron a no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de la empresa. Las obligaciones asumidas por el Estado mexicano no fueron respetadas, pues si bien no se iniciaron procedimientos por los hechos confesados, las autoridades administrativas simularon sendos procedimientos para sancionar con inhabilitación y multas exorbitantes en perjuicio de Odebrecht.

Las confesiones que realizó Odebrecht están bajo el amparo de su derecho a la seguridad jurídica, por cuanto a que estas se realizaron para colaborar en investigaciones a cambio de inmunidades, conforme a los compromisos internacionales que suscribió México. El incumplimiento de estos generaría un quebrantamiento del principio de confianza legítima.

Los procedimientos administrativos sancionadores instaurados por la Secretaría de la Función Pública, y las acciones legales ejecutadas por Pemex Transformación Industrial, se sustentan en procedimientos y pruebas antijurídicas (de los cuales es perceptible una intención de inhibir y evitar el esclarecimiento de conductas ilícitas confesadas por Odebrecht), lo cual es violatorio del derecho de seguridad jurídica de la empresa.

Las inhabilitaciones y multas decretadas por autoridades administrativas son contrarias al principio de seguridad jurídica por cuanto a que éstas, constitucionalmente, solo deben ser impuestas por autoridades judiciales.

Es violatorio del derecho de propiedad de Odebrecht el que se le sancione económicamente a través de procesos en los que existan irregularidades jurídicas, como la utilización de pruebas viciadas.



**5. VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE ODEBRECHT Y DE LA
SOCIEDAD MEXICANA RESPECTO A LOS CUALES LA COMISIÓN
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS ES COMPETENTE PARA
CONOCER**

5.1 VIOLACIÓN AL DERECHO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

5.1.1. El derecho de presunción de inocencia

La presunción de inocencia es un derecho humano de valor general; esa es su naturaleza y alcance. Por serlo, está referido a todo tipo de materias, sobre todo a aquellas que se ventilan en forma de procedimiento adversarial. Es un derecho humano que vincula a todas las autoridades y es de aplicación inmediata.⁶⁰ Conforme a este derecho, las autoridades están obligadas a evitar cualquier declaración de culpabilidad, sin que exista una resolución jurisdiccional firme que la declare y que derive de un proceso en el que se respeten los derechos del enjuiciado.

El principio de presunción de inocencia se basa en una consideración general: por seguridad jurídica, en toda sociedad se debe partir del supuesto de que todos, absolutamente todos, personas físicas y personas morales, cumplimos con las leyes y que la violación de éstas es excepcional y aislada.

La ley, como producto de la razón y obra de legisladores democráticamente electos, en los sistemas representativos, su autoría es considerada como una responsabilidad colectiva; de ahí su obligatoriedad y observancia. Existe un

⁶⁰ INMEDIATEZ PROCESAL. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA LIMITA SU APLICACIÓN. Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 61, Diciembre de 2018; Tomo I; Pág. 330. 1a. CCLV/2018 (10a.). Registro No. 2 018 687.

convencimiento de que ella es la mejor opción para alcanzar una pacífica y sana convivencia social.

En ese contexto es que opera el principio de que todos cumplimos con la ley y que quien afirma lo contrario debe probar y fundar su afirmación o acusación.

El derecho a la presunción de inocencia está reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución General, que establece que toda persona debe ser tratada como inocente mientras no se pruebe su culpabilidad y se decrete está a través de una sentencia judicial.⁶¹ La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la presunción de inocencia en su artículo 8.2; este dispone que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare legalmente su culpabilidad.

La presunción de inocencia supone que no es posible formar una convicción sobre la culpabilidad de una persona, antes de que se hayan desahogado y valorado todas las pruebas presentadas para demostrarla.⁶² Conforme a este principio, las autoridades están obligadas a evitar cualquier declaración de culpabilidad, sin que exista una resolución jurisdiccional firme que así lo disponga.

La presunción de inocencia, como derecho humano, presupone el ejercicio del derecho de defensa; implica, facilitar la defensa, permitir el acopio de pruebas,

⁶¹ PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008⁹

⁶² INMEDIATEZ PROCESAL. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA LIMITA SU APLICACIÓN. Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 61, Diciembre de 2018; Tomo I; Pág. 330. 1a. CCLV/2018 (10a.). Registro No. 2 018 687.

determinar que el ministerio público es una institución de buena fe, que las autoridades jurisdiccionales son imparciales, y que no se presume la culpabilidad de una persona, a menos que se haya demostrado fuera de toda duda razonable la acusación.

Quien acusa, debe probar y fundar su acusación; quien es acusado, hace lo suficiente cuando niega y mucho cuando aporta en su descargo pruebas y funda sus excepciones y defensas. En los procesos administrativos la defensa del acto de autoridad corre a cargo de su autor. Un sano respeto del principio de seguridad jurídica debe llevar al concepto de considerar al particular como la parte débil de la relación autoridad/particular.

En los casos en que es el Estado quien cuestiona la actuación de los particulares, por contar con elementos humanos y los recursos materiales suficientes y extraordinarios, cuando acusa, lleva una ventaja; actúa en una posición de superioridad. Atendiendo esa circunstancia es que tanto la Constitución Política, como las leyes, lo obligan a probar su acusación y a fundar sus actos.

Es propio de Estados absolutos o de sistemas inquisitoriales partir del supuesto contrario y obligar al particular a declararse culpable o a tener que probar su inocencia, sin saber los motivos por los que es acusado.

La Corte Interamericana, ha resuelto que el derecho a la presunción de inocencia es un fundamento de las garantías judiciales; que también es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa, que acompaña al acusado durante todo el proceso y hasta que una sentencia condenatoria firme determine su culpabilidad; por lo tanto, este derecho implica

que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye; el *onus probandi* corresponde a quien acusa.⁶³

La Observación General Núm. 32 del Comité de Derechos Humanos, establece que, para la correcta interpretación del derecho de presunción de inocencia, se debe entender que la carga de la prueba se impone al acusador, con lo que se garantiza que no se presuma la culpabilidad, a menos que se haya demostrado esta fuera de toda duda razonable, por lo cual el acusado tiene el beneficio de la duda. En esta Observación se impone la obligación de respeto a la presunción de inocencia a terceros, como los medios de comunicación, o declaraciones o acusaciones públicas de las autoridades.

La presunción de inocencia es un derecho que presenta múltiples manifestaciones en los procesos: como regla de tratamiento respecto al individuo, como regla probatoria y como regla de juicio o estándar probatorio.⁶⁴

La manifestación que nos ocupa, para la violación que debe conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso Odebrecht, es la de regla de tratamiento en su vertiente extraprocesal, ya que si bien no ha sido objeto de juicio penal, como lo ha reconocido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "...el derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, sea tratada como inocente durante el trámite del

⁶³ Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 77; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 153 y 154; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 145; y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 182 y 183.

⁶⁴ Amparo Directo en Revisión 517/2011, página 125.

procedimiento e, incluso, desde antes de que se inicie, pues puede ser el caso de que ciertas actuaciones de los órganos del Estado -sin limitarlos a quienes intervienen en la función jurisdiccional propiamente dicha- incidan negativamente en dicho tratamiento...”⁶⁵

Conforme al citado criterio, la violación a esta faceta puede afectar de una forma grave los derechos relativos a la defensa del acusado, ya que puede alterar la evolución del proceso al introducir elementos de hecho que no se correspondan con la realidad y que, en el ánimo del tribunal, y sobre todo de las víctimas y de los posibles testigos, actúen después como pruebas de cargo en contra de los más elementales derechos de la defensa.

La Primera Sala de la Suprema Corte concluyó que la presunción de inocencia, como regla de trato, en sus vertientes procesal y extraprocesal, incide tanto en el proceder de las autoridades en su consideración a la condición de inocente de la persona, como en la respuesta que pueda provenir de las demás partes involucradas en el juicio.

La Primera Sala ejemplifica las formas particulares de cómo la violación de la regla de trato de presunción de inocencia puede influir en un proceso judicial cuando la actuación indebida de la policía que pretenda manipular la realidad, tienda a referirse a:

⁶⁵ PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. INFLUENCIA DE SU VIOLACIÓN EN EL PROCESO PENAL. Primera Sala. Tesis: 1a. CLXXV/II/2013 (10ª)

- (i) la conducta, credibilidad, reputación o antecedentes penales de alguna de las partes, testigos o posibles testigos;
- (ii) la posibilidad de que se produjere una confesión, admisión de hechos, declaración previa del imputado o la negativa a declarar;
- (iii) el resultado de exámenes o análisis a los que hubiese sido sometido alguien involucrado en el proceso;
- (iv) cualquier opinión sobre la culpabilidad del detenido; y,
- (v) el hecho de que alguien hubiera identificado al detenido, entre muchas otras.

La anterior consideración no excluye a otras autoridades administrativas, ya que como se resuelve en el precedente⁶⁶ su violación puede emanar de cualquier agente del Estado, ya que el objeto de protección de esta manifestación de la presunción de inocencia, es que las personas reciban la consideración y el trato de no autor o participe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y, por lo tanto, a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos aunados a hechos de tal naturaleza.

5.1.2. La violación del derecho de presunción de inocencia en el caso Odebrecht

En el caso que nos ocupa se ha violado, de forma sistemática, el derecho a la presunción de inocencia respecto de los actos no confesados por la empresa Odebrecht y con relación a los procedimientos iniciados con motivo de los hechos confesados, en virtud de que:

1.- Se ha creado una percepción generalizada de culpabilidad en materia de corrupción que se ha relacionado de forma mediática con las sanciones

⁶⁶ Amparo Directo en Revisión 517/2011, páginas 127 a 129.

administrativas, bajo el supuesto de los hechos confesados por la empresa, lo que distorsiona la realidad de los hechos; y

2.- Se ha alterado la evolución del proceso y percepción pública al omitir la información respecto a los acuerdos internacionales suscritos por el Estado Mexicano y de los beneficios a que tiene derecho la empresa de conformidad con estos en virtud del principio *no bis in idem*.

Diversas autoridades administrativas, de forma mediática han instrumentado acciones con vista a crear una percepción de culpabilidad de dicha empresa relacionando las sanciones administrativas impuestas a los hechos de corrupción confesados; esas autoridades no han tomado en consideración los multicitados acuerdos internacionales, por virtud de los cuales son sujetos de distintos beneficios por su cooperación sustancial en la investigación de los delitos objeto de la confesión.

Dicha manipulación de la realidad también afecta la presunción de inocencia respecto a los hechos no confesados, en razón de que engloba toda la actuación de la empresa a los actos de corrupción confesados; ello a no dudarlo anticipa la pena sin siquiera haber terminado el proceso de investigación.

Las siguientes noticias evidencian dicha violación sistemática:

<https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/avalan-diputados-exigir-revocar-todo-contrato-con-odebrecht/>

La noticia de fecha 5 de abril de 2017, de un diario nacional, titulada "Avalan diputados exigir revocar todo contrato con Odebrecht", señala que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un Punto de Acuerdo para exigir la revocación de

todo contrato con la constructora Odebrecht; y que el exhorto pide "a las autoridades federales, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a sus empresas subsidiarias y filiales, a los gobiernos y los Congresos de las entidades federativas a que "revoquen todas las concesiones y contratos con la empresa brasileña Odebrecht".

En este caso son autoridades legislativas las que se pronuncian sobre la culpabilidad de la empresa sin contar con la información respecto a los acuerdos internacionales suscritos por el Estado Mexicano y de los beneficios a que tiene derecho la empresa de conformidad con estos en virtud del principio no bis in idem; anticipando la pena, ya que incluso exhortan a diversas autoridades a revocar todas las concesiones y contratos celebrados con la empresa.

<https://www.animalpolitico.com/2017/12/sancionar-servidor-pemex-odebrecht/>

La noticia de fecha 16 de diciembre de 2017, de un diario electrónico nacional, se titula "Sancionan al primer servidor de PEMEX involucrado en caso Odebrecht", con el simple título se relaciona la sanción al caso "Odebrecht" y durante el desarrollo de la noticia se fortalece la relación al señalar que "...el tema de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) porque es de naturaleza penal y no administrativa...". La noticia señala que la información de la sanción fue dada a conocer por la Secretaría de la Función Pública.

La anterior información, dada a conocer por una autoridad administrativa a medios de comunicación, manipula la percepción de la realidad por que la sanción no fue está relacionada con las declaraciones que Odebrecht, realizó en el año de 2016, mismas que fueron divulgadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América

Al día de hoy la empresa no ha sido sancionada por los hechos ilícitos confesados, pero las afirmaciones que ha realizado la Secretaría de la Función Pública a medios de comunicación, generan la percepción que se ha demostrado la culpabilidad de la empresa por la supuesta realización de actos de corrupción que ni siquiera forman parte de la confesión de Odebrecht.

https://elpais.com/internacional/2018/04/19/mexico/1524150473_535247.html

La noticia de fecha 19 de abril de 2018, de un diario internacional, se titula "El Gobierno de México sanciona e inhabilita a Odebrecht" y en la parte inferior inmediata al título señalan: " ...Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector regional de la constructora, declaró que dio [REDACTED] a Emilio Lozoya, coordinador internacional de la campaña de Peña Nieto..." con lo que se induce a la opinión pública, de la que forman parte los titulares de la función jurisdiccional, a relacionar dichas sanciones con las declaraciones que Odebrecht, realizó en el año de 2016, mismas que fueron divulgadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

En el texto de la nota se relaciona de forma sistemática las sanciones impuestas con los hechos confesados por la empresa, lo anterior con base en la información publicada por el diario nacional Reforma. Dicha relación es ajena a la realidad porque, al día de hoy la empresa no ha sido sancionada por actos de corrupción, pero genera la percepción, nacional e internacional, de que se ha demostrado la culpabilidad de la empresa por la supuesta realización de actos de corrupción que ni siquiera forman parte de la confesión de Odebrecht.

<https://www.eleconomista.com.mx/politica/Funcion-publica-sanciona-a-otro-funcionario-por-caso-Odebrecht-20161127-0145.html>

La noticia de fecha 27 de noviembre de 2018, de un diario nacional, se titula "Función Pública sanciona a otro funcionario por caso Odebrecht", con el sólo título ya se está englobando todo procedimiento relacionado con la empresa a un solo caso, e implica que hay varios funcionarios sancionados con relación a dicho caso.

En la misma nota se señala que la Secretaría de la Función Pública afirmó y enfatizó que la inhabilitación de un funcionario público de Pemex y la multa por [REDACTED] que le impuso, derivaron de las investigaciones indiciadas desde 2016. También se señala que dicha Secretaría afirmó que con dicha sanción se habían resuelto nueve procedimientos derivados de las investigaciones a la empresa; que existían tres procedimientos sancionatorios en contra de filiales de Odebrecht; y que se había abierto una investigación más sobre la empresa y sus relaciones con el sector paraestatal mexicano.

Al enfatizar que dichas sanciones derivaron de las investigaciones iniciadas desde 2016, la Secretaría está induciendo a la opinión pública a relacionarlas con las declaraciones que Odebrecht, realizó en el año de 2016, mismas que fueron divulgadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Cabe señalar que dicha asociación se fortalece si se toma en consideración que la titular de la función pública que realizó dichas afirmaciones durante un período que abarca del 3 de marzo de 2015 al 26 de octubre de 2016 fue titular de la Procuraduría General de la República, autoridad competente para investigar los actos de corrupción confesados por la empresa.

Los hechos y sanciones relatados en la noticia no están relacionados con los hechos confesados por la Empresa, debido a que, como lo señala la misma

nota, se realizaron en virtud de una presunta omisión de aplicación de multas en contra de una filial de Odebrecht, empresa y filiales que no han sido sancionadas por actos de corrupción.

<https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/sfp-sanciona-otro-por-caso-odebrecht>

La noticia de fecha 28 de noviembre de 2018, de un diario nacional, se titula "SFP sanciona a otro por caso Odebrecht" y en la parte superior inmediata del título, al margen de una foto con el logotipo de la empresa se señala: "...La empresa Odebrecht ha protagonizado el mayor escándalo de sobornos y corrupción de América...", con lo que se induce a la opinión pública, de la que forman parte los titulares de la función jurisdiccional, a relacionar dichas sanciones con las declaraciones que Odebrecht, realizó en el año de 2016, mismas que fueron divulgadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

En esta noticia se hacen las mismas afirmaciones que en la anterior.

https://www.youtube.com/watch?v=csVP6jQ1_6w#action=share

En el video titulado el INAI defiende tu derecho a saber ¡Hazlo valer!, en los segundos 16 a 19 asocia el nombre de la empresa Odebrecht al concepto corrupción de forma general, sin que exista resolución judicial al respecto, lo que violenta el derecho de presunción de inocencia con respecto a los hechos no confesados, por englobar toda la actuación de la empresa a los actos de corrupción confesados; y a los hechos de corrupción confesados, ya que sin tomar en consideración los multicitados acuerdos internacionales, por virtud de los cuales son sujetos de distintos beneficios por su cooperación sustancial en la

investigación de los delitos objeto de la confesión, anticipan la pena al incidir en ánimo de los juzgadores y de la sociedad mexicana respecto a la necesidad de sanción.

En estas noticias, que solo se transcriben como ejemplos debido a que existen muchas más, se documenta la actuación de distintas autoridades administrativas e incluso legislativas, en las que se pronuncian sobre la culpabilidad de la empresa y escenifican la persecución y sanción administrativa de la empresa Odebrecht, con motivo de los actos de corrupción confesados, siendo que, como ya ha sido demostrado en este documento, las sanciones que actualmente se han impuesto han derivado de hechos totalmente ajenos a los hechos confesados por la empresa.

Esa actuación de las autoridades genera una percepción de que el procedimiento penal está vinculado a las sanciones impuestas y que, por lo tanto, por congruencia, se debe resolver en el mismo sentido. En este escenario parece que el juicio penal ya fue realizado siendo que ni siquiera se terminó la etapa de investigación y por lo tanto no ha tenido intervención juzgado alguno.

La manipulación de la realidad por parte de las autoridades administrativas se ha materializado mediante:

1. El montaje que realizó, principalmente, la Secretaría de la Función Pública, consistente en aparentar que las sanciones impuestas a la empresa correspondían a los actos de corrupción confesados.
2. La campaña mediática en la que distintas autoridades administrativas y legislativas, como son el INAI y la Cámara de Diputados, se pronuncian

sobre la culpabilidad de la empresa fortaleciendo la percepción pública de la necesidad de sanción; con lo que se anticipa la pena sin tomar en consideración elementos sustanciales como los acuerdos internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

5.1.3. Conclusiones

La manipulación de la realidad por parte de autoridades administrativas, a través del montaje consistente en aparentar que las sanciones administrativas impuestas a la empresa, correspondían a los actos de corrupción confesados; y de la campaña mediática, a través de la cual en la que distintas autoridades se pronunciaron sobre la culpabilidad, violentan el derecho a la presunción de inocencia de la empresa Odebrecht, en su manifestación de regla de tratamiento en su vertiente extraprocesal, en virtud de que afectan el ánimo de los tribunales y de la sociedad mexicana en general (que es la víctima de los actos de corrupción), por alterar la percepción de culpabilidad de la empresa Odebrecht respecto:

1. A los hechos no confesados, por englobar toda la actuación de la empresa con los actos de corrupción confesados; y
2. A los hechos de corrupción confesados, ya que, sin tomar en consideración los multicitados acuerdos internacionales, por virtud de los cuales son sujetos de distintos beneficios por su cooperación sustancial en la investigación de los delitos objeto de la confesión, anticipan la pena e inciden en ánimo de los juzgadores; también predispone a la sociedad mexicana respecto a la necesidad de sanción.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es competente para conocer de esta violación, en virtud de que no es objeto de procedimiento judicial alguno, de que es una actuación atribuible a autoridades administrativas y de que la naturaleza funcional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la ubica como el órgano estatal que debe velar por la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de todos los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano (artículos 102, inciso B de la Constitución General; y 3º, párrafo primero de la Ley de dicha Comisión).

5.2. VIOLACIÓN DEL DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA PRONTA DE ODEBRECHT Y DE LA SOCIEDAD MEXICANA

5.2.1. Derecho de acceso a la justicia pronta en el caso Odebrecht

Como se señaló en el apartado número 5, a la empresa Odebrecht se le ha impedido, de forma sistemática, colaborar y acceder a la justicia mexicana con el fin de esclarecer la verdad sobre los hechos ilícitos que confesó públicamente el 21 de diciembre de 2016, con base en los Acuerdos de Cooperación entre el Ministerio Público Federal de Brasil con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

Dicha violación aún no ha sido impugnada ante la autoridad jurisdiccional en virtud de que, a pesar de que han transcurrido más de dos años desde que el 10 de febrero de 2017, Constructora Norberto Odebrecht, S. A., presentó ante la otrora Procuraduría General de la República un escrito en el que manifestó que Odebrecht, S. A. confesó su responsabilidad respecto del pago a servidores públicos en México a fin de obtener beneficios relacionados con contratos de obra pública; también ofreció su colaboración para la investigación de los hechos. Al día de hoy la autoridad competente no ha ejecutado los compromisos

internacionales que adquirió México para investigar el caso, por lo que continúa en la etapa de investigación.

La otrora Procuraduría General de la República y la ahora Fiscalía General de la República han sido omisas en ejecutar los compromisos internacionales que el Estado mexicano suscribió con autoridades de Brasil, por virtud de los cuales Brasil se comprometió a proporcionar la información referente a la investigación que involucra a servidores públicos de México; el Estado mexicano, por su parte, se comprometió a no ejercer **acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht**, con base en el principio *non bis in idem*, en virtud de que la empresa ya fue sujeta a sanciones y acuerdos respecto a la información que confesó.

De conformidad, principalmente, con los acuerdos "*Termo de Compromisso de Especialidade e de Limitacao de Uso de Provas*" y Nuevo "*Termo de Compromisso de Especialidade e de Limitacao de Uso de Provas*", la otrora Procuraduría General de la República México, como Autoridad Central, en representación del Estado Mexicano, otorgó *inmunidad* penal, civil y administrativa a las empresas del Grupo Económico Odebrecht y a sus colaboradores (personas físicas) con relación a los hechos objeto de la cooperación internacional en cuestión.

Al existir una inacción de más de dos años por parte de las autoridades competentes para ejecutar los compromisos internacionales relativos a la cooperación para investigar los hechos de corrupción objeto de estos, se está violando el acceso a una justicia pronta a la persona moral Odebrecht, de conformidad con las siguientes consideraciones:



El derecho al acceso a la justicia pronta y expedita está previsto en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución General; en la porción relativa, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

El derecho al acceso a la justicia pronta es, en principio, una facultad de las autoridades jurisdiccionales, debido a que están encargadas del servicio de impartición de justicia; sin embargo, para judicializar una causa penal, es necesario que exista una investigación por parte de autoridades administrativas como lo son la Fiscalía General de la República y la otrora Procuraduría General de la República, lo que sujeta y condiciona el acceso a los tribunales a la investigación que realicen autoridades administrativas.

El derecho al acceso a la justicia pronta implica: que las personas puedan hacer uso de los procesos existentes en un orden normativo, para la resolución efectiva de controversias en un tiempo razonable; dichos procedimientos no necesariamente deben ser ante autoridad judicial, sino también todos aquellos que sean necesarios para acceder a los tribunales.

El derecho al acceso a la justicia implica la actividad de todas aquellas autoridades con competencia para la investigación y persecución de un delito, ya que depende de su actuación el que se llegue a judicializar un asunto.

En este sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, Párrafo 390, en que se resolvió que, si bien la apertura de procesos constituye

pasos positivos hacia el esclarecimiento y juzgamiento, es violatorio del **derecho de acceso a la justicia** que dichos procesos no abarquen la totalidad de los hechos violatorios de derechos humanos. Resolución que sujeta a las autoridades administrativas encargadas de la persecución de los delitos a garantizar el acceso a la justicia.

Es decir, el derecho de acceso a la justicia incide en la actuación de todas las autoridades en el ámbito de su competencia; en el caso que nos ocupa, la omisión de las autoridades administrativas competentes, para ejecutar los compromisos internacionales relativos a la cooperación para investigar los hechos de corrupción confesados por la empresa Odebrecht, impide que dicha persona moral esté en posibilidad de exigir ante autoridad judicial el respeto de los derechos previstos en los citados acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano, violación que se agrava si se toma en consideración que el tiempo transcurrido entre el momento de la confesión y el inicio de la ejecución de los compromisos de cooperación para la investigación, sobrepasa un plazo razonable para integrar la investigación.

5.2.1. Violación al derecho de acceso a la justicia con relación a la sociedad mexicana en el caso Odebrecht

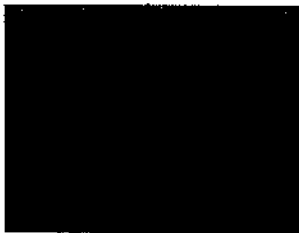
El derecho al acceso a la justicia pronta no sólo ha sido violentado en contra de la empresa Odebrecht, sino en perjuicio de toda la sociedad mexicana, ya que el tiempo transcurrido entre el momento en que los hechos de corrupción se hicieron públicos y el momento para que se formulen una acusación penal en contra de los servidores públicos que estuvieron implicados en los actos de corrupción, ha excedido, por mucho, el plazo razonable. Actualmente han pasado más de dos años sin que se concluya la investigación.

5.2.2. Conclusiones

El acceso a la justicia pronta es un derecho humano y, por lo tanto, vincula a todos los poderes públicos en el ámbito de su competencia. A la empresa Odebrecht se le ha impedido de forma sistemática colaborar con las autoridades y acceder a la justicia mexicana, para esclarecer la verdad sobre los hechos ilícitos que confesó públicamente el 21 de diciembre de 2016, con base en los Acuerdos de Cooperación entre el Ministerio Público Federal de Brasil con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Las omisiones de las autoridades administrativas competentes, para ejecutar los compromisos internacionales relativos a la cooperación para investigar los hechos de corrupción confesados por la empresa Odebrecht, ha impedido, por más de dos años, que dicha persona moral pueda hacer exigibles los derechos de que es titular, debido a que no se ha judicializado el expediente.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es competente para conocer de esta violación en virtud de que no es objeto de procedimiento judicial alguno; de que es una omisión atribuible a autoridades administrativas; y de que la naturaleza funcional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la ubica como el órgano estatal que debe velar por la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano (artículos 102, inciso B de la Constitución General; y 3º, párrafo primero de la Ley de dicha Comisión).

Ciudad de México, a 23 de mayo de 2019



Ireri Elizabeth García
Ramos



Elisur Arteaga Nava



Sergio Charbel Olvera
Rangel





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.

SOLICITANTES: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, SOCIEDAD ANÓNIMA; Y ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE SU APODERADO, JOAO HENRIQUE ANDRADE ARAUJO HORST.

REASUNCIÓN DE COMPETENCIA NÚMERO: 205/2019

Oficio Núm. SGA/OAC/470/2019

Ciudad de México, a 25 de junio de 2019

**MAESTRA JAZMÍN BONILLA GARCÍA
SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

Tomando en consideración, por un lado, que en sesión privada de 9 de enero de 2012 los señores Ministros integrantes de la Segunda Sala de este Alto Tribunal manifestaron que en relación con las **solicitudes de reasunción de competencia** dirigidas a ese órgano, bastará que la Secretaría General de Acuerdos las remita por oficio para que en sesión privada se determine lo conducente y que, por otro, **el Tribunal Pleno en sesión privada de 23 de mayo de 2016, acordó que se deben formar los cuadernos respectivos tratándose de solicitudes de reasunción de competencia que correspondan a la Segunda Sala con independencia de la legitimación de quien las promueva**, atendiendo además a la competencia que se confiere a esta Suprema Corte en la fracción VIII, inciso a), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos artículos 85, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; le remito el escrito¹ que suscribe JOAO HENRIQUE ANDRADE ARAUJO HORST, EN SU CARÁCTER DE APODERADO DE LAS QUEJOSAS, CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, SOCIEDAD ANÓNIMA; Y ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mediante el cual solicita a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que **reasuma su competencia originaria** para conocer del **amparo en revisión 200/2019 del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio, con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México (en apoyo a las labores del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México) el 28 de marzo de 2019 **en los autos del juicio de amparo 526/2018 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018 (SOBRESEE)**, promovido² contra los actos siguientes: **"De las Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión, así como del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del ámbito de su respectiva competencia, se reclama: • La discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, en particular, respecto de los artículos 8º, fracción IV y 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto. • La discusión, aprobación, expedición y promulgación, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en lo referente al artículo 9. Del Secretario de la Función Pública, se reclama: • La emisión del "Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil quince, por lo que hace a su artículo primero. Del Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial, se reclama: • La resolución definitiva de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, contenida en el oficio UR-DPTI-AR147/2018, que resolvió el procedimiento administrativo sancionador con número de expediente PTRI-S001/2017 y sus acumulados PTRI-S-003/2017 y PTRIS-004/2017. Del Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, se reclama: • La ejecución de la resolución reclamada".** Ante ello, al tratarse de un recurso de revisión que deriva de un juicio de amparo indirecto en el que se planteó la inconstitucionalidad de leyes federales y una disposición de observancia general, en la sentencia se resolvió sobreseer en el juicio y en

¹ Recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el 21 de junio de 2019, registrado en dicha oficina con el número de folio 023767, recibido en esta Secretaría General de Acuerdos el 25 de junio de 2019.

² Información obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SOLICITANTES: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, SOCIEDAD ANÓNIMA; Y ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE SU APODERADO, JOAO HENRIQUE ANDRADE ARAUJO HORST.

REASUNCIÓN DE COMPETENCIA NÚMERO: 205/2019
Oficio Núm. SGA/OAC/470/2019

los agravios se cuestiona ese sobreseimiento; se estima que la solicitud relativa debe tramitarse como una solicitud de reasunción de competencia, toda vez que se ubica en los supuestos de competencia delegada del punto Cuarto, Fracción I, incisos A) y B) del Acuerdo General 5/2013, máxime que en términos del punto Noveno del referido Acuerdo General 5/2013, el Tribunal Colegiado que conoce del recurso interpuesto, mediante una resolución colegiada se tendría que pronunciar sobre los aspectos que corresponden a su competencia relacionados con la procedencia del juicio y, de no quedar comprendido en algún otro supuesto de competencia delegada de los previstos en el punto Cuarto, fracción I, incisos B), C) y D) del propio Acuerdo General 5/2013, en su caso, tendría que dejar a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal para pronunciarse sobre el problema de constitucionalidad que llegara a subsistir. En tal virtud, tomando en consideración la materia en la que inciden los actos reclamados en el asunto indicado, salvo la mejor opinión de los señores Ministros integrantes de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, se estima que a ésta le corresponde acordar lo conducente. El contenido se detalla a continuación:

CONTENIDO:	FOJAS	PRESENTADO EN:
1.- SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA 205/2019	180	UN CUADERNO
2.- NA CUADERNO AUXILIAR RELATIVO A LA SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA 205/2019	32	UN CUADERNO
3.- ESCRITURA 126,638	11	SEGUNDO TESTIMONIO

Cabe mencionar que sobre el problema de constitucionalidad que se planteó en el juicio de amparo del cual deriva la presente solicitud, la **Segunda Sala de este Alto Tribunal** resolvió en sesión de 22 de mayo de 2019 el **amparo en revisión 540/2017** en el que analizó la inconstitucionalidad del artículo 27, fracción II, inciso b), último párrafo, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Sin otro particular reitero a usted las seguridades mi atenta consideración.

ATENTAMENTE

LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA

C.c.p. Lic. Guadalupe del Rocío Oliveros Alvizu.- Titular de la Oficina de Estadística Judicial de la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Rodrigo Robles Enríquez.- Titular de la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia de la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Para su conocimiento.

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1_1.pdf
Secuencia: 2693856

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	CARLOS DELGADILLO VILLEGAS	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	DEVC680313HDFLLR08			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e000000000000000000000015c2	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	26/06/2019T19:23:06Z / 26/06/2019T14:23:06-05:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	16 f8 0b 95 a7 5d 63 87 5a 0f 4c fc f1 11 8e a9 bd e1 e3 88 dd 49 90 9f d3 83 ca 82 c8 24 42 a0 0a a1 63 22 2a e4 bc a3 95 55 9a 80 39 c1 62 c9 f3 11 1d 06 2f 86 ab 62 db fa 92 77 f7 b6 13 be 8a 26 03 5e fa c9 4f 63 0d 9c 59 e1 2b 05 68 3c 19 4a 95 ec cc bd 93 af d2 30 ee 1c 4a de 7b 08 f9 33 e2 5b 26 21 19 c8 56 81 4b 33 7d 7e 5c e3 08 01 e0 cd 25 da 68 2f 46 a8 69 49 56 14 a8 2f 64 3d 4d fd b5 fd 42 58 d7 6e 1b 34 32 bb 9d b3 26 06 d1 ba 81 48 95 09 d3 db ec ff d0 58 6e 95 ea fb 02 c8 85 d6 03 d2 f3 8f 79 1c 2f 83 82 de 6a 1b 15 32 fc 02 fa 04 2a 82 48 f2 68 98 b0 9e b4 56 c6 04 e3 e5 3b 6e 4a 33 5a ce 74 fd 13 fa 14 84 32 44 1e d8 a1 ca ad f8 25 b3 d7 d9 fa a2 80 1f fd e9 1e b5 9a ff c2 6a 2d 37 66 82 6d 8f 9e f9 6c fc 7a c8 dd ea 4f 0e ed ec 12 c7 84 0b			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	26/06/2019T19:23:07Z / 26/06/2019T14:23:07-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e000000000000000000000015c2			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	26/06/2019T19:23:06Z / 26/06/2019T14:23:06-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2697139			
	Datos estampillados:	DA9D7F9D96F8B53FF116400387AD837D557B884F			

ORIGINAL

**SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE
COMPETENCIA ORIGINARIA**

EXPEDIENTE: 205/2019.

ASUNTO: Se formulan manifestaciones.

**CC. MINISTROS DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN.**

CARLOS MALPICA HERNÁNDEZ, actuando en mi carácter de autorizado de las personas morales denominadas **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.** (en adelante "**CNO**") y **ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.** (en adelante "**OICIMEX**"), personalidad que solicito se tenga por acreditada y reconocida en términos del escrito de 21 de junio de 2019 por el que se solicitó ante ese Alto Tribunal reasuma competencia originaria respecto al amparo en revisión 200/2019 del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; con el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente:

Que por medio del presente escrito, en alcance a la solicitud precisada en el párrafo anterior, ocurro en tiempo y forma legales a ofrecer como **Anexo Único** la opinión jurídica elaborada por Arteaga, García & Olvera, Abogados, S.C., de la que se advierten las consideraciones de hecho y de derecho por las cuales esa Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe reasumir competencia para conocer el amparo en revisión tramitado ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito bajo el número de expediente 200/2019.

Lo anterior, todos los efectos legales a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a ustedes **CC. MINISTROS DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**, atentamente solicito se sirvan:

PRIMERO.- Tener por presentado el presente escrito, reconociendo la personalidad con la que me ostento.

200000

SEGUNDO.- Tener por formuladas las presentes manifestaciones y por ofrecido el documento que se acompaña al presente escrito.

TERCERO.- En su oportunidad, resolver como fundada la solicitud para reasumir competencia originaria sobre el amparo en revisión 200/2019 del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.


Ciudad de México a 8 de julio de 2019


CARLOS MALPICA HERNÁNDEZ

Autorizado

025661

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2019 JUL 8 PM 3 13

OFICINA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

Recibi de un enviado en (2) folios
con:

un anexo original relativo a Opinión Jurídica
en un total de (41) folios

VICTOR JUAN DIAZ BARCELO

Ciudad de México, a 8 de julio de 2019.

Señor licenciado don Carlos Malpica Hernández
Malpica, Iturbe, Buj y Paredes, S.C.

Muy señor nuestro:

En la forma y términos convenidos, nos permitimos acompañar a la presente un documento en el que se contienen los elementos que, desde nuestro particular punto de vista, son susceptibles de hacer valer en la Solicitud de Reasunción de Competencia 205/2019.

Para la elaboración del documento tuvimos a la vista las resoluciones de los procedimientos administrativos sancionadores que dieron origen al caso, y los expedientes de los juicios de amparo en contra de estos.

Sin otro particular de momento, nos ponemos a sus respetables órdenes y les reiteramos nuestro respeto.

[REDACTED]
[REDACTED]
ELISUR ARTEAGA NAVA

[REDACTED]
IRERI ELIZABETH GARCÍA RAMOS

[REDACTED]
SERGIO CHARBEL OLVERA RANGEL
[REDACTED]
[REDACTED]

CONSULTA:

SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA
205/2019

Ciudad de México, 8 julio de 2019



Contenido de la Consulta

1. Antecedentes de la Solicitud de Reasunción de Competencia 205/2019	1
2. Competencia para conocer la Solicitud de Reasunción de Competencia 205/2019.....	4
3. El caso que se solicita conozca la Suprema Corte.....	8
3.1. El primer acto de aplicación de las normas reclamadas	9
3.2. Análisis de las normas reclamadas en los juicios de amparo	12
3.3. La jurisprudencia que fundamenta el sobreseimiento	23
4. Interés y trascendencia del caso planteado en la Reasunción de Competencia 205/2019	28
4.1. Determinación del primer acto de aplicación de las normas sancionadoras en los procedimientos administrativos sancionadores	32
4.2. Determinación del primer acto de aplicación de las normas sancionadoras como garantía del principio de presunción de inocencia ..	33
4.3. Denegación de justicia por decretar sobreseimientos sin fundamentos jurídicos	33
4.4. Interpretación y aplicación de jurisprudencias en la Décima Época ...	34



SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA**205/2019****1. Antecedentes de la Solicitud de Reasunción de Competencia 205/2019**

En la investigación realizada en el expediente administrativo 2017/PTI/DE109, el Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial consideró que existe una presunta irregularidad cometida por Gleiber José de Faria, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A. de C. V., y Construtora Norberto Odebrecht, S. A., debido a la existencia de elementos que hacen presumir la actualización de la conducta prevista en la fracción IV del artículo 8º de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, en razón de la comisión de actos para evadir y simular el cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula 13 del Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción, número DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15.

Con base en los anteriores elementos, el Titular del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial, dictó el acuerdo de inicio de los procedimientos administrativos sancionadores PTRI-S-001/2017, PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017 instaurados en contra de Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A. de C. V., Gleiber José de Faria y Construtora Norberto Odebrecht, S. A., respectivamente. Los expedientes PTRI-S-003/2017 y PTRI-S-004/2017 fueron acumulados al PTRI-S-001/2017.

El 16 de abril de 2018 se resolvieron los citados procedimientos administrativos sancionadores en donde se resolvió que Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A. de C. V., Gleiber José de Faria y



Construtora Norberto Odebrecht, se ubican en el supuesto de la fracción IV del artículo 8º de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, por lo que se les impusieron las siguientes sanciones administrativas:

1. A cada una de las personas morales, la inhabilitación temporal por el plazo de 2 años seis meses para participar en contrataciones públicas de carácter federal y una multa de [REDACTED]
[REDACTED]
2. A Gleiber José de Faria, la inhabilitación temporal por el plazo de 2 años, 3 meses y 12 días para participar en contrataciones públicas de carácter federal y una multa de [REDACTED]
[REDACTED]

Los sancionados promovieron juicios de amparo indirecto en contra de las anteriores sanciones. En los tres casos, las demandas se promovieron en contra de los artículos 8º, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, el artículo 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Artículo Primero del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican.", en función de su primer acto de aplicación a través de las resoluciones definitivas de los respectivos procedimientos administrativos sancionadores.

A esos juicios de amparo se les asignaron los siguientes números de expedientes: 526/2018, 569/2018 y 571/2018, los cuales conoció el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Los juicios de amparo 569/2018 y 571/2018 se acumularon al 526/2018.

[REDACTED]

La resolución del juicio de amparo 526/2016 y sus acumulados la emitió el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, bajo el cuaderno auxiliar 82/2018, en el sentido de sobreseerlos. El juzgador consideró que los quejosos debieron promover la demanda en contra de los acuerdos de inicio de los procedimientos sancionadores y no en contra de la resolución definitiva de estos, con fundamento en la jurisprudencia AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO PRESUPUESTO QUE SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY.¹

En contra de la anterior resolución, el 25 de abril de 2019, los quejosos interpusieron conjuntamente recurso de revisión, el cual lo conoce el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con el número de expediente 200/2019. Este recurso se encuentra en trámite ante dicho órgano jurisdiccional y es el que se solicita conozca la Suprema Corte.

Una resolución de sobreseimiento de un juicio de amparo similar, y por la misma causa, fue el del amparo que Constructora Norberto Odebrecht, S. A. presentó en contra de la resolución del 7 de febrero de 2018 en el procedimiento administrativo sancionador PTRI-S-005/2017, contenida en el oficio No. UR-DPTI-AR-049/2018. Ese juicio de amparo se sobreseyó por resolución del Juez Tercero en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el 28 de septiembre de 2018, en el expediente 250/2018. Esta resolución se confirmó por el Quinto Tribunal

¹ Localización: [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XII, Diciembre de 2000; Pág. 133. 1a./J. 35/2000. Registro No. 190 707.



Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el recurso de revisión 381/2018.

2. Competencia para conocer la Solicitud de Reasunción de Competencia 205/2019

La competencia originaria es la fijada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la ley en su literalidad como regla general.²

La competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la fijada por la Constitución o por la ley.

Con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución,³ y 83 de la Ley de Amparo,⁴ y 10, fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,⁵ a la Suprema Corte le compete

² FACULTAD DE ATRACCIÓN. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO DEBE EJERCERLA PARA CONOCER DE ASUNTOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA SINO, EN SU CASO, REASUMIR ÉSTA. Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VII, Abril de 2012; Tomo 2; Pág. 1033. 2a./J. 33/2012 (10a.). Registro No. 2 000 579.

³ Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

(...)

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:

a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

⁴ El precepto es el siguiente:

"Artículo 83. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales, distribuirá entre las salas los asuntos de su competencia o remitirá a los tribunales colegiados de circuito los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine."

⁵ El precepto es el siguiente:

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:



originariamente el conocimiento de los recursos de revisión contra sentencias emitidas por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional, en el supuesto de que se hubieran impugnado, en la demanda de amparo, normas generales por estimarlas directamente violatorias de la Constitución y subsista en el recurso de revisión el problema de constitucionalidad.

Con fundamento en el artículo 94, en su entonces octavo párrafo, actualmente párrafo noveno, de la Constitución,⁶ la competencia originaria de la Suprema Corte se puede delegar a través de acuerdos generales. Por medio de esos acuerdos, el Pleno de la Suprema Corte puede remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia.

En ejercicio de dicha atribución, el Pleno de la Suprema Corte emitió el Acuerdo General número 5/2013, de 13 de mayo de 2013, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el

(...)

II. Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito, en los siguientes casos:

a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad de normas generales, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado una ley federal, local, del Distrito Federal, o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;"

⁶ El precepto es el siguiente:

"Artículo 94...

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados."



envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.⁷

A través del Punto Cuatro, fracción I, inciso A del el Acuerdo General número 5/2013,⁸ la Suprema Corte delegó sus facultades a los Tribunales Colegiados para que estos resuelvan asuntos que son de su competencia originaria. El precepto es el siguiente:

Punto Cuatro. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los Puntos Segundo y Tercero de este Acuerdo General, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito:

I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando:

A) No obstante haberse impugnado una ley federal o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se hubiere planteado la interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia.

⁷ Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013, última reforma publicada en el mismo medio oficial el día 7 de septiembre de 2017.

⁸ El precepto es el siguiente:

"Punto Cuatro. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los Puntos Segundo y Tercero de este Acuerdo General, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito:

I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando:

A) No obstante haberse impugnado una ley federal o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se hubiere planteado la interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia."



El anterior supuesto se actualiza en el presente caso debido a que con fecha 24 de abril de 2019, los quejosos interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha 28 de marzo de 2019, por virtud de la cual el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, en auxilio del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, resolvió sobreseer el juicio de amparo indirecto 526/2018 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018, sin abordar el estudio de las disposiciones normativas que se estimaron violatorias de la Constitución.

Además de regular la delegación de competencia a Tribunales Colegiados de Circuito, el mismo Acuerdo General reconoce la posibilidad de reasunción de las competencias originarias de la Suprema Corte.

La reasunción de competencia es una figura regulada en el Punto Décimo Cuarto del Acuerdo General número 5/2013,⁹ el cual prevé la posibilidad de que la

⁹ El precepto es el siguiente:

"DÉCIMO CUARTO. Tratándose de los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo conocimiento se ha delegado a los Tribunales Colegiados de Circuito, para que este Alto Tribunal reasuma su competencia, cuando un Ministro lo solicite, se integrará el cuaderno respectivo y se turnará al Ministro que corresponda, tomando en cuenta si la materia en la que incide es de la competencia originaria del Pleno o de las Salas.

Si un Tribunal Colegiado de Circuito estima motivadamente, de oficio o por alegato de parte, que un asunto no se encuentra previsto en los casos precisados en el presente Acuerdo General, o que existen razones relevantes para que el Pleno o alguna de las Salas de este Alto Tribunal asuma su competencia originaria, previa resolución colegiada, enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los autos del juicio de amparo exponiendo tales razones.

Las resoluciones que emitan el Pleno o las Salas de este Alto Tribunal en donde se determine reasumir competencia originaria atendiendo a las solicitudes precisadas en los párrafos que anteceden, así como la remisión de autos que realicen los Tribunales Colegiados de Circuito en cualquiera de los supuestos anteriores, deberán notificarse por medio de oficio a las autoridades responsables, así como al Tribunal Unitario de Circuito o Juzgado de Distrito del conocimiento, y personalmente al quejoso y al tercero interesado, en su caso."



Suprema Corte, ya sea en Pleno o en Salas, conozca y resuelva asuntos de su competencia originaria siempre que existen razones relevantes para ello.

La Segunda Sala de la Suprema Corte es competente para conocer y resolver de esta Solicitud de Reasunción de Competencia con fundamento en el artículo 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.¹⁰

Para que se reasuma la competencia se tienen que cubrir los requisitos de interés y trascendencia del caso, los cuales se estudiarán más adelante.

3. El caso que se solicita conozca la Suprema Corte

En la Solicitud de Reasunción de Competencia 205/2019 se pretende que la Suprema Corte conozca, a través de su competencia originaria, del Recurso de Revisión 200/2019, el cual conoce el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El citado recurso de revisión proviene de la impugnación de la sentencia definitiva de fecha 28 de marzo de 2019, por virtud de la cual el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la

¹⁰ El precepto es el siguiente:

*Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:

(...)

II. Del recurso de revisión en amparo contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito, en los siguientes casos:

a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se hubiese impugnado un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o si en la sentencia se establece la interpretación directa de un precepto de la misma en estas materias, y"



Ciudad de México, en auxilio del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, resolvió sobreseer el juicio de amparo indirecto 526/2018, y sus acumulados 569/2018 y 571/2018, porque consideró que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento tácito de las normas reclamadas, toda vez que, según el juzgador, la quejosa combatió su ulterior acto de aplicación.

3.1. El primer acto de aplicación de las normas reclamadas

El artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, prevé como excepción al principio de definitividad que en los amparos en los que se reclamen normas generales con motivo de su primer acto de aplicación. En esos casos existen dos alternativas: acudir al juicio de amparo cuando se acredite que la norma general causa afectación o esperar a que se dicte la resolución definitiva del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; o impugnar la norma a través del juicio de amparo cuando se dicte la sentencia, laudo o resolución que pongan fin al juicio. En ambos casos el estudio de la norma impugnada no se puede desvincular de su acto de aplicación.

De la interpretación conjunta de las fracciones XIV y XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se reclama una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, se actualiza una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por lo que no puede exigirse al quejoso que agote los medios de defensa ordinarios que procedan contra el propio acto, al no poder desvincular éste de aquélla.

El fondo de la violación reclamada en el Recurso de Revisión 200/2019 es el sobreseimiento decretado en primera instancia por el Juez Tercero de Distrito




del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México.

En la sentencia definitiva del 28 de marzo de 2019, el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, resolvió, como petición de principio, que "... si en los acuerdos de inicio, la autoridad estimó procedente sujetar a los quejosos a un procedimiento de sanción por haberse ubicado en la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 8, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, con base en los elementos que les dieron a conocer, es claro que el primer acto que concretó la individualización de las hipótesis jurídicas controvertidas en este juicio, se verificó a través de los referidos acuerdos que dieron inicio a los procedimientos."

La anterior conclusión no es evidente, como lo afirmó el Juzgado de Distrito, ya que, en el caso en particular, las normas no se impugnaron con respecto a la sujeción al procedimiento administrativo sino en contra de las violaciones al principio de tipicidad y a los principios de proporcionalidad y alternatividad de las penas en que incurren las disposiciones normativas.

A pesar de que el juzgador afirma que "... lo cierto es que la quejosa no puede negar que desde el acuerdo de inicio de procedimiento sabía: 1.-Cuál era la conducta que se le atribuía. 2.- El precepto normativo que la regula y, por ende, la sanción que indefectiblemente habría de aplicar la autoridad. 3.- Así como la facultad con que contaba la autoridad responsable para seguir en su contra el procedimiento respectivo hasta el dictado de la resolución definitiva. ...", dicha afirmación no razona el por qué el conocimiento de la existencia de un procedimiento sancionador causa, por si mismo, un perjuicio al particular que se sujeta a una investigación. Al no haber resolución definitiva, las normas jurídicas



que establecen la conducta reprochable y la sanción correspondiente aun no causan perjuicio alguno al particular.

El sobreseimiento se decretó porque el Juez de Distrito consideró consentido el primer acto de aplicación de las normas previstas en los artículos: 8, fracción IV y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas; 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y Artículo Primero del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican"; esto debido a que consideró que las normas reclamadas fueron aplicadas con el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador, y no en la resolución definitiva en la que la autoridad responsable determinó que se había actualizado la conducta sancionada, como es lo correcto.

Esa resolución del Juez de Distrito es incorrecta porque los quejosos tenían imposibilidad jurídica de reclamar los acuerdos de inicio de los procedimientos administrativos sancionadores, porque estos no constituyen un acto de aplicación de las normas reclamadas, por lo tanto, no eran susceptibles de combatirse en ese momento a través del juicio de amparo.

Ese mismo criterio incorrecto lo sostuvo el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión 381/2018, al señalar que "se debe atender al primer acto que concrete la hipótesis jurídica controvertida en perjuicio del peticionario, siendo evidente que desde el acuerdo de inicio de procedimiento se actualizó el supuesto normativo contemplado en cada uno de los preceptos mencionados".



3.2. Análisis de las normas reclamadas en los juicios de amparo

Las normas reclamadas en las demandas de amparo, y cuyos problemas de constitucionalidad subsisten en el recurso de revisión son las previstas en los artículos: 8º, fracción IV y 27, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, abrogada a partir del 19 de julio de 2017, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y Primero del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican."

Artículo 8º, fracción IV de la abrogada Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas:

Artículo 8. Cualquiera de los sujetos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 2 de esta Ley, incurrirá en responsabilidad cuando en las contrataciones públicas de carácter federal, directa o indirectamente, realice alguna o algunas de las infracciones siguientes:

(...)

IV. Realice actos u omisiones que tengan por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas establecidos en las contrataciones públicas de carácter federal o simule el cumplimiento de éstos;

Artículo 27, párrafo primero, fracción II y párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto de la abrogada Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas:

Artículo 27. Las sanciones administrativas que deban imponerse por la comisión de las infracciones a que se refieren los artículos 8 y 9 de la presente Ley, consistirán en:

I. Tratándose de personas físicas:



a) Multa equivalente a la cantidad de mil a cincuenta mil veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal.

Tratándose de permisos, concesiones, autorizaciones o trámites relacionados con contrataciones públicas federales o transacciones comerciales internacionales, la multa máxima prevista en el párrafo anterior podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento, cuando existan elementos objetivos para determinar por parte de la autoridad competente que el beneficio obtenido por el infractor fue superior a la multa máxima.

Para el caso de contrataciones públicas federales realizadas, en términos de los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas, si la multa máxima prevista en el primer párrafo de este inciso resulta menor al treinta por ciento del monto del contrato, se impondrá una multa de entre el treinta y hasta el treinta y cinco por ciento del monto del contrato si este último le fue adjudicado al infractor, y

b) Inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 8 años;

II. Cuando se trate de personas morales:

a) Multa equivalente a la cantidad de diez mil hasta dos millones de veces el salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal.

Tratándose de permisos, concesiones, autorizaciones o trámites relacionados con contrataciones públicas federales o transacciones comerciales internacionales, la multa máxima prevista en el párrafo



anterior podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento, cuando existan elementos objetivos para determinar por parte de la autoridad competente que el beneficio obtenido por el infractor fue superior a la multa máxima.

Para el caso de contrataciones públicas federales realizadas, en términos de los ordenamientos legales en materia de contrataciones públicas, si la multa máxima prevista en el primer párrafo de este inciso resulta menor al treinta por ciento del monto del contrato, se impondrá una multa de entre el treinta y hasta el treinta y cinco por ciento del monto del contrato si este último le fue adjudicado al infractor, y

b) Inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 10 años.

Las multas que se determinen en términos de esta Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable.

Tratándose de la infracción prevista en la fracción II del artículo 8 de esta Ley, sólo resultará aplicable la sanción de inhabilitación, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones aplicables.

El plazo de la sanción de inhabilitación se computará a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad competente publique la resolución respectiva en el Diario Oficial de la Federación, salvo que la inhabilitación derive de la participación del infractor en contrataciones públicas de carácter federal cuyos actos deben difundirse en CompraNet en términos



de las disposiciones aplicables, en cuyo caso dicho plazo se contará a partir de la fecha de su difusión en ese sistema.


Cuando en términos de lo previsto por esta Ley, se impongan a una misma persona dos o más inhabilitaciones en diversas contrataciones públicas de carácter federal, dichas inhabilitaciones se aplicarán en forma sucesiva, de manera tal que una vez que se agote el plazo de la primera, comenzará la aplicación de la segunda inhabilitación y así sucesivamente. La misma regla se aplicará tratándose de transacciones comerciales internacionales.

En ningún caso podrá decretarse la suspensión de la inhabilitación, aún cuando el infractor opte por el juicio contencioso administrativo contra el acto de autoridad que la ordene o ejecute.

Artículo 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo:

Artículo 9.- El acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada.


Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, el acto administrativo por el cual se otorgue un beneficio al particular, caso en el cual su cumplimiento será exigible por éste al órgano administrativo que lo emitió desde la fecha en que se dictó o aquélla que tenga señalada para iniciar su vigencia; así como los casos en virtud de los cuales se realicen actos de inspección, investigación o vigilancia conforme a las disposiciones de ésta u otras leyes, los cuales son exigibles a partir de la fecha en que la Administración Pública Federal los efectúe.



Los artículos 9º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, se impugnaron como un sistema normativo para la ejecución de actos administrativos.

Artículo Primero del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican."

ARTÍCULO PRIMERO.- Se delega en el Titular de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, en los titulares de área de quejas, denuncias e investigaciones y de responsabilidades de dicha Unidad, en los delegados de esa Unidad en cada una de las empresas productivas subsidiarias y en los titulares de las áreas de quejas, denuncias e investigaciones y de responsabilidades de las delegaciones de la citada Unidad; así como en los Titulares de las Unidades de Responsabilidades y titulares de las áreas de quejas, denuncias e investigaciones y de responsabilidades de dichas Unidades de la Comisión Federal de Electricidad y de sus empresas productivas subsidiarias, las facultades que la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas confiere a la Secretaría de la Función Pública para recibir las denuncias y tomar conocimiento de las presuntas infracciones que cometan los sujetos de la citada Ley; iniciar de oficio o por denuncia y llevar hasta su conclusión la etapa de investigación prevista en el propio ordenamiento, así como para iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo sancionador previsto en el referido ordenamiento e imponer las sanciones administrativas que procedan, incluyendo las facultades de imponer medidas de apremio, salvo la reservada a esta Secretaría en términos de lo dispuesto por el artículo 5, párrafos segundo y tercero, de la citada Ley.



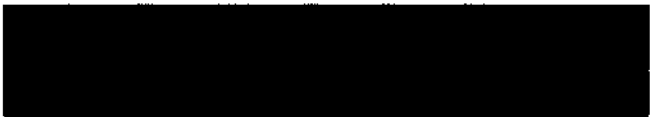
Asimismo, también se delega en los citados servidores públicos, la facultad para tramitar y resolver el recurso establecido en dicha Ley.

Los servidores públicos referidos, para el ejercicio de las facultades que se les delegan, se auxiliarán del personal que se encuentre a su cargo.

Como se puede apreciar, las normas previstas en los artículos 8º, fracción IV y 27, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas son las que se reclaman de manera primordial, ya que estas tienen el carácter de sancionadoras. Son sancionadoras porque de su actualización deriva, como consecuencia, la imposición de sanciones. El artículo 8º prevé el supuesto jurídico de la norma: "Realice actos u omisiones que tengan por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas establecidos en las contrataciones públicas de carácter federal o simule el cumplimiento de éstos", y el artículo 27 las consecuencias jurídicas consistentes en diversas sanciones.

En el caso de las normas sancionadoras se requiere de un acto de autoridad competente consistente en una resolución que determine la aplicación de las consecuencias jurídicas (individualización de las sanciones) a los sujetos responsables.

Considerar que las citadas normas sancionadoras se actualizan con el inicio del procedimiento administrativo sancionador es tanto como sostener que las personas a las que se les sujeta al procedimiento son responsables por el solo inicio de este, lo que sería una interpretación contraria al principio de presunción de inocencia, ya que los sujetos tendrían el carácter de culpables desde el inicio del procedimiento. Por el contrario, con la notificación del inicio del procedimiento se da oportunidad a las personas acusada de ofrecer pruebas, se escuchadas y



rendir los argumentos concernientes a su defensa; por ello es importante que se les precise de qué se les acusa, esa es la razón de la cita de los preceptos en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo sancionador.

En el inicio del procedimiento administrativo sancionador es incierto que se sancione al sujeto, esa determinación se realiza en la resolución de dicho procedimiento. Al respecto son aplicables los siguientes criterios:

INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2011. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, APARTADO 2, DE LA LEY RELATIVA PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN EN EL AMPARO, SE DEMUESTRA CON LA DECLARACIÓN ANUAL EN LA QUE RESULTE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL CONTRIBUYENTE.

El citado precepto establece que para los efectos del artículo 11, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, el monto del crédito fiscal a que éste se refiere no podrá acreditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el que aquél se generó, mientras que el aludido precepto 11 sí permite hacerlo. Sin embargo, no basta la existencia del mencionado crédito fiscal para actualizar el supuesto de aplicación del señalado artículo 21, fracción II, apartado 2, para efectos de su impugnación en el amparo, sino que, además, es necesario que el derecho para acreditar el referido crédito pueda materializarse, circunstancia que sólo puede surtirse cuando, derivado de la declaración anual, resulte impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente. En estas condiciones, si el quejoso no está en posibilidad de conocer si va a tener un saldo a pagar por concepto de impuesto sobre la renta hasta que éste sea calculado, esto es, al término del ejercicio fiscal, es claro que no puede saber si está en el supuesto de aplicación de la norma hasta que ello acontezca y, de



ser así, para acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, debe exhibir su declaración anual, pues sólo así puede estimarse que se ubica en la indicada hipótesis normativa, al incidir en su esfera jurídica por restringirle un derecho. En consecuencia, el primer acto de aplicación del artículo 21, fracción II, apartado 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011 se demuestra con la declaración anual en la que resulte impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente.

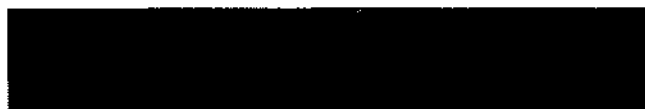
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 263/2011. Servicios y Fertilizantes del Noroeste, S.A. de C.V. 13 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Horacio Vega Montiel, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Beatriz Munguía Ventura.

Amparo en revisión 284/2011. Servicios y Fertilizantes del Noroeste, S.A. de C.V. 13 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Guillermo Maldonado Maldonado. Secretaria: Rocío Monter Reyes.¹¹
(Énfasis añadido)


DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. EL HECHO DE QUE UNA AUTORIDAD EN EL REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS PARA SU COBRO CITE EL ARTÍCULO 144, FRACCIONES V Y VI, DEL

¹¹ Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 2012; Tomo 3; Pág. 1866. V.3o.P.A.1 A (10a.). Registro No. 2 002 153.



CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS QUE PREVEÉ DOS SUPUESTOS EN QUE AQUÉLLOS SE CAUSARÁN, NO IMPLICA POR SÍ MISMO UN ACTO DE APLICACIÓN DE DICHA NORMA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.

La circunstancia de que una autoridad, al requerir la entrega de documentos y planos a fin de realizar el cobro de los derechos por servicios prestados por desarrollo urbano y obras públicas municipales, concretamente por la autorización para realizar obras de modificación, rotura o corte de pavimento o concreto en las calles, guarniciones y banquetas para llevar a cabo obras o instalaciones subterráneas, así como para la instalación, tendido o permanencia anual de cables y/o tuberías subterráneas o aéreas en la vía pública, cite el artículo 144, fracciones V y VI, del Código Financiero del Estado de México y Municipios que los prevé, no implica por sí misma un acto de aplicación de dicha norma que genere un perjuicio a la contribuyente, traducido en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico, porque no se materializó de manera concreta el supuesto normativo en relación con ella; toda vez que la determinación de un impuesto o un derecho requiere que la autoridad administrativa, en ejercicio de sus facultades, expida el acto a través del cual fija en cantidad líquida el monto al que asciende el crédito fiscal y con ello aplica el precepto que contiene la totalidad de los elementos esenciales del tributo, pues desde esa determinación será exigible al contribuyente; por ende, la simple cita de la mencionada disposición no trasciende de manera alguna a la esfera jurídica del contribuyente, que le pudiera causar un perjuicio para efectos de la procedencia del juicio de amparo.



PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 541/2006. Cable Net Internacional, S.A. de C.V. 31
de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: José Guillermo Zárate
Granados. Secretario: Hugo Mundo Valenzuela.¹²

(Énfasis añadido)

El tema relativo a la aplicación de una norma cuya constitucionalidad se reclama implica, en algunos casos, un estudio complejo, pues debe examinarse si se configuró el supuesto que describe y que con ese motivo se hubiere ordenado la realización de sus consecuencias jurídicas en un caso concreto, lo que implica analizar si se cumplieron las condiciones de aplicación de la norma referida con motivo de una conducta determinada.¹³

La actualización del supuesto jurídico de una norma en el sentido de generar las consecuencias en ella previstas se relaciona con la acreditación del interés jurídico que se requiere para acudir al amparo.


¹² DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. EL HECHO DE QUE UNA AUTORIDAD EN EL REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS PARA SU COBRO CITE EL ARTÍCULO 144, FRACCIONES V Y VI, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS QUE PREVE DOS SUPUESTOS EN QUE AQUÉLLOS SE CAUSARÁN, NO IMPLICA POR SÍ MISMO UN ACTO DE APLICACIÓN DE DICHA NORMA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Localización: [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Octubre de 2007; Pág. 3159. II.1o.A.140 A. Registro No. 171 196.

¹³ DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE MANERA IMPRECISA SE SEÑALAN LAS ACTUACIONES CONSIDERADAS COMO PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE DICHOS PRECEPTOS, ELLO NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE JUSTIFIQUE SU DESECHAMIENTO DE PLANO. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 40, Marzo de 2017; Tomo IV; Pág. 2657. I.7o.P.70 P (10a.). Registro No. 2 013 823.

El interés jurídico del quejoso quedará acreditado no solamente con probar que se encuentra en el supuesto de la norma, sino además deberá acreditar que efectivamente le fue aplicado dicho dispositivo mediante un acto que le genera perjuicio. El acto de aplicación es la fuente del perjuicio que genera el interés jurídico para acudir al amparo. Al respecto es relevante la siguiente jurisprudencia:

TELECOMUNICACIONES. ARTÍCULOS 91 Y 92 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. PARA QUE PROCEDA SU IMPUGNACIÓN EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU ESFERA JURÍDICA.

El oficio girado por la autoridad responsable director de Recaudación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones constituye sólo un mero recordatorio de los pagos a que se encuentra sujeta la quejosa, no obstante que se hace una descripción de los conceptos de pago y determinadas cantidades, no significa requerimiento alguno que pudiera considerarse como acto de aplicación de las leyes impugnadas de inconstitucionales - Ley Federal de Derechos en sus artículos 91 y 92, en relación con el 67 de la Ley Federal de Telecomunicaciones- toda vez que, su impugnación se hace a partir del conocimiento que la quejosa tuvo del referido oficio, lo que es insuficiente para acreditar el interés jurídico para impugnar los ordenamientos legales, pues tal aplicación no le para perjuicio alguno al no afectarle en su esfera jurídica de manera actual y real, en virtud de que será hasta que realice alguno de esos pagos, cuando se autoaplique las normas impugnadas; y en este sentido ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede impugnarse en el Juicio de garantías, siendo requisito ineludible que ese primer acto de aplicación, impugnado por el gobernado, verdaderamente le afecte en su esfera jurídica de manera actual y real; si éste no existe debe



decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73 fracción V y 74 fracción III de la Ley de Amparo.

Tesis de jurisprudencia 64/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.¹⁴

El primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de amparo, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su esfera jurídica. Tratándose de normas sancionadoras ese perjuicio se genera hasta la imposición de la sanción, que es la consecuencia que deriva de la actualización del supuesto jurídico de la norma sancionadora, decretada así por la autoridad competente.

Las normas sancionadoras tienen su primer acto de aplicación cuando la autoridad competente resuelve imponer la sanción.

3.3. La jurisprudencia que fundamenta el sobreseimiento

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en la Ciudad de México, resolvió sobreseer el juicio de amparo indirecto 526/2018, y sus acumulados 569/2018 y 571/2018, con fundamento en la siguiente jurisprudencia:

¹⁴ Localización: [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo X, Noviembre de 1999; Pág. 406. 1a./J. 64/99. Registro No. 192 976.



AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO PRESUPUESTO QUE SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY.

De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que dichos preceptos tienen como objetivo primordial determinar la procedencia del amparo indirecto, sólo contra una resolución definitiva, entendiéndose ésta como aquella que sea la última, la que ponga fin al asunto; y que para estar en tales supuestos, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, o bien, todas las etapas procesales, en tratándose de actos emitidos en un procedimiento seguido en forma de juicio. Sin embargo, cuando la resolución dictada dentro del procedimiento, aun sin ser la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del promovente y se reclama también ésta, surge una excepción al principio de definitividad, en virtud de la indivisibilidad que opera en el juicio de garantías, que impide el examen de la ley, desvinculándola del acto de aplicación que actualiza el perjuicio. En este supuesto, el juicio de amparo procede, desde luego, contra ambos actos, siempre y cuando esté demostrada la aplicación de la ley, de manera tal que no basta la afirmación del quejoso en ese sentido para que el juicio resulte procedente contra todos los actos reclamados.¹⁵

(Énfasis añadido)

¹⁵ Localización: [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XII, Diciembre de 2000; Pág. 133. 1a./J. 35/2000. Registro No. 190 707.



Esta jurisprudencia aplicada por el Juez de Distrito para decretar el sobreseimiento no es aplicable al caso, porque en ella no se consideran los casos en los que se presenta el primer acto de aplicación de normas sancionadoras sino que establece que las resoluciones dictadas dentro un procedimiento, aun sin ser la resolución definitiva, constituyen el primer acto de aplicación sin distinguir si son normas sancionadoras o no.

Como ya se analizó, para que exista un acto de aplicación de una norma sancionadora se requiere que una autoridad competente sea la que imponga o individualice la sanción al sujeto responsable, por lo que se requiere de una resolución definitiva del procedimiento sancionador, en el que se haya respetado la garantía de audiencia. Por lo anterior, en el caso en estudio, no es posible que exista un acto de aplicación de las normas sancionadoras reclamadas dentro del procedimiento.

Si bien no existen criterios totalmente aplicables al caso, lo cual es una laguna jurisprudencial que se requiere colmar, las siguientes jurisprudencias del Pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí son aplicables:

AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que **es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de**



aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad.

Contradicción de tesis 8/2006-PL.¹⁶

AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA CUANDO SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

De los artículos 16, fracción XXVIII, 79, fracción X, 110, 121 a 123, 125, 127, 134 y 136 a 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

¹⁶Localización: [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Diciembre de 2007; Pág. 5. P.J.J. 78/2007. Registro No. 170 866.



Libre y Soberano de Guerrero, en relación con los diversos 73, fracciones XII, párrafo tercero, y XV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se impugne la inconstitucionalidad de una ley dentro de un procedimiento administrativo disciplinario seguido con fundamento en el referido artículo 136 y el Consejo de la Judicatura Estatal aplique como sanción al servidor público la suspensión, destitución o inhabilitación, **solamente procederá el juicio de amparo indirecto, como excepción al principio de definitividad, sin necesidad de esperar a que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia dicte la resolución definitiva al resolver el recurso de revisión oficioso, cuando se acredite que es el primer acto de aplicación de la ley reclamada, y además de imposible reparación.** Lo anterior es así, porque razonar en sentido contrario llevaría a paralizar todos los procedimientos administrativos con el solo hecho de impugnar la inconstitucionalidad de la ley, lo que es contrario al fin perseguido por el juicio de amparo. Además, en el caso, es aplicable por analogía, lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo.

Contradicción de tesis 398/2009.¹⁷

Son aplicables porque el perjuicio de imposible reparación dentro del procedimiento solo sería factible si se impusieran las sanciones, pero, al no ser esto posible, lo que resta es la aplicación de las normas sancionadoras reclamadas a través de la resolución del procedimiento administrativo sancionador.

¹⁷ Localización: [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Enero de 2010; Pág. 267. 2a./J. 215/2009. Registro No. 165 618.



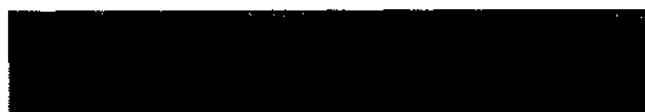
4. Interés y trascendencia del caso planteado en la Reasunción de Competencia 205/2019

La Suprema Corte puede reasumir su competencia originaria sobre aquellos casos que revistan características excepcionales y trascendentes, reflejadas en su relevancia, novedad o complejidad. La finalidad de la Suprema Corte al delegar su competencia originaria mediante la emisión del Acuerdo General 5/2013, es que solamente conozca de aquellos amparos en revisión que requieran un pronunciamiento suyo en razón de que el asunto tenga las anteriores características.

El Acuerdo General 5/2013 se emitió en virtud de la necesidad de precisar la competencia del Pleno de la Suprema Corte, con motivo de las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011, que dieron origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a su vez motivaron importantes modificaciones al Acuerdo General Plenario 5/2001 en lo relativo a la determinación de los asuntos que la Suprema Corte conservaría para su resolución y el envío de los de su competencia ordinaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Por lo anterior, el Acuerdo General 5/2013 se debe interpretar a la luz de las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio de 2011, que tienen como eje el cambio de paradigma en materia de derechos humanos y sus principios de interpretación pro persona y cláusula de interpretación conforme.

Para dar contenido al supuesto de "cuando existen razones relevantes para que el Pleno o alguna de las Salas asuma su competencia originaria",¹⁸ en específico al adjetivo "relevantes" es necesario aplicar el principio jurídico de analogía, en virtud de que existe una laguna jurídica por ausencia de

¹⁸ Punto Décimo Cuarto, párrafo 2, del Acuerdo General 5/2013.



reglamentación legislativa que establezca los requisitos necesarios para determinar la existencia de "razones relevantes".

De conformidad con lo resuelto por el Poder Judicial Federal, las lagunas jurídicas obligan a los operadores jurídicos a emplear técnicas sustantivas con las cuales se pueda obtener una solución mediante un proceso de integración que puede ser:

1. Heterointegración o derecho supletorio o de supletoriedad; o
2. Autointegración por medio de la analogía y principios generales del derecho.

En el caso que nos ocupa no opera la supletoriedad debido a que el Acuerdo General 5/2013 no la prevé ni existe ordenamiento jurídico alguno que establezca lo que se debe entender por razones relevantes para la reasunción de competencia de la Suprema Corte.

La anterior deficiencia conduce al sistema de autointegración que opera por medio de la analogía y principios generales del derecho. En el caso en estudio, se cumplen las condiciones para la integración por medio de la analogía:

1. Falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto. No hay norma expresa alguna que establezca los elementos para dar contenido al adjetivo relevantes.
2. Igualdad esencial de los hechos. Existen disposiciones constitucionales y legales que dan contenido a los adjetivos "interés, importancia y trascendencia", para los distintos supuestos de atracción de la Suprema



Corte de amparos directos, revisión en amparo indirecto y conocimiento de amparos directos en revisión; tanto en el supuesto de atracción como en el de reasunción el objeto es que la Suprema Corte conozca de determinados asuntos que por sus características particulares sean de relevancia para el orden constitucional:

- A. El párrafo final de la fracción V del artículo 107 de la Constitución establece que la Suprema Corte, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República o del Ejecutivo Federal, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
- B. El penúltimo párrafo de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución establece que, en los supuestos no expresos de competencia originaria de la Suprema Corte, señalados en la misma fracción, la Suprema Corte, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República o del Ejecutivo Federal, podrá conocer de los recursos de revisión en amparo indirecto, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
- C. La fracción IX del artículo 107 de la Constitución, establece como requisito para que la Suprema Corte conozca de los recursos de revisión en contra de resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo, el que se decida sobre la inconstitucionalidad de una ley o se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.



De lo anterior se desprende que la Constitución estableció, de forma sistemática, elementos que determinan la necesidad del conocimiento de amparos y amparos en revisión por parte de la Suprema Corte: interés, importancia y trascendencia. Necesidad que también se reconoció por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Acuerdo General 5/2013, por lo que se consideró necesario que proceda la reasunción de competencia, mediante la utilización del adjetivo "relevancia".

La incorporación del elemento "relevancia" en el Acuerdo General 5/2013 encuentra sentido en el principio general de derecho de mayoría de razón, ya que, si asuntos que no son de competencia originaria de la Suprema Corte pueden llegar a conocimiento de la misma en virtud de su interés/importancia y trascendencia, por mayoría de razón la Suprema Corte debe conocer de aquellos asuntos que delegó de forma genérica a los Tribunales Colegiados pero que, en el caso en particular, su resolución sea relevante para el orden constitucional.

De la literalidad de las fracciones citadas del artículo 107, no se advierten parámetros para dar contenido a los supuestos de interés, importancia y trascendencia, sin embargo, la fracción IX del artículo 107 de la Constitución, establece que es la Suprema Corte la competente para determinar dichos contenidos, atribución que ha ejercido mediante la labor jurisprudencial y la emisión de acuerdos generales.

La jurisprudencia 1a./J. 27/2008¹⁹ establece requisitos para el ejercicio de la facultad de atracción, mismos que se pueden resumir en:

¹⁹ FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. Localización: [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Abril de 2008; Pág. 150. 1a./J. 27/2008. Registro No. 169 885.



1. Importancia. Que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de justicia, y;
2. Trascendencia. Que el caso revista un carácter trascendente reflejando en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente, para casos futuros o la complejidad sistemática de los mismos, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

No existen parámetros rígidos para determinar cuándo se está en presencia de un caso que reviste interés y trascendencia para justificar el ejercicio de la reasunción de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el análisis debe ser casuístico.²⁰

4.1. Determinación del primer acto de aplicación de las normas sancionadoras en los procedimientos administrativos sancionadores

La naturaleza intrínseca del caso se puede clasificar desde dos aspectos: una particular y otro general. El particular consiste en determinar si los autos de inicio en el procedimiento administrativo sancionador **debe** o **puede** considerarse como el primer acto de aplicación, de ejecución irreparable, en perjuicio de los quejosos. El general es definir si las excepciones al principio de definitividad que establezca el Poder Judicial Federal pueden operar en perjuicio de los particulares.

²⁰ El "interés" y "trascendencia" se deben determinar a partir de las notas relativas a la naturaleza intrínseca del asunto, tanto, desde el punto de vista jurídico como extrajurídico.




Con respecto al aspecto particular, es necesario resaltar que actualmente no existe criterio jurisprudencial alguno que determine en que casos el inicio de un procedimiento administrativo sancionador causa, por si mismo, un perjuicio a los particulares, cuando estos reclaman la inconstitucionalidad de normas sancionadoras.

4.2. Determinación del primer acto de aplicación de las normas sancionadoras como garantía del principio de presunción de inocencia

Con el inicio del procedimiento administrativo sancionador y durante toda la investigación, los particulares gozan de la presunción de inocencia y hasta que no haya una resolución no se puede actualizar la hipótesis normativa sancionadora, existirá un perjuicio en su esfera jurídica en el momento en que se imponga una sanción inconstitucional mediante una resolución definitiva. El estudio y pronunciamiento de la Suprema Corte sobre esta particularidad en la acreditación del primer acto de aplicación de las normas sancionadoras es de relevancia para preservar el principio de presunción de inocencia.

4.3. Denegación de justicia por decretar sobreseimientos sin fundamentos jurídicos

Al haber decretado un sobreseimiento que jurídicamente no tiene sustento, implica una denegación de justicia. Esto es violatorio del artículo 17 constitucional que establece: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.". En el caso en estudio la violación es aún más grave por cuanto a que no existen jurídicamente esos formalismos



procedimentales, sino que por negligencia se aplicaron estos. Además, para decretar un sobreseimiento no debe existir duda de su actualización (artículo 65 de la Ley de Amparo).

El definir el momento en el que se puede promover el juicio de amparo se relaciona con la posibilidad de que se resuelva el fondo del asunto.

El que se defina el momento en el que existe el primer acto de aplicación de las normas sancionadoras, como las reclamadas en el presente caso, fortalecerá el derecho de acceso a la justicia debido a que se precisará, en términos del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en qué momento se da o no el consentimiento tácito del primer acto de aplicación de dichas normas sancionadoras.

4.4. Interpretación y aplicación de jurisprudencias en la Décima Época

En el caso en estudio, el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región resolvió sobreseer el juicio de amparo con motivo de que, en su consideración, fundada en jurisprudencias anteriores a la Décima Época, el primer acto de aplicación de los artículos 8, fracción IV, y 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas; 9° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y Primero del "ACUERDO por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican", se actualizó con los actos de inicio de los procedimientos administrativos sancionadores:

"En el caso se estima actualizada la causa de improcedencia contenida en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que esas normas no son impugnadas en este juicio con motivo del primer acto de



aplicación, sino de uno ulterior y, por tanto, deben estimarse consentidas tácitamente (...)

(...) si en los acuerdos de inicio la autoridad estimó procedente sujetar a los quejosos a un procedimiento de sanción por haberse ubicado en la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 8, de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, con base en los elementos que les dieron a conocer, es claro que el primer acto que concretó la individualización de las hipótesis jurídicas controvertidas en este juicio, se verificó a través de los referidos acuerdos que dieron inicio a los procedimientos (...)

(...) los quejosos no tenían que esperar hasta que se resolviera el procedimiento administrativo sancionatorio incoado en su contra, para saber que ésta tenía como finalidad sancionarlo conforme a los preceptos legales que ahora impugna (...)

(...) No debe pasar inadvertido el hecho de que el acuerdo de inicio de procedimiento sea un acto de naturaleza intraprocesal; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando la resolución dictada dentro de un procedimiento, aun sin ser la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del promovente (como en el caso acontece), y se reclama también esta, **surge una excepción al principio de definitividad** (...)

De la transcripción se desprende que el juzgador reconoció la naturaleza intraprocesal del acuerdo de inicio del procedimiento y por lo tanto reconoce que no es una resolución definitiva, por lo que para fundar y motivar su sentencia recurre a una jurisprudencia de la Suprema Corte que razona una excepción al principio de definitividad, dando por hecho la actualización del perjuicio en contra del promovente con la sola emisión del acuerdo de inicio del procedimiento. Es



decir, el juzgador interpretó la jurisprudencia de la Suprema Corte, con respecto al momento oportuno para interponer el juicio de amparo, en perjuicio de los quejosos.

Lo anterior sin considerar que la aplicación de las normas sancionadoras reclamadas como inconstitucionales no se había actualizado y, por lo tanto, no generaron un primer acto de aplicación.

De acuerdo al razonamiento del juzgador, en principio, la sola emisión del acuerdo de inicio del procedimiento no es suficiente para interponer juicio de amparo, pero con base en jurisprudencia de la Corte, que establece una excepción al principio de definitividad, argumenta que el momento procesal oportuno para la interposición del amparo empezó a correr a partir de la emisión del acuerdo.

La citada interpretación, además de incorrecta por no ser aplicable a las normas sancionadoras como las reclamadas, es contraria al segundo párrafo del artículo 1º de la Constitución, que sujeta a los operadores jurídicos a favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia, que en este caso sería tomar en consideración la naturaleza intraprocesal del acuerdo de inicio del procedimiento para dar oportunidad a los quejosos de impugnar las normas reclamadas una vez que se materialice la afectación en su esfera jurídica por medio de una resolución administrativa.

Es importante, procedente y necesario que la Suprema Corte se pronuncie sobre la imposibilidad de los juzgadores a interpretar jurisprudencia que prevé beneficios para los particulares, como lo son las excepciones al principio de definitividad, para justificar un supuesto consentimiento de los actos impugnados. Dicha interpretación es directamente contraria a la obligación de los juzgadores de



favorecer en todo tiempo la protección más amplia a las personas, que, como ya se señaló es un principio que rige en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, y que al aplicarlo, en este caso, sería dar oportunidad a los quejosos de impugnar las normas reclamadas una vez que se materialice la afectación en su esfera jurídica por medio de una resolución administrativa, respetando así su derecho a la presunción de inocencia durante el procedimiento. No debe prevalecer el criterio sustentado, pues implicaría asumir que el mero inicio de un procedimiento administrativo sancionador aplica al gobernado las normas sancionadoras por la conducta que se le imputa.

Si la Suprema Corte no se pronuncia sobre que existe la obligación constitucional de los juzgadores de interpretar la jurisprudencia de dicha Corte bajo el principio pro persona, se consentiría de forma tácita la afectación a uno de los principales principios de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011.

En lo que respecta a la trascendencia, el criterio que establezca la Suprema Corte determinará los alcances de la obligación constitucional de los jueces de interpretar la jurisprudencia bajo el principio pro persona y si la jurisprudencia de la novena época o anteriores debe ser interpretada a la luz de la reforma de junio de 2011.

Es importante tomar en consideración que, de conformidad con la Suprema Corte, las Épocas del Semanario Judicial de la Federación son periodos que reflejan los cambios paradigmáticos en la manera de formar jurisprudencia; y que el inicio de la actual Época se debió a las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, por lo que existe la necesidad de revisar la aplicación e interpretación de la jurisprudencia citada por el Juez de Distrito, que corresponde a la Novena Época y cuya interpretación dada por dicho operador jurídico es



directamente contraria al principio pro persona constitucionalizado por dicha reforma.

Ciudad de México, a 8 de julio de 2019

		
Irerl Elizabeth García Ramos	Elisur Arteaga Nava	Sergio Charbel Olvera Rangel



Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf
Secuencia: 2720024

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	MAURICIO GUERRERO MARTIN	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GUMM640815HDFRRR01			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e0000000000000000000000aac	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	08/07/2019T21:41:40Z / 08/07/2019T16:41:40-05:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	2d dc 48 d8 e2 9c 98 c2 b7 0d d0 b7 54 2a 21 ea b7 f8 ea a2 d7 7d 8f ea f3 11 d5 fa 98 c6 d2 96 f6 bb 4e 73 e6 a7 e2 63 2b 32 9a 0d cf 0a 0e 95 0b 25 dc c8 50 72 52 cf 46 2e c3 5d 49 c1 eb eb d6 f4 23 3b 76 cc bf 03 ab 5c 0e e7 75 3d 27 28 66 75 5f 2d ad cc f0 98 3c 46 1f e4 e6 af ba 26 37 f7 4f e1 08 88 d5 87 c0 ce ed 0c 23 65 ef d4 21 61 3b 24 f6 4b 9c 11 f5 28 2d c8 63 8e 5c 95 31 59 c9 9f aa 4f 7c 10 fd c0 87 68 3a 26 61 f8 ae fd 04 84 cf 05 73 b2 5e 7b 28 08 c1 4e be 0a d2 1e 9b 57 a9 4f 38 29 dd a8 eb 98 81 12 c9 83 cf cf 84 42 7f a6 0d d9 03 9b 57 32 2f 23 00 49 d0 23 e9 fe 2a d1 5c 8f 20 88 0c 57 91 7c 71 39 7e b6 e7 b0 1c 51 91 62 de 73 37 e1 99 a1 31 45 b6 b0 03 78 b3 39 ef ae ce ac 81 1d 07 e8 6e d5 de d0 24 24 a7 ab 1c 57 8e ee e5 16 39 33 50 3b			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	08/07/2019T21:41:42Z / 08/07/2019T16:41:42-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e0000000000000000000000aac			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	08/07/2019T21:41:40Z / 08/07/2019T16:41:40-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2723767			
	Datos estampillados:	30715FE388A8B90DC9893BC6513C3F174D57104D			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-34

SEGUNDA SALA
SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA 205/2019

En veintidós de agosto del dos mil diecinueve, la Secretaría de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el oficio **SGA/OAC/470/2019** signado por el Secretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal, y con el escrito registrado con el número de folio **025661** con anexo y _____

CERTIFICA: _____

Que en sesión privada de veintiuno de agosto del mismo año se puso a consideración de los Ministros integrantes de la Sala diversas solicitudes de reasunción de competencia y facultades de atracción, entre ellas la presente, determinando lo conducente en forma colegiada. Doy fe.

Ciudad de México, veintidós de agosto del dos mil diecinueve.

Vistos; téngase por recibido el oficio de cuenta a través del que el Secretario General de Acuerdos de esta Suprema Corte informa que, con el escrito del apoderado legal de las quejas **CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SOCIEDAD ANONIMA Y ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, personalidad que acredita con los instrumentos notariales número ciento veinticuatro mil doscientos sesenta y cinco y ciento veintiseis mil seiscientos treinta y ocho pasados ante la fe del Notario Público Setenta y Cuatro de la Ciudad de México, a través del cual solicita que esta Segunda Sala reasuma su competencia originaria para conocer del amparo en revisión **200/2019** del Índice del **Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, relativo al juicio de amparo **526/2018** y sus acumulados **569/2018** y **571/2018** (cuaderno auxiliar **82/2019**) del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con apoyo del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio, con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en esta ciudad, formó y registró la solicitud de reasunción de competencia **205/2019**.

A efecto de proveer lo conducente es necesario tomar en cuenta que al resolver la contradicción de tesis **137/2016** el Tribunal Pleno estableció que si bien los acuerdos emitidos por los Presidentes de un órgano colegiado —como pueden ser los tribunales colegiados de circuito, así como las Salas y el Pleno de este Alto Tribunal— se

SEGUNDA SALA

SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA 205/2019

consideran *formalmente* autos de trámite, lo cierto es que no todos lo constituyen *materialmente*, como sucede por ejemplo con aquellos dictados para reflejar una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional funcionando en pleno, pues en tales casos el Presidente no actúa por sí, sino en estricto acatamiento a una determinación del órgano actuando en forma colegiada, cuyas resoluciones son definitivas e inatacables. Esas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 33/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, enero de 2017, tomo I, de rubro: **RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO EMITIDO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DEL PLENO DE ESE ÓRGANO DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO**, de aplicación obligatoria para esta Segunda Sala en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.

Tomando en cuenta lo anterior y en atención a la certificación de cuenta en que la Secretaría de Acuerdos hace constar y da fe de que, una vez que se puso a consideración de la Sala el expediente en que se actúa en **sesión privada de veintiuno de agosto del año en curso** se determinó en forma colegiada **no reasumir la competencia originaria planteada por parte no legitimada**, en razón de que sobre el tema existen las jurisprudencias P./J. 95/97 de rubro "CONSENTIMIENTO EXPRESO DE UNA LEY. NO SE ACTUALIZA COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SU HIPÓTESIS FUE ACEPTADA POR EL QUEJOSO EN UN CONTRATO" y P./J. 78/2007 con el rubro "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN".

Con fundamento en el artículo 25, fracción I en relación con su diversa fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el mencionado 217 de la Ley de Amparo, comuníquesele al solicitante que **ante su falta de legitimación y en estricto acatamiento a la decisión unánime y colegiada, esta Segunda Sala no reasume su competencia para conocer del amparo en revisión**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-24

SEGUNDA SALA
SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA 205/2019

200/2019 antes referido, máxime que la facultad de reasumir o no la competencia originaria de un asunto depende exclusivamente de que en opinión de los Ministros de este Alto Tribunal el asunto de que se trate revista las condiciones que lo ameriten incluso cuando así lo solicite alguna de las partes constitucionalmente legitimadas para hacerlo.

Cabe precisar que en términos de la jurisprudencia obligatoria antes referida, aplicada por analogía la decisión de la Segunda Sala aquí reflejada es inatacable, y por ende resulta improcedente el recurso de reclamación en su contra, pues no constituye una simple determinación de trámite adoptada por el Presidente actuando como tal para ordenar el procedimiento, sino que se trata del reflejo de una determinación adoptada por la Segunda Sala cuyas decisiones son definitivas.

Con fundamento en el artículo 805 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican los solicitantes.

Con apoyo en los artículos 82, última parte del párrafo segundo, y 24, segundo párrafo, de la mencionada ley, ténganse como autorizadas a las personas mencionadas en el entendido de que si acreditan fehacientemente encontrarse legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho se les tendrá como autorizados con todas las atribuciones que establece el invocado precepto legal.

Respecto a la autorización de reproducir las constancias del expediente por medios electrónicos se acuerda favorablemente la solicitud de la parte solicitante de tomar fotografías del expediente en que se actúa, excepto las actuaciones de carácter confidencial y reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de su derecho de defensa, y se hace de su conocimiento que el deber de secrecía se transfiere al solicitante y a las personas físicas que en su nombre tengan acceso a las constancias respectivas, así como la responsabilidad constitucional en la que puedan incurrir en términos del artículo 1º, párrafo tercero, constitucional, en el caso de incumplir con el referido deber; comuníquese la referida autorización mediante oficio al Director General de Seguridad de este Alto Tribunal.

SEGUNDA SALA
SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA 205/2019

En relación con los anexos que exhibe la parte solicitante consistentes en opiniones elaboradas por un diverso despacho jurídico para que sean consideradas como manifestaciones, **infórmese que deberá estarse a lo determinado por esta Sala.**

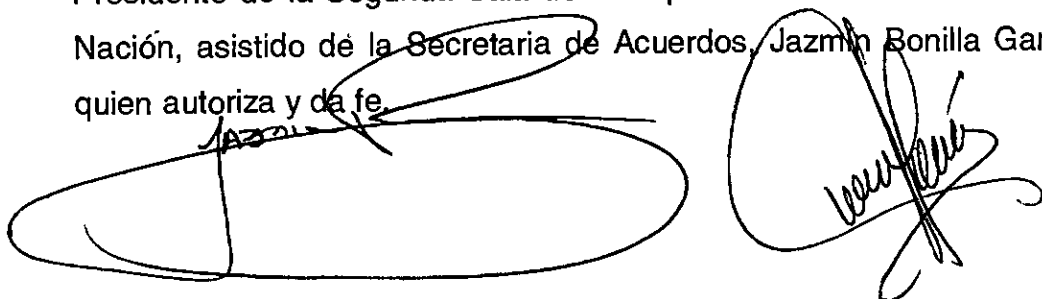
Comuníquese esta decisión al tribunal colegiado de origen para su conocimiento.

Dése el aviso respectivo a la Titular de la Oficina de la Estadística Judicial de este Alto Tribunal y háganse los ajustes correspondientes en la estadística de esta Sala.

Finalmente, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que hasta que concluya en definitiva el trámite de este asunto, mediante la certificación respectiva en la que se haga constar esa circunstancia y agregando, en su caso, las constancias y acuses de recibo correspondientes, sin dar nueva cuenta lo remita al archivo, excepción hecha de los casos en que exista algún documento original respecto del que se deba proveer en términos del artículo 12, fracción IV, del **Acuerdo General 8/2019** relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para tal efecto, la Secretaría habrá de tomar en cuenta que, en caso que el expediente en que se actúa cuente con cuademillo auxiliar, de conformidad con el diverso artículo 23 del referido **Acuerdo General 8/2019** se deberá hacer constar esa circunstancia en la certificación respectiva para que se proceda a su destrucción.

Notifíquese y cúmplase.

Lo acuerda y firma el **Ministro Javier Laynez Potisek**, Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asistido de la Secretaría de Acuerdos, Jazmín Bonilla García, quien autoriza y da fe.



Esta foja corresponde al acuerdo dictado por el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el **veintidós de agosto del dos mil diecinueve** en el expediente de solicitud de reasunción de competencia 205/2019. Conste.

MPL

EN **23 AGO 2019** SE FIJO LISTA PARA NOTIFICAR
A LAS PARTES EL ACUERDO ANTERIOR. CONSTE

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: S.R.C. 205.pdf
Secuencia: 2784821

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	VIRGINIA LUNA QUEZADA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	LUQV810718MDFNZR09			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000f0e	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/08/2019T21:19:26Z / 22/08/2019T16:19:26-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	1e 43 50 5d 79 c4 71 b8 1c a9 4b 62 7d b7 d1 8e 0e ec b0 eb 70 3c 9c 9e 52 90 09 23 1a c6 e4 5f af cd 7d 05 c9 3d 5b f6 3d ba 71 ae 50 47 ed f0 c4 79 2a 44 14 a3 b4 de c8 64 92 b5 a9 ec 08 15 cc 6b 2a 9c 0b 57 6a 77 12 7f d2 2f 1b 37 35 4a e4 ac d9 75 1d 47 ac 8e dd ff 0c 26 4e 35 f8 34 d9 65 75 66 38 a0 e8 94 79 e4 e8 0d 2a f7 a0 ff 1f f0 0a 2e 3b e3 49 80 06 8e 58 b9 60 ed 31 56 09 79 03 37 b3 a8 ff 27 b5 d3 ff d8 f6 8b 04 1a cf 50 bd f6 6c ff ec 30 36 fa 76 9b 98 57 77 0d 90 2f fa 2a 67 a0 3a 24 98 43 ee 6a 30 e7 19 1d 32 19 31 2d b9 f3 80 af 1a 6e da 68 7f bb dd 3d 58 55 f5 e8 76 7e 8b 3f e4 01 aa 0d 3b c9 dd 66 73 bb 9e d9 ce f0 49 ac 89 09 43 b6 cb b6 28 95 4c f9 38 6a 82 ab 47 ce 9e bf 3f b6 ff 84 ed 2f 9c 26 59 ae ef 8c ae 87 49 b9 98 a3 c3 02 e9 cb			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/08/2019T21:19:27Z / 22/08/2019T16:19:27-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000f0e			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	22/08/2019T21:19:26Z / 22/08/2019T16:19:26-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2788596			
	Datos estampillados:	531A39BB7061667078580677739A05CEE77853B8			



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de envío

Destinatario: DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fecha de envío: 23/08/2019 8:09:25

Tipo y Núm. de Exp. en SCJN: SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA 205/2019

Núm. de oficio en SCJN: MI/SS/C/8376/2019

Fecha de ingreso de acuerdo: 22/08/2019 16:13:44

Fecha de acuerdo: 22/08/2019

Tipo de acuerdo: AUTORIZADOS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, NO SE REASUME LA SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA, PARA CONOCIMIENTO, SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA

Síntesis del acuerdo: COMUNÍQUESE AL SOLICITANTE QUE ANTE SU FALTA DE LEGITIMACIÓN Y EN ESTRICTO ACATAMIENTO A LA DECISIÓN UNÁNIME Y COLEGIADA, ESTA SEGUNDA SALA NO REASUME SU COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO EN REVISIÓN 200/2019.
TÉNGANSE COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL QUE INDICAN LOS SOLICITANTES.
TÉNGANSE COMO AUTORIZADAS A LAS PERSONAS MENCIONADAS, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI ACREDITAN FEHACIENTEMENTE ENCONTRASE LEGALMENTE FACULTADAS PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE LICENCIADO EN DERECHO SE LES TENDRÁ COMO AUTORIZADOS CON TODAS LAS ATRIBUCIONES QUE ESTABLECE EL INVOCADO PRECEPTO LEGAL.
RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN DE REPRODUCIR LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, SE ACUERDA FAVORABLEMENTE LA SOLICITUD DE LA PARTE SOLICITANTE DE TOMAR FOTOGRAFÍAS DEL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, EXCEPTO LAS ACTUACIONES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y RESERVADO QUE NO RESULTEN NECESARIAS PARA EL EJERCICIO DE SU DERECHO DE DEFENSA. EN RELACIÓN CON LOS ANEXOS QUE EXHIBE LA PARTE SOLICITANTE CONSISTENTES EN OPINIONES ELABORADAS POR UN DIVERSO DESPACHO JURÍDICO PARA QUE SEAN CONSIDERADAS COMO MANIFESTACIONES, INFÓRMESE QUE DEBERÁ ESTARSE A LO DETERMINADO POR ESTA SALA.

Detalle y constancias remitidas (en su caso)

Acuerdo (en su caso constancias)	Tipo y núm. exp. en órgano destinatario	Constancia remitida	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente
<p>Acuerdo</p> <p>Fecha de acuerdo: 22/08/2019</p>	<p>200/2019 AMPARO EN REVISIÓN</p>		<p>(5) ORIGINAL</p>

* En el cómputo de número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: Generico134134_-465_886811.pdf
Secuencia: 2785674

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	HUGO ALTAMIRANO GOMEZ	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	AAGH720106HDFLMG02			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000ee4	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	23/08/2019T13:15:00Z / 23/08/2019T08:15:00-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	19 a7 82 98 98 e0 79 60 c3 aa 67 bb cc d8 38 19 8c f5 ef 83 2d 39 1a 27 5d c1 40 51 d5 fa 96 fd 7d 8d a7 05 87 3c c4 f8 62 89 42 1e 7c a8 bc 42 3f 0a b2 9d 4d 8a 8c 02 4b 75 5c e6 92 14 e4 92 95 4f 4c 66 69 ef 8b 5e 74 a0 ab 9c f3 72 cd b2 63 b1 be 7d 31 c8 9c 50 97 c6 d7 47 21 31 27 19 1a a6 59 8b ef 71 80 0c 80 e1 4c f0 13 a0 f1 4d 1f a5 d5 f4 96 c8 18 ac 83 9b fe c2 78 df 13 b8 20 dc 1c 5a d9 4d 8e 64 e5 c0 de f0 c4 51 10 4f 75 4d aa c8 4f b3 c8 4d 6e 91 4f 5d e3 9c a7 72 fa 58 87 5a 2c 5b 65 de 62 25 b3 9f 30 7c 54 42 ae 3a 56 bb cd 12 ea 2d 2a 2f 90 7f 12 e5 84 3f 62 da 6f 1d 00 1c d3 a3 92 a0 11 f5 8c 5c 25 d0 e6 ee af 47 b8 4a 0b aa 00 2d ee df aa f7 32 4d 36 cb 06 39 06 96 1d 88 95 89 31 c4 c6 83 57 c9 92 8b 75 fa 75 f1 ed ef 0d 43 c0 f6 41 cd 90 4b			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	23/08/2019T13:15:01Z / 23/08/2019T08:15:01-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000ee4			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	23/08/2019T13:15:00Z / 23/08/2019T08:15:00-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2789449			
	Datos estampillados:	EB2039F01E70EF76B502E272787384B2B092711B			



2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata

OF. C-1245/2019 C. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
P R E S E N T E.

OF. C-1246/2019 C. TITULAR DE LA OFICINA DE LA ESTADÍSTICA JUDICIAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
P R E S E N T E.

OF. C-1247/2019 C. DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
P R E S E N T E.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SEGUNDA SALA
SRIA. DE ACDOS.

SOLICITUD DE
REASUNCIÓN DE
COMPETENCIA
205/2019

ANTECEDENTE:

OFICIO
SGA/OAC/470/2019

En el expediente que se menciona al margen, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó el acuerdo siguiente:

"Ciudad de México, veintidos de agosto de los mil diecinueve.
Vistos, téngase por recibido el oficio de cuenta a través del que el Secretario General de Acuerdos de esta Suprema Corte informa que, con el escrito del apoderado legal de las quejas CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, SOCIEDAD ANÓNIMA y ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, personalidad que acredita con los instrumentos notariales número ciento veinticuatro mil doscientos sesenta y cinco y ciento veintiséis mil seiscientos treinta y ocho pasados ante la fe del Notario Público Setenta y Cuatro de la Ciudad de México, a través del cual solicita que esta Segunda Sala reasuma su competencia originaria para conocer del amparo en revisión 200/2019 del índice del Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, relativo al juicio de amparo 526/2018 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018 (cuaderno auxiliar 82/2019) del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con apoyo del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio, con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en esta ciudad, formó y registró la solicitud de reasunción de competencia 205/2019. -----

A efecto de proveer lo conducente es necesario tomar en cuenta que al resolver la contradicción de tesis 137/2016 el Tribunal Pleno estableció que si bien los acuerdos emitidos por los Presidentes de un órgano colegiado —como pueden ser los tribunales colegiados de circuito, así como las Salas y el Pleno de este Alto Tribunal— se consideran formalmente autos de trámite, lo cierto es que no todos lo constituyen materialmente, como sucede por ejemplo con aquellos dictados para reflejar una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional funcionando en pleno, pues en tales casos el Presidente no actúa por sí, sino en estricto acatamiento a una determinación del órgano actuando en forma colegiada, cuyas resoluciones son definitivas e inatacables. Esas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P/JJ. 33/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, enero de 2017, tomo I, de rubro: RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO EMITIDO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DEL PLENO DE ESE ÓRGANO DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO, de aplicación

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

obligatoria para esta Segunda Sala en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. -----

Tomando en cuenta lo anterior y en atención a la certificación de cuenta en que la Secretaría de Acuerdos hace constar y da fe de que, una vez que se puso a consideración de la Sala el expediente en que se actúa en sesión privada de veintiuno de agosto del año en curso se determinó en forma colegiada no reasumir la competencia originaria planteada por parte no legitimada, en razón de que sobre el tema existen las jurisprudencias P./J. 95/97 de rubro "CONSENTIMIENTO EXPRESO DE UNA LEY. NO SE ACTUALIZA COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SU HIPÓTESIS FUE ACEPTADA POR EL QUEJOSO EN UN CONTRATO" y P./J. 78/2007 con el rubro "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". ----

Con fundamento en el artículo 25, fracción I en relación con su diversa fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el mencionado 217 de la Ley de Amparo, comuníquesele al solicitante que ante su falta de legitimación y en estricto acatamiento a la decisión unánime y colegiada, esta Segunda Sala no reasume su competencia para conocer del amparo en revisión 200/2019 antes referido, máxime que la facultad de reasumir o no la competencia originaria de un asunto depende exclusivamente de que en opinión de los Ministros de este Alto Tribunal el asunto de que se trate revista las condiciones que lo ameriten incluso cuando así lo solicite alguna de las partes constitucionalmente legitimadas para hacerlo. -----

Cabe precisar que en términos de la jurisprudencia obligatoria antes referida, aplicada por analogía, la decisión de la Segunda Sala aquí reflejada es inatacable y, por ende, resulta improcedente el recurso de reclamación en su contra, pues no constituye una simple determinación de trámite adoptada por el Presidente actuando como tal para ordenar el procedimiento, sino que se trata del reflejo de una determinación adoptada por la Segunda Sala cuyas decisiones son definitivas. -----

Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican los solicitantes. -----

Con apoyo en los artículos 12, última parte del párrafo segundo, y 24, segundo párrafo, de la mencionada ley, ténganse como autorizadas a las personas mencionadas, en el entendido de que si acreditan fehacientemente encontrarse legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho se les tendrá como autorizados con todas las atribuciones que establece el invocado precepto legal. -----

Respecto a la autorización de reproducir las constancias del expediente a través de medios electrónicos, se acuerda favorablemente la solicitud de la parte solicitante de tomar fotografías del expediente en que se actúa, excepto las actuaciones de carácter confidencial y reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de su derecho de defensa, y se hace de su conocimiento que el deber de secrecía se transfiere al solicitante y a las personas físicas que en su nombre tengan acceso a las constancias respectivas, así como la responsabilidad constitucional en la que puedan incurrir en términos del artículo 1º, párrafo tercero, constitucional, en el caso de incumplir con el referido deber; comuníquese la referida autorización mediante oficio al Director General de Seguridad de este Alto Tribunal. -----

En relación con los anexos que exhibe la parte solicitante consistentes en opiniones elaboradas por un diverso despacho jurídico para que sean consideradas como manifestaciones, Infórmese que deberá estarse a lo determinado por esta Sala. -----



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Comuníquese esta decisión al tribunal colegiado de origen para su conocimiento. -----

Dése el aviso respectivo a la Titular de la Oficina de la Estadística Judicial de este Alto Tribunal y háganse los ajustes correspondientes en la estadística de esta Sala. -----

Finalmente, se instruye a la Secretaria de Acuerdos para que hasta que concluya en definitiva el trámite de este asunto, mediante la certificación respectiva en la que se haga constar esa circunstancia y agregando, en su caso, las constancias y acuses de recibo correspondientes, sin dar nueva cuenta lo remita al archivo, excepción hecha de los casos en que exista algún documento original respecto del que se deba proveer en términos del artículo 12, fracción IV, del Acuerdo General 8/2019 relativo a la organización, conservación, administración, y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para tal efecto, la Secretaria habrá de tomar en cuenta que, en caso que el expediente en que se actúa cuente con cuadernillo auxiliar, de conformidad con el diverso artículo 23 del referido Acuerdo General 8/2019 se deberá hacer constar esa circunstancia en la certificación respectiva para que se proceda a su destrucción. -

Notifíquese y cúmplase -----
Lo acuerda y firma el Ministro Javier Laynez Potisek, Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asistido de la Secretaria de Acuerdos, Jazmín Bonilla García, quien autoriza y da fe. FIRMADO -----

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales procedentes.

Le reitero mi atenta consideración.

Ciudad de México, 22 de agosto del 2019.

EL(LA) ACTUARIO(A) JUDICIAL ADSCRITO(A) A LA SEGUNDA SALA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
LIC. LAURA CALISTO
ACTUARIA JUDICIAL

RECEIVED 001 3 07
JUL 27 2019
7:11 PM
CJ-111

6PL

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf
Secuencia: 2787395

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	MONICA ZAIDA YQUERA BESSICHY	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	YUBM780504MVZQSN16			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e000000000000000000000000f83	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	23/08/2019T19:42:37Z / 23/08/2019T14:42:37-05:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	79 0d df 91 18 c3 34 98 7c 9f 26 7a a6 99 f6 12 86 91 64 f7 81 14 21 a0 69 0f 17 26 09 3d 4a c9 49 ca ad e0 1b fb 32 48 82 63 53 af 7d a5 df f4 e3 b6 fb c0 dd 0e 46 f8 55 ac d3 5e 94 65 23 62 24 8c ae 36 45 9a ad 5c 7b d6 de 5f 4a 0d df 79 0d 6a ad d4 6a b7 5b db 90 a8 f4 6b 4a 50 c0 57 14 e0 79 ef f2 d2 71 c5 b2 8c fb 22 99 64 51 a6 b5 8b 51 d0 96 2b 56 c8 00 16 03 d5 05 77 bc 06 8d 14 ac 5b 80 91 89 ca 75 f1 52 ae 00 44 1e 5f a1 bf 03 d0 ee 06 53 7f 07 f5 f6 79 a2 6c c3 ba eb e0 07 b2 b4 53 7f 0c 8d 20 bd e3 6a e2 96 0a f9 6c 2b 26 67 fa af 45 5b 04 cb 3e 69 d0 9e 8f 34 8c 5e 30 93 f4 f6 6f c9 4a e7 5f 15 ef 64 d9 92 a8 aa 37 d9 27 fb ea 66 af 50 4e cc 0d d4 91 73 db b5 95 b6 23 84 39 89 f3 03 cf 7f 1c de 35 19 ad 27 76 e7 97 36 86 c3 30 22 af 43 95 aa e2			
Validación OSCP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	23/08/2019T19:42:38Z / 23/08/2019T14:42:38-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OSCP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OSCP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OSCP:	706a6673636a6e000000000000000000000000f83			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	23/08/2019T19:42:37Z / 23/08/2019T14:42:37-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2791170			
	Datos estampillados:	CEC1FC75D0BA269D52B250CA3BE1D4CF67E597FB			



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓNOF. C-1245/2019 C. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
P R E S E N T E.OF. C-1246/2019 C. TITULAR DE LA OFICINA DE LA ESTADÍSTICA
JUDICIAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN.
P R E S E N T E.OF. C-1247/2019 C. DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
P R E S E N T E.SEGUNDA SALA
SRIA. DE ACDOS.SOLICITUD DE
REASUNCIÓN DE
COMPETENCIA
205/2019

En el expediente que se menciona al margen, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó el acuerdo siguiente:

"Ciudad de México, veintidos de agosto de los mil diecinueve.
Vistos, téngase por recibido el oficio de cuenta a través del que el Secretario General de Acuerdos de esta Suprema Corte informa que, con el escrito del apoderado en demanda de las quejas CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, SOCIEDAD ANÓNIMA y ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, personalidad que acredita con los instrumentos notariales número ciento veinticuatro mil doscientos sesenta y cinco y ciento veintiséis mil seiscientos treinta y ocho pasados ante la fe del Notario Público Setenta y Cuatro de la Ciudad de México, a través del cual solicita que esta Segunda Sala reasuma su competencia originaria para conocer del amparo en revisión 200/2019 del índice del Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, relativo al juicio de amparo 526/2018 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018 (cuaderno auxiliar 82/2019) del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con apoyo del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio, con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en esta ciudad, formó y registró la solicitud de reasunción de competencia 205/2019. -----

A efecto de proveer lo conducente es necesario tomar en cuenta que al resolver la contradicción de tesis 197/2016 el Tribunal Pleno estableció que si bien los acuerdos emitidos por los Presidentes de un órgano colegiado —como pueden ser los tribunales colegiados de circuito, así como las Salas y el Pleno de este Alto Tribunal— se consideran formalmente autos de trámite, lo cierto es que no todos lo constituyen materialmente, como sucede por ejemplo con aquellos dictados para reflejar una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional funcionando en pleno, pues en tales casos el Presidente no actúa por sí, sino en estricto acatamiento a una determinación del órgano actuando en forma colegiada, cuyas resoluciones son definitivas e inatacables. Esas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P/J. 33/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, enero de 2017, tomo I, de rubro: RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO EMITIDO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DEL PLENO DE ESE ÓRGANO DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO, de aplicación

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓNSUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

2019 AGO 23 PM 12 20

obligatoria para esta Segunda Sala en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. -----

Tomando en cuenta lo anterior y en atención a la certificación de cuenta en que la Secretaría de Acuerdos hace constar y da fe de que, una vez que se puso a consideración de la Sala el expediente en que se actúa en sesión privada de veintuno de agosto del año en curso se determinó en forma colegiada no reasumir la competencia originaria planteada por parte no legitimada, en razón de que sobre el tema existen las jurisprudencias P./J. 95/97 de rubro "CONSENTIMIENTO EXPRESO DE UNA LEY. NO SE ACTUALIZA COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SU HIPÓTESIS FUE ACEPTADA POR EL QUEJOSO EN UN CONTRATO" y P./J. 78/2007 con el rubro "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". ----

Con fundamento en el artículo 25, fracción I en relación con su diversa fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el mencionado 217 de la Ley de Amparo, comuníquesele al solicitante que ante su falta de legitimación y en estricto acatamiento a la decisión unánime y colegiada, esta Segunda Sala no reasume su competencia para conocer del amparo en revisión 200/2019 antes referido, máxime que la facultad de reasumir o no la competencia originaria de un asunto depende exclusivamente de que en opinión de los Ministros de este Alto Tribunal el asunto de que se trate revista las condiciones que lo ameriten incluso cuando así lo solicite alguna de las partes constitucionalmente legitimadas para hacerlo. -----

Cabe precisar que en términos de la jurisprudencia obligatoria antes referida, aplicada por analogía, la decisión de la Segunda Sala aquí reflejada es inatacable y, por ende, resulta improcedente el recurso de reclamación en su contra, pues no constituye una simple determinación de trámite adoptada por el Presidente actuando como tal para ordenar el procedimiento, sino que se trata del reflejo de una determinación adoptada por la Segunda Sala cuyas decisiones son definitivas. -----

Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican los solicitantes. -----

Con apoyo en los artículos 12, última parte del párrafo segundo, y 24, segundo párrafo, de la mencionada ley, ténganse como autorizadas a las personas mencionadas, en el entendido de que si acreditan fehacientemente encontrarse legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho se les tendrá como autorizados con todas las atribuciones que establece el invocado precepto legal. -----

Respecto a la autorización de reproducir las constancias del expediente a través de medios electrónicos, se acuerda favorablemente la solicitud de la parte solicitante de tomar fotografías del expediente en que se actúa, excepto las actuaciones de carácter confidencial y reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de su derecho de defensa, y se hace de su conocimiento que el deber de secrecía se transfiere al solicitante y a las personas físicas que en su nombre tengan acceso a las constancias respectivas, así como la responsabilidad constitucional en la que puedan incurrir en términos del artículo 1º, párrafo tercero, constitucional, en el caso de incumplir con el referido deber; comuníquese la referida autorización mediante oficio al Director General de Seguridad de este Alto Tribunal. -----

En relación con los anexos que exhibe la parte solicitante consistentes en opiniones elaboradas por un diverso despacho jurídico para que sean consideradas como manifestaciones, infórmese que deberá estarse a lo determinado por esta Sala. -----

SECRETARÍA DE ACUERDOS

SECRETARÍA DE ACUERDOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Comuníquese esta decisión al tribunal colegiado de origen para su conocimiento. -----

Dése el aviso respectivo a la Titular de la Oficina de la Estadística Judicial de este Alto Tribunal y háganse los ajustes correspondientes en la estadística de esta Sala. -----

Finalmente, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que hasta que concluya en definitiva el trámite de este asunto, mediante la certificación respectiva en la que se haga constar esa circunstancia y agregando, en su caso, las constancias y acuses de recibo correspondientes, sin dar nueva cuenta lo remita al archivo, excepción hecha de los casos en que exista algún documento original respecto del que se deba proveer en términos del artículo 12, fracción IV, del Acuerdo General 8/2019 relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para tal efecto, la Secretaría habrá de tomar en cuenta que, en caso que el expediente en que se actúa cuente con cuadernillo auxiliar, de conformidad con el diverso artículo 23 del referido Acuerdo General 8/2019 se deberá hacer constar esa circunstancia en la certificación respectiva para que se proceda a su destrucción. -

Notifíquese y cúmplase. -----

Lo acuerda y firma el Ministro Javier Lavpez Potisek, Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asistido de la Secretaria de Acuerdos, Jazmín Bonilla García, quien autoriza y da fe. FIRMADO -----

El que hago de su conocimiento para los efectos legales procedentes.

Le reitero mi atenta consideración.

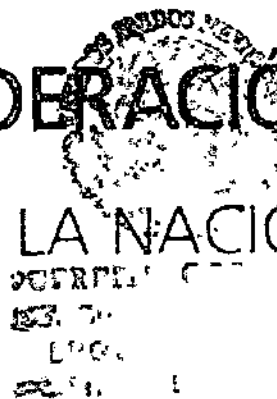
Ciudad de México, 22 de agosto del 2019.

EL(LA) ACTUARIO(A) JUDICIAL ADSCRITO(A) A LA SEGUNDA SALA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

LIC. LAURA GALICIA LUNA
ACTUARIA JUDICIAL



MFL

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect2.pdf
Secuencia: 2787398

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	MONICA ZAIDA YQUERA BESSICHY	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	YUBM780504MVZQSN16			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e0000000000000000000000f83	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	23/08/2019T19:42:44Z / 23/08/2019T14:42:44-05:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	1a 78 a2 a8 6d 17 a8 90 9d b9 cd 9e 15 c6 cb 54 e5 b6 5f 39 7e 91 a1 68 da 80 99 d0 36 e7 bc 7a 23 2b b0 e0 67 05 06 23 70 df d0 4f a9 09 32 dc c0 b2 a4 ee 7c 55 f1 c1 5e 3a 7e a2 47 b4 4a 44 e3 e2 6e 66 2f 48 45 e2 37 fa 75 83 49 70 cf 92 36 41 0f 2e e8 f0 ea 80 5c b1 1c 34 56 43 f1 47 38 fe a5 84 19 62 54 0e 04 65 19 6e 97 e8 da 97 8d c2 22 80 4a e0 e1 07 5e 99 d0 5b e2 36 3b 46 eb 42 98 6b 56 d0 2a 38 e4 b3 2a 1d dd b0 1e f4 a7 8b 00 df b5 2c 2f f5 3d 94 91 b9 50 2f b6 0e 04 f1 45 43 68 7c 28 72 21 a7 17 d7 49 ad 35 00 ef 75 c0 d4 a1 1b 95 e5 64 2c b7 d2 bb 64 3c f8 93 23 4b 02 99 55 ba c4 e5 7b 68 53 28 7a 5f b2 22 da 9a 1a 73 02 72 40 35 c2 18 8f 38 0c 2a e5 60 8c 87 84 02 4b 5d e6 e6 31 2c de 93 fb 7b b0 d5 2f db f7 14 f7 bf 48 93 4c 89 bb 61 13 76 18			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	23/08/2019T19:42:45Z / 23/08/2019T14:42:45-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e0000000000000000000000f83			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	23/08/2019T19:42:44Z / 23/08/2019T14:42:44-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2791173			
	Datos estampillados:	CCC2DBC425422C7F40516F087DF375503275E7BF			



000218

FORMA 4-99

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓNOF. C-1245/2019 C. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

2019 AGO 23 PM 12 29 PRESENTE.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓNOF. C-1246/2019 C. TITULAR DE LA OFICINA DE LA ESTADÍSTICA
JUDICIAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
DIRECCION GENERAL LA NACIÓN.
DE SEGURIDAD PRESENTE.OF. C-1247/2019 C. DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
PRESENTE.SEGUNDA SALA
SRIA. DE ACOS.SOLICITUD DE
REASUNCIÓN DE
COMPETENCIA
205/2019

En el expediente que se menciona al margen, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó el acuerdo siguiente:

"Ciudad de México, veintidos de agosto de los mil diecinueve. Vistos, téngase por recibido el oficio de cuenta a través del que el Secretario General de Acuerdos de esta Suprema Corte informa que, con el escrito del apoderado legal de las quejas CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, SOCIEDAD ANÓNIMA y ODEBRECHT INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTERNACIONAL DE MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, personalidad que acredita con los instrumentos notariales número ciento veinticuatro mil doscientos sesenta y cinco y ciento veintiséis mil seiscientos treinta y ocho pasados ante la fe del Notario Público Setenta y Cuatro de la Ciudad de México, a través del cual solicita que esta Segunda Sala reasuma su competencia originaria para conocer del amparo en revisión 200/2019 del índice del Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, relativo al juicio de amparo 526/2018 y sus acumulados 569/2018 y 571/2018 (cuaderno auxiliar 82/2019) del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con apoyo del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Especializado en Materia de Extinción de Dominio, con jurisdicción en la República Mexicana y residencia en esta ciudad, formó y registró la solicitud de reasunción de competencia 205/2019. -----

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

A efecto de proveer lo conducente es necesario tomar en cuenta que al resolver la contradicción de tesis 187/2016 el Tribunal Pleno estableció que si bien los acuerdos emitidos por los Presidentes de un órgano colegiado —como pueden ser los tribunales colegiados de circuito, así como las Salas y el Pleno de este Alto Tribunal— se consideran formalmente autos de trámite, lo cierto es que no todos lo constituyen materialmente, como sucede por ejemplo con aquellos dictados para reflejar una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional funcionando en pleno, pues en tales casos el Presidente no actúa por sí, sino en estricto acatamiento a una determinación del órgano actuando en forma colegiada, cuyas resoluciones son definitivas e inatacables. Esas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P.J.J. 33/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, enero de 2017, tomo I, de rubro: RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO EMITIDO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DEL PLENO DE ESE ÓRGANO DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ADVERTIDA DE OFICIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO, de aplicación

obligatoria para esta Segunda Sala en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. -----

Tomando en cuenta lo anterior y en atención a la certificación de cuenta en que la Secretaría de Acuerdos hace constar y da fe de que, una vez que se puso a consideración de la Sala el expediente en que se actúa en sesión privada de veintiuno de agosto del año en curso se determinó en forma colegiada no reasumir la competencia originaria planteada por parte no legitimada, en razón de que sobre el tema existen las jurisprudencias P/JJ. 95/97 de rubro "CONSENTIMIENTO EXPRESO DE UNA LEY. NO SE ACTUALIZA COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SU HIPÓTESIS FUE ACEPTADA POR EL QUEJOSO EN UN CONTRATO" y P/JJ. 78/2007 con el rubro "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". ----

Con fundamento en el artículo 25, fracción I en relación con su diversa fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el mencionado 217 de la Ley de Amparo, comuníquese al solicitante que ante su falta de legitimación y en estricto acatamiento a la decisión unánime y colegiada, esta Segunda Sala no reasume su competencia para conocer del amparo en revisión 200/2019 antes referido, máxime que la facultad de reasumir o no la competencia originaria de un asunto depende exclusivamente de que en opinión de los Ministros de este Alto Tribunal el asunto de que se trate revista las condiciones que lo ameriten incluso cuando así lo solicite alguna de las partes constitucionalmente legitimadas para hacerlo. -----

Cabe precisar que en términos de la jurisprudencia obligatoria antes referida, aplicada por analogía, la decisión de la Segunda Sala aquí reflejada es inatacable y, por ende, resulta improcedente el recurso de reclamación en su contra, pues no constituye una simple determinación de trámite adoptada por el Presidente actuando como tal para ordenar el procedimiento, sino que se trata del reflejo de una determinación adoptada por la Segunda Sala cuyas decisiones son definitivas. -----

Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican los solicitantes. -----

Con apoyo en los artículos 12, última parte del párrafo segundo, y 24, segundo párrafo, de la mencionada ley, ténganse como autorizadas a las personas mencionadas, en el entendido de que si acreditan fehacientemente encontrarse legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho se les tendrá como autorizados con todas las atribuciones que establece el invocado precepto legal. -----

Respecto a la autorización de reproducir las constancias del expediente a través de medios electrónicos, se acuerda favorablemente la solicitud de la parte solicitante de tomar fotografías del expediente en que se actúa, excepto las actuaciones de carácter confidencial y reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de su derecho de defensa, y se hace de su conocimiento que el deber de secrecía se transfiere al solicitante y a las personas físicas que en su nombre tengan acceso a las constancias respectivas, así como la responsabilidad constitucional en la que puedan incurrir en términos del artículo 1º, párrafo tercero, constitucional, en el caso de incumplir con el referido deber; comuníquese la referida autorización mediante oficio al Director General de Seguridad de este Alto Tribunal. -----

En relación con los anexos que exhibe la parte solicitante consistentes en opiniones elaboradas por un diverso despacho jurídico para que sean consideradas como manifestaciones, infórmese que deberá estarse a lo determinado por esta Sala. -----



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Comuníquese esta decisión al tribunal colegiado de origen para su conocimiento. -----

Dése el aviso respectivo a la Titular de la Oficina de la Estadística Judicial de este Alto Tribunal y háganse los ajustes correspondientes en la estadística de esta Sala. -----

Finalmente, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que hasta que concluya en definitiva el trámite de este asunto, mediante la certificación respectiva en la que se haga constar esa circunstancia y agregando, en su caso, las constancias y acuses de recibo correspondientes, sin dar nueva cuenta lo remita al archivo, excepción hecha de los casos en que exista algún documento original respecto del que se deba proveer en términos del artículo 12, fracción IV, del Acuerdo General 3/2019 relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para tal efecto, la Secretaría habrá de tomar en cuenta que, en caso que el expediente en que se actúa cuente con cuadernillo auxiliar, de conformidad con el diverso artículo 23 del referido Acuerdo General 3/2019 se deberá hacer constar esa circunstancia en la certificación respectiva para que se proceda a su destrucción. -

Notifíquese y cúmplase. -----
Lo acuerda y firma el Ministro Javier Laynez Potisek, Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asistido de la Secretaría de Acuerdos, Jazmín Bonilla García, quien autoriza y da fe." FIRMADO -----

Con que hago de su conocimiento para los efectos legales procedentes.

Le reitero mi respetuosa consideración.

Ciudad de México, 22 de agosto del 2019.
EL(LA) ACTUARIO(A) JUDICIAL ADSCRITO(A) A LA SEGUNDA SALA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
LIC. LAURA GALICIA LUNA
ACTUARIA JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

G.
MFL.

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect3.pdf
Secuencia: 2787400

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	MONICA ZAIDA YQUERA BESSICHY	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	YUBM780504MVZQSN16			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e000000000000000000000000f83	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	23/08/2019T19:42:50Z / 23/08/2019T14:42:50-05:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	8e ba d2 ca 3a f3 eb 4c 16 48 c2 64 36 5b 89 51 fe 49 59 12 b7 55 22 60 9d 09 c2 09 4d 32 bc d9 c1 16 7e 27 70 fb 9a e4 fe 70 7d ee 7b fd 18 71 3f 68 85 50 4d 6f 05 67 12 5b e9 70 a6 96 f0 08 40 d5 f6 ad b4 12 38 2f 4c 67 7e 86 ed d3 f7 ec e9 18 2f b5 79 67 6a 79 d5 b5 4a c6 75 48 74 ac d2 82 75 03 5c 8f 4d a3 91 0f 3b 23 37 da 15 f0 02 e6 2a 97 b3 2e 58 5f b3 26 99 7e d0 7d d1 03 06 08 f3 7c 28 a4 22 22 67 7e db 18 4e 03 94 88 64 4f 0b 53 c2 34 5e f7 44 ec d6 09 53 7a 58 b2 b0 a9 4d f6 ec 3e 12 30 dd 43 82 18 35 38 1f 67 3b b8 86 2b 38 6e 19 c3 64 77 d5 af 52 ab c3 f6 f1 5f 2e cc 31 4f d5 72 2c 13 9b 25 5e 06 8d cb e0 be 14 04 4c f4 e8 b6 07 dc 73 4f 10 6a a3 17 5f f2 ad fc 11 ce 40 4f be 97 3f c7 e6 33 04 6b b4 9e 34 0b 66 e6 99 de c8 37 9d 07 e1 c9 56 62			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	23/08/2019T19:42:51Z / 23/08/2019T14:42:51-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e000000000000000000000000f83			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	23/08/2019T19:42:50Z / 23/08/2019T14:42:50-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2791175			
	Datos estampillados:	8F2955E4E2FB3D456483345D6A1821352683D4B6			



Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Acuse de Recibo

Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Folio electrónico: 56364/2019

Fecha de envío de la SCJN: 23/08/2019 08:09

Tipo y núm. de exp. de la SCJN: SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA 205/2019

Tipo de acuerdo: SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA, AUTORIZADOS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PARA CONOCIMIENTO, NO SE REASUME LA SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA, SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

Núm. oficio de la SCJN: MI/SS/C/8376/2019

Tipo y núm. de exp. del órgano remitente: AMPARO EN REVISIÓN 200/2019

Fecha de recepción del órgano remitente: 23/08/2019 10:10

Recepción: RECEPCIÓN CONFORME

Detalle de documentación recibida

Acuerdo (en su caso constancias)	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación recibida
ACUERDO Fecha de acuerdo: 22/08/2019	(5) ORIGINAL	RECIBÍ ACUERDO EN 5 HOJAS

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcion134134.pdf
Secuencia: 2786051

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	PATRICIA CARIDAD MORALES PENAGOS	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	MOPP791106MCSRNT05			
Firma	# Serie:	706a6620636a660000000000000000000000000070ee	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	23/08/2019T15:10:56Z / 23/08/2019T10:10:56-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	60 11 70 97 47 12 7a 8b a1 10 15 ac fe 6e 3c 74 53 e8 e6 6c 5e 09 33 11 d9 60 da 3c 19 3e 56 df 55 6f c6 78 fc 02 0c 89 bf 60 6d 9c 96 75 a2 75 ed 20 e8 06 dd b6 fd 84 8f f1 af 10 cd f1 57 ca e4 9a d4 4c 6e 12 20 bc 3c 49 eb 78 34 e9 ca f8 cf 1a 82 3c c9 51 4b 11 70 5e 68 0b f5 10 3c f7 96 37 ea a3 0a c6 51 f6 31 e2 79 6b 41 e4 c2 ee a2 59 09 89 9b 04 07 d8 bc b7 3f cb 71 ca 48 20 d7 70 d0 8a 16 58 59 7e 71 74 cc e2 67 95 54 2a f4 a4 0e 9e 66 56 5e 33 b3 65 90 10 38 91 bf 8f 07 4e 6e f5 d1 16 89 89 fc 2d 86 9a ef 30 d3 7d bf 16 de b6 e3 54 fd ff 85 81 79 48 ec ea b5 64 8c bb 6a 11 0c ca 4a 41 89 7b 49 98 c5 d5 6d 96 a1 d0 76 e3 c8 87 6f 51 d7 6e 57 28 1d ca 61 18 ee a0 05 90 f1 79 d5 ca d7 a6 2b cc 81 35 ea f4 16 33 83 fb 6a 0f 55 4a 38 03 b7 85 ce 8f 72 d9			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	23/08/2019T15:10:56Z / 23/08/2019T10:10:56-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a66000000000000000000000000000070ee			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	23/08/2019T15:10:56Z / 23/08/2019T10:10:56-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2789826			
	Datos estampillados:	5866B79CDDDB5233B5CB30FC8D3192FA2DF92A722			



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Recepción en SCJN del acuse de recibo de órganos del PJF

Remitente	DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO	
Fecha de envío a la SCJN:	23/08/2019 10:10:00	
Tipo y núm de exp. en SCJN:	SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA	205/2019

Ciudad de México, a 23/08/2019 SEGUNDA SALA

Por acuerdo presidencial, la(el) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el Por acuerdo presidencial, la(el) suscrita(o) ordena agregar al presente expediente, el **acuse de recibo 52596-MINTER**, constante de 4 fojas, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. Conste, incluida esta constancia, para efectos legales correspondientes. Conste

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcuseRecepcionAcuseRecepcionPeticion120979-1241.pdf
Secuencia: 2786829

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JAZMÍN BONILLA GARCÍA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	BOGJ840704MDFNRZ07			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000be9	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	23/08/2019T17:54:03Z / 23/08/2019T12:54:03-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	78 a6 45 07 58 a6 c8 5e 36 00 45 eb b3 2f 1e 5f d8 56 f0 92 b7 16 ad 70 d5 92 4f 9f dc 81 c9 56 99 b6 79 d1 c8 e0 63 d5 08 de e4 49 52 34 09 eb 9a da 57 55 90 80 4e 86 50 6a 57 49 4d 2e c0 ec db c1 2e 7e 53 a1 ff ae 4d a4 40 bf 1b 19 12 17 5f 89 ac fe eb 65 9a 6e f3 22 4e 8e c2 fa da e8 e9 0d ca fd 33 44 79 b9 48 90 97 e9 2b 7b 14 29 a8 f0 85 72 26 02 ee c8 ab 95 d7 29 f9 ed 00 b5 39 c0 d8 ea 7b b8 94 67 b5 36 cb 92 7e 09 23 89 b4 37 b7 c5 47 58 cb a2 cb cf 00 84 c1 7d e8 5c 9a f9 c9 ae da 04 73 2b ec 50 22 ac bc a1 20 c8 b1 9b b4 b8 00 ed 65 07 fa 1f ba f2 c9 b4 24 32 da cb 0e 84 ea 7e f1 71 c1 19 c0 38 ad b8 5e 24 78 ef 7b bb 5f 04 9d 91 61 f4 5c 99 55 ba 92 94 d4 f2 cd 44 b7 70 8e bd 1d a1 fa ad c4 23 6f f1 92 d4 b3 53 54 26 b5 42 9e 39 1e 25 2c b6 bc 96			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	23/08/2019T17:54:04Z / 23/08/2019T12:54:04-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e0000000000000000000000be9			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	23/08/2019T17:54:03Z / 23/08/2019T12:54:03-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2790604			
	Datos estampillados:	60C99C0329372BE456085CFFFBA3C5B69E4492A7			

ORIGINAL

**CONSTRUTORA NORBERTO
ODEBRECHT S.A. y ODEBRECHT
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
INTERNACIONAL DE MÉXICO S.A.
DE C.V.**

REASUNCIÓN DE COMPETENCIA

EXPEDIENTE: 205/2019

Asunto: Solicitud de copias
certificadas.

**CC. MINISTROS DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN.**

JOSÉ LUIS VERGARA ESTRADA, promoviendo en mi carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por las sociedades **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.** (en adelante "CNO"), y **ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.** (en adelante "OICIMEX"), personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida en los autos del expediente al rubro citado; con el debido respeto comparezco para exponer:

Por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se solicita de la manera más atenta expedir a costa de mis mandantes copia certificada por duplicado del acuerdo de fecha 22 de agosto de 2019.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO. Tenerme por presentado en mi carácter de autorizado en términos amplios de las sociedades **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A.** (en adelante "CNO"), y **ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.** (en adelante "OICIMEX") en favor de mis autorizantes.

SEGUNDO. Expedir a costa de mis mandantes las copias certificadas precisadas, a efecto de que las mismas puedan ser tramitadas y recogidas por las personas previamente autorizadas para tal efecto.

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2019

JOSE LUIS VERGARA ESTRADA
Autorizado

030285

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2019 AGO 27 AM 11 40

OFICINA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

RECIBI UN ENVIADO.
SIN ANEXO

VICTOR JUAN RUIZ RAPPENAS

7

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf
Secuencia: 2792810

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	MARIA TERESA GONZALEZ HERNANDEZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOHT821011MGTNRR07			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e000000000000000000000000c95	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/08/2019T17:33:58Z / 27/08/2019T12:33:58-05:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	36 91 11 f5 c9 c9 df 4f 5c f2 3d 16 56 8c 5e 41 f4 6a 38 fb 43 ad 3e e9 63 80 10 ef ec dc b3 bb 6e df ef ef c1 87 00 89 1e b0 d3 af 2f 85 bf 13 31 9d ef a1 96 d6 40 2e 96 64 2a d6 12 83 8f 6d f7 4c 41 13 f1 9c 05 84 9d 31 cd 35 d1 3e 85 92 b3 31 34 12 1c 86 d6 62 c5 39 8d be 45 06 ff 0c 8a c3 e7 45 e3 1f 65 b7 3e d0 bd 34 df 46 78 b1 2e 50 c4 2a fc b8 be f4 1a 47 8a dd 47 1e 79 3e 54 28 49 79 52 3c 20 29 d0 03 dc 64 ce 3c 16 d3 e7 67 f7 14 61 dd 34 9a da 7b eb ae bb 9b 57 22 8a 0c 03 c8 ee 00 77 08 ca 68 51 9a 93 57 0e 5d 83 72 9b db f6 79 7a c0 ec e2 3b 0b 6c c1 ef 5f 82 4e a8 26 c8 29 8e bf 3d 47 31 5e a1 ba e8 9f f1 fd d2 21 a4 33 55 ab be 41 0f 1e f0 d5 be bd 4a 1f da 03 32 1b 03 be ea 9e 2a c1 6e 08 99 3f 54 92 4b af 46 bd 12 c4 03 05 3b e0 c4 2d b4 1a			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/08/2019T17:33:59Z / 27/08/2019T12:33:59-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e000000000000000000000000c95			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/08/2019T17:33:58Z / 27/08/2019T12:33:58-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2796585			
	Datos estampillados:	07D3ED46388F0CFECA8B0344F8EFD4BDA9A727E1			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

242
FORMA A-94

SEGUNDA SALA
SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA 205/2019

En veintinueve de agosto del dos mil diecinueve, la Secretaría de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el escrito registrado con el número de folio 030285. Conste.

Ciudad de México, veintinueve de agosto del dos mil diecinueve.

Visto; con fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, téngase por recibido el escrito de cuenta del autorizado de CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT, SOCIEDAD ANÓNIMA y ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CARTAS VARIABLES y en atención a su solicitud, con apoyo en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2º, de la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia certificada por duplicado del proveído de veintidós de agosto del año en curso dictado en el expediente en que se actúa, previa toma de razón y recibo que al efecto se deje en autos para constancia, autorizando para recibirlas a la personas mencionadas para tal efecto en el escrito que dio origen este asunto.

En su oportunidad remítase este tomo al archivo.

Notifíquese.

Lo acuerda y firma el Ministro Javier Laynez Potisek, Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asistido de la Secretaria de Acuerdos, Jazmín Bonilla García,

quien autoriza y da fe
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

6
MPL

EN 30 AGO 2019 SE FIJO LISTA PARA NOTIFICAR
A LAS PARTES EL ACUERDO ANTERIOR. CONSTE

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

[illegible]



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SEGUNDA SALA
SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA 205/2019.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO SIENDO LAS ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE, COMPARECE EN EL LOCAL DE LA ACTUARÍA DE ESTA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LA C. ROBERTA MIER Y TERÁN LAGOS, EN SU CARÁCTER DE AUTORIZADA DE LA PARTE SOLICITANTE EN EL PRESENTE ASUNTO, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO [REDACTED] EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO QUE EL SUSCRITO TIENE A LA VISTA Y QUE EN ESTE MOMENTO SE LE DEVUELVE A LA INTERESADA PARA SU DEBIDO RESGUARDO, QUIEN MANIFIESTA QUE RECIBE DE CONFORMIDAD COPIA CERTIFICADA POR DUPLICADO DEL ACUERDO DE VEINTIDOS DE AGOSTO DICTADO EN EL TOCAÉN QUE SE ACTÚA, EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, CON LO QUE SE DA POR TERMINADA LA DILIGENCIA FIRMANDO LA PRESENTE RAZÓN LA PERSONA INDICADA, EN UNIÓN DEL SUSCRITO ACTUARIO QUE DA FE

RECIBÍÓ: COPIA CERTIFICADA POR DUPLICADO.

[REDACTED]
C. ROBERTA MIER Y TERÁN LAGOS.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EL ACTUARIO.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
LICENCIADO HUGO ALTAMIRANO GÓMEZ.

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MIER Y TERAN
LAGOS
ROBERTA
OCANCOLO

CLAVE DE ELECTOR

CURP

AÑO DE REGISTRO

ESTADO

MUNICIPIO

SECCIÓN

LOCALIDAD

EMISIÓN

VIGENCIA

INE

IDMEX

MIER<Y<TERAN<LAGOS<<ROBERTA<<<

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf
Secuencia: 2811556

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	HUGO ALTAMIRANO GOMEZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	AAGH720106HDFLMG02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e0000000000000000000000ee4	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/09/2019T16:51:13Z / 04/09/2019T11:51:13-05:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	62 e5 80 1e 09 5f 55 4d 47 53 8b 46 73 cd 68 87 99 11 5e 9a c0 a6 59 90 0a 04 07 12 00 b0 5a 70 f2 d6 d1 1f 83 1c 7d e4 e6 27 aa 02 9c b9 55 de d0 14 05 f6 26 ac 9a e6 bf 9b 2a a1 38 1d 54 42 10 38 2b 2b 48 1a 1f cc ee 65 c9 63 06 9e e5 0b 3e 1f 23 2b 38 82 fe ea 7a 8a 42 aa 5b a6 42 d0 71 30 0e 99 f5 17 5e 9c aa eb 0c 41 0b ac 50 2c 0c 10 4e 2d 71 18 c1 ab 23 68 35 24 ea 37 c2 08 57 e3 c4 be 1b f6 52 b7 e7 3d c1 4a 26 ec b2 01 6e 4b 1b 65 d3 d2 dd f9 1f 24 b7 6c 90 ef af 24 17 2c 2c 8a 17 22 b6 c3 6f b2 9f f7 77 1a 9e e8 c1 66 a1 54 01 76 86 d2 50 b7 3b 1d fc 61 4c 96 83 af cc d4 ec e3 32 43 c9 31 88 de f3 1f 0a 1a 89 18 8b d5 6b 6d f5 f0 6f b7 e0 25 4e a0 ec 02 59 47 e6 c3 07 19 0a 83 36 b6 63 61 ed 9c 99 b9 84 8d 33 94 0a 23 5d 14 6e 96 5b 0e 65 9a bc 91			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/09/2019T16:51:14Z / 04/09/2019T11:51:14-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e0000000000000000000000ee4			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	04/09/2019T16:51:13Z / 04/09/2019T11:51:13-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2815331			
	Datos estampillados:	A2DBD3BB9289F74C3DD141C90BE22DF28C82A626			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

245
FORMA A-34

SEGUNDA SALA
SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA 205/2019

En siete de octubre del dos mil diecinueve, la Secretaría de Acuerdos da cuenta al Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el estado que guarda el presente asunto. Conste.

Ciudad de México, siete de octubre del dos mil diecinueve.

Visto; con fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y considerando que la parte solicitante presentó copias certificadas de lo siguiente: 1) instrumento notarial ciento veinticuatro mil doscientos sesenta y cinco y 2) instrumento notarial ciento veintiseis mil seiscientos treinta y ocho, ambos pasados ante la fe del Notario Público Setenta y Cuatro de la Ciudad de México, asimismo que este asunto se encuentra concluido; por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 12, fracción IV del Acuerdo General 8/2019 de ocho de julio del dos mil diecinueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de este Alto Tribunal, **hágase de su conocimiento que cuenta con un plazo de treinta días naturales para recoger los citados documentos** previa copia certificada del instrumento notarial citado en primer término, así como toma de razón y recibo que se deje en autos para constancia, apercibida que de no hacerlo, este toca será remitido al archivo judicial agregando el instrumento notarial mencionado en segundo lugar al expediente en que se actúa y se someterán al procedimiento establecido en el mencionado Acuerdo General.

En su oportunidad, remítase este toca al archivo.

Notifíquese y personalmente a la parte solicitante.

Lo acuerda y firma el **Ministro Javier Laynez Potisek**,

Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asistido de la Secretaria de Acuerdos, Jazmín Bonilla García, quien autoriza y da fe.

[Firma]

[Firma]

EN 08 OCT 2019 SE FIJO LISTA PARA NOTIFICAR
A LAS PARTES EL ACUERDO ANTERIOR. CONSTE

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: REAS 205.pdf
Secuencia: 2877498

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	MONICA ZAIDA YQUERA BESSICHY	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	YUBM780504MVZQSN16			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e000000000000000000000000f83	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2019T17:44:15Z / 07/10/2019T12:44:15-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	14 91 e3 56 39 22 0f cc c8 99 0a 1c 8c 40 1a dd e9 14 27 8c de 80 13 99 ef e4 c4 f4 1b 83 bd a6 41 bd 52 9c de e9 b5 fb c2 5c 1c 92 c3 1f d6 0b 55 2e 57 9f ae e6 fe 37 c1 c1 06 67 48 fd 0b da 0f ad 06 83 e1 09 80 43 f5 02 22 c9 0a c2 72 49 fb f3 17 3f 7b 67 ae 32 72 e1 ab 48 bf cf 92 68 4d 9e 74 f7 d6 7c 49 f2 4f 6b 1c 71 0f bb 70 a4 23 d5 bb be 2e e2 39 be 98 e0 c4 fd 20 9c 68 7b ae ed a2 1e b1 15 01 24 00 be 7f e7 bf 13 08 c8 05 79 37 00 5f 22 38 6b 2e 6b 05 30 a3 ba cc 95 be 80 4e b7 af c0 41 22 3b d5 08 16 df ee bf bb 6e be 27 05 cf c0 74 9d b8 bc eb 1d 78 2f f4 98 dc 42 0c 4f 5b 49 0f 15 16 f0 d7 c2 0c 74 74 14 0b 10 b9 3a be 4b 15 6e 2c 80 6a d3 d3 45 46 1f b8 36 a9 25 b4 1e f2 fe 05 42 dd b7 ab 25 04 8e ef 34 0d 04 2f cf 4b b9 98 a5 63 d6 9e 4d 93 50			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2019T17:44:16Z / 07/10/2019T12:44:16-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e000000000000000000000000f83			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	07/10/2019T17:44:15Z / 07/10/2019T12:44:15-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	2881301			
	Datos estampillados:	9262E26D6821DF17A9D31A0297411BB0FFE17A00			



SEGUNDA SALA
ACTUARIOS
SOLICITUD DE REASUNCIÓN
DE COMPETNCIA 205/2019

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN

LA NACION EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS ^{Cinuenta} ~~Once~~ HORAS, CON ~~Once~~ MINUTOS

DEL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, LA SUSCRITA
ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA A LA SEGUNDA SALA DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, CERCIORADA DE
QUE ME CONSTITUI EN EL DOMICILIO UBICADO EN [REDACTED]

CÓDIGO POSTAL [REDACTED] CERCIORADA
DE QUE ES EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS Y
ENCONTRANDO. A

Ing. Rodolfo Hernández Carlsen, autorizado
de Construcción, Obras y Proyectos, Sociedad Anónima y
Cedexent, Ingenieros y Arquitectos Internacionales de México, S.A. de C.V.

QUIEN SE IDENTIFICA CON:

predominan por los ~~algunos~~ ^{algunos} elector
[redacted] por el

DOCUMENTO QUE DOY FE DE TENER A LA VISTA Y EN ESTE MISMO ACTO SE DEVUELVE A LA PERSONA INDICADA; ENSEGUIDA, PROCEDO A NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A QUIEN HAGO ENTREGA DE COPIA AUTORIZADA

DEL CITADO ACUERDO LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 ARTICULO 27, FRACCIÓN LINGÜSO-A) DE LA LEY DE AMPARO, Y

MANIFIESTA QUE QUEDA ENTERADO DE SU CONTENIDO,

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

DE LA SUSCRITA, LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS
LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE.

Recibo copia del acuerdo
Andrés Hernández Carlsen

LA ACTUARIA JUDICIAL

LAURA GALICIA LUNA

8/10/14

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf
Secuencia: 2880533

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

[illegible]



ALFONSO GARCÍA ROBLES
JEFES DE LA FEDERACIÓN
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

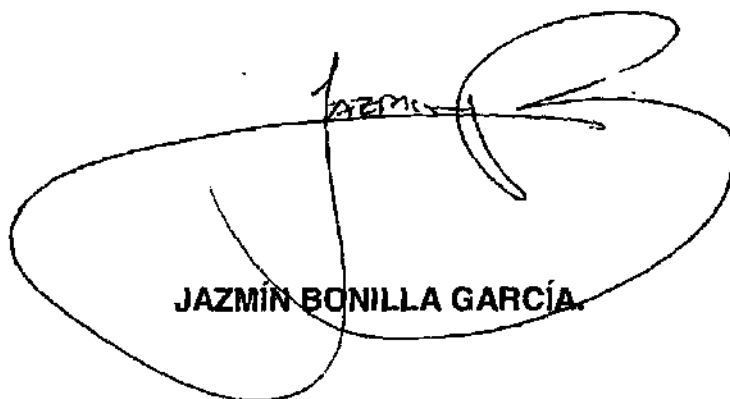
26
SEGUNDA SALA
SOLICITUD DE REASUNCIÓN DE COMPETENCIA 205/2019

La suscrita Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jazmín Bonilla García, en estricto acatamiento a lo instruido en proveídos de **veintidós de agosto y siete de octubre de dos mil diecinueve**, hace constar que la parte solicitante presentó copias certificadas de lo siguiente: 1) instrumento notarial ciento veinticuatro mil doscientos sesenta y cinco, la cual obra agregada al presente toca y 2) instrumento notarial ciento veintiséis mil seiscientos treinta y ocho, ambos pasados ante la fe del Notario Público Setenta y Cuatro de la Ciudad de México, y -----

CERTIFICA

que el plazo de **treinta días naturales** para recoger los citados documentos transcurrió para la parte solicitante, del **diez de octubre al ocho de noviembre del año en curso**, descontando en el cómputo respectivo el día nueve de octubre del mismo año en que surtió efectos la notificación, sin que obre constancia alguna de su recepción; por tanto, procédase agregar la constancia identificada en el inciso 2) al presente toca y se cierra en doscientas cincuenta y nueve hojas útiles incluyendo la presente debidamente foliadas, selladas, rubricadas y cotejadas para ser remitido al archivo el expediente señalado al rubro, haciéndose constar que **al contar con cuadernillo auxiliar, éste debe ser destruido** en términos del artículo 23 del Acuerdo General 8/2019 relativo a la organización, conservación, administración y preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. **Doy fe.**

Ciudad de México, doce de noviembre del dos mil diecinueve.


JAZMÍN BONILLA GARCÍA.

64
MPL*

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION



Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf
Secuencia: 2953971

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

[illegible]